Revista Foro

Bogotá - Colombia No. 15 Septiembre 1991 Valor $1.200

Partidos políticos en Colombia: crisis y retos

¿Cuál es el futuro del Liberalismo?
Hernando Gómez Buendía

El futuro del Conservatismo
Javier Sanín

La crisis de la izquierda en Colombia
Medófilo Medina

Ediciones Foro Nacional por Colombia

Tarifa Postal 661

Revista Trimestral de la Fundación Foro Nacional por Colombia

No. 15 $1.200.oo Septiembre 1991

Director:
Pedro Santana R.

Editor:
Hernán Suárez J.

Comité Editorial:
Eduardo Pizarro L.
Orlando Fals Borda
Constantino Casasbuenas
Alvaro Camacho Guizado
Carlos Escobar A.
Fernando Viviescas
Ricardo García

Colaboradores:
Alberto Corchuelo, Fabio Velásquez, Abel Rodríguez C., Alberto Echeverry, Olga Lucía Zuluaga, Humberto Quiceno, Mario Sequeda, Orlando Pulido Ch., Patricia Calonje, Alberto Martínez B., Raúl Delgado, Jaime Rodríguez, Alvaro Cabrera, Ismael Beltrán, José Granés, Jorge Luis Villada, Norberto Ríos, Rogelio Castaño, John Jairo Cárdenas, Juan Camilo Ruiz, Ana Lucía Sánchez, Enrique Vera, Sofía Díaz, Gloria Rincón, Leonardo Velásquez, Arcesio Zapata.

Colaboradores internacionales:
Eduardo Galeano (Uruguay), Jorge Enrique Hardoy, Hilda Herzer, Marios Dos Santos (Argentina), Edison Nunes (Brasil), Alfredo Rodríguez, Alex Ronsenfelt (Chile), Gustavo Riofrío, Federico Arnillas (Perú), Fernando Carrión, Jorge García (Ecuador), John Turner (Inglaterra), David Slater (Holanda), Carlos Jiménez (España), Juan Díaz A. (París), Ricardo García (París).

Diagramación:
Hernán Suárez J.

Carátula e ilustraciones:
Víctor Sánchez (Uno más), Marco Pinto. Juan Carlos Nichols

Gerente:
Sandra Cristina Campos

Distribución y Suscripciones:
Carrera 3A No. 26-52
Teléfonos: 2433464 - 2840582
A. A. 10141
Santafé de Bogotá, D. C., Colombia

Licencia:
No. 3868 del Ministerio de Gobierno

ISBN: 0121-2559

Tiraje:
5.000 ejemplares

Preparación editorial:
Servigraphic Ltda.

REVISTA FORO
Fundación Foro Nacional por Colombia
Santafé de Bogotá, D. C., Colombia
No. 15 Septiembre de 1991.
Tarifa Postal No. 662 $1.200.oo

Contenido

Editorial

4 La batalla por el nuevo país

Política

5 "La Constitución de 1991 es de todos y para todos" — César Gaviria Trujillo

Partidos políticos: Crisis y Retos

13 ¿Cuál es el futuro del liberalismo? — Hernando Gómez Buendía

21 El futuro del conservatismo — Javier Sanín

26 La guerrilla del siglo XX — Bernardo Gutiérrez

35 El nuevo escenario político — Ricardo García D.

45 La crisis de la izquierda en Colombia — Medófilo Medina

53 Crisis y renovación de la izquierda radical — Fabio López de la Roche

Violencia y narcotráfico

65 Cinco tesis sobre narcotráfico y violencia en Colombia — Alvaro Camacho Guizado

Ideología y sociedad

74 La democracia tomada en serio — Paolo Flores D' Arcais

90 La América Errada — Francisco C. Weffort

Editorial

La batalla por el nuevo país

La Asamblea Nacional Constituyente produjo finalmente un nuevo texto constitucional para el país. Muchos han criticado el carácter extenso y reglamentarista de la Constitución, dos cosas que son ciertas. Sobre el primer aspecto, simplemente tendríamos que decir que es consecuencia en buena medida del segundo, y quizás también, del escaso tiempo de que dispuso la Asamblea Nacional Constituyente para dotar a Colombia de un nuevo pacto social. El reglamentarismo en cambio, se explica por el temor que mostraron los constituyentes de que la Carta no sea aplicada o que al momento de reglamentarla, mediante la aprobación de las leyes estatutarias, se pueda cambiar el sentido y el significado de lo que la Asamblea aprobó efectivamente.

El temor de los constituyentes está relacionado con la valoración del papel que la clase política tradicional ha desempeñado históricamente, frente a los cambios y a las reformas en Colombia. Los políticos profesionales de los dos partidos tradicionales escamotearon durante decenas de años la adopción de las reformas y las transformaciones que la realidad del país estaba demandando. Solo ante el ascenso de nuevas fuerzas sociales y políticas, de la persistencia de la insurgencia armada ligada a proyectos de izquierda reformista y del agudo proceso de deslegitimación y crisis del régimen político, un sector modernizante de los partidos tradicionales y las nuevas fuerzas políticas y sociales emergentes, retomaron el camino de la negociación y de las reformas para intentar una salida a la crisis. La Asamblea Nacional Constituyente fue el escenario de negociación de esa nueva institucionalidad política y de ese nuevo orden que debería abrir caminos a los cambios y a las transformaciones democráticas. De esta manera una de las preocupaciones de la Asamblea Nacional Constituyente fue intentar mediante una serie de mecanismos reglamentarios, que los

Editorial

cambios adoptados en la Carta Constitucional sean efectivamente aplicados.

Con la aprobación del nuevo texto constitucional culmina formalmente la adopción de unas instituciones políticas acordes con el proyecto de la modernidad. Se destacan entre sus pilares fundamentales, aquellos relacionados con la soberanía popular que es manifiesta en el prólogo del texto, mientras que a lo largo del mismo se establecen mecanismos que la viabilizan. Uno de estos mecanismos es la ampliación del principio electivo para la provisión de una buena cantidad de cargos en el aparato de Estado. Mediante el voto se elige al presidente de la República, con su respectivo vice-presidente, a los gobernadores y alcaldes vértebras del aparato ejecutivo nacional. Mediante sufragio se elige al Senado de la República con circunscripción nacional y a la Cámara de Representantes mediante circunscripción departamental, estos dos organismos constituyen el poder legislativo. En el orden administrativo se eligen mediante votación popular los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales además de los miembros de las Juntas Administradoras Locales en aquellos municipios en los cuales se creen las comunas y corregimientos que siguen siendo potestad de la iniciativa de los burgomaestres locales. Al mismo tiempo se establece que para Congreso de la República y para Asambleas Departamentales y Concejos Municipales operará la revocatoria del mandato de acuerdo con la reglamentación que se estipule en la ley.

Pero también son mecanismos que viabilizan la soberanía popular el plebiscito manifestarse para revocar el mandato de un funcionario público elegido popularmente— cuestión que también deberá reglamentar la ley, mientras que el referéndum está relacionado con un pronunciamiento popular sobre una reforma constitucional o una ley, con el objeto de promoverla o impedirla. Este mecanismo operará a nivel departamental y a nivel nacional. También se plantea la Consulta Popular que será facultativa u obligatoria; este mecanismo operará a todos los niveles: nacional, departamental y municipal. Son también del resorte de la Soberanía Popular los Cabildos Abiertos, la iniciativa popular legislativa y constitucional así como la ya mencionada revocatoria del mandato.

También fue importante la refundación del Congreso de la República por la vía de la dotación de nuevas atribuciones (iniciativa en el gasto público, moción de censura a los ministros y altos funcionarios, poder indirecto en el manejo del orden público, etc.). La reforma fue al fondo de los poderes y reformuló el pacto social en un sentido progresista y democrático. Dos vacíos mostró sin embargo el texto constitucional y serán tareas que el nuevo congreso deberá abordar sin tardanza, para que buena parte de la reforma pueda efectivamente desarrollarse. En primer lugar hay que mencionar la necesidad de establecer medidas y controles a los

Editorial

monopolios, que puede corregirse si se establece precisamente una ley antimonopolios que controle determinado tipo de prácticas y de formas de dominio. Mientras que la segunda gran limitante de la reforma la constituyó la ausencia de tratamiento y modificación de la estructura militar en el país. En este terreno pudieron más los temores que el realismo. Hay que tener presente que la institución armada del Estado se ha visto involucrada en actividades ilegales y terroristas, pues, no de otra manera se puede calificar la ayuda que prestaron en el pasado reciente a grupos paramilitares y a sus nexos comprobados con el narcotráfico lo mismo que al uso de prácticas violatorias de los derechos humanos tales como las torturas, las desapariciones y otras prácticas, que por desgracia no son aún cosas del pasado. Estas prácticas se amparan en la inexistencia de mecanismos democráticos de control y de vigilancia de las acciones de las fuerzas armadas así como a la extensión del fuero militar a conductas que riñen abiertamente con un Estado de Derecho y más aún con un estado democrático.

La Constitución fortalece otros mecanismos de protección de los derechos ciudadanos: la procuraduría es fortalecida y a su lado se crea el cargo de Defensor del Pueblo, así como también se estipula el derecho de habeas corpus, *el derecho de Amparo, etc.*

Como se deduce de este resumen sucinto, el cambio constitucional fue muy importante y significativo, en el proceso de creación de un nuevo país, que en últimas dependerá realmente de que las nuevas normas tengan cabal aplicación y desarrollos legislativos acordes con el nuevo espíritu de la Carta Constitucional. Ello dependerá de la composición del nuevo Congreso y aquí radica la importancia de lograr que la población se apropie de la nueva constitución y que efectivamente participe en la elección de un Congreso que favorezca a las fuerzas progresistas y democráticas de tal manera que no se corra riesgos en la aplicación de la Carta Constitucional. La batalla siguiente es la del Congreso de la República y esa batalla es una confrontación a fondo entre el viejo país que se niega a abandonar el escenario y el nuevo país que ha emergido en medio de una confrontación muy aguda y de una deslegitimación del régimen. Para que el proceso de refundación de la institucionalidad política sea real se requiere antes que otra cosa de la decidida participación de la población y de la conciencia de la misma sobre la importancia de los cambios de la naturaleza de los mismos.

Es decisivo que el nuevo Congreso de la República refleje una correlación de fuerzas acorde con las tendencias de transformación y cambio que la Constitución vigente anuncia para el país. Nuevamente le toca a la ciudadanía, al pueblo, mediante el mecanismo electoral ratificar ese deseo de transformación y de cambio democrático. Y esto solo será posible en un

Editorial

Congreso renovado y pluralista, que efectivamente dé a los desarrollos legislativos, de los cuales depende la mayor parte de la Constitución, los contenidos democráticos que hagan viable la democracia participativa y la transformación social y política que demanda el país y frente a los cuales la Asamblea Nacional Constituyente cumplió. El nuevo Congreso debería reflejar al nuevo orden y al nuevo país.

La batalla también compromete a la sociedad civil. De muy poco servirán las transformaciones legales y constitucionales si la nueva constitución no es apropiada por los colombianos y por sus más diversas organizaciones e instituciones. Los múltiples espacios abiertos por la carta política para la participación ciudadana y para las organizaciones de la sociedad, deberán poner en movimiento con sentido democrático y transformador a las organizaciones y movimientos sociales de los sectores populares, a la intelectualidad, a los gremios profesionales, a las organizaciones no gubernamentales y a los partidos políticos, que deberán demostrar que tienen la capacidad de llenar los espacios abiertos en las entrañas del Estado. La batalla es por la construcción de un Estado Democrático aquí y ahora. Es necesario abandonar la idea de un nuevo orden salido de un golpe palaciego o de un acto único. Hay que construir democracia en los nuevos espacios institucionales abiertos y hay que crear las condiciones para la reforma económica y social, que deberá ser el complemento de la reforma política.

Hay que participar decididamente del proceso de cambio y de transformación que la sociedad vive actualmente. Las estrategias revolucionarias que suponen que la sociedad nueva surgirá de actos revolucionarios únicos vienen mostrando su fracaso en todos los lugares del planeta. Un pensador como Emmanuel Kant ya había anticipado la naturaleza y las características de una verdadera revolución social: "Mediante una revolución acaso se logre derrocar el despotismo personal y acabar con la opresión económica o política, pero nunca se consigue la verdadera reforma de la manera de pensar; sino que, nuevos prejuicios en lugar de los antiguos, servirán de riendas para conducir el gran tropel". (Kant Emmanuel: Filosofía de la Historia: México, FCE, 1985, pp. 26-27).

Los verdaderos cambios en la sociedad colombiana se producirán cuando el conjunto de la nación se apropie de los nuevos espacios, de las nuevas instituciones y cuando decididamente participe de la vida social y política sin delegar en otros la responsabilidad de tales cambios y transformaciones. La democracia como gobierno del pueblo y para el pueblo, supone precisamente que ese pueblo sea el depositario del poder y que como tal, lo ejerza.

Santafé de Bogotá, Distrito Capital
Septiembre de 1991.

César Gaviria Trujillo

"La Constitución de 1991 es de todos y para todos"

Palabras del señor Presidente de la República, César Gaviria Trujillo al clausurar las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Honorables Delegatarios:
Compatriotas:

Quiero compartir con ustedes la felicidad que anima el corazón de los colombianos; la satisfacción de quienes hemos luchado por construir una patria abierta a la participación, que no excluya a nadie, que le ofrezca a todos un lugar bajo el sol de Colombia, que cobije por igual a pobres y a ricos, a fuertes y a débiles, a los que han sido gestores de nuestra historia y a quienes serán los protagonistas del mañana.

Si bien hoy concluye esta importante etapa, también se inicia una nueva era política para Colombia. Eso es lo más importante. Debemos ser conscientes de que la Constitución de 1991 no marca el final de un proceso de reforma, sino el comienzo de un nuevo capítulo de nuestra historia. Hemos iniciado —que no concluido— lo que llamara el Presidente Alfonso López Pumarejo, "la liquidación amistosa del pasado", esa "cancelación cordial del peso abrumador de rencores y prejuicios" que requería la nación para ser próspera y pacífica.

Así como la Constitución de 1886 permitió que las ideas de Rafael Núñez se proyectaran en el afianzamiento de la autoridad necesaria para unir a la nación colombiana, la Constitución de 1991 permitirá que el proceso de renovación y de cambio en el cual estamos comprometidos, fructifique en la construcción de una nueva democracia. Estamos frente a una verdadera revolución pacífica: se ha partido en dos la historia de nuestra República.

Esta Asamblea es un ejemplo de esa nueva democracia que me comprometí a entregarle a los colombianos al iniciar mi mandato. También es una demostración de que ésta puede funcionar, de que no se trata de una utopía.

Esta nueva democracia tiene un espacio para la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas.

Esta nueva democracia toma en serio el pensamiento de los otros, con la modestia que la debe caracterizar, con la plena conciencia de que la verdad surge en el debate y en la controversia; que, la existencia de diferentes puntos de vista, partidos, convicciones debe llevar a la concepción del pluralismo con alegría, con esperanza de que mejorará nuestros puntos de vista o nos permitirá llegar a otros mejores.

La nueva democracia tendrá, sin lugar a dudas, la fortaleza para recibir opiniones distintas, por su dignidad en el debate franco de las ideas y por su carencia de fuerza intimidatoria y de insolencia dogmática.

De manera que cuando haya varias opiniones sobre un mismo tema, no se dirá que hay desorden sino que se está expresando el pluralismo. Los debates francos no serán criticados por generar conflicto. Por el contrario, se dirá con razón: ¡bienvenido sea el diálogo abierto, sin temas vedados, donde todos tenemos algo que decir, donde todos tenemos el derecho a ser oídos!

En esta nueva democracia nadie podrá alegar que es de mejor categoría. Esta Constitución se ha hecho para que convivamos todos civilizadamente bajo un mismo techo, respetándonos mutuamente y recibiendo el trato justo que merecemos. Pero que impere la tolerancia, que escuchemos las ideas ajenas, no significa que abandonemos las propias. Significa que todos podremos expresarnos libre y plenamente, que hemos adoptado unas nuevas reglas de juego para que dejemos de pelear como enemigos y pasemos a dialogar como contradictores.

Sí. Tendremos grandes diferencias, pero compartiremos un mismo y fundamental compromiso: Colombia, el trabajo enaltecedor y grande por lograr el bienestar de sus gentes y la paz entre hermanos.

En esta nueva democracia consenso no es sinónimo de unanimismo. Por el contrario, es la base para que se manifieste ese espíritu de participación que se ha despertado en los colombianos, quienes cansados de que alguien desde arriba les ordene su vida, han tomado con sus manos su destino para forjarlo de acuerdo con sus anhelos y adaptarlo a sus necesidades.

Y por eso, en el nuevo orden político que se está creando, cada individuo —como cada constituyente— tiene un poder que cuenta y que no puede pasar inadvertido. Es por eso que de las teorías abstractas sobre la justicia hemos pasado a la sensibilidad concreta por quienes requieren apoyo, —o como dice la Constitución en tantos artículos— por quienes merecen especial protección. Dicha preocupación por las minorías no refleja una actitud paternalista. Es el resultado de que todos estemos aquí reunidos, por primera vez en nuestra historia, en una misma casa, frente a frente, en condiciones de igualdad.

Esta Asamblea habría podido ser muy distinta. Pero fue escogida por el pueblo, no señalada a dedo. Fue el fruto de los nuevos espacios que abrieron la circunscripción nacional, el tarjetón y la financiación de campañas para la elección de delegatarios, y no de la política tradicional. Nacida dentro del Estado de Derecho, gracias a las históricas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que acogieron concepciones jurídicas innovadoras plasmadas en los decretos que dictó el Ejecutivo, sin desconocer entonces el orden institucional. Ha sido pública en sus deliberaciones y no cerrada a la opinión. Y pluralista, libre y autónoma. En síntesis: la Constituyente ha sido de todos los colombianos y no de expertos y técnicos.

La prefiero así como fue, como se concibió en la carta pública que envié el 22 de julio de 1990 como Presidente electo a los dirigentes de las fuerzas políticas con las cuales celebramos luego los acuerdos que hicieron viable este proceso. La prefiero así, porque la nueva Constitución nació —en su esencia claro está— en un evento democrático, el 9 de diciembre. Allí los colombianos escogieron bien. Optaron por impulsar el revolcón. Depositaron por 150 días su confianza en ustedes, para que desarrollaran y plasmaran en un texto el sentimiento popular de cambio institucional y de renovación política.

Quiero resaltar el empeño, la consagración y la seriedad de todos los constituyentes. En representación de todos los colombianos, los felicito por haber cumplido con dedicación ejemplar tan alta responsabilidad. De igual manera, permítanme hacer un reconocimiento al trabajo del Ministro de Gobierno, Humberto De la Calle, cuyo tacto, inteligencia, honestidad y disciplina son reconocidos por todo el país. Igualmente, a los Presidentes de la Asamblea —Alvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa Uribe—, quienes interpretaron con lucidez el momento histórico de la nación en estos meses y tuvieron el acierto de preservar el espíritu de consenso que ha conducido este proceso, al dar plenas garantías a todos los grupos y mantener el justo equilibrio en los debates. Debo resaltar también el papel jugado por ellos y por el ex Presidente Alfonso López Michelsen, en su condición de Director Nacional del Partido Liberal, en la búsqueda y posterior suscripción del Acuerdo Político que hizo posible un tránsito armónico hacia la elección de un Congreso bajo la nueva normatividad electoral el próximo 27 de octubre.

Señores delegatarios:

La Nueva Constitución le dará al Gobierno que presido y al país, herramientas para continuar con todo vigor y a toda marcha, por el camino despejado de la revolución pacífica. Ese ha sido mi principal afán. Esa será mi guía cuando defienda y siga promoviendo este proceso. Ese será el propósito claro del Gobierno en los desarrollos legislativos, y al adoptar otras decisiones para consolidar el nuevo país que hemos conquistado para maravi-

"La Nueva Constitución le dará al Gobierno que presido y al país, herramientas para continuar con todo vigor y a toda marcha, por el camino despejado de la revolución pacífica".

llar por igual a los pesimistas y a "los perseverantes pregoneros del desastre" de que hablara López Pumarejo, así como a los ciudadanos del futuro.

Este nuevo país que tenemos por delante, basado en una Constitución bien distinta a la de 1886, se expresará por medio de una democracia participativa, será gobernado con instituciones sólidas y eficaces, y estará habitado por ciudadanos activos, interesados por decidir cuál será su porvenir. Permítanme que brevemente me refiera a cada uno de estos temas.

Una de las principales características de la nueva Constitución es que no nació de unas pocas plumas sino de un gran debate democrático en el que participó todo el país: en la propuesta del plebiscito de 1988, en las calles, cuando los estudiantes agitaron el tema de la "séptima papeleta", en las mesas de trabajo, en la contienda electoral, en los medios de comunicación y, por supuesto, en el seno de esta Asamblea. La Constitución de 1991 no es de nadie en particular. Por eso —como pocas en la historia— es de todos y para todos. Es una obra de creación colectiva que desde ahora y por muchas décadas nos pertenece por igual a cada uno de los colombianos.

La Constitución de 1991 también es un espejo del nuevo país, de esa Colombia en la que cabemos todos, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, en que la mujer tiene un lugar preponderante en la vida nacional, en que los indígenas y los demás grupos étnicos minoritarios en verdad cuentan; de esa Colombia predominantemente urbana pero que reconoce la importancia de promover el desarrollo del campo; de ese país de regiones que reclaman con razón facultades y poderes para abandonar un asfixiante centralismo, y promover el verdadero progreso regional y el renacimiento de la actividad local.

Por eso la Constitución de 1991 es como es. Tan extensa como democrática. Detallada para recoger la diversidad y ofrecer garantías a todos los grupos políticos y sociales. Redactada a muchas manos y estilos porque se hizo en un foro pluralista donde había representantes de todos los sectores de la sociedad. Generosa en materia de derechos; amplia, participativa y democrática en cuanto a lo político; fuerte y sólida en lo que se refiere a la justicia; sana y responsable en lo económico; revolucionaria en lo social. Así es la Carta que estrenamos hoy.

La Nueva Constitución no es un ejercicio académico ni un invento de laboratorio. Es la expresión de la realidad viviente, como ella es, llena de formas distintas, compleja, imbuida de necesidades de variada índole y movida por las ilusiones de millones de compatriotas. En síntesis, como dijera Bolívar, "apropiada a la naturaleza y al carácter de la Nación".

Pero sobre todo, al fundar un nuevo orden, la Constitución de 1991 ha querido reconocer la existencia de los protagonistas de la República naciente.

Millones de colombianos que nunca se habían interesado, con razón, en las teorías constitucionales, hoy se identifican con la Carta de 1991 y están dispuestos a exigir que se cumpla, que no se quede escrita, que sea un instrumento para transformar la realidad. Por eso también, a mí me gusta la Nueva Constitución.

De este proceso ha nacido una Carta Política. Pero debemos tener muy presente que se ha creado además una democracia participativa. Ahora todos repetimos esa expresión. Ya no se habla de la democracia a secas, sino de la democracia participativa o de una democracia de participación popular. No es éste un problema semántico, ni una redundancia, ni unas palabras de moda. Estamos frente a una nueva concepción de la democracia, quizás la más avanzada de que se tenga noticia, y tan reciente que la colombiana es de las pocas Constituciones del mundo que recoge estas ideas. Así como hace 200 años, Montesquieu era revolucionario para su época, hoy los inspiradores de la democracia participativa han desafiado las instituciones tradicionales, no para destruirlas sino para tomarlas como pilares de un nuevo orden político, más legítimo, más respetuoso de la autonomía, de los derechos y de la libertad de cada persona, menos desigual y más justo, abierto a la convivencia pacífica de todos los grupos que conforman una comunidad.

Al crear una democracia participativa, hemos cumplido el mandato de los electores que el 27 de mayo del año pasado se volcaron a las urnas para depositar la papeleta que fundó este proceso. Nada pudieron los personeros del viejo orden ante la fuerza incontenible de la transformación, ante la decisión de millones de colombianos que resolvieron hacerle frente a la crisis, a la violencia y a la desesperanza, con un alud de votos que desde entonces anunciaba el advenimiento de una nueva era. Los colombianos se crecieron frente a la adversidad respondieron a las bombas con votos, con millones de votos por el nuevo país que anhelaron tantos compatriotas caídos: Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Carlos Mauro Hoyos, Rodrigo Lara Bonilla, Enrique Low, Diana Turbay de Uribe y decenas de periodistas, jueces, magistrados y gentes del común.

En esta democracia participativa grupos de ciudadanos podrán presentar directamente proyectos de ley al Congreso, de ordenanzas a las Asambleas, de acuerdos a los Concejos. Podrán designar un vocero que los represente en el trámite de sus propuestas que deberán seguir su procedimiento rápido. Así como podrán proponer sin intermediarios los cambios que requieran, también podrán vetar aquellas decisiones que consideren altamente perjudiciales. Si un elevado número de ciudadanos solicita que una ley aprobada por el Congreso sea sometida a referendo, éste debe ser convocado para que el pueblo escoja si la ratifica o la deroga. También podrán tomar decisiones por sí mismos sobre asuntos de trascendencia en consultas populares en todo el país, en su departamento o en su municipio. Inclusive cuando se vaya a reformar algún aspecto particular de la Constitución de 1991, se podrá acudir —si se quiere— al constituyente primario de donde se originó, sea para que se someta a referendo un texto determinado, sea para que las reformas que haya aprobado el Congreso vayan a ratificación popular.

Además de votar en las elecciones, en esta democracia participativa, los ciudadanos, podrán exigir el respeto a su derecho a intervenir en otros foros, para que sus opiniones sean consideradas cuando se vayan a tomar decisiones que los afecten: los estudiantes en las universidades, los trabajadores en las empresas, los afiliados en los sindicatos y gremios, los profesionales en sus colegios, los campesinos en sus organizaciones, los consumidores y las asociaciones cívicas ante las entidades del Estado, los jóvenes en los organismos públicos que les interesen, las mujeres en las altas esferas de decisión, para citar tan sólo algunos ejemplos.

En esta democracia participativa lo más importante es el poder de cada ciudadano. Por eso, en la Carta de Derechos se dice claramente qué puede hacer un individuo que se sienta discriminado, qué puede hacer una persona que ha sido arbitrariamente tratada o asaltada en su honra, en su intimidad o en su autonomía.

No más injusticia. No más privilegios. No más atropellos. Respetemos la dignidad de todos. Vivamos juntos en paz. Eso es lo que busca, en últimas, la Carta de Derechos. Pero además de enunciarlos, le ofrece a cualquier persona mecanismos, como el recurso de tutela y el Defensor del Pueblo, para que el Estado los respete y para que los jóvenes no tengan que sublevarse contra las instituciones para defender esos derechos.

Ahí, señores delegatarios, están las armas de los colombianos para luchar en paz por sus intereses.

Invito a mis compatriotas a usarlas cada vez que sea necesario.

Los invito a una batalla en la que no caiga una sola gota de sangre, para hacer cumplir la Constitución y sus derechos.

Una Nueva Carta. Una nueva democracia. Y también nuevas instituciones sólidas y eficaces. La Corte Constitucional, para hacer de la Carta de 1991 un documento viviente, relevante para todos, sintonizado con la realidad del país, promotor del cambio y protector de los valores fundamentales de la democracia. Un poder judicial fuerte, ágil y autónomo para que la justicia no se pierda entre montones de expedientes, salga de los anaqueles y se ponga al alcance de todos los colombianos que podrán acudir a ella y recibir pronta respuesta.

La institución de la Fiscalía General de la Nación, servirá para coordinar e impulsar la acción

Que nadie se llame a engaño. Se ha construido una nueva legitimidad basada en un consenso pluralista para que continúe la lucha sí, pero la lucha democrática, no la confrontación armada. La Carta de 1991 es un tratado de paz, el nuevo instrumento para la reconciliación.

del Estado contra la delincuencia y será la abanderada de la lucha contra la impunidad, capaz de afrontar poderosas organizaciones criminales. La Fiscalía General ha nacido con un pie en el Ejecutivo, que envía la terna de la cual se escogerá el Fiscal, y otro pie en la rama judicial, puesto que pertenece a ella y tiene facultades semejantes a la de un juez para adelantar investigaciones y adoptar medidas precautelativas. Una de las prioridades de la agenda del Gobierno será promover el desarrollo del nuevo sistema penal que se desprende de esta institución, buscando siempre un sano equilibrio entre la eficacia de la justicia y el respeto por los derechos. Abrigo confiado la esperanza en que se iniciará una nueva era para la justicia colombiana, más a tono con las ideas predominantes hoy en otros países democráticos, para que los crímenes no queden impunes y para eliminar toda forma de justicia privada.

Hay que subrayar también las nuevas Instituciones de la Procuraduría General y la Contraloría Nacional, con herramientas eficaces para defender el patrimonio del Estado, velar por la eficiencia de las entidades públicas y sancionar de manera ejemplar la corrupción.

Además, se vislumbra un Congreso de la República diferente, donde todos los colombianos se sentirán representados. Un Congreso con asiento para las diversas fuerzas políticas y sociales, que tendrá un Senado elegido por circunscripción nacional. Depurado de los vicios que, como los auxilios y el turismo parlamentario, empañaron sus logros ante la opinión pública. Preservado de prácticas indebidas por un severo Estatuto del Congresista y una ampliación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Un elevado foro de la democracia, como lo ha sido esta Asamblea. Habilitado para discutir de cara a la Nación sobre cómo se deben invertir los recursos del Estado mediante un proceso democrático, transparente y deliberativo, para la aprobación del presupuesto y de los planes de desarrollo. Dotado de mecanismos para hacer más responsables a los funcionarios públicos y convertirse en la caja de resonancia de los grandes problemas nacionales. Y también, con la misión histórica de impulsar el desarrollo de la Nueva Constitución expidiendo las leyes que sean necesarias.

En cuanto al Ejecutivo, no lo veo debilitado así se le hayan dado nuevas funciones al Congreso, como lo quisiera López Pumarejo en la Reforma de 1936, y así se haya establecido el voto de censura como él mismo lo propuso entonces. Creo que sí que se ha restablecido un sano equilibrio entre los poderes públicos. El Presidente sigue siendo el único representante de la Nación entera, el símbolo de la unidad nacional, el líder de la democracia, el permanente interlocutor del pueblo y de todas

las fuerzas políticas, el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno y la Suprema Autoridad Administrativa.

Es apresurado saber si algunas normas resistirán el análisis del tiempo. Pero no me cabe la menor duda de que la concepción política y las instituciones en que se funda el nuevo Estado, tienen vocación de permanencia.

Los colombianos le hemos dado una lección al mundo: cuando se cernían sobre nosotros las mayores esperanzas, cuando la violencia entretejía la madeja de varias guerras simultáneas, cuando muchos otros pueblos en similares circunstancias habrían quizá cedido a las tentaciones totalitarias, optamos por el camino de las reformas, de una verdadera revolución civilista.

¡Cuántos cambios! ¡Qué grande y profunda esta transformación!

Atrás ha quedado el Estado de Sitio, que sirvió igual para hacer frente a la violencia y para construir caminos de paz, pero que fue fuente de desprestigio de nuestra democracia.

Atrás ha quedado también cualquier pretexto para la lucha armada como instrumento de acción política.

A las FARC y al ELN, que persisten, a pesar de las generosas ofertas de un espacio digno y legítimo de participación, en el camino de las armas, me dirijo con la esperanza de que me escuchen y de que escuchen el clamor de toda la Nación: no más emboscadas, no más asaltos, no más secuestros, no más violencia, no más voladura de torres y oleoductos, no más atentados contra las gentes de Colombia. Después de esta revolución pacífica, la prédica y la práctica de la violencia serán formas arcaicas de la mayor fuerza reaccionaria.

El próximo 15 de julio se reiniciarán las conversaciones de Caracas. Los colombianos y observadores de muchos otros países estarán atentos a la actitud que asuman los alzados en armas. En todos los rincones de Colombia y en el resto del mundo se sabrá muy pronto si están decididos a seguir dilatando las soluciones, por preferir a los acuerdos ciertos, realistas y verificables, llegar a la mesa de negociaciones en busca de simple protagonismo o propaganda. Sin vacilaciones, el Gobierno que presido tomará las medidas del caso para salir a defender la nueva legitimidad, con la certeza de que en todos los rincones del mundo se escucharán voces de respaldo para los defensores de una democracia fresca y renovada. Si por el contrario esos grupos optan de manera decidida y sincera por la reconciliación y por defender sus ideas por medios pacíficos, el Gobierno los rodeará de garantías y la sociedad responderá a ese gesto con la magninimidad que merece.

Las elecciones del 27 de octubre les brindan una ocasión excepcionalísima para que reemplacen con su voz el tableteo de las ametralladoras, para que la fuerza de sus ideas desplace para siempre el ruido sordo de la dinamita. Los invito a dar el otro gran paso histórico que esperan los colombianos y que la opinión pública nacional e internacional vería como una gran contribución a esta transformación democrática.

Pocas veces ha sido tan cierto que estamos reformando para pacificar. A la violencia, el odio y la impunidad, le hemos opuesto la transformación pacífica, la reconciliación y la justicia. La tarea, claro está, aún no culmina. Ahora tenemos que demostrar que aquello que soñamos, aquello por lo cual tanto luchamos, no sólo es posible en un texto constitucional, sino también en la realidad.

Hemos colocado los cimientos de esta gigantesca obra. Ahora todos juntos, hombro con hombro, tenemos que levantar el resto de la edificación. Nos esperan nuevos y grandes esfuerzos, nuevos y grandes desafíos. Muchos problemas no van a desaparecer como por encanto. Hará falta mucho trabajo y mucha imaginación para utilizar debidamente los nuevos instrumentos que tenemos en las manos y luchar contra la violencia, para combatir la miseria.

Por lo pronto, lo que sí ha quedado bien claro es que bajo la Nueva Constitución no hay ningún espacio para la violencia política, como tampoco lo hay para otras formas reprochables de autoritarismo, de intolerancia, de privilegio o de atropello. Cómo puede haberlo ahora que la sociedad se ha librado de las amarras que le hacían difícil expresarse, ahora que las consignas otrora revolucionarias están recogidas en la Constitución a propuesta del Gobierno, del Partido Liberal, de la Alianza Democrática-M19, del Movimiento de Salvación Nacional, del Partido Social Conservador, de la Unión Patriótica, los indígenas y los evangélicos, del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad, el Quintín Lame y el PRT.

No. Que nadie se llame a engaño. Se ha construido una nueva legitimidad basada en un consenso pluralista para que continúe la lucha sí, pero la lucha democrática, no la confrontación armada. La Carta de 1991 es un tratado de paz, el nuevo instrumento para la reconciliación.

Miremos hacia el futuro. La Constitución de 1991 nos ha volcado a una nueva situación. Se siente correr un aire refrescante. Se ven abiertas las ventanas para un juego político fluido, equilibrado y vigoroso. Y hay una inmensa avenida larga y

Mi compromiso, como Presidente de los colombianos, es seguir promoviendo esa nueva fe, esa revolución democrática y pacífica que he prometido sin desfallecer un sólo instante.

ancha para que la recorran ciudadanos identificados con su Constitución, orgullosos de su democracia, decididos a continuar construyendo esta otra Colombia. La política tradicional, viciada por el clientelismo, es rebasada por una nueva forma de movilizar la opinión, por un estilo político purificado de las prácticas que todos rechazamos.

Al imaginar el porvenir, recuerdo con emoción a Luis Carlos Galán, que le devolvió a la política su majestad, que mostró la fuerza de las ideas para transformar la realidad, que inició y será para siempre parte omnipresente de ese futuro. "La democracia sobrevive", decía Galán, "si una nación logra identificar un fin colectivo que nos interprete a todos y no a sectores privilegiados". Pues bien, ese fin colectivo ha sido identificado y está representado en este proceso en el que, sin lugar a dudas, Galán habría sido protagonista principalísimo.

Iniciamos hoy la jornada más importante que nos ha tocado vivir. Con la confianza que nos da el que la tenacidad haya derrotado al escepticismo. Teniendo en nuestras manos un patrimonio que recoge más de cien años de experiencias y aspiraciones. Con la satisfacción de que todo ha salido bien. Con los puños en alto, celebrando un éxito que le pertenece a todos los colombianos. Y por lo tanto, con la obligación de que este experimento de la audacia, la imaginación y el pragmatismo, transforme la realidad, tenga plena vigencia, consolide la paz y cimiente un orden justo.

Señores delegatarios, compatriotas:

Mi compromiso, como Presidente de los colombianos, es seguir promoviendo esa nueva fe, esa revolución democrática y pacífica que he prometido sin desfallecer un solo instante.

A veces miro con nostalgia estos 150 días en que todo el país estuvo pendiente de la creación de su nueva Constitución. Han terminado las Sesiones de la Asamblea Constituyente de 1991. Ustedes descansarán de tanta presión y de tan agotador trabajo. Volverán por un tiempo al seno de sus familias y regiones que los recibirán como lo merecen los soldados que acaban de ganar esta gran batalla por la paz.

Ha renacido la esperanza. Es nuestra la certeza de que hemos logrado cumplir las palabras del Libertador Simón Bolívar, al "haber conservado intacta la Ley de Leyes: la igualdad".

Ha renacido la confianza en nuestras enormes posibilidades para asumir el revolcón en toda su magnitud. Para avanzar con vigor en esta etapa de nuestra historia. Para iniciar desde hoy y con esta nueva Carta de Navegación el camino hacia el Siglo XXI. Para tomar el rumbo correcto en el horizonte despejado que tenemos por delante. Sin más temor que el de vacilar ante el peligro, porque el futuro está ahí para quienes se atrevan a consagrar su vida a la construcción de una Nueva Colombia.

Ha quedado atrás el viejo orden, y con la ayuda del Dios de Colombia, vamos a hacer de la nuestra una patria próspera y pacífica.

Colombianos:

¡Bienvenidos al futuro!

Colcultura

LA RED DE COMUNICACIONES CULTURALES

PRESENTA

SALA DE REDACCIÓN
TEL: 281-8472

EDITORIAL

GACETA
LA REVISTA BIMESTRAL DE CULTURA
INFORMES: TEL: 341-0675

EVENTOS ESPECIALES
TEL: 281-8424

PUBLICACIONES
TEL: 341-0675

EDITORIAL

TELEVISIÓN

SEÑALES DE VIDA
UNA MIRADA PROFUNDA AL CORAZÓN DE NUESTRAS CIUDADES
LUNES · 7:30 pm · CADENA UNO · 341-0496
ESPECIALES DE COLCUTURA · CADENA TRES

TRAVESÍA
UN VIAJE POR LAS VOCES DE COLOMBIA
DOMINGOS · 11 am · POR MONITOR DE RADIO CARACOL

GACETA
LA CULTURA TAMBIÉN ES NOTICIA · RADIO NACIONAL
SÁBADOS Y DOMINGOS · TEL: 281-8335

RADIO

ZONA

OFICINA CENTRAL
CALLE 11 Nº 5-16 · APARTADO AÉREO 29665 · TELS: 341-0675, 281-8424
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C. · COLOMBIA

Hernando Gómez Buendía
Director del Instituto de Estudios Liberales (I.E.L.)

¿Cuál es el futuro del liberalismo?

Hernando Gómez Buendía

"Se habla mucho de modernización de los partidos, pero todo es cosa de palabras y se queda en palabras" (**Mario Latorre Rueda,** Elecciones y Partidos Políticos en Colombia, *1969).*

Los partidos tienen una función *política* esencial: ser la correa de trasmisión recíproca entre la sociedad civil y el Estado. En una democracia, cada partido debe pues *representar* determinado sector de la sociedad; y debe utilizar el poder del Estado para *dirigir* la sociedad según un cierto programa o "modelo de futuro"

Para cumplir su función política, un partido necesita cumplir exitosamente su función *electoral*. Pero si los partidos se reducen a hacer elecciones, no habrá adecuada representación de las fuerzas sociales —las cuales tenderán entonces a expresarse en forma violenta— ni habrá tampoco opciones de futuro para escoger —el país será una "sociedad bloqueada"—. Que es,

infortunadamente, lo que sucede con los partidos tradicionales de Colombia, poderosas máquinas para hacer elecciones pero no voceros organizados de fuerzas sociales ni portadores de proyectos coherentes y alternativos de futuro.

El Partido Liberal tiene pues una vieja crisis política. Lo nuevo es su crisis electoral. *Y esta crisis electoral no podrá superarla si no supera antes su crisis política*. Es decir, si no recupera la representación organizada de las fuerzas sociales comprometidas con el proyecto histórico de la *modernización* cultural, política, económica y social de Colombia.

El proyecto de la modernización está tan reñido con el clientelismo como lo está con el *populismo* en ascenso.

La verdadera modernización del liberalismo supone pues recuperar el partido de las manos que hoy lo monopolizan —las de su clase política o, con más precisión, su clase electoral— para entregarlo —con más precisión: para que se lo tomen— los dirigentes y activistas de la sociedad civil empeñados en el proceso de modernización nacional.

Supone que la tendencia anticlientelista y antipopulista del liberalismo se organice —nos organicemos— como un *equipo político de militantes*, no ya como una montonera electoral de caciques y cargaladrillos:

Un equipo, donde la división del trabajo sea posible porque no sólo hay elecciones y listas sino política y ejercicio concertado del poder desde todas las esferas sociales; y la solidaridad sea posible porque medien reglas de juego claras, previas, impersonales y estables;

Político esto es, organizado para ganar las elecciones pero también para hacer realidad desde el poder ese formidable y complejo proyecto que significa la real modernización de Colombia.

Tal es la hipótesis que —sosegadamente y paso por paso— quiere sustentar este escrito. Tal es también la invitación que —emotivamente y porque la sabe oportuna y factible— dirige el autor a "los otros liberales" de Colombia.

El hecho

Entre el 11 de marzo y el 9 de diciembre de 1990, el partido liberal perdió tres y medio millones de votos: una merma de casi 80%. Si se descuenta la tan elevada abstención de diciembre, aún resulta para el liberalismo una caída de 61 a 27 como porcentaje del voto total —el más bajo desde los años 20— y de controlar el 63% de los escaños en el Senado a sólo el 35% de los renglones en la Constituyente.

¿Tropezón...?

Los optimistas afirman que se trata de un revés ocasional. Y en efecto todo, en las elecciones de diciembre, corría en contra del liberalismo: sin sus jefes "naturales" ni regionales como candidatos, con la cicatriz y la fatiga de dos elecciones previas, disperso en la "operación avispa", con tarjetón, con circunscripción nacional y, sobre todo, con la consigna "sí a lo nuevo-no a la clase política" como *leitmotiv* de todo el proceso... Era tanto como desafiar al rey del bambuco en un concurso de salsa.

Pero, añadirían los optimistas, "los muertos que vos matais, gozan de buena salud":

—Primero, porque el liberalismo sigue siendo el partido de gobierno. Controla la Presidencia, el Congreso y el 56% de las alcaldías, en municipios donde reside casi un 80% de la población colombiana. Cuenta con más cuadros nacionales, con más figuras regionales y con "maquinarias" mejor establecidas que cualquiera de sus contendores.

—Segundo, porque el número de quienes, según las encuestas, se consideran liberales, todavía duplica al de la segunda fuerza política.

—Y tercero porque, si a eso viniéramos, el clientelismo no pasará de moda mientras la red de servicios estatales no alcance cobertura universal.

Sólo habría pues que aguardar unas elecciones "normales". Ir aceitando las maquinarias, como se ha hecho desde que el mundo es mundo. Y retocar, eso sí, la "imagen" de partido, inventar la campaña publicitaria capaz de seducir otra vez al díscolo "voto de opinión" —que, por lo demás, seguiría siendo minoritario—.

¿...O porrazo?

Tal vez la hipótesis del simple tropezón sea cierta y el liberalismo, con sólo aceite y maquillaje, pueda recuperar su puesto en las urnas. Aún así, habría renunciado a su puesto en la historia, se habría apostado definitivamente a

El Partido Liberal enfrenta una vieja crisis política. Su propósito de modernización enfrentan al clientelismo y al populismo en ascenso como los principales obstáculos.

ser el partido del *statu quo*. Pero además —y es lo que aquí se examinará— la hipótesis del tropezón tal vez esté equivocada. Para volver sobre cada uno de los tres argumentos que la sustentan:

Primero, con el probable anticipo de las elecciones, el liberalismo también arriesga su cómoda mayoría en el Congreso. De todos modos le espera un duro desafío en las alcaldías y las corporaciones regionales en marzo del año entrante. Y, a juzgar por las encuestas actuales, perdería la Presidencia frente a Navarro en 1994.

Segundo, la autoafiliación liberal dista, y mucho, de asegurar lealtad al partido; tanto así que, en diciembre, cerca del 45% de los votos por la AD-M19 y del 30% de los del MSN parecen haber sido de origen liberal; o que casi el 70% de quienes votarían hoy por Navarro son liberales. Peor, según las encuestas del Centro Nacional de Consultoría, durante los últimos meses el porcentaje de colombianos que declaran pertenecer al liberalismo ha caído en más de una cuarta parte: del 45% al 33%.

Y tercero, si a eso viniéramos, el clientelismo no está escriturado a los partidos tradicionales sino a un complejo de cultura y estructura social, de suerte que irá tentando a las nuevas fuerzas electorales en la misma medida de su gradual acceso a la burocracia y los servicios del Estado.

Pero hay un punto más importante todavía: tal vez los concursos de bambuco se fueron para siempre, tal vez ya no habrá otras elecciones "normales" para el liberalismo. En efecto:

Primero, está en marcha un proceso de descongelamiento electoral irreversible, a partir del triple "revolcón" que, en un solo año, significaron la consulta popular, el tarjetón y la circunscripción nacional. Un revolcón que coincidió, en su orden, con la derrota de la primera maquinaria del liberalismo (marzo), con el triunfo de su candidato presidencial por el menor índice de arrastre electoral en 30 años (mayo) y con la reducción de su bancada a la condición de mayor minoría (diciembre);

Segundo y sobre todo, está la Constituyente, con su opción definitiva por unas reglas de juego que formalicen y aceleren la agonía política-electoral del "Antiguo Régimen".

El antiguo régimen y sus partidos

Como las sinfonías, cada Constitución está escrita en su propia clave administrativa, económica o política: la del federalismo en 1863, la del centralismo en 1886, la del intervencionismo en 1936, la de modernización del aparato estatal en 1968... La Reforma de 1991 tendrá sin duda una clave política y esa clave será la participación ciudadana.

En efecto, el denominador común a los proyectos de reforma —y hasta la "clave" capaz de dar alguna coherencia a la explosión de artículos y ponencias independientes— es el de ampliar la presencia ciudadana en cada esfera de decisión esto es, el de transitar de la "democracia representativa" a la "democracia participativa". Lo cual vale tanto como decir que el consenso de la hora apunta al sistema político como al nudo gordiano en nuestro proceso de construcción nacional y denuncia al "antiguo régimen" por ser el régimen de la *participación recortada*.

Lejos de ser un accidente, el régimen de participación recortada explica la excepcional estabilidad de la democracia colombiana en medio de tan intensos conflictos sociales: su secreto consiste en permitir que todos voten pero quitarle importancia al voto. Es decir en que el ciudadano tenga cada dos o cada cuatro años la oportunidad de "cambiarlo todo para que todo siga igual"; que escoja entre aspirantes a los puestos públicos pero no entre proyectos públicos; que vote pero que no decida. Así, en el lugar de la política no están en realidad sino las elecciones; y en lugar de participación ciudadana hay apenas participación electoral. Lo cual tiene tres grandes implicaciones:

Primera, que el "país político" sea en la práctica el país puramente electoral. Es decir: a) Monopolio de quienes son profesionales en elecciones (la "clase" política); b) Sinónimo de "cuerpos de elección" (Congreso, asambleas y concejos), y c) Enfrascado en los debates de consecuencia electoral (por eso su lejanía del "país nacional").

Segunda, que la relación entre el elegido y el elector esté sobrecargada de consideraciones personales. Puesto que no se trata de escoger una política general ni al abogado de un cierto sector socioeconómico sino más bien de "premiar" a "mí" candidato con el

acceso al cargo que pretende, el criterio de reciprocidad individual cobra una gran importancia. Lo cual tiene todo que ver con el clientelismo y con el predominio de las maquinarias locales, donde es factible el contacto personal.

Y tercera, que el "país político" y el "país nacional" funcionen o se perciban como cuerpos separados y aún hostiles. Con un único, pero crucial, punto de amarre: el presidente de la República, cabeza simultánea de los dos países (y es aquí donde radica su mucho poder). Escogido desde el "país político" para gobernar al "país nacional", los "barones" pueden (y suelen) abandonar al presidente una vez elegido (por eso no hay partidos de gobierno) de la misma manera que el presidente puede (y suele) agrandar su distancia de los barones (mientras guarda discretos equilibrios burocráticos).

Ahora bien, cada una de esas tres características del sistema político tiene su réplica exacta en los partidos del sistema:

Son, primero, partidos exclusivamente electorales, monopolios de su "clase política" o clubes de parlamentarios, alejados del "país nacional".

Son, segundo, partidos personalistas (clientelizados o caudillistas) y sumatorias de fuerzas regionales antes que organizadores de algún proyecto nacional.

Son, tercero y sin embargo, partidos con una función crítica para el "país nacional": la de escoger candidato a la Presidencia de la República.

El Revolcón

Ante el "país nacional" entonces, la política tiene las virtudes del presidente y los defectos del Congreso. Tan así que en cada partido parecería haber dos: uno el que está en el gobierno, y otro el que está en el Congreso. Y que el prestigio de cada colectividad se basa en las obras que hayan podido dejar sus gobiernos, mientras su desprestigio nace de la clase política. Con dos agravantes para el liberalismo:

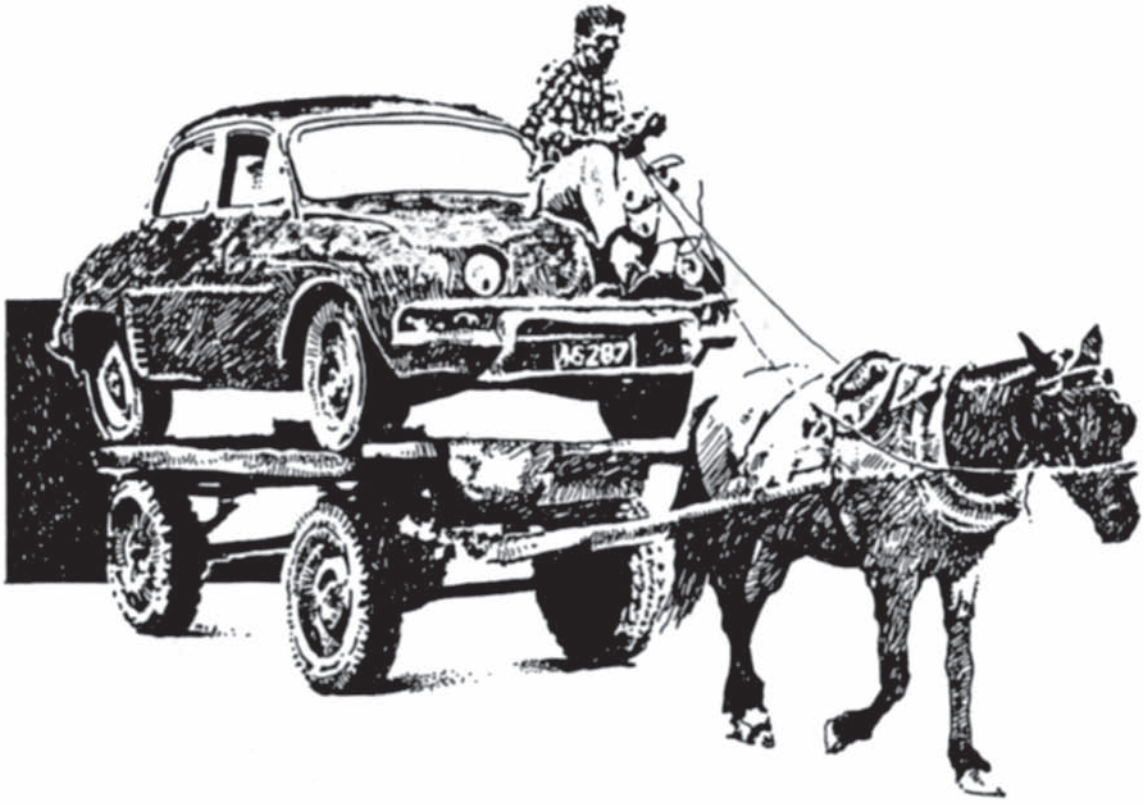
El haber renunciado a la función que lo articulaba *como partido* al "país nacional" esto es, a postular *su propio* candidato presidencial. En eso consistió la "consulta" a la ciudadanía en general no a los militantes carnetizados del partido, como tiene que ser y como es en todas partes. Y si no: cómo se explica el que la "destorcida" vertical del liberalismo haya principiado sólo dos meses después de registrar el más alto volumen electoral en toda su historia?

Mientras el conservatismo es en realidad una minoría "funcional" desde hace medio siglo, *el liberalismo es el partido del régimen*. De suerte que, para el colombiano medio, "Partido Liberal" es lo mismo que "clase política", que "Congreso, asambleas y concejos", que "maquinarias regionales". De suerte que todo el desprestigio del mundo político recae sobre el liberalismo. Y de suerte también que las anunciadas reformas políticas de la Constituyente parezcan ideadas —independientemente de sus méritos intrínsecos— para socavar los tres cimientos del viejo partido liberal.

Primero, el de la clase política y sus corporaciones, con el no a la reelección indefinida, a la elección simultánea para varios cuerpos colegiados, a la elección de clanes familiares, al nombramiento de congresistas para cargos en el gobierno, a las suplencias, a los auxilios, al turismo parlamentario, a la actual inmunidad, al mandato irrevocable, a la laxitud en las incompatibilidades, a las contralorías-botín... Para no hablar de la inminente disolución del Congreso y el autolevantamiento de inhabilidades por parte de los constituyentes.

Segundo, el de las jefaturas regionales y sus prácticas electorales, con la circunscripción nacional, el cuociente incrementado, el voto obligatorio, el tarjetón, el no a las asambleas o al monopolio de licores, el fortalecimiento de la región, la provincia o el municipio en desventaja del actual departamento...

Tercero, el del bipartidismo, con la doble vuelta en la elección presidencial, el vicepresidente elegido, el "estatuto de la oposición", la moción de



censura, el voto popular sobre temas sustantivos y no sólo sobre candidatos, o un reglamento de partidos que, junto a las garantías y ventajas especiales para minorías, son otras tantas invitaciones al multipartidismo.

¿Hay vida después de esta vida?

Los pesimistas concluyen pues que el partido liberal está, sin más, en vía de extinción. Pero su juicio es tan apresurado como el de los optimistas.

En primer término, porque las instituciones sociales no desaparecen sino que son reemplazadas. Y hay por lo menos lugar a duda sobre la capacidad de los nuevos movimientos para sustituir en forma *permanente* los partidos tradicionales.

Desde luego: la Alianza Democrática-M19 tuvo un avance espectacular, como que multiplicó por 10 su votación en el lapso de apenas 9 meses, se convirtió en la segunda fuerza electoral y su jefe encabeza las encuestas de preferencia presidencial. Desde luego: el MSN avanzó significativamente, al menos como porcentaje de la votación total, entre mayo y diciembre; ganó 9 de los 70 escaños de la Asamblea y superó de lejos la lista oficial del PSC.

Pero también:

Primero, las elecciones de diciembre *sí* fueron atípicas;

Segundo, ninguno de los dos movimientos ha roto aún la barrera del millón de votos es decir, no rayan todavía con el fenómeno Anapo y se mantienen en el rango del llamado "voto flotante", del movimiento-protesta tipo MRL o Nuevo Liberalismo;

Tercero, parece haber bastante más Antonio Navarro Wolff, que AD o aún que M19; y bastante más Alvaro Gómez Hurtado que MSN;

Cuarto, en ambos casos abundan las señas y las trazas de "populismo", en el sentido de ser movimientos publicitarios, al vaiven por tanto de la opinión, antes que movimientos políticos enraizados en fuerzas sociales estables;

Quinto, no es todavía claro a cuáles sectores sociales representará finalmente la AD-M19 o el MSN, ni es todavía clara su propuesta de futuro para Colombia; es decir, son todavía fenómenos *electorales* y no organizaciones *políticas*, y

Sexto, también en ambos casos existe un complejo debate interno acerca de la conveniencia y el mejor modo de estabilizarse como organizaciones políticas.

En segundo —y más importante— lugar, el partido liberal de Colombia ha demostrado una capacidad de adaptación histórica de veras excepcional. En cada país de América y de Europa Occidental el liberalismo fue alguna vez el partido dominante; pero —con excepción del canadiense— todos esos partidos languidecieron sin remedio, en unos casos desde los 1890s y en otros desde los 1930s. Sólo el liberalismo colombiano ha logrado mantener su vigencia hasta esta segunda mitad del s. XX, y ha sido *además* el eje del sistema político entre 1863 y 1886, otra vez entre 1930 y 1946 y aún otra vez a partir de 1957. El partido liberal se ha repuesto de "sustos" como el de la Anapo en 1970 o el de Betancur en 1978; se ha repuesto de derrotas ocasionales, como las de 1854 o 1982; y se ha repuesto también de derrotas for-

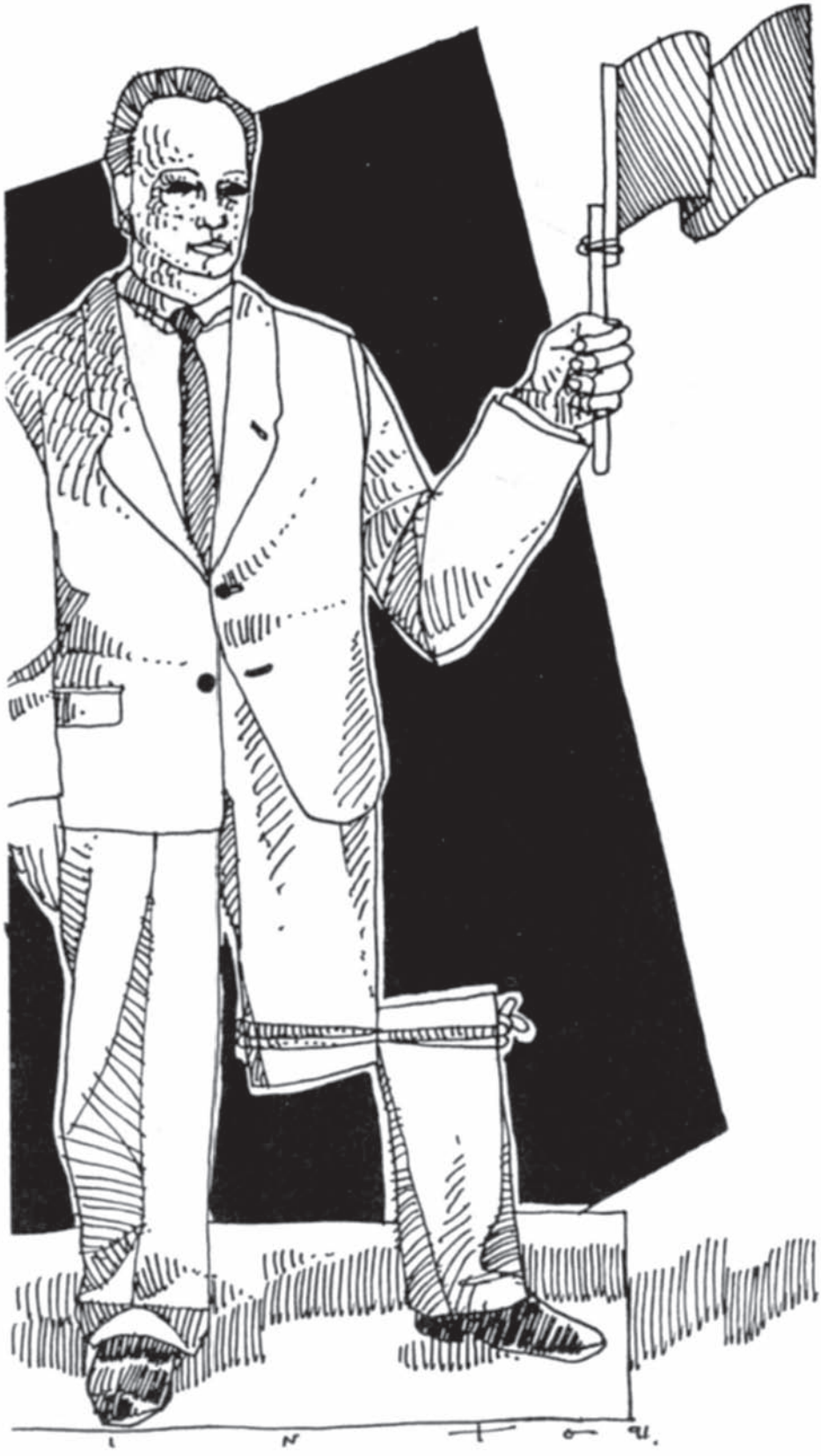
midables, como fueron la tanda de 1875, 1886 y 1902, o aquella de 1946, 1948 y 1953, cuando era el "antiguo régimen" político de la época quien, igual que ahora, estaba siendo derruido.

Es un lugar común —y casi siempre peyorativo— aludir al liberalismo colombiano como a una suma de tendencias. Menos común es reconocer que la heterogeneidad es la condición esencial para sobrevivir a cambios en el medio ambiente, por la misma ley que en biología preside la evolución de las especies.

Si, en efecto, se ahonda en la historia de las crisis estructurales del liberalismo, se comprueba la repetición del siguiente ciclo: una tendencia determinada —la del Olimpo Radical, la de la República Liberal...— llega a ser dominante dentro del partido al tiempo que éste se está convirtiendo en el pilar del régimen político. La crisis del régimen es por eso la crisis de la tendencia hegemónica y, con ella, la crisis del partido mismo. Recíprocamente, superar la crisis liberal implica que la tendencia hasta entonces dominante sea desplazada por la tendencia alternativa y más cercana al espíritu del régimen emergente es decir, que se imponga el "otro liberalismo" de la época (el de los gólgotas en 1854, el de los pacifistas en 1910, el de los frentenacionalistas en 1957).

En 1957 comienza el último ciclo. La tendencia liberal emergente después de la "pausa" iniciada en 1944 —la de los "republicanos" que pactaron el Frente Nacional— se hizo hegemónica a tiempo que en el régimen político se acentuban —cabalmente como fruto del Frente Nacional— los rasgos clientelistas y de competencia cerrada. Por lo mismo, la actual crisis del régimen es la crisis de la tendencia frentenacionalista convertida en clientelista y, con ella, la del partido liberal.

Y, al igual que sucedió en los ciclos anteriores, su supervivencia depende hoy de si "el otro liberalismo", —para abreviar, el "anticlientelista"— es capaz de organizarse y de imponer una forma de articulación diferente entre el partido y el país, una articulación política y no apenas electoral, como la exige el régimen naciente.



Amagos de respuesta

De manera que se diría instintiva, el partido liberal ha buscado ese modo alternativo de articularse con el país. No es por eso simple azar el que sus tres principales innovaciones de los años 80 hayan sido otro tantos gestos de apertura hacia el "país nacional".

a) El Congreso Ideológico —para ocuparse, no ya de los asuntos electorales que mantienen absorta a la clase política, sino de las preocupaciones sustantivas del colombiano común—;

b) El paso de 25 a más de 150 delegados del "sector social" en las convenciones nacionales —para incorporar las "fuerzas vivas del país"— y

c) La consulta popular —para que "sea el país y no la clase política quien decide"—.

Tampoco es simple azar el que las tres innovaciones hayan sido obra de la tendencia alternativa del liberalismo. Ni, desafortunadamente, es simple azar el que ellas aún parezcan precarias, periféricas, casi cabe decir postizas:

a) El Congreso Ideológico ha bajado a la categoría de un ritual que poco representa, poco discute y a nadie obliga;

b) Los "delegados de participación social" se falsearon otra vez a delegados de bolsillo (como en el caso de las supuestas "organizaciones femeninas" a partir de 1988), y

c) La consulta —con su gran virtud de ser democrática y su gran defecto de no ser interna— fue en realidad un atajo ocasional y no una salida estructural hacia la democratización del partido.

El desafío que aguarda al "otro liberalismo" es pues el de llevar a cabo una suerte de revolución copernicana, de convertir en esenciales aquellas prácticas de discusión programática, representación social y democracia interna que hoy tienen carácter apenas incidental. Es el desafío de captar el impulso del "nuevo régimen" hacia la recuperación de la política para el país nacional.

La alternativa

En efecto, por contraste con las tres ya mencionadas características del "antiguo régimen" —y si el proceso no se descarrila hacia la pseudosalida populista— bajo el "nuevo régimen" deberán acentuarse:

a) Las dimensiones no electorales de la política (es decir, la de dar representación organizada a intereses sociales y la de impulsar modelos alternativos de futuro nacional);

b) Las relaciones suprapersonales —más allá de lo caudillista, de lo clientelista y de lo local— entre actores políticos y ciudadanos, y

c) La reapertura o recuperación del "país político" por el "país nacional".

De modo concomitante, y en contraste con los tres rasgos básicos de los partidos bajo el viejo régimen, los partidos del nuevo régimen habrían de tender a:

a) No ser monopolio de su "clase política" es decir, no estar reducidos al parlamento y los parlamentarios;

b) No ser meros agregados de empresas electorales en las regiones, sino organizadores de corrientes nacionales, y

c) No tener una articulación con el país nacional reducida a postular el candidato presidencial, sino basada en la representación organizada de intereses sociales y en el impulso efectivo de distintos modelos de futuro.

Para el liberalismo emergente, se trata entonces de "desparlamentarizar" el partido, de "desregionalizarlo" y de "devolvérselo al país nacional". En una palabra, de superar el tipo de organización propio de un club *electoral* de *parlamentarios* —la simple federación de "caciques" regionales— para asumir la fisonomía de una organización *política* de representación *nacional*: la de un partido de los "militantes" o sea del grupo de ciudadanos que se organiza para impulsar desde la política ciertos intereses sociales y "cierta idea" compartida del país al que aspiran.

Lo mismo que al régimen político en su conjunto, al partido liberal le llegó la hora de la participación ciudadana. En efecto, pasar de las elecciones a la política es, en el caso de los partidos, pasar de la democracia "representativa" a la democracia "participativa" es decir: de una clase política autónoma a una clase política limitada a ejecutar el mandato de la ciudadanía organizada en partido.

Para avanzar en esa democratización orgánica del liberalismo, lo primero sería adaptar y extender desde ya el principio de la consulta a las próximas elecciones, sean ellas de alcaldes, de Congreso o de cualquier otra índole. Y mejorar, por supuesto, el mecanismo empleado en marzo, para lo cual existen tres tipos de alternativas:

a) El primero, más fácil pero también más superficial, busca sólo que la consulta se limite a los votantes del partido. Tal como en Guatemala, donde todos los partidos están obligados por ley a realizar la consulta en un mismo día; o como en Uruguay, cuya "Ley de Lemas" hace que todos los votos por candidatos de un mismo partido ("lema") se sumen automáticamente al puntero en la elección presidencial:

b) Manteniendo todavía el perfil de un partido "de cuadros", es posible que el país nacional "se lo tome" a la hora de las grandes decisiones. Es el modelo de los Estados Unidos, donde las convenciones que escogen candidato presidencial no son, como las nuestras, reuniones de bolsillo de los parlamentarios, sino elegidas en las "primarias" y de modo que la mayoría de los delegados no pertenecen a la clase política ni dependen de ella;

c) Pero, a diferencia de Colombia, la población de los Estados Unidos esta típicamente representada, no sólo por los partidos políticos, sino además por grupos de interés estables y poderosos. Es por eso que, para curar de raíz nuestro síndrome de participación recortada, mejor sería que la tendencia emergente en el liberalismo se organizara al modo de los partidos "de masa", partidos que el país nacional no necesita "tomarse" porque no son otra cosa que ese mismo país organizado para hacer la política.

De hecho, el mayor óbice para el ingreso del liberalismo a la Internacio-

nal Socialista es su organización obsoleta de partido de cuadros, cuando en la casi totalidad de Europa y América Latina predominan de lejos los partidos de masa. Aquí, el alma de la organización es la militancia y no la clase política. Agrupados por núcleos, barrios, zonas, municipios, regiones, frentes, sectores laborales, sociales u ocupacionales, los militantes realizan el trabajo ideológico, pedagógico, financiero, social, político y —también— electoral del partido; deciden su rumbo en frecuentes consultas internas; y escogen todas sus directivas y candidatos a puestos públicos, en votaciones vigiladas por tribunales especiales.

Que se adopte el camino de las convenciones abiertas al país nacional (la vía de los Estados Unidos) o el camino de los partidos de masa (la vía europea y latinoamericana) hay una condición categórica para que el liberalismo alternativo encuentre una eficaz articulación con el "nuevo país": que sean nuevos sus hombres y nuevas sus reglas de juego. Sin hombres nuevos, no habrá credibilidad. Sin reglas de juego nuevas, no cabrá en el partido sino la lógica electoral de la vieja —o la joven— "clase política" con su demostrada capacidad individual de ganar las votaciones y su también demostrada incapacidad colectiva para hacer la política. La consolidación de la tendencia emergente en el liberalismo pasa entonces por un pacto entre los nuevos dirigentes para constituirse en:

a) Un *equipo*, donde la división del trabajo sea posible porque no todo se reduzca a ser parte de una lista; y la solidaridad sea posible porque medien reglas de juego claras, previas, impersonales y estables;

b) *Político* esto es, organizado para ganar las elecciones pero también para representar las fuerzas sociales comprometidas con la modernidad y para ejecutar ese proyecto modernizador desde el poder —poder del Estado y poder social, pues ambos se requieren para modernizar en serio a Colombia (y otra vez: el ejercicio concertado de ambos poderes requiere de un gran *equipo*).

Pero, después de todo, ¿a quién le importa el futuro del liberalismo colombiano?

Hay quien arguye, con alguna razón, que los partidos políticos tienden a ser innecesarios en las sociedades postmodernas: pero Colombia ni siquiera ha podido comenzar a ser una sociedad moderna. También hay, fuera del mundo postindustrial, regímenes políticos donde los partidos son débiles, incluso inexistentes: pero se trata de dictaduras o de sistemas sumamente inestables.

Y es posible que Colombia esté por iniciar un ciclo prolongado de inestabilidad política, al estilo de Argentina, Perú, Brasil o Bolivia. Que su difícil tránsito del clientelismo a la democracia participativa se descarrile por el atajo del populismo, es decir: que la fallida articulación electoral de los partidos con el país no sea reemplazada por una articulación política organizadora, sino por otra, emocional y simbólica, hecha a base de ambigüedad, de publicidad y del carisma de los caudillos en ciernes. Es un riesgo inocultable con las dos fuerzas nuevas y en ascenso electoral.

Pero también, y en buena hora, puede ser que la AD-M19 y el MSN sean capaces de sobreaguar las tentaciones propias de la coyuntura y se conviertan en corrientes políticas organizadas y permanentes esto es, en partidos nuevos. Y que lo hagan, además, sin retroceder al clientelismo o al caudillismo, ni reinventarlos.

En todo caso, Colombia necesita de partidos, y de partidos modernos. Primero, porque sin ellos no hay democracia, que quiere decir participación *organizada* y *permanente* de la ciudadanía; sin partidos habrá autoritarismo, habrá "retozos" democráticos, o habrá populismo; pero no habrá democracia. Segundo, porque al organizar y representar fuerzas sociales contrapuestas, los partidos son el conducto para solucionar los conflictos a través de la política y no de la violencia. Tercero, porque sólo los partidos son capaces de agregar en proyectos nacionales la dispersión de reclamos propia de otras organizaciones sociales (gremios, sindicatos, movimientos cívicos...). Y cuarto, porque sólo organizaciones políticas coherentes y permanentes —los partidos— pueden construir esos proyectos nacionales.

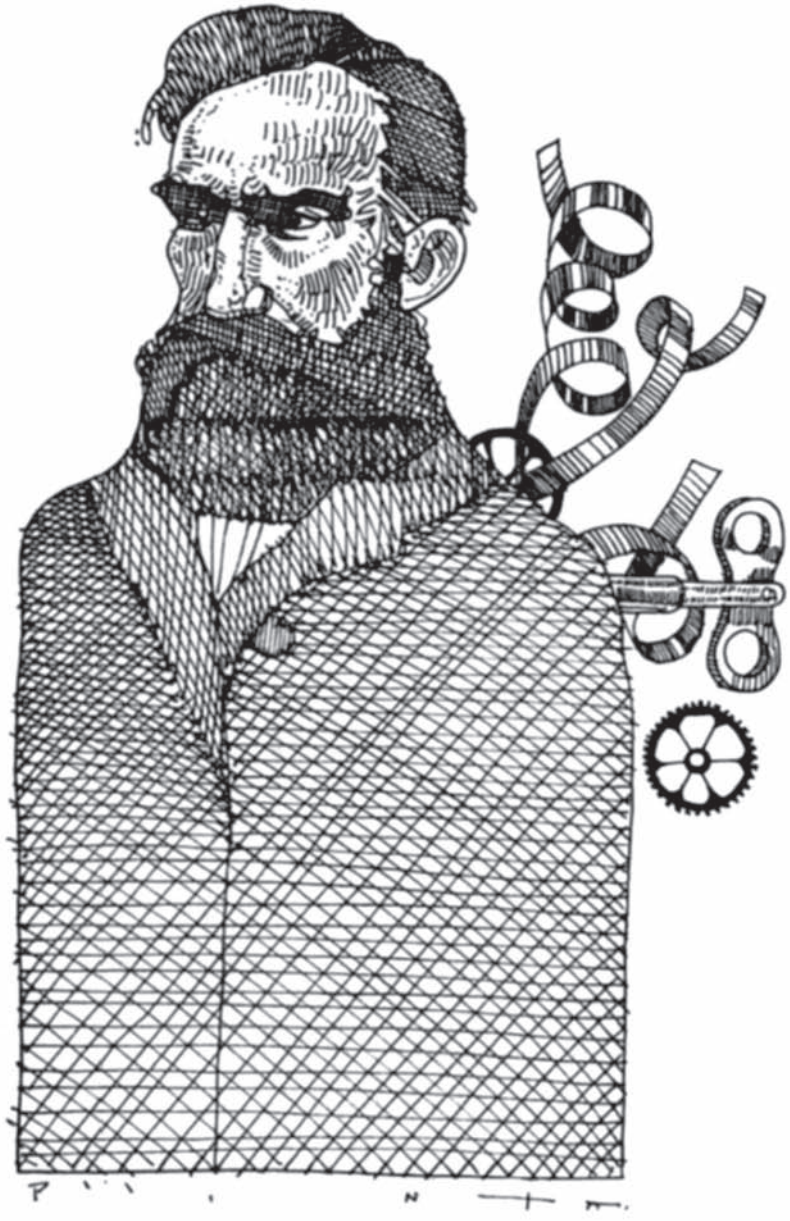
Y a Colombia le importa que el partido eje de su futuro sea de verdad liberal —así se le llame por otro nombre—. Primero, porque "liberalismo" es el sinónimo histórico de una genuina democracia política; y nosotros necesitamos esa democracia, en vez del clientelismo de donde venimos, pero también del caudillismo, populista donde arriesgamos caer. Segundo, porque sin un salto rápido y serio a la modernidad mental, económica y social, quedaremos por entero al margen del orden mundial emergente; y el "liberalismo" tiene bien probado ser la fuerza modernizadora de occidente. Tercero, porque la humanidad —ahí están la *perestroika* y el fracaso de todos los dogmas —camina hacia el liberalismo (y tanto, que Fukuyama insiste en que aquí está "El Fin de la Historia"). Cuarto, porque en Colombia el liberalismo ha sido —ahí están 180 años de historia— el primer constructor de la nacionalidad. Quinto, porque una democracia se rige por la regla de oro de las mayorías; y al fin y al cabo, todavía somos más numerosos los colombianos que nos sentimos liberales●

Javier Sanín E.
Director del Departamento de Ciencia Política de la U. Javeriana

El futuro del conservatismo

Javier Sanín

La sabiduría popular ha afirmado, con razón en los últimos tiempos, que Colombia es un país conservador que vota liberal. Los colombianos, en general, se ruborizan al ser denominados como conservadores, cuando ese sentimiento ya no existe en los países más desarrollados del mundo, en los cuales a ningún neoliberal en economía y neoconservador en política siente vergüenza de aplicar la fórmula. Los electores nacionales encontraron que votar liberal es una manera cómoda de mantenerse conservadores. Votan liberal sabiendo que tendrán gobierno conservador. Posan de liberales, porque ello denota progresismo, liberalidad, centro. Pero no admiten sino gobiernos conservadores. Tal vez porque aquí lo más conservador es el liberalismo. Y todos, liberales y conservadores, son lo uno en economía y lo otro en política. Finalmente, después de las diferencias del siglo pasado y los años treinta, han llegado a parecerse a dos equipos de fútbol. Son como el Millonarios y el Santa Fe. Siguen las mismas reglas, no tienen diferencias sustanciales en lo programático. Se disputan una afición. Por los cuadros, el brillo de las jugadas, la eficiencia, la fanaticada que los sigue sin saber muy bien por qué: por familia, por simpatía, por esperanza.



El Frente Nacional

A partir del Frente Nacional, cuando se terminaron las diferencias históricas entre ambos partidos tradicionales —también el comunista adquirió ya esa denominación, pero no cuenta porque no tiene votos— por el mayor acto de voluntarismo político continuado del que se tenga noticia, en aras de la paz, las contradicciones ideológicas desaparecieron. El Frente Nacional se convirtió en una especie de partido que elegía y gobernaba de acuerdo con un programa comparti-

do, desarrollado por los Lleras y Ospina, con reglas de aplicación automática y selección de gobernantes sin mucha competencia. Una máquina que producía presidentes de una y otra denominación, gobernadores, alcaldes, funcionarios libero-conservadores. El único espacio de cierta competencia fue el Congreso. Tanto que movía más votos que la elección presidencial.

La adhesión partidista excluyente empezó a desaparecer, lo que se consideraba una ganancia en civilidad, porque los partidos no eran tales sino odios heredados. Aunque las divisas sobrevivieron como sentimiento familiar y como elemento para participar en la política frentenacionalista, pues siempre se necesitaba de un liberal o de un conservador para equilibrar los puestos. Los partidos, amañados en la fácil repartición del poder, no se preocuparon de la organización interna, de mantener a sus militantes, ni de hacer oposición, que es lo que perfila y obliga a los partidos. Las guerrillas se convirtieron paulatinamente en la oposición. Pero eran miradas como un problema de los militares, de derrota táctica, de influencia extranjera, de presencia en la lejana zona de colonización agrícola.

Hubo una oposición coyuntural: ANAPO. Era del mismo esquema: constituida por liberales y conservadores, bajo un jefe natural. Con algunos factores populistas, como se estilaba por entonces en el contorno latinoamericano, surgidos de la urbanización acelerada con su enorme tramutación de valores, la mayor educación, las urgencias de las masas pauperizadas, las variaciones en el ingreso, el crecimiento demográfico, los medios de comunicación. A la desideologización y el acomodamiento de los partidos al Frente, se sumó la posibilidad —impensable hasta entonces— de que liberales y conservadores no obedecieran a sus directivas y pudieran desplazarse impunemente hacia las toldas del general. Lo que acababa con la disciplina electoral. Sin vallas ideológicas y sin disciplina, a los partidos solo les quedaron los jefes. Los naturales, para la nación; los regionales para los departamentos.

Los partidos tradicionales jugaron, hasta el fin del Frente Nacional, a cuatro bandas. Cada partido tenía su ala progresista y su sector moderado al mando de un jefe natural. Los moderados eran los oficialismos en el poder. Las disidencias se iniciaban como tales contra el poder establecido, luego se convertían en oficialismo y accedían al poder. El mecanismo de recambio de las élites fue exitoso desde 1930 hasta 1970. En 1974 todos los que habían permanecido como disidencias del Frente compitieron por el poder: López, Alvaro, María Eugenia. Hijos de los oficialismos de antes, nuevos jefes naturales, todos cubiertos por el halo del conservadurismo. De López se dudaba al ser elegido. Lo probó con creces durante el Mandato.

El postfrente

Teóricamente el Frente debía acabarse con López. Pero no. En 1968 se había hallado la fórmula para que los dos partidos siguieran compartiendo el poder en forma "adecuada y equitativa". El desmonte del Frente consistió en seguir —por precepto constitucional— repartiéndose el poder ejecutivo, no por mitades como durante el Frente, sino de acuerdo a la interpretación presidencial. El legislativo también había sido distribuido de manera genial entre Lleras Restrepo y Ospina: al acordar cuántos senadores y representantes tendría cada circunscripción, calcularon tan acertadamente las votaciones de los dos partidos que a cada elección la proporción variaba mínimamente. El mecanismo adoptado para aumentar el número de congresistas se vinculó con la aprobación del censo de población por el Congreso. Como nunca el Congreso aprobó el censo continuó el mismo número, y parecida proporción electoral, apenas interferida por la creación de departamentos.

La distribución de Turbay

El presidente Turbay prorratió el poder ejecutivo por los resultados electorales: sesenta por ciento para el liberalismo, cuarenta para el conservatismo alvarista. Si a alguien le quedaron dudas sobre el arquetipo de lo conservador elegido con votos liberales, le bastaría analizar el gobierno Turbay. Para entonces, tanto liberales como conservadores estaban, por la inercia que venía desde el Frente, ya transformada en lo obvio de la política colombiana, encajados en el Estado, sus puestos y sus presupuestos.

La principal forma de hacer política era aprovechar las ventajas del acceso al aparato estatal, o sea, lo que se conoció como "clientelismo". Las directivas nacionales habían sido archivadas. Cada parlamentario era ele-

Belisario era un conservador con imagen de liberal. Unió lo que la gente esperaba —que fuera conservador—, con una gran votación —la que tradicionalmente se adjudica a lo liberal—. Así se manejó. Como conservador nacional: mitad del ejecutivo para el liberalismo, mitad para el conservatismo, sin distinción de tendencias. Belisario era el típico conservador con concepción social.

Belisario, Gómez Hurtado y Pastrana: Jefes conservadores de tres partidos distintos.

gido en su provincia, en listas uninominales la mayoría, con un aprovechamiento máximo de los residuos y pocos cocientes —los que se reservaban para los grandes varones—. La elección de presidente era una suma de parcialidades regionales. La actividad parlamentaria —segura por cuatro años y con suplencias para dividir entre ellos y los principales el tiempo de curul y los gastos de la campaña— se distorsionó por el cabildeo con el ejecutivo, las pugnas internas para conseguir puestos y prebendas y el perfil del congresista como abogado de su región ante el poder central.

Ideológicamente el gobierno Turbay fue lo menos liberal que quepa imaginar. Pero, por lo menos, identificó a las guerrillas como las enemigas del sistema. Lo que le trajo no pocos sinsabores por el lado de los derechos humanos y bastante aprecio del ejército que trabajó sin la usual queja de no merecer el favor político del gobierno.

Belisario

Belisario era un conservador con imagen de liberal. Unió lo que la gente esperaba —que fuera conservador—, con una gran votación —la que tradicionalmente se adjudica a lo liberal—. Así se manejó. Como conservador nacional: mitad del ejecutivo para el liberalismo, mitad para el conservatismo, sin distinción de tendencias. Belisario era el típico conservador con concepción social. Le preocupaba la paz, la justicia, la pobreza, la vivienda, la educación, la economía. Su enfoque: la Doctrina Social Católica, que los moderados creían socialismo. Su política: convivencia, desarrollo, equidad. Buscó soluciones políticas para las guerrillas, reenfocar las relaciones internacionales en el espíritu del conservatismo nacionalista concatenando lo interno con lo externo, la normalización económica, la descentralización según la norma del 86 —centralización política y descentralización administrativa— con medidas fiscales y la elección de alcaldes.

El Palacio de Justicia, la tragedia de Armero y el incumplimiento guerrillero amargaron el final del período. Pero nadie podía llamarse a engaño. Belisario encarnaba el conservatismo desde su programa de 1848: el orden constitucional contra la dictadura, la legalidad contra las vías de hecho, la moral del cristianismo contra la inmoralidad, la libertad racional contra la opresión, la igualdad legal contra el privilegio, la tolerancia contra el exclusivismo y la persecución, la propiedad contra el robo y la usurpación, la seguridad contra la arbitrariedad, la civilización contra la barbarie. Las aguas se habían desbordado: se eligió un conservador que gobernaba liberalmente.

"La sabiduría popular ha afirmado, con razón en los últimos tiempos, que Colombia es un país conservador que vota liberal. Los colombianos, en general, se ruborizan al ser denominados como conservadores, cuando ese sentimiento ya no existe en los países más desarrollados del mundo, en los cuales ningún neoliberal en economía y neoconservador en política siente vergüenza de aplicar la fórmula".

Barco

Para volver el caudal a su cauce el liberalismo unido eligió a Barco. Nunca hubo tanto voto liberal para un gobierno más conservador en el sentido peyorativo del término. El social conservatismo optó por la oposición ante las reiteradas declaraciones de Barco de generar un gobierno de partido hegemónico, con la pretensión de una Segunda República Liberal. Como el sistema imperante era todavía el de las instituciones del Frente Nacional, sin ninguna posibilidad para la oposición, el conservatismo no pudo llevarla adelante. Además, lo dividió. No había manera de oponerse eficazmente. Ni a los nombramientos, ni a la permanencia de funcionarios, ni a la violencia, ni a la guerra, ni a la política internacional, ni a las propuestas de ley. Minoritario, desorganizado, dividido, sin poder burocrático, sin disciplina parlamentaria, el conservatismo pasó por el desierto todo el cuatrienio.

La crisis total en que dejó al país el gobierno Barco por la hegemonía política, la incapacidad de reforma dentro del sistema, la guerra del narcotráfico, la violencia de todos los signos, la gestión económica y los magnicidios, dejaron al país nacional exhausto y al país político desgastado y desacreditado.

Las elecciones parlamentarias de 1990 traslucieron un conservatismo en decadencia electoral. Las presidenciales, un repunte por el sector alvarista y un descenso por el pastranista. Las de Constituyente, un fuerte bloque de conservadores de todas las tendencias, pero no unidos e identificados; de brillante desempeño en la Asamblea y con la posibilidad de volver a medirse al año de la elección parlamentaria en una justa inesperada y en un momento de debilidad del liberalismo.

Deducciones

De este pequeño recuento se concluye: primero, la porción ideológica de los partidos es sumamente reducida, intercambiable y deleznable electoralmente. Segundo, los partidos se adaptan a la ley y al juego político imperante, sin depender de una estructura interna. Tercero, los partidos son "caudillistas", compuestos de facciones relacionadas con sus jefes nacionales, lo que se transparenta a nivel regional y local, siendo mayor en el conservatismo que en el liberalismo. Cuarto, los organismos de decisión señalados en los Estatutos, para el caso, del conservatismo, no fungen sino para determinar el candidato presidencial; por la división, ni siquiera se han llenado las plazas de algunas épocas; en otras, solo representan un sector del "partido". Se finaliza por no saber si existe "un partido" o son varios. Al terminar la Constituyente, las vertientes organizadas (o los partidos, o movimientos) son: el Social-Conservatismo de Pastrana, el Movimiento de Salvación Nacional de Gómez y los grupos de Lloreda y Juan Gómez; dos con influjo nacional, dos con estructura regional. Quinto, el conservatismo, de cualquier tendencia, no tiene poder burocrático; la poda de Barco —apenas subsanada con tres ministerios por Gaviria— fue total y sin recuperación a corto plazo. Sexto, Belisario, la otra gran figura de la tripleta conservadora con Pastrana y Gómez, no puede ser reelegido, ni posee organización electoral, pero mantiene vigencia a través de sus exministros, escritos y concepción social.

El futuro

Las nuevas reglas del juego político harán que el conservatismo se adapte a ellas. Le favorecen. Las dos vueltas y la vicepresidencia, hacen que no se requiera la unión para subir al poder; basta con coaliciones. Si ha sido capaz de participar en el poder en el Frente y el Post-Frente, con la excepción del cuatrienio Barco, siendo minoría electoral,

Las nuevas reglas del juego político harán que el conservatismo se adapte a ellas. Le favorecen. Las dos vueltas y la vicepresidencia, hacen que no se requiera la unión para subir al poder; basta con coaliciones. Si ha sido capaz de participar en el poder en el Frente y el Post-Frente, con la excepción del cuatrienio Barco, siendo minoría electoral, probablemente logre como minoría decisiva alianzas que lo conduzcan al gobierno. La doble vuelta lo hace casi socio obligado de cualquier fórmula ganadora, no estando necesariamente unido. La división puede ser creadora de poder.

probablemente logre como minoría decisiva alianzas que lo conduzcan al gobierno. La doble vuelta lo hace casi socio obligado de cualquier fórmula ganadora, no estando necesariamente unido. La división puede ser creadora de poder.

La circunscripción nacional para Senado fomenta la división. Es más eficiente en términos de ganancia electoral presentar diversas listas: una pastranista, otra del MSN, varias departamentales e intrarregionales, que una del conservatismo unido a nivel nacional. La unión se dará en las departamentales y regionales como una necesidad electoral. Las listas de Cámara reflejarán la unión de los electores y el apoyo a quien tenga mejor votación, independientemente del sector alvarista o pastranista, y en relación con la elección de Senado. Los conservadores tendrán problema para la movilización nacional y la urbana, como todos los otros partidos o movimientos. La rural seguirá siendo, en esencia, semejante al pasado. Las listas de Senado dependerán no tanto de la adhesión partidista, cuanto de los equipos que persigan el voto. El conservatismo tiene cuadros conocidos y no desacreditados para impulsar a la lid. La aceptación en listas conservadoras, de liberales —como con tanto éxito lo ensayó el MSN— indica que los movimientos pluripartidistas pueden obtener notables logros, repitiendo lo "nacional" de Betancur.

La elección de gobernadores es difícil para el conservatismo porque el liberalismo conserva incólume la totalidad de la maquinaria. Las alianzas son el camino expedito. Las alcaldías se clasifican en tres estratos: grandes ciudades, donde cada vez es más importante el nombre, por encima de lo partidista; ciudades intermedias, con dificultades para el conservatismo por su relativa implantación urbana y pequeñas ciudades, en las cuales se sigue el esquema electoral tradicional, con buen arrastre conservador.

La moción de censura, las atribuciones al legislativo y las inhabilidades e incompatibilidades, le abren a los sectores conservadores el horizonte de la oposición real, al quedar sin vigencia las normas frentenacionalistas. La universalización del tarjetón, la financiación de las campañas y el acceso a los medios de comunicación oficiales, le abren el camino a mayores facilidades electorales y a una competencia más limpia y fluida. A nivel local, los plebiscitos y las elecciones de juntas administradoras, lo obligan dinamizar la acción municipal. La prohibición de reelección presidencial agiliza los procesos de recambio y la competencia por la primera magistratura, obligando a los partidos a consultas internas o primarias, a mecanismos de selección y a coaliciones, desconocidas hasta ahora en el conservatismo. Se va a pasar del sencillo juego de parqués al complicado —pero lleno de apasionantes perspectivas— juego de bridge. El conservatismo no tendrá protección constitucional para subirse al poder, pero lo que consiga contará para abordarlo. Ya no estará supeditado a la interpretación presidencial de lo equitativo. Y, sobre todo, permanecerá libre para competirle al liberalismo en el discurso y la práctica conservadora. De pronto, hasta el nuevo país empieza a votar conservador para que lo gobiernen libremente y a los ciudadanos les pase la pena de confesarse en las urnas neoliberales en economía y neoconservadores en política. Esa es la misión del conservatismo colombiano para ingresar en la modernidad. Para ello hay que organizarse, ahora que las leyes van a permitirlo. Lo fundamental sigue estando ahí, en el programa de 1848. El resto viene por añadidura ●

Bernardo Gutiérrez
Ex-Comandante del Ejército Popular de Liberación (E.P.L.). Candidato al Senado por la Alianza Democrática M-19

La guerrilla del siglo XX

Bernardo Gutiérrez

El E.P.L. entregó sus armas en Labores (Antioquia) y se transformó en el Movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Un adiós a las armas y un entrar en la política de largo aliento.

Hace poco, durante una conversación en la que estaba presente un ciudadano europeo inquieto, como muchos habitantes del viejo continente, por las raíces y las causas de la violencia en nuestro país, nos preguntaba si tal vez no sería un problema de idiosincrasia nacional. Uno de los presentes, un poco alterado, lo remitió a que leyera el discurso de García Márquez con ocasión de recibimiento del premio Nobel, en Estocolmo. Particularmente ese trozo que dice:

..."Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos.

La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la

Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Si recordara que Londres necesitó 300 años para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en la historia, y que aún en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. Aún en el apogeo del Renacimiento, 12 mil lasquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma, y pasaron a cuchillo a ocho mil de sus habitantes". (Gabriel García Márquez "La Soledad de América Latina").

No debe servirnos de consuelo, pero si a eso agregamos todos los Atilas, las noches de San Bartolomé, el aniquilamiento de los indígenas norteamericanos por los blancos civilizados, la esclavitud bendecida por los más venerables. Padres, las guerras de 100 años, las guerras mundiales, los hornos crematorios, los Gulags, la Inquisición, no podemos evidentemente sentirnos solos en el esquema general de violencia y barbarie que ha signado a la humanidad en su largo acoplamiento. La especie humana es depositaria única entre todas las especies de la facultad para exteriorizar sus sentimientos con la risa, pero también es, desgraciadamente, depositaria única de la capacidad de matar a sus semejantes sin necesidad. Lo que nos salva en últimas del fatalismo, es que la humanidad en su viaje pendular se detiene más en el polo de la vida, más en el polo del amor, más, como dice también García Márquez, en la construcción de la utopía de la vida.

La violencia como instrumento político

En el terreno político, es decir en el terreno en donde los hombres disputan el predominio y el poder, es en donde la violencia encuentra su máxima expresión, y en donde incluso ha encontrado espacios de legitimación. "La guerra es la continuación de la política por otros medios", nos acordamos todos de Clausewitz. Y también constatamos que las legislaciones de los estados tienen en su base la referencia permanente a las relaciones de fuerza, a los equilibrios de poder, a las consideraciones estratégicas y tácticas desde el punto de vista militar.

En la abundante literatura sobre las confrontaciones, los hombres han pasado por todo el espectro que va desde el guerrerismo puro, "la guerra justa" y la "guerra obligada", hasta las consideraciones de verdad pacifistas, como las de Ghandi. El polo del amor nos convoca inmediatamente a situarnos de manera espontánea en el ideal Ghandiano. Pero también por amor se mata y se hilvanan discursos sobre la vida.

Las gentes que se dedican al arte y ciencia de la política están, por definición, sujetas a la oscilación del péndulo y la parte medular del asunto tiene que ver esencialmente con la capacidad interpretativa del ancho campo que se denomina "las condiciones históricas". Por eso, en la política es difícil que alguien se pueda lavar las manos o pueda decir "de esta agua no beberé" o "de esta agua no he bebido".

A Bernardo Gutiérrez la política empezó a sonreírle desde el momento en que decidió dejar atras 15 ó más años de lucha guerrillera.

Particularmente esto es cierto en las condiciones políticas colombianas, donde es difícil encontrar un partido que no hunda su historia en enfrentamientos violentos, o en la teorización de la guerra, o en la utilización presente de lenguajes convocantes, o por lo menos amenazantes, cuando consideran que sus postulados sufren mengua.

Por eso resulta de pronto maniqueo plantear los debates entre los "amantes de la guerra" y entre "pacifistas", por lo menos en la Colombia de las actuales circunstancias. Lo que se debe abrir paso es una reflexión profunda que nos lleve a examinar el momento presente, las perspectivas futuras y a encontrar un camino para la reformulación de una nueva cultura política en la que todos los colombianos podamos encontrar espacios

abiertos y civilistas para la confrontación de nuestros diversos proyectos estatales. Y en esto tienen que ver no solamente quienes han sido o hemos sido actores contemporáneos de la guerra, sino todos aquellos que de una u otra forma culturizaron a los colombianos en el pasado de un modo violento e irregular para hacer la política.

Un pasado de violencia y guerrillas

Las últimas batallas formales, con ejércitos haciendo guerra de posiciones, fueron las de Peralonso y Palonegro en la guerra de los Mil Días. En la primera, triunfaron los liberales dando un aliciente a su plan de "Restauración", y en la segunda los conservadores se impusieron de una manera definitiva, dejando a los liberales en el andariego campo de la guerrilla.

Para esa época, según afirma Carlos Eduardo Jaramillo, los grandes jefes, tanto liberales como conservadores, veían con desprecio la forma guerrillera, porque no se acomodaba a cierta visión "caballeresca" de la guerra. La emboscada, el asalto nocturno, el factor sorpresa seguramente eran temas tratados por los señores y generales de ambos partidos en las tertulias, con el desprecio correspondiente para la gente de baja condición. Sin embargo, es posible que sólo la acción de esas *326* guerrillas, enumeradas por Jaramillo (1), regadas por todo el país y con su combinación de actos sublimes de heroísmos y salvajadas de la peor barbarie, hayan hecho posible una capitulación más o menos honrosa para los grandes jefes liberales, Uribe Uribe primero en Neerlandia y Vargas Santos con sus delegados, después en el Wisconsin.

Por supuesto que las guerrillas no fueron patrimonio exclusivo de la gente "de baja condición", ni tampoco del partido liberal, ni comenzaron en la guerra de los Mil Días. En guerras del siglo pasado, tarde o temprano se echaba mano de los irregulares, y en la guerra del *1876* los señoritos bogotanos conservadores se divirtieron haciendo la guerrilla de los Mochuelos, por la Sabana de Bogotá. Pero sí es posible afirmar que fue en ese conflicto del cambio de siglo donde la proliferación de un estilo irregular de la guerra y de defensa sentó las bases de una manera muy colombiana para ejercer las confrontaciones políticas y animó el espíritu de una tradición, de la que recurrentemente se volvería a echar mano en el futuro.

Lo que se llama la "tradición guerrillera del pueblo colombiano" no es un invento justificativo de los guerrilleros contemporáneos. Es que la amplitud del radio de acción, por ejemplo en la guerra de los Mil Días, impactó no solamente a esa generación, sino a las posteriores, con el agravante de que las causas por las que eran llevados a pelear,

Por supuesto que las guerrillas no fueron patrimonio exclusivo de la gente "de baja condición", ni tampoco del partido liberal, ni comenzaron en la guerra de los Mil Días. En guerras del siglo pasado, tarde o temprano se echaba mano de los irregulares, y en la guerra del *1876* los señoritos bogotanos conservadores se divirtieron haciendo la guerrilla de los Mochuelos, por la Sabana de Bogotá.

principalmente los campesinos, quedaron casi siempre sin resolución. Eso sin contar el efecto multiplicador hacia adelante de las cadenas de venganzas generadas en guerras alejadas casi siempre del Derecho de Gentes. Mucha de esta herencia fue el combustible fácil que posibilitó el renacimiento, en los años posteriores, de los que se llamó la Violencia, con Mayúsculas, que, sin ponerse de acuerdo los historiadores, puede decirse que arranca con las matanzas hechas por liberales en pueblos de Santander y Boyacá sobre conservadores, en los años 30 y 35; a algunos de esos desplazados conservadores los encontraremos a finales de los años 40 y principios de los 50 como agentes activos de la violencia, esta vez contra los liberales, en muchas regiones del país, o, como lo anota específicamente Carlos Ortiz Sarmiento, en la región del Quindío (Carlos Ortiz Sarmiento, "Estado y Subversión en Colombia"— Cerec 1985).

A su vez, muchos de los participantes en las guerrillas de la violencia, derivaron ya fuera en las bandas de los años 60, o fueron los más politizados, iniciadores de la guerrilla contemporánea, como el caso de los fundadores de las FARC con Pedro Antonio Marín o de Julio Guerra, en el caso del E.P.L.

Se nos reconoce a los colombianos una gran capacidad para pasar de la guerra a la paz y también para lo contrario. Para andar en el péndulo del amor y el odio con sorprendente rapidez, para ejercer recurrentemente el perdón y el olvido. Los colombianos nos vamos a la guerra con facilidad, nos enmontamos por cualquier vertiente, nos matamos a lo bárbaro, pero también nos sentamos a dialogar y a negociar, elaboramos agendas, firmamos acuerdos. Podemos ser apóstoles de la guerra o apóstoles de la paz.

Toda esta capacidad, a nuestro modo de ver, corresponde a los actores circunstanciales, a quienes están en la coyuntura como factores en conflicto. Con ellos anda el perdón.

Pero a las generaciones, a los grupos humanos más largos, a las décadas, el olvido les pesa mucho más, como un fardo que denota insistentemente su presencia. En este siglo los enfrentamientos, llámense violencia, o guerrillas, o paramilitares, o guardias cívicas, o autodefensas, se han ido enlazando unos con otros en una cadena interminable, cuya base, además de todos los factores de orden político, económico y social, es la dificultad para desbarrancar el olvido y ha creado una cultura de violentización de la política, de la cual han sido protagonistas de primer orden nuestros mayores, es decir el partido liberal y el partido conservador.

Con el 9 de Abril, la violencia partidista alcanzó niveles insospechados y desbordó la orientación política liberal-conservadora.

Particularmente este fenómeno tuvo su máximo momento en la etapa llamada de la Violencia años 40 y 50, donde todos los marcos saltaron en el desbocamiento del ejercicio de la muerte indiscriminada, tanto de los que estaban en el poder, como de quienes estaban fuera de él. Curas y gamonales, jefes de partido y jefes militares y de guerrilla emularon en llevar a los extremos el salvajismo teñido de colores políticos. La Iglesia católica, considerada el factor moral principal en el país, coadyuvó en el ánimo belicista de una manera predominante, tanto más porque su voz se confundía con las enseñanzas supraterrenales. En la guerra de los Mil Días el obispo Ezequiel Moreno, hoy elevado a la categoría de Beato, convocaba a los católicos conservadores por medio de una pastoral, así: "...De este gusto a la verdad católica y a la aversión al error funesto del liberalismo, nace ese grito hermoso de nuestros buenos católicos ¡vamos a defender la religión! Sí, valientes soldados de Cristo; guerra a la religión es la actual guerra, y vosotros quereis pelear las batallas del Señor". (Citado por Carlos Eduardo Jaramillo. "Los guerrilleros del 900").

Después del 9 de abril, en la Violencia el paladín para bendecir la barbarie fue otro obispo, el de Santa Rosa de Osos, alumno del Beato Moreno, Monseñor Builes, quien

según Jaime Sanín, uno de sus biógrafos, recuerda que todo lo hacía para ganar la santidad. "El remedio es la aplicación de una justicia inexorable no a la cola de la subversión sino a la cabeza, porque es más culpable la cabeza que la cola de esa venenosa serpiente. A los de arriba primero y con la energía que reclama la subversión en marcha" (citado por Pécaut "Orden y Violencia" Colombia 1930-1954).

Peor aún que el compromiso escudado de las élites colombianas en esa época, es su aparente irracionalidad en los propósitos. Los objetivos de lucha casi nunca planteados de una manera franca y coherente condujeron sin embargo a cifras mayores de los 200.000 muertos. El despropósito de la irracionalidad ha hecho que los dirigentes de los partidos tradicionales insistan en tender un manto pudoroso de olvido sobre esos acontecimientos.

Dice Pécaut: "No es casual que en las décadas siguientes la violencia no haya sido invocada de ningún modo como un mito de los orígenes, donde pudiera estar contenida en potencia la historia posterior. Ninguno de los participantes ha logrado instalarse en una posición desde la cual le sea posible mantenerse por fuera de sus efectos, y dar sentido al conjunto de los acontecimientos. Los vencedores se han cuidado de no hacer alarde de su éxito; los vencidos no han encontrado allí la promesa de una compensación. Las generaciones posteriores no han descubierto en ella un momento de creación de una nueva representación de lo político, y no han buscado apropiarse, por un proceso de identificación, la figura de uno u otro de los protagonistas. Las revoluciones y contrarrevoluciones están dominadas por la ilusión de la ruptura. La violencia no pertenece a ninguna de las dos categorías. Está inscrita toda entera en la continuidad" (Daniel Pécaut, "Orden y Violencia" Volumen II Cerec. Siglo XXI, 1987).

Agregaríamos que apenas algunos faldones de vergüenza aparecen de vez en cuando en el lenguaje de los dirigentes tradicionales, trasluciendo referencias a su estilo de guerra en la violencia. Cuando se discutía el proyecto de amnistía en 1984, los dirigentes recalcaban particularmente que no debería otorgarsele ésta a quienes hubiesen cometido asesinatos atroces (corte de franela, etc.) o hubiesen envenenado las fuentes de agua, prácticas comunes de sus correligionarios en el inmediato pasado y que, la verdad, nada tenían que ver con las características de la guerrilla contemporánea, violenta también, pero en otros usos.

La guerrilla contemporánea

Los nombres FARC, EPL, ELN, M-19, Quintín Lame, PRT configuran el universo de lo que podemos llamar la guerrilla contemporánea.

Comportan sustanciales diferencias con las guerrillas y procesos pasados, pero antes de enumerar algunas de ellas reafirmamos que hacen parte de un lazo de continuidad muy sumergido en la historia nacional, al cual hemos hecho referencia en los párrafos anteriores. De hecho es el caso de las FARC, que antes de adoptar esa denominación tuvieron una influencia que la hizo diferenciarse de los guerrilleros liberales, los limpios y comunes en el Tolima, y que si vamos más atrás los encontramos en muchas de las luchas agrarias desde la década del 30.

En la Fundación del EPL participaron hombres como Julio Guerra, veterano de las guerrillas liberales, y al ELN entraron desde un principio gentes que estaban relacionadas, incluso con sus armas enterradas, con la época de Rangel, el guerrillero santandereano.

Como en el proceso anterior, las guerrillas ocupan un ámbito predominantemente rural y esa concepción no cambia en lo fundamental, aunque el país avance aceleradamente hacia la urbanización.

¿Cuáles serían las diferencias sustanciales?

1. La concepción de los objetivos. Evidentemente los comunistas que trabajaron las zonas agrarias y dirigieron la resistencia, principalmente en el Tolima, tenían de por sí una concepción mucho más larga de los objetivos, que les daba una claridad en torno al problema del poder.

En todas las guerras y violencias anteriores los protagonistas eran partidos que de una u otra forma habían estado o estaban en el gobierno. La bandera mayor que daba alguna luz a los combatientes era la restauración de un poder perdido, algo muy claro para los jefes, pero poco accesible para el hombre del pueblo.

La guerrilla contemporánea cambia la visión de compartimientos verticales en la sociedad y se enruta por un modelo horizontal, de lucha de clases, con un perfil ideológico

3. El "trabajo político". La lucha guerrillera, con un trasfondo de un nuevo modelo de sociedad, supone además de la acción propiamente militar, un llamado trabajo político en las zonas y bases sobre las que actúa. Esto es una diferencia sustancial con el modelo anterior, cuyo mayor aliciente era, en términos generales, el sectarismo.

Unas más otras menos, las guerrillas colombianas han desarrollado una paciente labor de organización y politización, ya sea por medio de estructuras partidarias, o basándose en las propias formaciones guerrilleras, o recurriendo al fortalecimiento de organizaciones de la base popular.

El Editor no pudo identificar al Comandante de la columna del EPL.

Las siglas FARC, EPL, ELN, M-19, PRT configuran el universo de lo que se ha denominado la guerrilla contemporánea.

La guerrilla contemporánea cambia la visión de compartimientos verticales en la sociedad y se enruta por un modelo horizontal, de lucha de clases, con un perfil ideológico mucho más preciso. De alguna manera se despolitiza en términos tradicionales y se ideologiza en términos marxistas.

mucho más preciso. De alguna manera se despolitiza en términos tradicionales y se ideologiza en términos marxistas. Algo de este proceso se dio también de manera balbuciente en algunas guerrillas liberales del llano y en algunos de sus jefes, como Guadalupe Salcedo, que empezaron a mirar con desconfianza las "razones" enviadas por el cómodo Directorio Liberal en Bogotá y comenzaron a mirar el país como un edificio "donde el pueblo vive en los pisos inferiores y los ricos en los pisos superiores". La relación liberales vs conservadores se cambió por guerrilla vs establecimiento.

2. La influencia de los modelos externos. Yenán en China, la Sierra Maestra en Cuba, Tito en Yugoslavia fueron espejos que lograron diferenciar hacia adelante las concepciones, los objetivos y también, por supuesto, la misma táctica guerrillera. Particularmente importante fue el triunfo de la Revolución Cubana, la que aireó las esperanzas de muchos hombres y mujeres que, no sólo en Colombia sino en el continente, enrumbaron hacia la lucha guerrillera.

Pero también estas experiencias llevaron a que la forma guerrillera elevara su *status*, adquiriendo cuerpo propio. Nadie volvió a hablar de guerra de posiciones, de ejércitos, de movimientos. En nuestra visión subdesarrollada, guerrilla es igual a ejército, y una emboscada se equipara a una batalla.

3. El "trabajo político". La lucha guerrillera, con un trasfondo de un nuevo modelo de sociedad, supone además de la acción propiamente militar, un llamado trabajo político en las zonas y bases sobre las que actúa. Esto es una diferencia sustancial con el modelo anterior, cuyo mayor aliciente era, en términos generales, el sectarismo.

Unas más otras menos, las guerrillas colombianas han desarrollado una paciente labor de organización y politización, ya sea por medio de estructuras partidarias, o basándose en las propias formaciones guerrilleras, o recurriendo al fortalecimiento de organizaciones de la base popular.

La estrategia de acumulación de fuerzas necesita obviamente este tipo de acción y solamente el M-19 fue más allá, al utilizar la táctica guerrillera como un método de apelación al país, más allá de las zonas geográficas de influencia, por medio de los hechos políticos. Con el M-19, se puede decir que, de alguna forma triunfó una utilización eficaz de la llamada "propaganda armada".

Guerrilla y situación presente

El objetivo central y expreso de la guerrilla contemporánea ha sido la toma del poder para o por el pueblo, para instaurar un nuevo orden social, sobre la base de una estrategia, en lo general, de acumulación de fuerzas, que permitiera por lo menos dos opciones de desenlace: o una insurrección generalizada o el arranque definitivo de una

guerra civil con el deslinde de importantes sectores del otro campo.

A partir de ese presupuesto, ejercitado en algunos casos por más de 30 años, es que se precisa realizar la evaluación, sumándole además las condiciones de un país y un mundo que evidentemente debe haber cambiado, y las situaciones políticas nuevas generadas, entre otras cosas, por el mismo enfrentamiento irregular.

Visto desde el punto de vista militar y político, el objetivo guerrillero, ya no sólo frente a la toma del poder, sino frente a la estrategia misma para provocar o la insurrección o la guerra civil (porque la llamada Guerra Popular Prolongada, también debe conducir a alguna parte, a una ruptura generalizada de hostilidades), se encuentra muy lejos de sus alcances. Militarmente debe aceptarse entonces la fórmula elegante que utilizan los politólogos sobre la vigencia del "empate negativo". Es decir, la imposibilidad de una victoria total de uno de los bandos, pero con el poder fundamental ejercido por uno de ellos, en este caso el gobierno. Que la guerrilla sea evidentemente un factor de peso para influir en un buen margen de desestabilización no conduce necesariamente a fijar un punto clave que aumente su capacidad estratégica. Las acciones desestabilizadoras actúan de momento y, una vez resueltas, la "normalidad" sigue su curso si previamente no hay una función política que pueda multiplicar los frutos; al contrario, puede generar efectos opuestos. Es lo que ha sucedido a los sectores de extrema derecha con sus asesinatos desestabilizadores. Se acusa el recibo del dolor, se forma el sentimiento en explosión de ira, pero la vida sigue porque la tendencia es irreversible.

La guerrilla contemporánea fue incapaz de incidir políticamente con un criterio nacional, y se quedó en los marcos localistas de sus áreas inmediatas de influencia. Los vasos comunicantes para llegar al centro de la vida ciudadana fueron ocluidos muchas veces por la misma función guerrillera. Las célebres "líneas de masas" se vieron siempre en el alcance limitado y literal de la palabra "línea" (donde el "cuadro" puede llegar, ver y palpar) y no en el amplio campo de la Política, con mayúscula, con la cual se le llega a millones, si se interpreta correctamente su sentir.

El estancamiento militar está necesariamente ligado con el estancamiento político, es decir la cerrazón de la aceptación ciudadana a la estrategia de enfrentamiento planteada.

La guerrilla contemporánea fue incapaz de incidir políticamente con un criterio nacional, y se quedó en los marcos localistas de sus áreas inmediatas de influencia. Los vasos comunicantes para llegar al centro de la vida ciudadana fueron ocluidos muchas veces por la misma función guerrillera. Las célebres "líneas de masas" se vieron siempre en el alcance limitado y literal de la palabra "línea" (donde el "cuadro" puede llegar, ver y palpar) y no en el amplio campo de la Política, con mayúscula, con la cual se le llega a millones, si se interpreta correctamente su sentir.

Así pues, se llegó al momento en el que muchos tienen razón al señalar que la guerrilla y los guerrilleros iban por un lado y el país iba por otro, y el otro no es necesariamente el de los sectores tradicionales exclusivamente.

La virtud de las guerrillas que han dado el paso de la paz y la desmovilización estriba en esa valoración política. Decidieron finalmente revertir los acumulados militares y políticos locales, cambiándolos por un ensanche nacional, en una visión política universal, más indeterminada, pero, por lo tanto, dentro de la paradoja política, más real. Por eso el M 19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame pueden hoy decir que la paz es rentable en la Colombia presente.

El país de hoy no es el mismo que había en el inicio de varios grupos guerrilleros, contemporáneos. De ese país rural del inicio de la década del 60 queda muy poco. Los porcentajes de población del campo a la ciudad variaron 180 grados en estos 30 años y, sin embargo, mucha guerrilla sigue teniendo un criterio no solamente rural sino agrario, e incluso de colonización.

En el centro de la urbanización se ampliaron los cordones de miseria, pobreza y marginalidad, pero también se vio el ensanche de unos sectores medios, que han ampliado la base social de los determinantes políticos. Ya no es tan cierto que las decisiones principales se puedan tomar en las tertulias bogotanas de los "señores", como en la guerra de los Mil Días, o en los cafetines de las universidades, por los revolucionarios iluminados, sin tener en cuenta ese "animal de muchos ojos" que se llama la opinión pública, la cual día a día pide participación en las decisiones y se rebota cuando se toman inconsultamente. En los inicios de los 60 apenas se iniciaba la revolución del transistor, y se hacían mingas para ver televisión en blanco y negro donde el vecino propietario afortunado. Hoy las antenas televisivas pululan en cualquier barrio de invasión, y ya las parabólicas reducen aún más la "aldea global" con su carga de información sobre el mundo.

La década del 60 fue la época de la revolución cubana, de la descolonización de Africa, de la avidez para leer a Fanon, a Debray, al Che y su epopeya del Quijote andante y revolucionario. De una u otra manera todos perseguimos un ideal basado en el modelo propuesto por la revolución Rusa de 1917 y aceitado posteriormente con lo que se llamó

A Rafael González gran ausente de esta foto (El Editor)

La guerrilla iba por un lado y el país por otro. La virtud de las guerrillas que han dado el paso de la paz estriba en este reconocimiento político. Por eso el M-19, el EPL y el PRT pueden hoy decir que la paz es rentable en la Colombia presente.

el modelo del socialismo real, con una u otra variante, llámese china, cubana, albanesa, trotskista, etc.

Hoy el muro se derrumbó y con él todo el modelo a los ojos del mundo, de la mano de Gorbachov y Yeltsin, sin ningún atenuante; obligados a regresar para buscar las raíces nacionales, probablemente ya sin modelos, con mucha imaginación y al tenor de las aspiraciones sentidas verdaderamente por la población como la democracia, la paz y la justicia social.

Que en el país están sucediendo nuevas cosas en lo político es algo que nadie puede negar. Un proceso de apertura política, un reordenamiento institucional a partir de la Asamblea Constituyente, unos signos para avanzar de la democracia representativa y restringida a una democracia más participativa, el quiebre por fin de alguna manera significativa del bipartidismo tradicional, y los vientos que soplan para la renovación de la política. Sin pretender señalar que será fácil, podemos afirmar que avanzamos en medio de tensiones hacia el posible ensamble de un nuevo pacto político, ya no limitado a la repartija burocrática, como en el Frente Nacional, sino a los grandes ejes de la vida moderna y su transcurrir democrático y tolerante en la confrontación de las ideas.

Muchas de las posibilidades actuales son la resultante de la sumatoria de todos los eventos sucedidos en la vida nacional durante los 30 años largos transcurridos desde el Frente Nacional, y en los cuales evidentemente tiene mucho que ver la guerrilla, aunque su aspiración expresa no haya sido necesariamente, como objetivo último, lo que ahora estamos construyendo. Desde el punto de vista guerrillero y su capacidad en el área de la guerra la resultante es buena. Desde el punto de vista de los sectores tradicionales, también debe ser vista así, porque su alternativa era, y es, o ceder una parte de su hegemonía o por lo menos no poder dormir tranquilos.

Así las cosas, el país avanza por un camino de reconversión democrática, en el cual no habrá campo para la legitimidad de la violencia política, desde ningún lado, ya sea de la izquierda o de la derecha. La intolerancia de los privilegiados no puede continuar y en la izquierda debemos razonar que, si los europeos tuvieron su "guerra de los 100 años", nosotros no podemos exponernos a tener la "guerrilla de los 100 años".

Hacia el siglo XXI con una nueva cultura política

Estamos convencidos de que los actuales factores y actores de violencia en el país (oficiales y no oficiales, guerrillas y paramili-

tares, ejércitos secretos y narcos, autodefensas y milicias) entrarán más temprano que tarde en la senda de la paz y en el cese de los enfrentamientos. Parece temerario manifestarlo así, y puede parecer una simple invocación moral en un país como el nuestro en la hora actual, todavía con muchas aristas visibles de fenómenos videntes.

Sin embargo, la tendencia general muestra un regreso del péndulo, hacia la reconciliación nacional, y lo que falta debe ser parte del tiempo y de la voluntad política necesaria.

Hay una deslegitimación del enfrentamiento armado y de la violencia en todas sus formas. La credibilidad para invocar el favor ciudadano está de lado de aquellos que se inclinen resueltamente por los hechos y por los procesos de paz. Lo contrario es simplemente ir en contravía de la nación y su resultante no puede ser sino un mayor aislamiento. Debemos continuar despolarizando la política nacional al mismo tiempo que la modernizamos, para forjar las bases de una nueva cultura política nacional, donde, abiertas las compuertas democráticas, puedan competir, en pie de igualdad y en un ambiente de tolerancia, los diferentes proyectos de organización social y manejo estatal.

Esta tarea, por supuesto, no atañe únicamente a las formaciones que vienen o vendrán de la guerrilla, ni a la izquierda, sino también, y de manera principal, a los sectores dirigentes y a los jefes y cuadros de los partidos tradicionales que están mucho más inmersos que el resto de compatriotas en la escuela de la intolerancia. Manifestar temor por la irrupción de nuevas fuerzas políticas, utilizar el lenguaje desmandado y agraviante en las campañas, o pretender que nada ha cambiado en la ampliación democrática, es manejar por debajo, una cultura de la intolerancia que es el paso inicial siempre para la ruptura del comportamiento civil en la política.

Creemos que la nueva izquierda surgida de este proceso de paz camina sobre estos postulados. Ahora falta que también los sectores que quieran agitar sus postulados de derecha lo hagan en el mismo ambiente. Una izquierda democrática y civilista, y una derecha civilizada y tolerante, es el marco general por el que puede transcurrir la política colombiana en los inicios del siglo XXI●

Estamos convencidos de que los actuales factores y actores de violencia en el país (oficiales y no oficiales, guerrillas y paramilitares, ejércitos secretos y narcos, autodefensas y milicias) entrarán más temprano que tarde en la senda de la paz y en el cese de los enfrentamientos.

educación y cultura

(Fotocopie y envíe el cupón)

Publicación trimestral al servicio del magisterio colombiano y el movimiento pedagógico.

Estoy interesado en la suscripción a la revista "EDUCACION Y CULTURA"

Fecha: _____

del número ☐ al número ☐

por 1 año ☐

por 2 años ☐

NOMBRE _____ CC _____

DIRECCION _____ CIUDAD _____

TELEFONO _____ APARTADO _____ DEPARTAMENTO _____

PROFESION _____ INSTITUCION _____ FIRMA _____

Consignación Cuenta Nacional DAVIVIENDA No. 0089-0065047-7 La Magdalena.

No. Consignación _____

Cárguese la suma de $ _____

A mi tarjeta de crédito:

CREDENCIAL ☐ BIC ☐ DINERS ☐ CREDIBANCO ☐

Tarjeta No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Fecha de Vencimiento

Mes	Año

Sólo para Diners

Del 1 a 12 ☐

Socio desde ☐

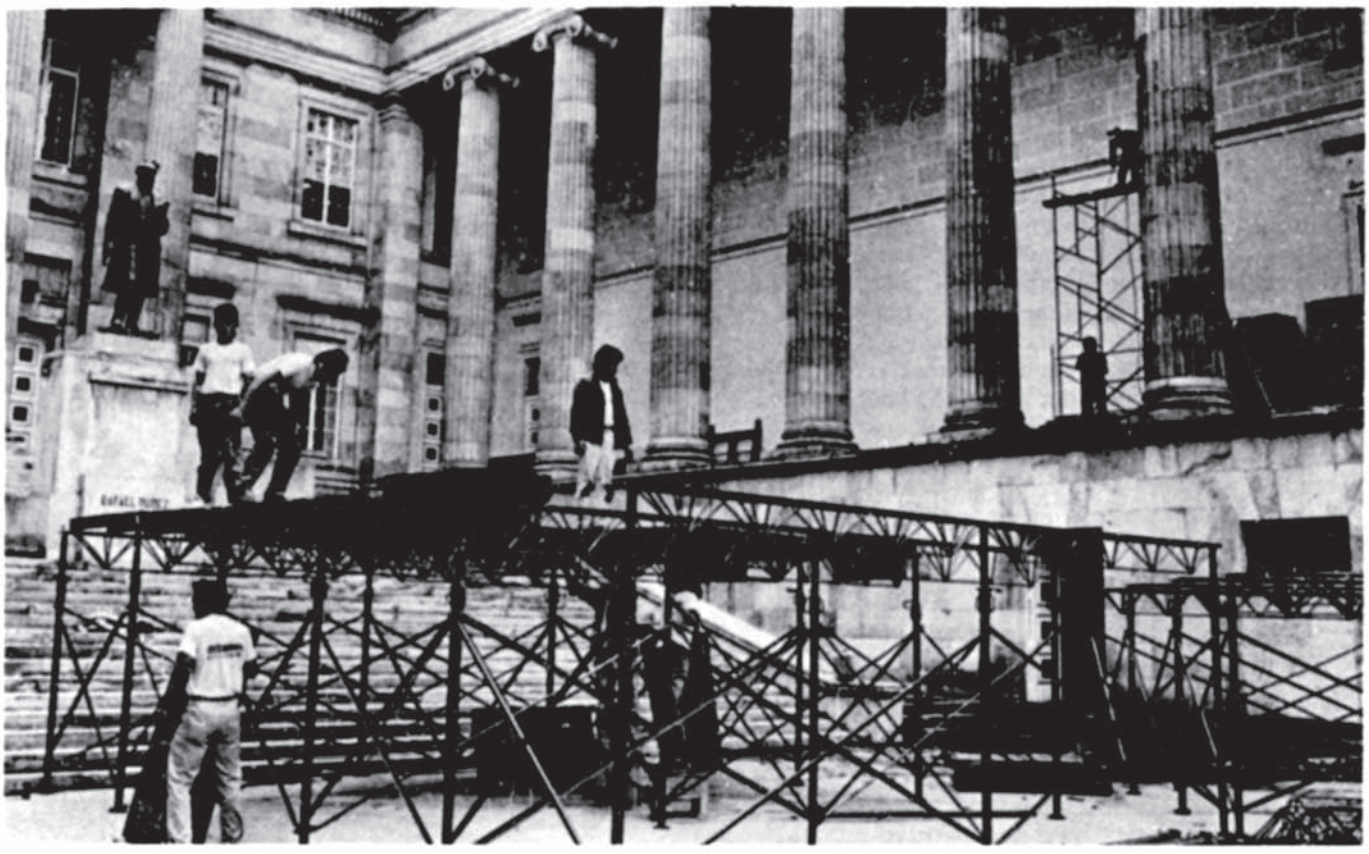
No. autorización ☐

Ricardo García Duarte
Abogado, Politólogo, Internacionalista.

El nuevo escenario político

Participación, Representación y Régimen de Partidos

Ricardo García D.



Nuevo escenario para una nueva representación y sentido de la política.

La Constitución de 1991 ha consagrado un conjunto de disposiciones que modifica el escenario propio de la competencia electoral. Reconocidas como necesarias, las unas apuntan a facilitar una expresión más "libre" del voto mientras las otras se orientan a la apertura de nuevos espacios para el ejercicio del poder electoral. Su puesta en práctica tendrá sin duda efectos tanto en la intensidad como en las modalidades de la *participación política*. La cual, al ganar en fluidez, puede afectar, como de hecho sucede ya, las formas de *representación*, y muy seguramente, el propio *régimen de partidos*. Los próximos eventos electorales serán, quién lo duda, las pruebas sucesivas para la consolidación de las formas nuevas de participación y de representación. Pero serán, al mismo tiempo, la configuración de una etapa *transicional* en la que estas últimas discurrirán hacia la cristalización de un nuevo sistema de partidos.

Los nuevos mecanismos institucionales y la participación política

Las nuevas disposiciones de orden electoral son numerosas.

Unas consagran garantías para la equidad en la competición electoral. Otras traen instituciones que representan aproximaciones a la participación directa de los ciudadanos como el Referéndum y el Plebiscito; las de más allá establecen mecanismos como el tarjetón, la doble vuelta o la circunscripción nacional que afectan el escrutinio; y hay en fin, las que someten nuevas instancias de la autoridad pública al origen electivo. Pero también las reformas a que fue sometido el Congreso, en especial el régimen de incompatibilidades y el de inhabilidades, tendrán consecuencias sobre la formación de nuevas orientaciones en el comportamiento electoral de los colombianos.

De todas ellas, interesa destacar, por lo pronto, las que siendo de aplicación inmediata han comenzado a remodelar las tendencias del electorado. Se trata en particular de aquellas que establecen mecanismos que modifican la forma en que el elector consigna su voto: el tarjetón, en primera instancia; y de aquellas que consagran la elección popular para nuevas autoridades estatales, como fue el caso primero de los alcaldes, y ahora de los gobernadores.

Si la elección de estos funcionarios abre nuevos espacios institucionales para el ejercicio del poder electoral, la introducción del tarjetón ha provocado una pequeña revolución política al cambiar la relación habitual en que se halla el elector con respecto a la organización de sus jefes políticos.

La elección de nuevas autoridades públicas a la vez que descentraliza su designación, la entrega directamente a la población, con lo que crece su participación política. Estas nuevas oportunidades para el ejercicio participativo implican una reproducción *extensiva* de los espacios en los cuales tiene incidencia el poder electoral, pero todavía en el interior del aparato institucional. No implican, en cambio, necesariamente una extensión del cuerpo electoral; el cual, con todo, puede desplegar con mayor *intensidad* su participación política, al apropiarse de nuevos momentos para designar a sus representantes en el Estado; o mejor, para convertir en representantes suyos a nuevas autoridades dentro del Estado. Si el efecto perverso de esta *intensidad* es eventualmente la fatiga electoral, en cambio, su sentido normal es la conquista de nuevas ocasiones para la *movilidad* del electorado, en razón de lo específico de estas dinámicas políticas de carácter regional. En ellas pueden aparecer liderazgos locales bien definidos, sin que obligatoriamente estén subordinados a las hegemonías políticas tradicionales; o en otros términos: aunque los candidatos populares a alcaldías o a gobernaciones aparezcan identificados con éstas últimas, reúnen condiciones que le permiten un margen de autonomía, no ya como candidatos sino como funcionarios. Precisamente por ser "populares" esto es, por ser *elegidos*, lo que evita que sean removidos antes del término de su período, mientras los hace más sensibles a los sentimientos de la colectividad a la que representan. Además, conduce a aflojar los rígidos controles de los grupos más tradicionales y clientelizados sobre la representación política en el nivel regional y local, al obligarlos a buscar

El tarjetón y el cubículo, con los cuales el votante gana mayor privacidad para el ejercicio del sufragio, han facilitado la emergencia de nuevas fuerzas políticas, favorecidas en principio por las inclinaciones de la opinión pública.

candidaturas de acento más consensual, de perfiles, por consiguiente, más moderados y "técnicos". De esta manera, surge una mayor fluidez en la circulación de candidaturas. Desde luego su control por las hegemonías de corte tradicional puede ejercerse por la vía del nepotismo eleccionario y del monopolio de cargos de representación. Sin embargo, los nuevos límites que impone el régimen de incompatibilidades, dificulta la concentración de la representación popular y en cambio, puede significar una mayor apertura de opciones. La cual, por cierto, tiene la probabilidad de corresponderse con movimientos de opinión local en torno de uno u otro candidato, que supere la simple suma de votos producto del encuadramiento que realizan los grupos clientelizados.

Lo anterior quiere decir que si de la elección de alcaldes y de gobernadores no puede decirse simplemente que acaben con el clientelismo, tampoco es lícito afirmar, como lo hacían hace unos años los opositores a la elección de alcaldes, que de ese modo lo único a conseguir era el reforzamiento del control político por parte de los "empresarios" electorales de carácter tradicional. La principal virtud de los nuevos procesos eleccionarios es la extensión de la frontera interna del aparato político para la competencia democrática. Pero además promueve el surgimiento de nuevos liderazgos y sirve indirectamente a la aparición de votos de opinión a su alrededor, precisamente, allí donde estos prosperan menos, esto es, en el nivel local.

El instrumento nuevo que, en cambio, incide directamente en la manifestación del voto de opinión, es el tarjetón. Aunque en su aplicación inicial, sus efectos han estado reforzados por el carácter extraordinario de la consulta electoral como fue el caso del 9 de diciembre, no es posible ocultar, por otra parte, su coincidencia con la irrupción de nuevos fenómenos electorales, sobre todo con el avance en la urnas del M-19.

En tal sentido, el tarjetón y el cubículo, con los cuales el votante gana mayor privacidad para el ejercicio del sufragio, han facilitado la emergencia de nuevas fuerzas políticas, favorecidas en principio por las inclinaciones de la opinión pública. Si antes la marcha del régimen electoral generaba un divorcio entre los candidatos o los grupos apoyados por la opinión y el control de las maquinarias partidistas, de modo que lo que se decía en las encuestas no se reflejaba en las urnas, ahora tarjetón y cubículo establecen un vínculo a través del cual los sentimientos de la opinión y el voto efectivo tenderán a una mayor aproximación.

La supresión de las "papeletas" con la cual pierden su razón de ser el dispositivo de los grupos políticos para conducir al votante hasta las urnas, replantean las campañas electorales.

Esto quiere decir que sus efectos atravesarán el funcionamiento del juego político. Tanto la competencia inter-partidista como la intra-partidista. La supresión de las "papeletas" con la cual pierden su razón de ser el dispositivo de los grupos políticos para conducir al votante hasta las urnas, replantean las campañas electorales. La parte que se ocupa de la financiación de la confección de la "papeleta" y del acompañamiento hasta las urnas, se contrae, mientras que la que se ocupa de la promoción de la imagen, de la fijación de los lemas y la trasmisión de mensajes, se incrementará inevitablemente. De donde se puede concluir, sin mayores esfuerzos, que los nuevos mecanismos que remodelan la forma de consignar el voto, favorecerán los fenómenos de opinión, dentro o

fuera de los partidos. Y a la vez, pero por la misma razón, harán más competitiva la disputa electoral, al brindar oportunidad para que se valoricen aquellas candidaturas, cuyo recurso mayor es el respaldo de opinión y que no surgen de los sistemas de promoción propios de los grupos que controlan las redes clientelistas.

En ese sentido, cabe imaginar la apertura de espacios en distintos lugares de la sociedad (incluidos los propios partidos), y no exclusivamente en los grupos electorales ya organizados, desde donde pueden surgir aspiraciones, liderazgos y movimientos con vocación de acceder a la representación política.

El fundamento de todo ello es un hecho bien simple. Tanto que es increíble que antes no se hubieran reunido esfuerzos para que fuera una realidad. Se trata de conferir el carácter de *privado* y *secreto* a un acto que por definición lo es, pero que dentro de las prácticas bastardas cercanas al clientelismo, se convertía en un acto *público*; o más exactamente en un acto "no-privado". En otras palabras: el único acto que en la órbita de los asuntos públicos debía ser estrictamente privado y secreto, es decir el acto de sufragar —y debía hacerlo para legitimar con esa contradicción fundamental el carácter público del resto de relaciones del espacio político—, no lo era, o no lo era enteramente. Lo cual coincide con un contrasentido más: los otros actos y relaciones que debían ser diáfanamente *públicos* eran, por el contrario, *privatizados*. El ejercicio de la acción política lo mismo que el de la gestión administrativa, ha sido, a menudo, incorporado a lógicas privadas, a través de la contra-prestación de servicios entre el patrón clientelista y *sus* electores. En realidad los dos contrasentidos se explican mutuamente: solo porque existe la tendencia a la *privatización* de la acción política y administrativa (la acción pública) es que el acto de votar tiende a ser arrancado del nicho imaginario que le garantiza su privacidad. Al ser público o transparente el sentido de su voto (transparente para el "patrón") este último asegura la reproducción del control privado sobre la acción política y sobre la administración. Ese punto de unión entre los dos contrasentidos consigue su expresión más descarnada pero más plástica en la compra de votos. Nada como ella que privatice más la acción política y al mismo tiempo que despoje al sufragio de su carácter privado.

Pero además, allí donde el sufragio pierde este carácter, comienza a dejar de ser un acto *individual*. Los grupos de electores llevados en orden hasta las urnas por el lugarteniente del "patrón", dan la imagen, en algunas zonas del país, de una colectivización del voto. De donde se sigue la distorsión de la "fórmula" con la que funciona el sistema democrático. Esta supone un *momento*, periódicamente repetido y revestido de una fuerza simbólica especial, en el que cada miembro de la sociedad se "individualiza" para la asunción de una "toma de decisiones" fundamental; solo a condición de lo cual, participa en un ritual de legitimación de los mecanismos *públicos* de regulación del colectivo social, al tiempo que afirma su vínculo con éste.

Los instrumentos que se implantan para asegurar la privacidad del sufragio tienden, por consiguiente, a debilitar la práctica del voto *comunitario*, propio de las relaciones de clientela. Y la "individualización" del votante contribuye a la modernización del ejercicio político.

No se crea, sin embargo, que la privatización del sufragio rompe del todo con la relación tradicionalista. La complejidad de esta última se apoya en lealtades, incluye imágenes más o menos *fijas* y encierra un proceso de inducción cuyo último paso es la consignación del voto. Pero precisamente, por ser el momento culminante, queda revestido de un significado especial. De ahí que no sea en absoluto despreciable la incidencia que sobre la conducta del elector, tiene el hecho de que se le proteja su privacidad en el momento de votar.

Esto lo distancia materialmente de la maquinaria electoral de carácter inductivo. Distanciado materialmente, puede comenzar a distanciarse simbólicamente, de manera de adquirir la sensación de libertad en el momento de realizar su escogencia. Y el margen de autonomía que resulta de este aislamiento material y simbólico, si no llega a romper totalmente el lazo que une a un elector-cliente con su patrón, sí facilita la consolidación de la conducta libre de aquel que no pertenece a ninguna clientela.

Con ello, el tarjetón y el cubículo incrementarán las tendencias hacia el electorado de opinión, lo mismo que el sostenimiento de los movimientos o candidatos que se apoyan en él. De modo que sus efectos directos recaen sobre el sentido de la participación política.

La ampliación del voto de opinión traduce cambios políticos de más hondo calado. De hecho, el país vive un proceso más o menos acelerado de transformaciones en las conductas ciudadanas, y por consiguiente, en el sentido que tienen los compromisos, las adhesiones, las movilizaciones y en general la participación política. En realidad, este es el eje central el que gira lo que contradictoriamente unos llaman "revolcón" y otros "reinstitucionalización".

Los cambios en el sentido de la participación política

La ampliación del voto de opinión traduce cambios políticos de más hondo calado. De hecho, el país vive un proceso más o menos acelerado de transformaciones en las conductas ciudadanas, y por consiguiente, en el sentido que tienen los compromisos, las adhesiones, las movilizaciones y en general la participación política. En realidad, este es el eje central sobre el que gira lo que contradictoriamente unos llaman "revolcón" y otros "reinstitucionalización".

La observación de esto puede hacerse bajo dos perspectivas. La una nos indica la relación entre los cambios en el régimen electoral y las modificaciones en las conductas políticas. Dentro de esta perspectiva, cabe destacar la coincidencia entre la implantación de nuevas medidas electorales y el surgimiento de fenómenos políticos de opinión que alteran el orden habitual de la competencia entre los partidos. El tarjetón y la circunscripción nacional han favorecido directamente el despliegue de estos fenómenos. El subsidio estatal a las campañas al igual que un mayor acceso a los medios de comunicación han obrado en la misma dirección. Sin duda, la introducción de la doble vuelta acentuará algunos cambios en la competencia interpartidista.

Esta perspectiva que se apoya en la escuela de Duverger[1], da cuenta de las relaciones internas que se producen entre los diferentes componentes de la misma confrontación electoral y de la forma como ellas condicionan la lucha de partidos.

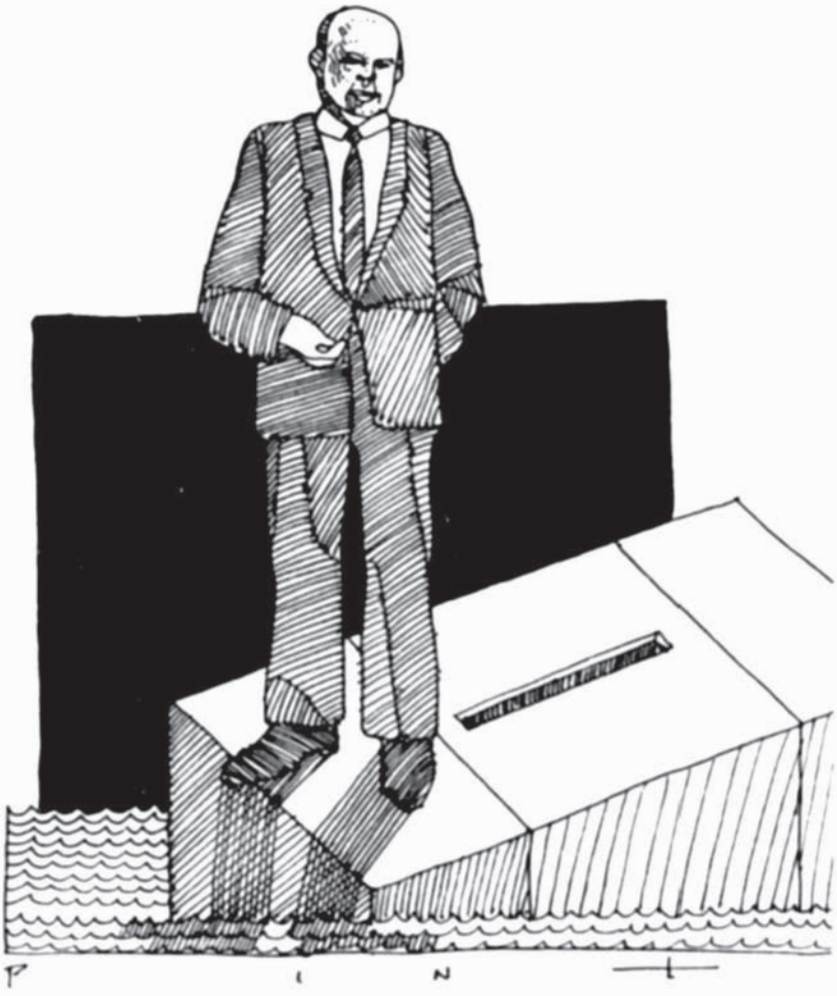
La segunda perspectiva, sin embargo, trasciende el estudio de estas relaciones internas del juego electoral, para dirigir su atención a los cambios sociológicos que tienen lugar en la cultura política, y que igualmente influyen sobre las formas de participación[2].

Lo que ahora concede un relieve especial a los sucesos políticos es la coincidencia afortunada entre los cambios jurídico-institucionales que influyen en el comportamiento electoral, y la afloración de mutaciones socio-culturales, en gestación de tiempo atrás, pero que ahora emergen a la superficie política. En realidad, las reformas jurídico-institucionales que afectan al régimen electoral han venido a facilitar el despliegue de los cambios en la cultura política.

Si de alguna manera se quisiera simplificar la descripción de estos cambios podría admitirse que se trata de una *pérdida de lealtad a los partidos*. No significa que estos desaparezcan pero sí que transiten por una crisis a la vez de credibilidad y de identidad. De credibilidad, por cuanto zonas amplias de antiguos adherentes no condicionan ya el resto de sus actividades públicas o privadas a su fidelidad partidista. Atenuado su sectarismo y multiplicados los campos de su *sociabilización*, pueden atender con mayor escepticismo la convocación que hacen sus jefaturas tradicionales, y al mismo tiempo, mirar con interés otras opciones políticas. De identidad, por

Con la Nueva Constitución las reglas del juego político han sido transformadas en un sentido progresivo, lo cual abre grandes posibilidades a las nuevas fuerzas políticas.

1. Maurice Duverger, "Los Partidos Políticos", 1976. Fondo de Cultura Económica, Bogotá.
2. Gabriel Almond, Sidney Verba, 1963 "The Civic Culture" Princeton, Princeton University Press.



cuanto, colocados los partidos frente a franjas de ciudadanos sin una fidelidad política fuerte, no atinan a encontrar una personalidad definida; se someten a metamorfosis incesantes a fin de acercarse a esos electores esquivos; y dan lugar en su interior al desarraigo que produce la pugna entre sectores tradicionales y modernos.

Ahora bien, el desvanecimiento de las lealtades partidistas discurre sobre los procesos de articulación y de desarticulación que tienen lugar entre la formulación social y la construcción de lo político.

En el tránsito de lo social a lo político, se reproduce incesantemente, bajo determinaciones históricas, la cultura política. Esta proporciona *estructuras de significación*, a través de las cuales el actor percibe, asimila y se apropia las relaciones que se dan en el espacio político. Es en medio de esa apropiación que cada actor interviene en dicho espacio; y es en ella en donde surgen y se reproducen sus sentimientos de pertenencia, sus lealtades, sus valores; con los cuales desarrolla su *identidad política*[3].

Las cosas parecen indicar en Colombia, que los valores en que se apoyan las viejasd identidades políticas, pasan por un proceso de transformación. Tradicionalmente, la fragmentación de nuestra sociedad civil, no completamente desarrollada, se ha acompañado de divisiones políticas intensas. La omnipresencia de los partidos suplía, aunque mal, la falta de cohesión social. La fragmentación, estado opuesto a la diferenciación, como que la primera supone la coexistencia de la desintegración y de la homogeneidad en los procesos sociales, mientras la segunda supone heterogeneidad e integración, tenía como contrapartida, no solo la omnipresencia ya señalada de los partidos, sino la intensidad de sus disputas. A la vez, integraban lo que la sociedad por sí sola no podía hacer, y desintegraban a la nación, dividiéndola en familias irreconciliables. La poca complejidad social, no servía para contrarrestar la simplicidad y la intensidad de las divisiones partidistas. Al contrario: las alimentaba.

La transición social que ha vivido el país ha tenido como efecto un crecimiento de la sociedad civil. Por tanto, aunque no ha dejado de ser fragmentada, ha ganado en diferenciación. Y como su mayor heterogeneidad trae aparejada una desagregación más complicada de roles sociales, los que separándose se inter-relacionan, el proceso se ha invertido. Ahora, la omnipresencia y la intensidad de las luchas inter-partidistas ha disminuido. Aunque esta atenuación de las divisiones políticas tuvo origen en estrategias inter-elitistas de reconciliación; poco a poco la diferenciación social ha venido en apoyo de este fenómeno. Así que, dentro de ciertos límites, se puede afirmar, siguiendo a Almond, que Colombia vive un proceso de heterogeneización social y de homogeneización política[4].

Hay que advertir que es apenas dentro de ciertos límites, por cuanto esta aseveración solo rinde cuenta de las tendencias que experimenta el campo de lucha político-institucional. No hay que pasar por alto, a este

3. Alain Lancelot, "L'orientation du comportement politique" in Jean Leca y Madelaine Grawitz; Traité de science politique, Paris, 1985, P.U.F.

4. Gabriel Almond, Sidney Verba,... 1963, ibidem; Gabriel Almond, Sidney Verba; "The Civic Culture Revisited", Boston-Toronto; Little, Brown and Company, 1980.

propósito, que las mismas mutaciones sociales han traído fenómenos de profunda fractura social y política. Al punto, que es posible distinguir campos de lucha legal y campos, amplios y variados, de ejercicio de la violencia.

La persistencia de formas de fragmentación social pero, al mismo tiempo, la dinámica de los cambios, más la precariedad en la construcción estatal han alimentado la formación de múltiples conflictos violentos. Como, simultáneamente, los partidos habían entrado en una fase, en la que a la vez perdían la pasión sectaria y la capacidad integradora de las demandas sociales; ya no podían ni incorporar la conflictividad social dentro de guerras fratricidas ni tampoco absolverla pacíficamente a través de demandas ordenadas dentro del espacio político. Razón por la cual, tal conflictividad se dispersó en múltiples focos de violencia, cada uno de los cuales alcanzó dinámicas incontrolables.

Hoy, las estrategias de paz se encaminan a desactivar los factores y los agentes de mayor efecto perturbador. Con ello, se conseguirán, pese a las dificultades, algunas condiciones favorables que permitan un grado aceptable de reinstitucionalización del juego político.

El crecimiento de la sociedad civil y la diferenciación social seguirán, sin embargo, provocando resultados en dos sentidos contradictorios: el de una mayor homogeneización del espacio político institucionalizado y el de una reproducción de la conflictividad social, la que termina por afectar los lazos de convivencia ciudadana.

Con todo, la homogeneización política viene acompañada de las mutaciones de los valores socio-culturales de capas importantes de la sociedad, acentuadas por la renovación demográfica. Estas mutaciones siguen dos direcciones que se complementan: la una es la multiplicación (y sustitución) de los propios valores, a los cuales ciertos sectores de la sociedad conceden importancia. La otra es la de la pérdida de intensidad en la afirmación de ciertos valores "fundamentales". Así, valores de fuerte afirmación en el pasado como la adscripción ideológica, de carácter religioso o político, han perdido fuerza entre las capas medias. Al mismo tiempo, estas distribuyen su atención y sus afirmaciones sociales en una "canasta" más variada de valores[5].

De esta manera, se reordena, en muchos ciudadanos, la subordinación antigua de di-

ferentes intereses y roles sociales a la afiliación partidista. Al ganar una mayor autonomía estos últimos frente al condicionamiento partidista; y al mismo tiempo, al ser revalorizadas otras inquietudes que no encajan bien en el discurso partidista, las identidades políticas o sufren mengua o se recomponen. De ahí, que la similitud de la lealtad partidista con una lealtad "primaria"[6], rasgo este último del elector sectario, comience a cambiar.

En todo caso, esta disminución de la lealtad partidista sirve de fundamento a la aparición de un cierto electorado de opinión.

---

5. Ronald Inglehart, 1977 "The silent Revolutions. Changing Valves and Political Styles a mong Western Publics; Princeton; Princeton University Press.

6. Clifford Geertz, "The integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Polities in the new states" in Old societies and new states: The Quest for modernity in Asia and Africa; ed. Clifoford Geertz — New York: Free Press; 1963.

Su incremento acompaña los procesos de modernización política. El discurso, el candidato y los temas de coyuntura, comienzan a jugar un papel preponderante en la escogencia que hace el elector. Pero también trae aparejados elementos post-modernos, para llamarlos de alguna manera, en las relaciones que determinan la adhesión política. El maquillaje, la inanidad del discurso, la volubilidad programática; en una palabra, la banalización, cuya contrapartida es un elector, a la vez manipulado y despolitizado, entrarán a hacer parte de la confrontación política.

Ahora bien, los cambios en las costumbres, a través de la pérdida de lealtades y de la promoción de los fenómenos de opinión, modifica el sentido de la participación y provoca por ello mismo cambios en los propios sistemas de representación y en el régimen de partidos.

La representación política y el régimen de partidos

La representación no se agota en la relación externa que acompaña el acto de *delegar*. Ella encierra sobre todo una relación interna que no por vertical deja de ser recíproca entre representante y representado. Y esta interrelación está rodeada de una atmósfera hecha de las imágenes y de las "representaciones" con las que ambos aprehenden el universo político. Estas influencias políticas terminan por desarrollarse, si se acoge el pensamiento de Hauriou, dentro de un *todo* institucional[7].

El partido político constituiría una típica relación de "representación-institución". La delegación que los electores de un partido harían en cabeza de sus representantes, no sería más que la manifestación externa de ese *todo* relacional, en el que van involucrados verdaderos esquemas de significación, compartidos por quienes se reclaman de la misma entidad.

De este modo, las mutaciones en la manera de apropiarse el universo político, experimentadas por sectores del electorado, no podían menos que alterar las relaciones de representación entre los electores y los partidos políticos.

Estas relaciones han venido a modificarse siguiendo dos caminos: el de la aparición de nuevos movimientos políticos, por la fatiga de los partidos tradicionales. Y el de los trastornos internos de aquellos en los cuales las estructuras apoyadas en las redes clientelistas y en las lealtades primarias, se han visto sacudidas por fenómenos de opinión que han brotado en su propio interior.

La expresión más cabal de los cambios en la representación política es, desde luego, la aparición del M-19. Su ascenso parece traducir las búsquedas por parte del electorado de nuevas *representaciones alternativas* a las ya existentes. A la vez, parece indicar hasta qué grado había llegado a ser artificial o por lo menos inercial, el sistema de competencia tradicional, basado en las antiguas identidades (y correlativamente, hasta qué punto había llegado a serlo también la lucha armada). Fue como si sólo hubiese bastado la implicación de dos elementales mecanismos del sufragio como el tarjetón y la circunscripción nacional; y como si hubiese sido necesario apenas el acto simple de que un grupo guerrillero hiciera la transición a la legalidad, para que se desestabilizara el esquema tradicional de representaciones entre la sociedad y los partidos políticos.

La irrupción del M-19 parece obedecer, sin embargo, a fenómenos que concurren desde distintos niveles. Su rápido crecimiento lo presenta como el típico "Movimiento pasional" de que hablaba Duverger. El cual refleja giros que tiene la opinión pública bajo determinadas circunstancias. De este tipo de movimientos, unos son pasajeros y otros cristalizan en partidos influyentes. Es evidente que en el caso del partido de Navarro, la coincidencia entre su auge y las reformas de apertura política, trabaja en favor de su durabilidad.

Son tres las circunstancias que desde distintos ángulos intervienen en el fenómeno de opinión que es el M-19. En primer lugar, el establecimento de los mecanismos de orden electoral ya mencionados, que favorecen la presencia de nuevas fuerzas. En segundo lugar, los factores propios de la *coyuntura*. De ésta, hacían parte distintos componentes que sintonizaban al M-19 con sectores amplios de la opinión pública: el interés por el abandono de la violencia y el interés contra las prácticas más tradicionales de la competencia política. A esto se añadió un escenario

7. Bernard Denni, "Representer: Gouverner an nom du peuple? La contribution de M. Hauriou..." in "La Representation", 1985, ed. Francois d'Arcy — Economica.

singular como fue la Constituyente, que vino a condensar un sentimiento más o menos generalizado en favor de la restauración de la paz y de eliminar las prácticas y las instituciones que como el clientelismo o la corrupción política, están asociadas a la reproducción como *casta* de la élite política *tradicional*. Además, la conducción del proceso llevada a cabo por Navarro Wolff con la imagen de un liderazgo tranquilo pero firme, con economía de retórica, y con la capacidad de formular consignas precisas, susceptibles de traducirse en hechos, terminaron por afianzar la reorientación de la simpatía popular.

Hasta aquí todo indica que se trata de un simple movimiento coyuntural. El está apoyado, sin embargo, por un tercer nivel de circunstancias: la reorientación de fondo que experimenta el comportamiento político de buena parte de los colombianos. Esto y las reformas de la Constituyente favorables al multipartidismo, sustentan el mantenimiento de una fuerza distinta a los dos partidos tradicionales.

Así, resulta evidente que el sistema político se ve en el trance de incorporar modificaciones al régimen de partidos. La primera constatación, a este propósito, es casi un lugar común: el paso del bipartidismo al multipartidismo. Pero ésta es apenas la puerta de entrada para la observación del fenómeno. El problema es, desde luego, más complejo: ¿de qué bipartidismo se parte y hacia cuál multipartidismo se va?

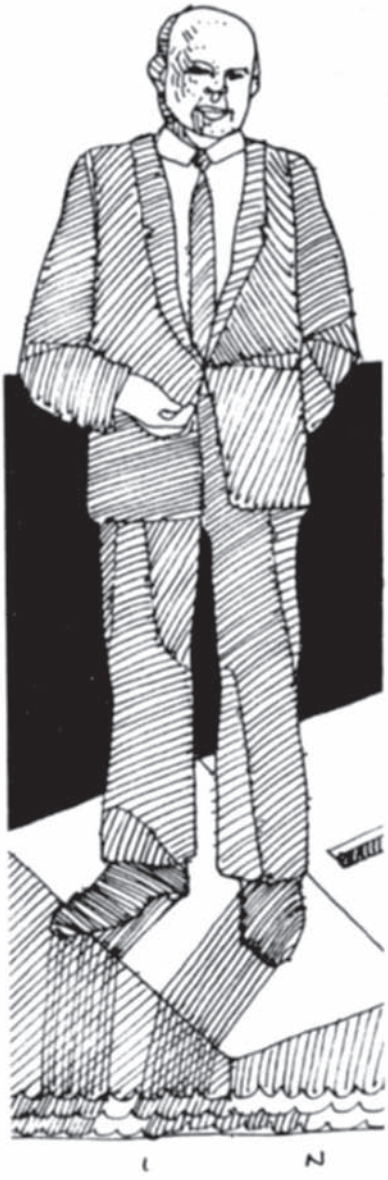
El bipartidismo colombiano, a pesar de ser tan arraigado desde el punto de vista histórico-cultural, presenta rasgos peculiares que lo hacen difícilmente reconocible, por su funcionamiento, en el espejo del tradicional bipartidismo anglosajón. En el bipartidismo nuestro, se trata más de dos subculturas políticas; de lugares de sociabilización muy elementales y al mismo tiempo "fundamentalistas", con el soporte de redes clientelistas; y menos de organizaciones modernas que al lado de una sociedad civil desarrollada, ofrezcan formas más o menos "secundarias" y sofisticadas para el ejercicio alternativo de la gestión gubernamental.

Su funcionamiento en las últimas décadas se ha apoyado en la "confusión" burocrática, doctrinaria y programática de los dos partidos. Esta "confusión" los des-sectarizó ciertamente, pero, en cambio, los clientelizó aún más. Al partido liberal lo conservatizó y, entonces, el partido conservador ya sin oficio, terminó domesticado por el partido liberal. Era un dualismo supremamente *imperfecto*, desde el punto de vista de la pluralidad. Lo que ganaba en "confusión" el régimen de partidos, lo perdía en alternabilidad pluralista. Aunque, al mismo tiempo, ganaba en estabilidad. Lo paradójico es que el reverso de la estabilidad del régimen, no era otro que el recrudecimiento de la violencia social y subversiva.

La crisis de este "bipartidismo" puede dar paso a un multipartidismo con equilibrio de fuerzas. En tal caso, este último sería la transmutación de los desequilibrios del dualismo, gracias a la aparición de otro partido, capaz de contrabalancearlos.

Pero además de *imperfecto*, el dualismo político terminó siendo *des-equilibrado*. El control compartido de la burocracia impidió la marginalización del partido conservador pero no su consolidación como fuerza minoritaria. En cambio, la urbanización, el inmenso poder burocrático, la deslegitimación del conservatismo durante la violencia, consolidaron al partido liberal como fuerza mayoritaria.

La crisis de este "bipartidismo" puede dar paso a un multipartidismo con *equilibrio* de fuerzas. En tal caso, este último sería la transmutación de los desequilibrios del dualismo, gracias a la aparición de otro partido, capaz de contrabalancearlos.



Esto es importante, tanto más si de por medio está la solución de una falla en la representación partidista, existente en el sistema y que al ser superada, proporciona satisfacción a un sector del electorado no conforme con los partidos existentes. Sin embargo, lo que resulta aún más decisivo para la suerte de un régimen de partidos modernos es la forma como pueda garantizar el suficiente grado de *pluralidad* sin que deje de ser *estable*. La pluralidad y la estabilidad deciden, en buena parte, la razón de ser de un Estado moderno. Para que sea democrático pero al mismo tiempo, eficiente.

A menudo, ambas dimensiones se oponen. Por aspirar a una mayor estabilidad, lo mismo que una mayor eficiencia, un régimen puede sacrificar la pluralidad. Por aspirar, en cambio, a una mayor pluralidad, un régimen puede desembocar en una mayor inestabilidad. El abuso de la pluralidad es la polarización. Y ésta puede acarrear tensiones entre los adversarios o exclusiones por miedo a que el partido opositor llegue a cambiar radicalmente las reglas del juego. La distorsión, en cambio, de la estabilidad y de la eficiencia, es el autoritarismo, o bien, el amorfismo inter-partidista. A este propósito, en el Cono Sur americano el autoritarismo, erigido en sistema, resultó ser la trasposición de la búsqueda de eficiencia y estabilidad en Estados ineficientes e inestables. En Colombia, fue el amorfismo interpartidista, la fórmula escogida para tener estabilidad pero sin renunciar al autoritarismo, ya no como sistema sino como rasgo.

El multipartidismo que toma forma ahora, introduce elementos ciertos de pluralismo en una "sociedad política" despluralizada artificialmente (Frente Nacional) para que dejara de ser polarizada, pero que se situaba ya sobre una "sociedad civil" cada vez más *plural*. El solo hecho de que insurja una fuerza política, brotada del horizonte de la izquierda, y de que simultáneamente se ponga término a la obligación de estirpe frente-nacionalista, según la cual el partido ganador debe gobernar con el segundo partido, dará mayor vigencia a la competencia política. Esta tendencia del régimen será, con todo, morigerada por la inclinación a la convergencia que presentan los diferentes partidos; y cuyo momento inaugural ha sido la Constituyente. Además, es muy seguro que en la situación actual de organización del Estado, ningún partido quiera, por su propia cuenta, correr el riesgo de estar por fuera del alto gobierno. Esto puede dar comienzo a un régimen singular en el cual, en la liza electoral, los partidos por sí solos o coaligados, se enfrentan abiertamente para que el elector escoja, pero en el que, después, *gobiernan todos*, bajo la dirección como presidente del candidato ganador. Una hipótesis de esta naturaleza no excluye su alternancia con períodos en los cuales algunos partidos se vean forzados a hacer oposición. En todo caso, estaríamos ante una característica curiosa, en la que el régimen tendría mayor pluralismo pero no alcanzaría a tener *oposición* permanente.

El régimen multipartidista traería entonces un mayor pluralismo sin abandonar la tendencia al cogobierno inter-partidista. Sólo que así, su estabilidad quedaría vinculada al equilibrio entre los partidos y a la correlación de éste con las relaciones interinstitucionales entre gobierno y Congreso. Bajo las diversas hipótesis de equilibrio inter-partidista, los actores políticos estarían más o menos obligados a entenderse dentro del gobierno, a fin de que las relaciones entre éste y el Congreso no sobrepasen un nivel tolerable de dificultad.

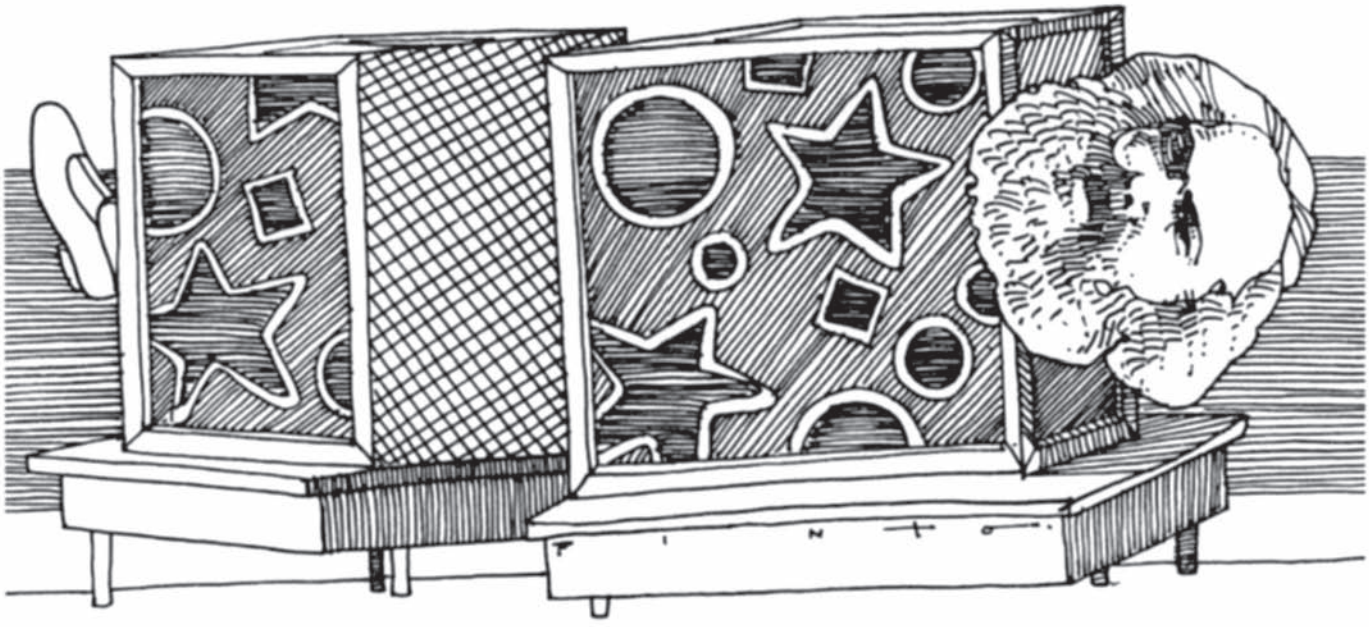
Sólo los sucesivos comicios por venir podrán indicar hacia qué equilibrio de fuerzas tiende el nuevo régimen de partidos. Esto mismo no es claro por las tendencias contradictorias del proceso. El partido tradicional que está más fraccionado y que es susceptible de verse marginalizado, es el Conservador. Sin embargo, no es en su campo, en donde más avanza el M-19 como nuevo partido. Este último tiende a superponerse en el campo liberal. Pero este partido puede mostrar mayor capacidad de recuperación. Además, el nuevo papel del electorado de opinión puede hacer más volátiles las mayorías, según aparezcan figuras o propuestas con capacidad de arrastre.

Por cierto, esa misma sucesión de comicios será la prueba para la capacidad de implantación del nuevo partido. Este dispone ya de recursos importantes pero carece de otros. Tiene opinión y liderazgo. Carece, en cambio, de inserción orgánica en la población; también de cohesión interna y no es ajeno a querellas intestinas. Debe enfrentar, además, el reto de atraer y de promover una élite, capaz de consolidar la credibilidad que lo rodea. El problema consiste en si para conseguirlo, le basta conquistar la Presidencia de la República●

Medófilo Medina
Profesor Universidad Nacional

La crisis de la izquierda en Colombia

Medófilo Medina



1. Introducción

Se quieren presentar unas *impresiones* sobre los procesos que viene afrontando la izquierda. Se destaca la palabra impresiones por cuanto no media una mínima distancia histórica que permitiera acudir a términos como balance o a alguno de sus sinónimos. Por otra parte, quienes han contestado a lista en las filas de la izquierda, como es el caso del autor de estas líneas, no podrán aproximarse al tema con la pretendida "objetividad" de un "testigo imparcial".

Las anteriores dificultades no son forzosa fuente de perplejidad. Se han mencionado, sólo porque permiten subrayar el carácter abierto, polémico, que tienen hoy los asuntos relacionados con el presente y el pasado de la izquierda. El tono personal en que están formuladas las consideraciones que a continuación vienen, subraya tanto la posibilidad como la necesidad de otras aproximaciones que tomen referentes distintos y coloquen el énfasis en aspectos que se omiten o a los cuales apenas se alude.

2. Los alcances de la crisis de la izquierda

Cabría preguntarse si no es más adecuado hablar en vez de crisis de la izquierda más bien de su disolución, ¿al menos con respecto al contenido que la noción de izquierda ha tenido hasta ahora? Por cierto que tal pregunta cobra aún mayor sentido cuando se piensa en el escenario político internacional. Hoy, no resulta fácil la

representación universal del espectro político mediante las imágenes espaciales tradicionales. Antes que el contenido socioeconómico de la izquierda, el centro o la derecha, salen a flote las diversas posiciones políticas en relación con el orden establecido en cada país.

Entre 1985 y 1988 se popularizaron en el mundo las palabras rusas perestroika, glásnot, las cuales se asociaban a los propósitos de renovación y democratización del "socialismo real". El derrumbe del comunismo en los países de Europa Oriental mostró que el proceso que se había puesto en marcha en 1985 no era de renovación sino de sustitución del sistema socialista.

La suerte del socialismo a escala internacional influye no solo como una especie de telón de fondo sino como *factor constitutivo* de los procesos por los que atraviesa la izquierda en Colombia. Esta ha tenido como referencia determinadas versiones del marxismo y los diversos modelos del "socialismo real".

Por ello es preciso atender a las peculiaridades de la asimilación del marxismo en Colombia por parte de los grupos y partidos que extrajeron de él las bases ideológicas para sus programas y las orientaciones para su acción política. El marxismo y particularmente el marxismo-leninismo se incorporaron antes que como un modelo de análisis teórico, como ideología, sistema de postulados éticos y como conjunto de técnicas de acción política y de organización partidista. Se produjeron estudios sobre la economía, la sociedad y la historia colombianas inspirados en el marxismo, sin embargo tales estudios fueron poco numerosos. Además de la limitación cuantitativa influyó de manera negativa otro factor: el divorcio entre el esfuerzo por "desarrollar" el marxismo como instrumento de análisis de la realidad y la elaboración de estrategias y de propuestas políticas.

En la práctica se tomó el marxismo-leninismo como una doctrina, o si se quiere como un esquema ideológico coherente capaz de dar respuesta desde su lógica conceptual a cualquier dificultad o problema. El doctrinarismo se remitía a una u otra de las variantes del socialismo real. Esa percepción unilateral del marxismo alimentó el dogmatismo en la visión de la realidad y el sectarismo en las formas de la comunicación política.

Las corrientes críticas de los "marxismos oficiales", los autodenominados bloques y tendencias de orientación trotskista que se formalizaron organizativamente a partir del año 70, no realizaron avances significativos con respecto a formas y estilos de las fuerzas que criticaban. Antes bien, terminaron girando en su órbita sin lograr superar una posición periférica en una izquierda ya de suyo marginal*.

El "socialismo democrático" no logró dar vida ni a un movimiento intelectual independiente ni a una formación política propia. Sus hombres se debatieron entre la nostalgia de un "liberalismo popular" y la esperanza del "socialismo humanista". El débil desarrollo de la investigación basada en el marxismo contrasta con la característica atmósfera izquierdista que adquirieron las universidades públicas e incluso algunas de las privadas en los años sesenta y setenta. Se trataba de un tipo de marxismo, leninismo, maoísmo, o guevarismo, capaces de alimentar debates ardientes, y compromisos morales de una juventud ávida de participación política, pero insuficientes en extremo, como instrumentos de comprensión de la realidad.

Las anteriores observaciones no pretenden ser la evaluación global del papel de la izquierda. Para muchos campesinos o antiguos colonos su lucha en la izquierda significó acceder a la propiedad de su tierra, los obreros gracias a la izquierda aprendieron la utilidad del sindicato, de la solidaridad de la gente del trabajo, infinidad de hombres y mujeres tuvieron una participación política independiente. Como patrimonio del pensamiento colombiano queda también el aporte de intelectuales que a lo largo del siglo XX leyeron la realidad del país desde una óptica de izquierda. Aquí se dramatizan algunos aspectos que permiten esclarecer la naturaleza de la crisis.

3. El desarrollo de la crisis

La evolución de la izquierda en el ámbito nacional en los últimos quince años no la preparó para afrontar en mejores condiciones el derrumbe a escala mundial. Un acontecimiento marcó el punto de inflexión de la historia política en Colombia en la segunda mitad del presente siglo: el Paro Cívico Nacional (PCN) del 14 de septiembre de 1977. Antes de ese evento el presidente de la República Alfonso López Michelsen había llamado la atención sobre la inminencia de una crisis política cuyas señales inequívocas las veía asociadas a la frecuencia de los paros cívicos. A mediados de 1976 López había dicho: "En este tiempo, la técnica del golpe de estado co-

* No se quiere desconocer la importancia que tales corrientes tuvieron en la atracción a la vida política de sectores de la juventud universitaria y en la promoción del sindicalismo entre grupos de trabajadores de cuello blanco. El mal endémico del trotskismo lo constituyó su reconocido faccionalismo que le impidió conservarse como polo estable de organización y de acción.

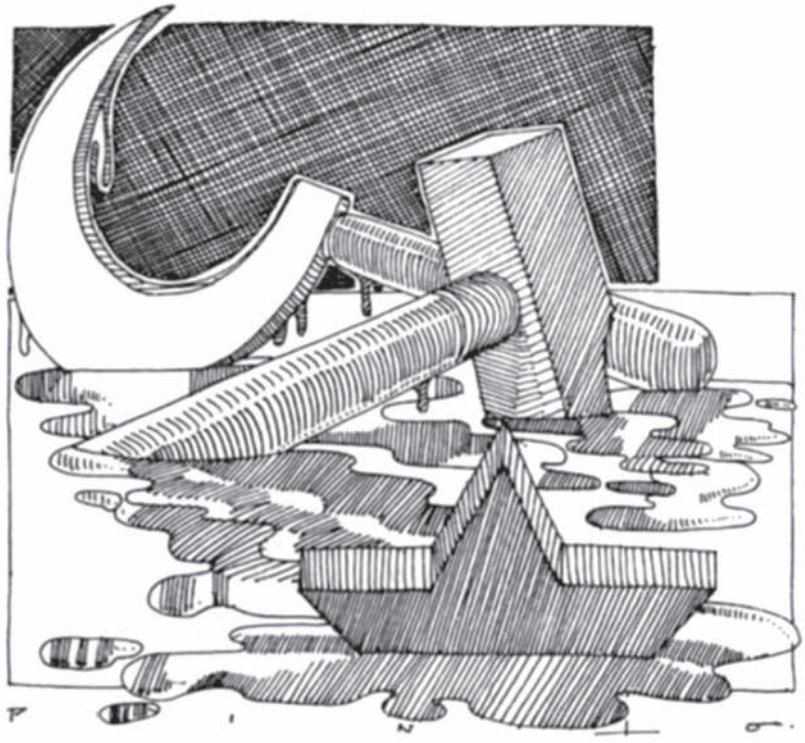
mienza por apoderarse de los servicios públicos, principalmente las comunicaciones y los transportes" y agregaba luego: "El centro de toda la sublevación contra un gobierno es la propia capital de la República o las capitales regionales"[1].

Para conjurar la crisis López había propuesto la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que más allá de los aspectos operativos tendría el cometido histórico de renovar el consenso que se había formalizado en el Plebiscito de diciembre de 1957. Por paradoja de la historia no le fue dado al presidente reeditar un evento similar al de diciembre pero vio en su gobierno repetirse bajo diferente dirección otro acontecimiento también del año de 1957: el Paro Cívico Nacional*.

El PCN de 1977 representó una protesta de las masas urbanas de gran magnitud. Su realización pudo reclamarse de manera legítima como una victoria del Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda, del movimiento sindical y del pueblo en general. Sin embargo, fue un éxito por el cual la izquierda pagaría un precio muy alto. De momento en los sectores dominantes se extendió un sentimiento de temor y de inseguridad. Si el mismo Lopez había señalado un año antes del PCN: "...a nadie se le oculta cómo existe en forma latente una atmósfera de subversión"[2], *El Tiempo* en tono alarmista señalaba el 15 de septiembre de 1977 extendiendo al conjunto de la sociedad su propio temor: "Si (el paro) no ha tenido un éxito completo en sus finalidades de subversión, sí ha logrado en buena parte quebrantar la normalidad pública y sembrar en la sociedad de todas sus clases un sentimiento de terror y aún de pánico".[3]

El 19 de diciembre de 1977 un numeroso grupo de altos mandos militares en visita al jefe del Estado presentó un pliego de exigencias sobre adopción de una legislación extraordinaria. El gobierno de López, entonces con el sol a las espaldas, hizo el quite al "pronunciamiento" de los militares. Al año siguiente haciendo uso de las facultades del estado de sitio el gobierno del presidente Turbay Ayala convirtió la propuesta de "eficaces medidas adicionales" en el Estatuto de Seguridad. Así el Estado entró a deslizarse por la peligrosa pendiente de la desinstitucionalización.

En los medios de la izquierda el éxito del PCN produjo un efecto de recalentamiento. Con independencia del papel que hubieran jugado los distintos grupos el 14 de septiembre, a partir de esa fecha la propuesta de *Paro Cívico Ya*, se convirtió en el motivo de diferenciación de los "verdaderos revolucionarios". Se olvidó que el PCN había tenido éxito no por la radicalidad de sus objetivos —protesta contra el



alto costo de la vida— ni por el carácter estratégico de su horizonte. A la gente la animaba en 1977 un sentimiento de revancha antilopista por las expectativas que rodearon el triunfo del Mandato Claro y que a las alturas de 1977 habían dado lugar a una clamorosa frustración en el pueblo. Los diversos intentos de repetir el 14 de septiembre, por cierto, todos coronados por el fracaso, se acompañaron de pliegos radicales.

Los movimientos guerrilleros sin excepción leyeron los acontecimientos de septiembre de 1977 en clave insurreccional y extrajeron las "lecciones correspondientes". Desde su óptica el levantamiento popular se había producido y si el pueblo no había ido más lejos ello se debía a que

* Esa vinculación de la Constituyente a la necesidad de un nuevo consenso la recordó López, en su airada reacción contra la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el decreto de convocatoria a la Asamblea. El presidente habló de la inaplazable necesidad de un plebiscito o de otro género de consulta popular directa (*El Tiempo*, 25 de noviembre de 1977).

1. *El Tiempo*, 21 de julio de 1976, pág. 7A.
2. *El Espectador*, 25 de agosto de 1976.
3. *El Tiempo*, 5 de septiembre de 1977 (editorial).

no había tenido las armas. La lógica resultaba inexorable: era preciso buscar el encuentro de las dos vertientes: la de los paros cívicos locales, regionales y nacional con el movimiento insurgente. De momento se crearon aparatos urbanos encargados de preparar esa confluencia de la insurgencia y lo cívico-popular. Dichos grupos fueron en poco tiempo desarticulados por los servicios de inteligencia mediante procedimientos que en su fase "blanda" acudieron a la tortura y al apremio con el objetivo de obtener confesiones.

La política de "combinación de todas las formas de lucha" lanzada por el Partido Comunista en 1966 pareció entonces alcanzar su concreción histórica.

La búsqueda de soluciones a la crisis política por el camino de la represión tuvo desde el punto de vista del Establecimiento resultados contradictorios. Las Fuerzas Armadas pudieron ufanarse del desmantelamiento de los grupos armados de apoyo a las guerrillas en las ciudades. Sin embargo el conflicto social se mantuvo en los centros urbanos y las guerrillas incrementaron el número de sus frentes y extendieron su dominio territorial en el campo.

Desde comienzos de su administración el presidente Belisario Betancur decidió darle prelación a los métodos políticos y a las políticas de consenso en la superación de la crisis del sistema. La ley de amnistía a los alzados en armas así como la convocatoria a los partidos para la elaboración de la reforma política fueron elementos que plasmaron la iniciativa del gobierno.

Simultáneamente se establecieron mecanismos y se adoptaron políticas encaminadas al logro de un acuerdo de paz con las guerrillas. No entra en los objetivos de estas notas la presentación de un balance de los procesos de paz. Se mencionan aquí en la medida en que el desarrollo de la izquierda colombiana ha estado estrechamente relacionado con ellos.

La incorporación de las principales organizaciones de la guerrilla, con la excepción del ELN, en los diálogos con el gobierno y los posteriores acuerdos de cese al fuego y tregua llevaron el entusiasmo a la mayoría de los colombianos que veían la paz al alcance de la mano.

Sin embargo contra la paz actuaban sectores poderosos que se movían en la sombra, "los enemigos agazapados de la paz" de que habló Otto Morales Benítez. No se trataba sólo de personajes en las Fuerzas Armadas sino de poderosos grupos oligárquicos. Contra la paz obró de manera crucial la indiferencia de la dirección de los partidos tradicionales con respecto al proceso mismo, y en especial en relación con la propuesta del Gobierno sobre discusión de la Reforma Política.

En las alternativas del proceso de paz surgió por iniciativa de las FARC la Unión Patriótica como movimiento que no sólo permitiría el paso de los combatientes a la actividad política legal sino que sería una nueva forma de asociación de gente que luchaba por transformaciones profundas de la sociedad colombiana y que se definía por los métodos civiles de acción política de masas.

El apoyo dispensado a la U.P. por gente humilde del pueblo y por sectores medios de la sociedad, se expresó en los dos procesos electorales que se realizaron en la etapa siguiente a su fundación: elecciones de marzo de 1986 y de marzo de 1988. Con la U.P. la izquierda se transformó en fuerza reconocible electoralmente. Este hecho resultaba importante y novedoso si se tiene en cuenta que el despegue electoral no era el resultado de operaciones de tipo populista. La nueva fuerza surgía con un programa y objetivos explícitos, entre los cuales se destacaba la bandera de la paz. Quienes apoyaron a la U.P. no representaban el cómodo voto de quien se suscribe a la novedad cuando ésta se asocia a la indefinición política.

La historia que siguió después es dolorosa y bien conocida. La U.P. se convirtió en blanco de la guerra sucia y fue sometida a una sistemática operación de exterminio. Cayeron 2 de sus presidentes, figuras carismáticas: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. No se trata sólo de la cifra de muertes que supera el millar, sino de la eliminación de gente que por su juventud y por su función clave en el plano nacional, regional o local, constituían carta de renovación y desarrollo de la izquierda. Por ello, al trascender los asesinatos individuales lo que queda claro es la expulsión del escenario de toda una formación política.

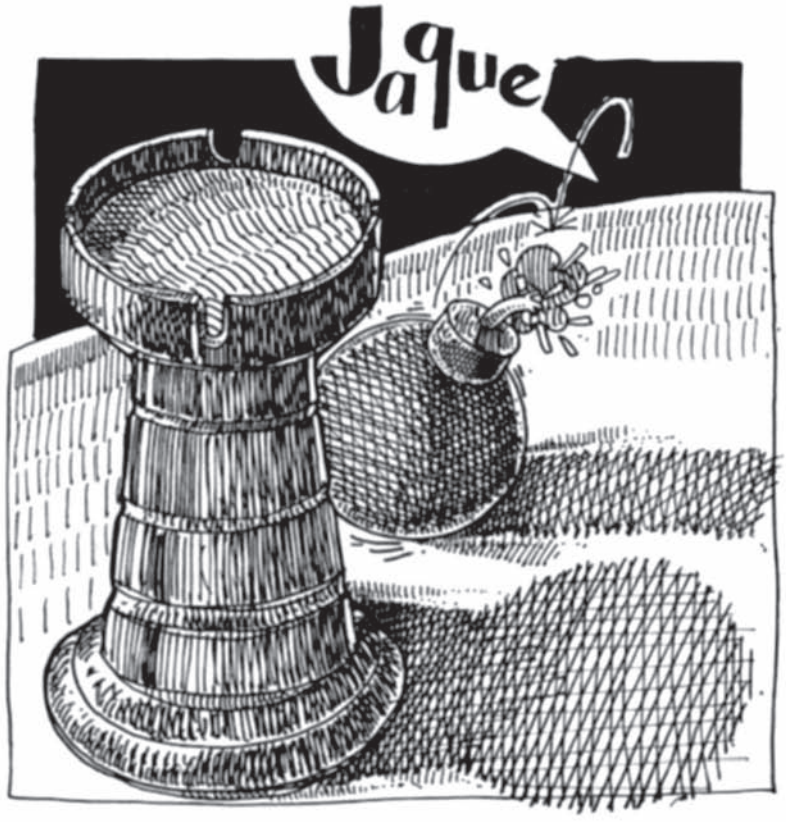
Aunque es preciso admitir que en la coyuntura en la cual surgió la U.P. cualquier partido político de orientación renovadora hubiera sido sometido a un tratamiento violento dada la persistencia en el país de derechas recalcitrantes y del enrarecimiento que le ha suministrado a la atmósfera política el narcotráfico, existen fuertes argumentos que permiten pensar que el alcance que tuvo la campaña contra la U.P. hubiera podido evitarse.

Es incompleto el análisis que no incorpore aquellos elementos que desde la misma izquierda contribuyeron a la realización de los objetivos de la guerra sucia. La paternidad de la U.P., las FARC, fue simultáneamente factor de sus éxitos iniciales y elemento importante de su desastre posterior. En un período breve entre 1985

y 1986 a la guerrilla más curtida de América Latina se imponía la disyuntiva: continuación de la empresa militar o inversión en la vida política civil. Se optó por el primer camino sin que se produjera la autodisolución de la U.P. Esta quedó indefensa en medio del campo. Sólo tardíamente la misma U.P. se decidiría de manera inequívoca por la paz, a costa de su división.

A la U.P. afluyeron sectores nuevos. Por lo menos votaron por sus candidatos hombres y mujeres que antes no habían participado en elecciones. El proceso de agregación que vivió la U.P. fue diferente a capítulos anteriores de "unidad de la izquierda", ahora no se trataba de grupos políticos que se encontraban sino de gente que definía el terreno de ejercicio de su voluntad de participación política. Eso implicaba que los independientes pudieran pesar en la U.P. y que el Partido Comunista tuviera la suficiente flexibilidad para aceptar la convivencia democrática bajo el mismo alero organizativo con los no comunistas. Sin embargo el P.C. adoptó el viejo enfoque de "convergencia democrática" de aparente amplitud. Antes que una política de "alianzas" para usar la pomposa jerga resabida, se requería una voluntad de cambio para interpretar y sobre todo para compartir con los recién llegados maneras nuevas de vivir la política. Para la dirección del P.C. la constitución de la U.P., sus éxitos iniciales y la misma guerra sucia no fueron datos suficientes como para que se procediera a un examen a la luz de las nuevas realidades y posibilidades, de una política que se había adoptado veinte años antes. En torno al problema central de la política de combinación de todas las formas de lucha el único cambio adoptado fue la introducción de la palabra *adecuada* con lo cual la fórmula quedó "adecuada combinación de todas las formas de lucha". Con ello se concluía que existían problemas operativos en la realización de esa táctica-estrategia, pero que la concepción en sí misma guardaba toda su vigencia.

No se sugiere que la renuncia a la lucha armada por las fuerzas político-militares que apoyaban a la U.P. le hubiera garantizado a ésta automáticamente un desarrollo sin obstáculos, sin víctimas. El sistema político colombiano desarrolló durante mucho tiempo reflejos de intransigencia y de intolerancia que lo hacen reaccionar contra nuevas fuerzas políticas*. Sin embargo, un compromiso inequívoco de la U.P. desde el momento mismo de su fundación con las vías civilistas y con la búsqueda de la paz por procedimientos de acción política de masas le hubiera ganado un apoyo claro en las grandes franjas de la opinión nacional. Mientras tanto el ciudadano común y corriente no pudo sustraerse



a la idea de que los asesinatos de dirigentes y miembros de la U.P. era el ajuste de cuentas por deudas contraídas por los patrocinadores de la U.P. Los sectores que están tras la guerra sucia han usado a su favor esa confusión.

A finales de los años 70, por el mismo tiempo en que se ha identificado el punto de partida de la crisis de la izquierda surgió el movimiento FIRMES a raíz del compromiso de intelectuales, escritores, sindicalistas, en la realización de un plebiscito en favor de un solo candidato presidencial de la izquierda** Con FIRMES se revivía el antiguo proyecto de socialismo democrático

* Al respecto se esbozan apreciaciones pertinentes en el artículo de William Ramírez Tobón: Las fértiles semillas de la izquierda, en *Análisis Político* No. 10, mayo a agosto de 1990, págs. 37-47.

** Un esbozo de la trayectoria de FIRMES elaborado por Diego Montaña Cuéllar se puede leer en Gustavo Gallón Giraldo (compilador). *Entre Movimientos y Caudillos. Cincuenta años de Bipartidismo*, izquierda y alternativas populares en Colombia. CINEP-CEREC, Bogotá, 1989, págs. 172-181.

pero al tiempo y sin que ello apareciera a los ojos de sus protagonistas como contradictorio, se impulsaba el propósito de la *unidad de la izquierda*, idea que ha encubierto muchos contrabandos.

Pasada la etapa retórica de coincidencia en la "unidad de la izquierda" FIRMES se debilitó en las escaramuzas libradas entre los portadores de proyectos diferentes: liberalismo de izquierda, social democracia, socialismo democrático. Este último pareció prevalecer expresado en el liderazgo de Gerardo Molina, Diego Montaña Cuéllar, José Gutiérrez, Regueros Peralta y otros dirigentes. Sin embargo FIRMES no conquistó una base social y quedó reducido a un organismo de generales sin soldados. En esta condición FIRMES participó sin perfil propio en el FRENTE DEMOCRATICO bajo hegemonía comunista. Quizá era todavía temprano para que un movimiento como FIRMES aceptara la posibilidad de creación de una fuerza política que sobre una plataforma democrática encarnara la alianza constructiva de enfoques diferentes y de propuestas pluralistas.

No faltaron propuestas de "unidad de los revolucionarios". En mayo de 1984 surgió el movimiento *A luchar* en virtud de la confluencia de algunos sectores trotskistas, ML y camilistas. Esos esfuerzos de reificación de los radicalismos no podían aportar soluciones a la crisis de la izquierda, quizá dan un segundo aire a los antiguos dogmatismos que se van a mantener en las mismas zonas en las cuales han sobrevivido.

Al examinar la perspectiva de la izquierda no puede menos que dirigirse la mirada esperanzada hacia los diálogos de Caracas. No puede menospreciarse el hecho novedoso de la participación del ELN en las conversaciones. Si se analiza la historia reciente incluyendo la coyuntura de surgimiento de la U.P. se puede concluir que la paz y el ejercicio del diálogo han conformado para la izquierda el campo de inversión con más alta rentabilidad política.

Los resultados de los diversos procesos de paz ya culminados no pueden equipararse a los aspectos obtenidos en función de los acuerdos mismos. Si eso se tomara como rasero se tendría que convenir que los acuerdos serían la historia de los fracasos. Por ejemplo es conocido lo que los periodistas llamaron "el conejo" al M-19. Sin embargo lo que esta agrupación conquistó en poco tiempo es impresionante. Esos logros no fueron discernidos por los acuerdos, constituyeron el triunfo que la opinión le deparó a una organización que cuando optó por la paz venía del aislamiento político luego de los hechos del Palacio de Justicia y de un desempeño militar mediocre en la última etapa.

4. Las perspectivas

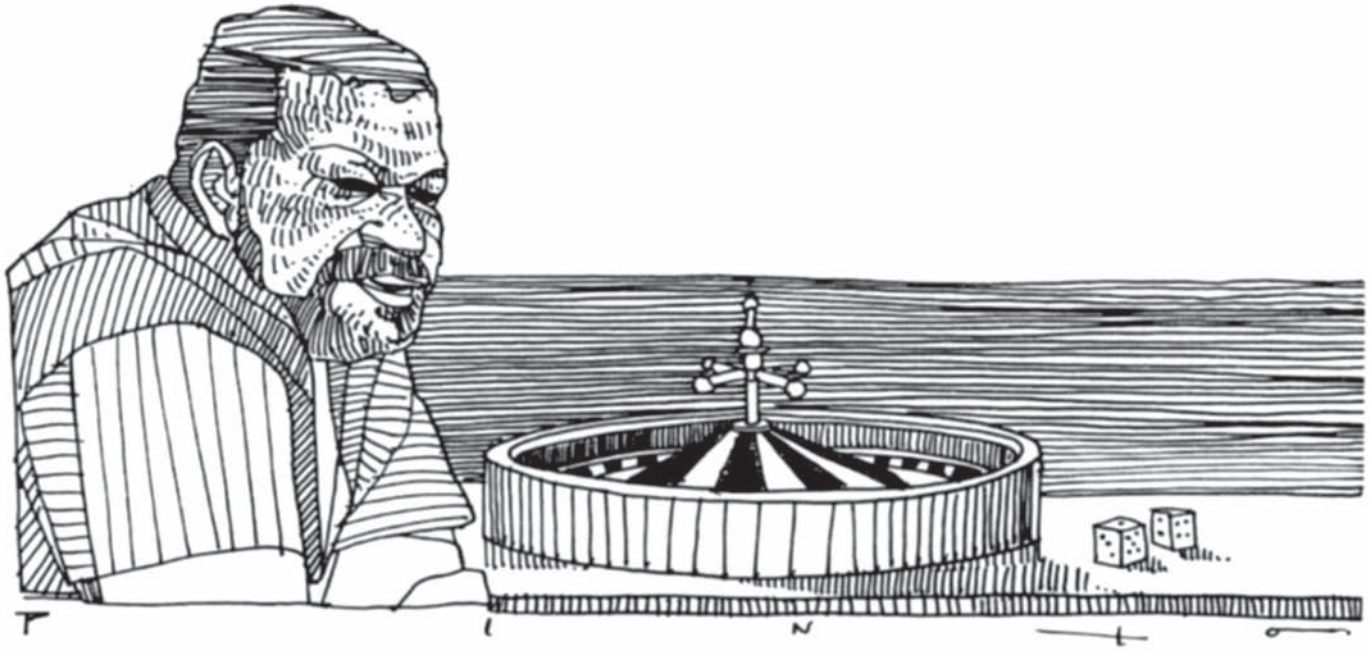
Si las negociaciones de Caracas conducen a un acuerdo con los movimientos guerrilleros más importantes no solamente se beneficiarán las fuerzas que han llegado a esas conversaciones. Se habrá ganado un clima nuevo para todos los sectores populares del país. La persistencia de la guerrilla es un fenómeno que afecta y crea hechos para todos los sectores democráticos independientemente de que ellos se distancien o condenen explícitamente la lucha armada.

En la última parte de estas notas se quisiera traer de nuevo a cuento la idea inicial: la izquierda no vive una crisis sino un proceso de disolución. No se descarta con esta afirmación que persistan sectores fieles a las viejas concepciones y devotos de los antiguos métodos. En una sociedad tan segmentada como la colombiana pueden sobrevivir grupos para los cuales el radicalismo resulte a la medida de su desesperación. Sin embargo la persistencia de una tal izquierda estará asociada a una marginalidad política irremediable.

Pero si lo que se tiene en cuenta es la idea de una izquierda con potencial de poder la perspectiva no es la de la recuperación sino la de la *construcción de la izquierda*. No se trata de armar de nuevo el rompecabezas con los fragmentos ya conocidos sino de la elaboración de una cartografía política nueva. Se debe trabajar con previsiones para no andar a ciegas pero a la vez con una disposición intelectual tan abierta que permita desechar las hipótesis si éstas no resisten el contraste con las duras realidades.

Actualmente es fácil encontrarse con enumeraciones prolijas de lo que se le prescribe a los colombianos para el futuro. No estoy seguro hasta dónde los enunciados, las frases, reflejen concepciones más o menos profundas. Puede tratarse del florecimiento de palabras. Al respecto habría que recordar aquella sentencia de estirpe hegeliana: "Allí donde falta un concepto, surge al punto una palabra". Por eso no se concluyen estas notas con listado sino más bien con el señalamiento de unos grandes temas que están actualmente presentes en los debates sobre el futuro.

1. Una nueva formación política. Por explicables razones hay quienes rechazan la forma partido como manera de organización política. Proponen otras modalidades de asociación política. Habría a este respecto que considerar que los partidos han sido centrales en la cultura política de los colombianos. No parece que la función de los partidos puede diluirse o distribuirse en la diversidad de los movimientos sociales y grupos de interés.



Hoy existe una *disponibilidad* para la participación política en amplias zonas de la juventud. Este es el dato fundamental en una iniciativa sobre una creación de un partido o movimiento político.

En AD-M19 se pasó de una fase de euforia sobre la posibilidad de creación de un partido o movimiento a una etapa de incertidumbre. Pesan demasiado en los dirigentes de AD-M19 sus antiguas experiencias organizativas. Por ello se tiene el hecho de las fuerzas que vienen de experiencias en la izquierda más preocupados por mantener su perfil que por incorporar a los nuevos sectores que van en busca de participación política. Quizá tienen un efecto paralizante la espera de acuerdos por arriba y la incidencia de imágenes fetichistas de "la unidad de la izquierda". Sería entonces más productivo que se extienda lo que viene dándose en algunas regiones: la construcción del movimiento político en la práctica. La formación política que en ese proceso puede surgir como estructura nacional se constituirá en una especie de razón social o de imagen comprensiva capaz de reflejar los anhelos y aspiraciones de franjas muy amplias y variadas de la sociedad colombiana. Esta labor de construcción, de organización, de elaboración teórica sería la garantía para evitar que lo logrado hasta hoy por AD-M19 no se desdibuje paulatinamente.

2. Una concepción de la democracia. Se ha avanzado en la elaboración de la idea de la democracia en su contenido político esencial: como el principio fundamental de legitimidad. El debate sobre la democracia restringida, sobre la desinstitucionalización que ha vivido el país han permitido identificar los aspectos básicos que debe comprender la democratización de Colombia en el plano político.

Gerardo Molina insistía siempre en una concepción tricotómica de la democracia: democracia política, económica y social. Es necesario extender la reflexión sobre el contenido de la democracia en los planos segundo y tercero. En países donde aún campean enormes, a veces monstruosas desigualdades económicas y sociales la *viabilidad* misma de la *Democracia sin adjetivos*, está vinculada a realizaciones en aspectos como la redistribución del ingreso, el control de la evasión fiscal, o el asunto históricamente aplazado de la reforma agraria. Todo ello debe dar lugar a un proyecto de desarrollo que combine convincentemente el crecimiento económico con la elevación del bienestar material y espiritual de la población.

3. La construcción de una izquierda nueva está asociada como es obvio a una comprensión amplia de la participación política. Antes el problema tendía a agotarse en el tema del partido o sus sinónimos, en el cual se subsumía la discusión sobre los movimientos sociales, culturales, etc. Si bien se ha avanzado en la aceptación de modelos polivalentes de participación queda aún mucho camino por recorrer en el plano de la elaboración de teorías sobre los movimientos sociales, culturales, los grupos de interés. Desde luego el esfuerzo es múltiple y no se restringe al plano teórico. La izquierda tendrá que implicar un conjunto de formas y mecanismos que inspiren y formen acti-

tudes y valores democráticos en el conjunto de la población.

4. Una cuestión metodológica. Cuando se insiste en la idea de la construcción de una izquierda nueva en Colombia se tiene en cuenta que la operación no se reduce a la adopción de nuevos "marcos teóricos". El país ha sido de determinada manera y tiene en el presente una configuración dada, un talante. Sin prosternarse ante los ídolos de los orígenes es preciso tener en cuenta el pasado y el presente como conjunto de limitaciones pero también como marco de posibilidades inexploradas. Si los proyectos, o si se piensa menos ambiciosamente, las propuestas, se formulan sólo a partir de su bondad intrínseca sin el necesario contraste con las realidades históricas al poco andar se habrán constituido nuevos dogmatismos e intolerancias.

5. Las concepciones sobre el poder. Con frecuencia se asocia la promoción de una fuerza política democrática a la llamada *vocación de poder*. Esta expresión no tiene un contenido claro. En la mayoría de los casos se usa en contextos en los cuales se alude a la necesidad de superar la condición marginal, periférica, que caracterizó a la izquierda tradicional con respecto al Estado. Otras veces el mismo enunciado se vincula a la incorporación inevitable o deseable del realismo o pragmatismo como elemento definitorio de cualquier *alternativa moderna* del quehacer político.

La izquierda colombiana pensó el problema del poder en términos de la *toma del poder*. La diferencia entre las diversas corrientes se manifestaron en otros aspectos tales como el tipo de estado o sociedad que se proponían los sujetos sociales y políticos del cambio, las vías para la toma o ascenso al poder (armadas o pacíficas, legales o ilegales).

Hoy una izquierda nueva está ante la necesidad de elaborar un pensamiento coherente sobre el poder y el proceso de su construcción. Superada la idea del "día de la revolución" emergen al primer plano las preocupaciones por el diseño de instrumentos mediante los cuales los ciudadanos con sus necesidades cotidianas y sus aspiraciones de futuro participen realmente en los procesos de toma de decisiones. De la misma forma aparece en el orden del día la discusión sobre el sentido, los objetivos e incluso el estilo de la participación de las nuevas corrientes democráticas en los espacios de poder tanto en el plano nacional como en el regional y local. Estas son cuestiones que demandan exigentes pero a su vez apasionantes esfuerzos de elaboración conceptual. La empresa de creación de nuevas ideas políticas no puede escamotearse sin correr el riesgo de que la política misma siga siendo el terreno de la maniobra audaz o de la habilidad de una retórica apenas renovada ●

Correos de Colombia
Adpostal

Estos son nuestros servicios utilicelos!

-SERVICIO DE CORREO ORDINARIO
-SERVICIO DE CORREO CERTIFICADO
-SERVICIO DE CERTIFICADO ESPECIAL
-SERVICIO ENCOMIENDAS ASEGURADAS
-ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO
-SERVICIO CARTAS ASEGURADAS
-SERVICIO DE FILATELIA
-SERVICIO DE GIROS
-SERVICIO DE ELECTRONICO BUROFAX
-SERVICIO DE INTERNACIONAL APR/SAL
-SERVICIO "CORRA"
-SERVICIO RESPUESTA COMERCIAL
-SERVICIO TARIFA POSTAL REDUCIDA
-SERVICIOS ESPECIALES

Teléfonos para quejas y reclamos:
334-0304
341-5536
Bogotá

Cuente con nosotros
Hay que creer en los correos de colombia

Fabio López de la Roche
Historiador y Politólogo, Investigador CINEP, Profesor Departamento de Historia Universidad de los Andes.

Crisis y renovación de la izquierda radical

Fabio López de la Roche

Introducción

El presente ensayo intenta plantear algunas ideas acerca de la cultura política de la izquierda radical en Colombia, su crisis y sus posibilidades de renovación.

Con el término "izquierda radical" hacemos referencia al conjunto de fuerzas políticas conformado por el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica (U.P.), el Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista, la Organización "A Luchar", y los grupos armados que integran la Coordinadora "Simón Bolívar" (el sector minoritario del Ejército Popular de Liberación E.P.L., el Ejército de Liberación Nacional E.L.N., y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia F.A.R.C.).

Reconociendo las distintas trayectorias históricas, las diferencias de estructura (partidos, movimientos, ejércitos), y los distintos matices ideológicos que han caracterizado a estas organizaciones políticas, nos parece que en la coyuntura actual hay una serie de elementos ideológicos, de actitudes y de posiciones que ellas comparten, que permiten considerarlas como un conjunto poseedor de cierta homogeneidad.

Abordaremos inicialmente la crisis de la noción de izquierda y de los proyectos izquierdistas y las redefiniciones que ella entraña.

Subrayando luego el proceso de transformación que vienen sufriendo las izquierdas en Colombia a partir de los dos últimos años, entraremos a mirar algunos aspectos de la cultura política de esta izquierda radical. Estos serán vistos a partir del análisis del Seminario Internacional "Socialismo: Realidad, Vigencia y Utopía", organizado del 10 al 13 de mayo de 1991 en la Universidad Nacional de Bogotá, precisamente por los sectores políticos arriba mencionados, con el apoyo de centros de investigación, revistas, escuelas de formación sindical y sindicatos, afines ideológicamente a dichos partidos y movimientos. La forma como transcurrió este Seminario arroja a nuestro modo de ver muchas luces acerca de la cultura política de masas de esta izquierda radical, e incluso sobre la de sus dirigentes. Este evento nos permitió observar ciertos lastres, como también potenciales aportes y posibilidades de la acción política de estos sectores de la izquierda colombiana.

Finalmente, y haciendo referencia a las posibilidades de renovación política e ideológica de la izquierda radical, intentaremos sugerir algunas posibles líneas de comportamiento desde el Estado y los sectores dirigentes, que podrían facilitar la vinculación creativa de estas vertientes a la vida democrática en Colombia y el encuentro de unas reglas del juego comunes y acatadas por los distintos actores de la vida política en nuestro país.

I. Crisis y redefinición de la noción de "Izquierda"

La crisis de los países socialistas del Este, del marxismo-leninismo como orientador de la práctica de construcción estatal en esas sociedades, la quiebra del sistema socialista con su ideología del internacionalismo proletario y el desprestigio universal de los proyectos estatalizantes de sociedad en una coyuntura de marcado predominio de las tendencias neoliberales, obligan actualmente a redefinir el conjunto de elementos que se asociaban tradicionalmente a "ser de izquierda".

El proceso de redefiniciones en la cultura política de la izquierda tiene que ver además, con la afirmación de opciones democráticas y pluralistas de sociedad, así como de organización interna de sus partidos y movimientos.

La noción de "izquierda" ha sido siempre bastante ambigua. Podríamos decir sin embargo, que "ser de izquierda" se asoció hasta hace muy poco a un conjunto de elementos, expresados en cada caso individual a través de múltiples matices y combinaciones: a) opción por el socialismo, b) adhesión al marxismo-leninismo o por lo menos al marxismo, c) reivindicación de la colectivización de los medios de producción, d) actitud anticapitalista y antimperialista, e) defensa de los intereses de los sectores populares, y f) actitud revolucionaria o por lo menos de adhesión a ideas progresistas o de avanzada.

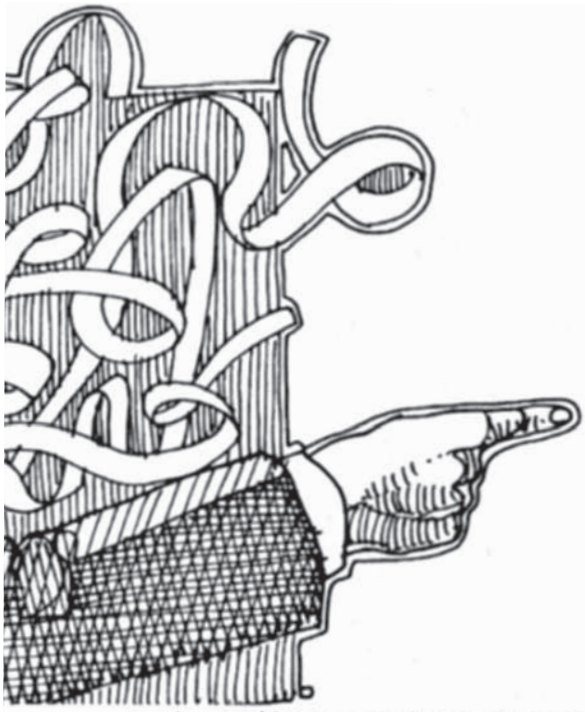
La crisis del socialismo y las tendencias internacionales arriba anotadas obligan a redefinir no sólo la noción de "izquierda", sino además, los proyectos políticos de sociedad defendidos tradicionalmente por las izquierdas.

En este punto aparecen necesariamente estas preguntas: ¿En qué socialismo estamos pensando a la luz de la quiebra del socialismo realmente existente? ¿Estamos siendo capaces de imaginar nuevas propuestas socialistas de sociedad? ¿Cómo integrar las necesidades de regulación estatal de algunas esferas de la vida social con la libertad política, la libertad de iniciativa económica y las necesidades de justicia social? ¿Es defendible a la luz de las tendencias actuales, la tradicional concepción de "revolución social" como reestructuración *total* de la vida económica, social y cultural? ¿Han sido y pueden ser el marxismo o el marxismo-leninismo en sus distintas variantes, garantes de la construcción de un orden cultural

plural y con plenas posibilidades para el desarrollo integral de los seres humanos? ¿Es defendible la dicotomía, tradicionalmente operante al interior del pensamiento de la izquierda marxista, entre capitalismo y socialismo? ¿Es igualmente defendible, a la luz de la crisis del socialismo como crisis *también* de un proyecto ético de sociedad, la asociación en la conciencia utópica de izquierda, de capitalismo a crisis de valores y depravación, y de socialismo a "hombre nuevo" y a una superior moralidad? ¿Podemos continuar pensando en moralidades colectivas asociadas mecánicamente a ciertas formaciones económico-sociales?

¿Será que todas las señoras colombianas están tendiendo a convertirse en "amas de Icasa", pensando solamente en ¿cómo "icopintar" sus casas y que las familias de clase media están todas inmersas en el modelo de "casa, carro y beca"? ¿Será imposible acaso que en Colombia, país capitalista y además dependiente, puedan darse *hombres nuevos*? ¿Qué validez tiene, en las circunstancias de crisis del sistema socialista mundial, y a la luz de la interdependencia como característica de las relaciones internacionales contemporáneas, la insistencia de algunos sectores de izquierda en la idea de una "segunda independencia" y en los tradicionales lineamientos liberacionistas y antimperialistas? ¿Cómo integrar la necesidad de interdependencia, y el inevitable pragmatismo de ella resultante, con una política exterior soberana, propicia al logro de mayores márgenes de autonomía?

Son estos, a nuestro modo de ver, sólo algunos de los interrogantes que plantea el actual momen-



to a los partidos y movimientos de izquierda, a sus intelectuales y "buscadores" de alternativas de desarrollo social.

II. Las transformaciones en la cultura política de las izquierdas

El conjunto de la izquierda colombiana viene experimentando, con distintos ritmos y a partir de la historia ideológica y organizativa propia de cada una de sus vertientes, un proceso muy interesante y acelerado de transformación política y cultural.

Este proceso tiene que ver no sólo con la influencia de la crisis de los socialismos del Este, sino también con la quiebra del movimiento guerrillero como opción de transformación total de la sociedad colombiana, y con el rechazo por la población de la violencia como instrumento de la acción política.

El proceso de redefiniciones en la cultura política de la izquierda tiene que ver además, con la afirmación de opciones democráticas y pluralistas de sociedad, así como de organización interna de sus partidos y movimientos.

De otro lado, está relacionado con un intento de acercarse culturalmente al país colombiano y a su idiosincrasia por parte de una izquierda, donde a excepción del M-19 y de algunas vertientes intelectuales socialistas, primó durante muchos años una formación dogmática y extranjerizante, la ausencia de una concepción original sobre el país, un lenguaje distante del sentir de las grandes mayorías, de las realidades del país urbano, del desarrollo de los medios de comunicación, del mundo espiritual y de las expectativas de las clases medias, y aún de numerosos sectores populares que no se han sentido representados por el movimiento político de izquierda.

III. El Seminario "Socialismo: Realidad, Vigencia y Utopía", como expresión de la cultura política de la izquierda radical

En opinión de los organizadores, la realización de este evento respondía a la necesidad de evaluar la experiencia socialista este-europea, de "ver la propia experiencia latinoamericana y colombiana en cuanto a desarrollos políticos alternativos al capitalismo" para "forjar un criterio propio sobre estas experiencias". Se partía del reconocimiento de que se estaba pasando por "un momento de confusión y de dispersión de la izquierda" y de que en medio de tal situación "no hay suficiente información en el movimiento popular". Se quería entonces —al decir de los organizadores— "un evento donde no hubiera cortapisas a la discusión"[1].

El conjunto de la izquierda colombiana viene experimentando, con distintos ritmos y a partir de la historia ideológica y organizativa propia de cada una de sus vertientes, un proceso muy interesante y acelerado de transformación política y cultural.

1. Palabras de Luis Eduardo Celis, miembro de la Comisión Organizadora del Seminario, en reunión convocada el 20 de mayo por el autor en el auditorio del CINEP, y gentilmente aceptada por los miembros de la Comisión, para evaluar críticamente el desarrollo de dicho evento. A esta reunión asistieron, además de Luis Eduardo Celis, del Instituto Nacional Sindical (INS), Luis Humberto Hernández y Julián Aguirre, de la Fundación para la Investigación, la Cultura, y la Educación Popular (FUNDICEP), Pilar Trujillo, de CESTRA, Juan Escobar, del Centro Gaitán, y Ricardo Rojas y Enrique Gómez, de la organización y coordinación del evento. Estuvieron presentes además, Jaime Caicedo, del Partido Comunista, Landolfo Espinoza, ponente nicaragüense por el Frente Sandinista de Liberación Nacional al Seminario, Pablo Tatay del Movimiento Indigenista Quintín Lame, y observadores y analistas independientes, asistentes al Seminario, como el economista Eduardo Hernández y el Director de la Fundación "Centro de Estudios Nacionales e Internacionales" CENIT, José Alcibíades García. Nos acompañó también Fernando Jaramillo economista e investigador del CINEP, quien nos presentó de manera sintética las distintas interpretaciones y posiciones de la izquierda latinoamericana ante el fenómeno de la apertura económica.

Una buena parte de las ideas aquí expuestas, fue planteada y discutida en la citada reunión, que constituyó un diálogo franco y respetuoso, no obstante las diferencias allí expresadas.

A pesar de los buenos deseos de algunos de los organizadores que querían que esta reunión fuera un espacio importante para la reflexión y para la relación creativa entre sectores intelectuales y el movimiento popular, el Seminario terminó siendo una mezcla extraña entre estos buenos propósitos y los intentos deliberados de la gran mayoría del público asistente y de parte de la organización del evento, de *sentar una posición* ante la apertura económica, la "social-democracia", la AD M-19, la lucha armada y los procesos de reinserción de los movimientos guerrilleros desmovilizados, y la situación del socialismo en Cuba[2].

1) El Seminario y la siembra en algunos del gusanito de la duda

Para esta cultura de las certezas y seguridades, y de la adhesión a principios, propia de la izquierda marxista-leninista colombiana, cultura puesta en evidencia y zarandeada por la perestroika soviética y por las transformaciones en las sociedades socialistas este-europeas, varias de las intervenciones hechas en el Seminario tuvieron el efecto saludable de sembrar el gusanito de la duda y de contribuir a matizar las posiciones políticas e ideológicas de sus militantes.

La intervención del español Ignacio Alvarez Dorronsoro sobre "La Crisis del Marxismo", la de Hugo Fazio sobre la historia soviética en el presente siglo o la de Heidrum Zimecker sobre la experiencia socialista en Alemania Oriental posibilitaron quizás por primera vez que un buen conjunto de militantes de base recibiera ciertos elementos de juicio sobre la problemática interna de los países socialistas, que una presentación tradicional notoriamente apologética de su desarrollo y reductora de éste a una "marcha triunfal", había impedido conocer.

En el panel dedicado a Europa del Este y realizado en el auditorio de la Facultad de Derecho se presentó un hecho muy curioso que evidencia la importancia de realizar estos diálogos y de confrontar diversas lecturas de la historia y del presente.

La intervención de Luis Fernando Macías "El Ocaso de un Imperio", que resultó ser una andanada de adjetivos condenatorios de la perversa burocracia soviética y demostrativos de la maldad ingénita de Stalin, generó la protesta del público

2. Julián Aguirre, discrepando de nuestra opinión, afirmaba en la reunión evaluativa, que el Seminario "no se concibió como tribuna para afirmar una posición política".

que se sintió agredido por el tono y la avalancha de epítetos que salían de boca del expositor. Enseguida vino la exposición de Hugo Fazio sobre la historia soviética contemporánea, muy ecuánime, argumentada y problematizante. Fazio mostró cómo muchos excesos de la época de la colectivización en la agricultura no podían atribuirse solamente a las características de la personalidad autoritaria de Stalin, sino que había que observarlos en un contexto de lucha de clases entre el campesinado pobre y el campesinado enriquecido durante los años de vigencia de la Nueva Política Económica (NEP).

No obstante haber interpretado muchos la ponencia de Fazio como una defensa sutil del stalinismo, o a pesar de que otros encontraron en ella argumentos para reafirmarse en la visión ortodoxa de la historia soviética, la confrontación de estas dos exposiciones resultó muy saludable para la gente, pues mostró dos actitudes distintas de relación intelectual con la historia y con el conocimiento, y la necesidad de una aproximación a los hechos capaz de problematizar y de mostrar la complejidad de la realidad.

Otras ponencias como la de Darío Botero sobre el tema de "Humanismo y Socialismo" o la del autor del presente ensayo, sobre la historia de la izquierda colombiana de 1960 a 1990, generaron mucha polémica y dividieron las opiniones del auditorio. Creo que en medios culturales tan endógenos como han sido los de los partidos y movimientos marxista-leninistas en Colombia, es muy importante que se sepa de la existencia de *otras* lecturas de la historia, tan respetables como las propias. Me parece que en estos medios la presentación de versiones distintas a las tradicionales, así no genere consenso, puede suscitar un cierto reconocimiento del derecho a un pensamiento diferente, y sembrar así la semilla de la duda y de la búsqueda.

Otras intervenciones como la del nicaragüense Landolfo Espinoza, muy crítica con la experiencia del sandinismo en el poder, y las realizadas en el panel sobre "La izquierda y las perspectivas socialistas", en el cual participaron el Partido Comunista, el M-19, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Movimiento Quintín Lame y el Partido Comunista (marxista-leninista), posibilitaron un intercambio de ideas inteligente y atento, en medio del ambiente general del Seminario donde tal tipo de diálogo no fue precisamente la nota predominante, como veremos después.

De todas formas, al Seminario asistió una franja minoritaria pero importante de militantes de la izquierda radical, que no está contenta con lo que se tiene y que quiere encontrar luces en medio de la crisis de la teoría y la práctica del socialismo.

2) El predominio de la emotividad dogmática sobre la reflexión

Este Seminario que congregó a más de 1.300 personas de procedencia político-partidaria, de organizaciones sindicales y movimientos sociales, parecía más un mitin que un seminario. Primó allí la emotividad dogmática por sobre la reflexión y el diálogo respetuoso. Las consignas coreadas durante las plenarias por buena parte del público ("alerta, alerta, alerta que camina, la lucha guerrillera por América Latina", y otras por el estilo) traían a la memoria escenas del accionar izquierdista de los setenta con su ortodoxia ideológica y su radicalismo discursivo.

Pablo Tatay, subrayó en la reunión de evaluación del Seminario, cómo pese a una cierta intención crítica y "de escuchar otras cosas", y no obstante un "esfuerzo de diálogo y de comprensión" que se dio allí de parte de un sector del público asistente, el evento constituyó "un acto de fe de los sectores más ortodoxos de la izquierda colombiana frente al socialismo", donde primó "la parte dura, más emotiva, de reafirmación, poco abierta a la reflexión y a la discusión". Hizo énfasis además en "lo difícil de lograr esa síntesis entre academia y bases políticas frente a la tradición política colombiana". Refiriéndose a la manera en que opera esa tradición en el seno de la izquierda radical, anotó cómo "cada evento lo organiza un grupo para su grupo y trae sus simpatizantes. Ningún sector tiene la tradición de escuchar a sus opositores".

En algunos auditorios para hacer alguna intervención crítica había que mirar muy bien alrededor, palpar el potencial de censura del público, y de dedicarse a hablar, medir muy cuidadosamente las cosas a decir. Alcibíades García se refirió en la evaluación a ese "auditorio candente", "no preparado para el debate", donde "no se aceptaban posturas contrarias a lo que se esperaba oír".

La actitud de los asistentes al panel sobre Cuba merece un comentario. El panel contaba con el atractivo de la presencia de Pablo Guadarrama, filósofo cubano, de la Universidad de las Villas, un hombre bonachón y simpático, de muy buen recibo entre la gente de izquierda, generalmente procubana. Los sindicalistas y militantes allí congregados se me asemejaron mucho a los asistentes a una misa: estaban reunidos en un acto de comunión, en un acto de fe en la revolución.

La intervención de Guadarrama sobre la situación cubana resultó una intervención simple, lineal, con algunas anécdotas jocosas en medio de un tono marcadamente oficialista. Subrayó que "pluripartidismo no es necesariamente sinónimo de democracia", que "pluralismo no es igual a

multipartidismo", y defendiendo el régimen unipartidista y monopólico del poder existente en la isla, afirmó que en Cuba, "aunque hay un solo partido, existe el pluralismo en la sociedad".

En la ronda de intervenciones pedí la palabra, y previa percepción del nivel de comunión allí existente, armé cuidadosamente mi argumentación. Expresé al expositor que si bien pluripartidismo no necesariamente era sinónimo de democracia, la democracia sí tenía que ver con la posibilidad de libre creación de partidos en una sociedad. Agregué que me gustaría saber su opinión sobre el caso nicaragüense, donde desde el inicio de la revolución su dirigencia planteó un modelo de pluralismo político e ideológico, economía mixta y no alineamiento internacional. Recordé al público que el día anterior el expositor nicaragüense se había referido autocríticamente a la gestión del sandinismo durante los años en el poder, y afirmé que yo estaba seguro que cuando el Frente Sandinista volviera al poder, muy probablemente lo haría mejor, y que por eso era muy importante en una sociedad la existencia de la competitividad política.

Guadarrama se reafirmó en su idea de Cuba como una sociedad pluralista y desde su lógica respondió a la pregunta sobre Nicaragua diciendo que el caso cubano era distinto, y que además, "el compañero Fidel había previsto los problemas que iba a tener ese modelo".

Ante tal posición y la actitud de satisfacción de la concurrencia con la respuesta, resolví no insistir en lo que no podía ser más que un diálogo de sordos.

Después de responder Guadarrama, pidió la palabra uno de los presentes, militante político o quizá sindicalista de base, y a título de respuesta y de *posición* ante mi intervención, dijo así en forma breve y contundente: "En los Estados Unidos, hay dos partidos, y en últimas domina el capitalismo. En Colombia, la misma cosa, dos partidos, el Liberal y el Conservador, y en últimas el que manda es el capitalismo".

No puedo no decir que su intervención me produjo un desgarramiento interno. Ella me hizo sentir en toda su crudeza la peligrosidad de la autosuficiencia dogmática y de la utopía no cultivada. Confieso que sentí una profunda conmoción pues vi en esa actitud la gravedad del analfabetismo político del pueblo colombiano, representado allí en esas bases sindicales y partidarias. Un pueblo al que ni los partidos políticos tradicionales ni los partidos políticos de izquierda se han preocupado de *educar políticamente*. Educar, en el mejor sentido de la palabra, y no adoctrinar.

Con respecto al tema de la izquierda y la actitud procubana, creo que la solidaridad incondicional con Cuba ante la hostilidad norteamericana y una actitud de nacionalismo latinoamericanista, ha dificultado durante mucho tiempo la conformación en el seno de las izquierdas latinoamericanas de una actitud crítica ante la historia contemporánea y los problemas de la sociedad cubana. La solidaridad y el reconocimiento de los indudables logros sociales de los cubanos debidos a la revolución, han impedido ver y hacer conciencia de las limitaciones a la democracia política, de la homogeneización marxista-leninista de la cultura y de la vida ideológica, del autoritarismo y de los fenómenos de sacralización del Partido y de Fidel y sus efectos negativos en la cultura política. Esa solidaridad total ha impedido también que las militancias izquierdistas conozcan otras versiones de la historia cubana, distintas de la que reciben a través de "Granma", de los discursos de Fidel o de los periódicos oficiales de sus partidos. Trabajos y ensayos serios y argumentados como los de Richard Fagen (The Transformation of Political Culture in Cuba), Jorge Edwards (Persona Non Grata), Tad Szulc (Fidel, un retrato crítico), o la excelente historia en tres tomos del inglés Hugh Thomas (Cuba: la lucha por la libertad), han sido escasamente conocidos —si tal vez lo han sido— por el militante izquierdista medio, más educado en una tradición de adhesiones fideístas, que en el librepensamiento, en el gramsciano "escepticismo de la inteligencia", o en el llamado del propio Marx a "ponerlo todo en duda".

3) Una acción política al margen del conocimiento concreto y del debate franco sobre la realidad

Además de la solidaridad incondicional con Cuba, que llevó a que uno de los oradores participantes en la clausura hiciera un llamado "a los compañeros cubanos" para que mantengan "la vitalidad y la frescura de la experiencia socialista"[3], otras constantes en la actitud de los asistentes al Seminario fueron la anatematización de la apertura económica, de la "social-democracia", de la AD M-19 y de los procesos de reinserción del M-19 y del EPL a la vida civil.

Ante la apertura primaron las condenas discursivas, y no se percibió un intento de pensar los

3. Intervención de Héctor Moncayo en la clausura del Seminario.

Uno se pregunta necesariamente qué tipo de relación con la información mundial es el que alimenta tal valoración de la situación cubana. ¿Será que podemos mantener la incondicionalidad con Cuba y con Fidel en base al trillado argumento de que lo que nos llega sobre Cuba es "fruto de la propaganda burguesa"? — F. L.

eventuales aspectos positivos de la misma. Lo paradójico es lo inocuas que resultan estas actitudes en una correlación de fuerzas bastante desfavorable al movimiento popular, donde la apertura se impone y las izquierdas, en lugar de responder con imaginación y con creatividad ante la política de internacionalización de la economía y ante la reforma laboral, lo hacen con una ineficaz retórica ideológica. Llama la atención que mientras el Estado se prepara desde varias de sus instituciones previendo líneas de sustitución de ciertos cultivos eventualmente afectables por la apertura, las izquierdas y el movimiento popular carecen de recursos informativos y técnico-políticos que les permitan abordar estos procesos superando la percepción ideológica de los mismos, y obtener un mayor margen de beneficio para el campo popular.

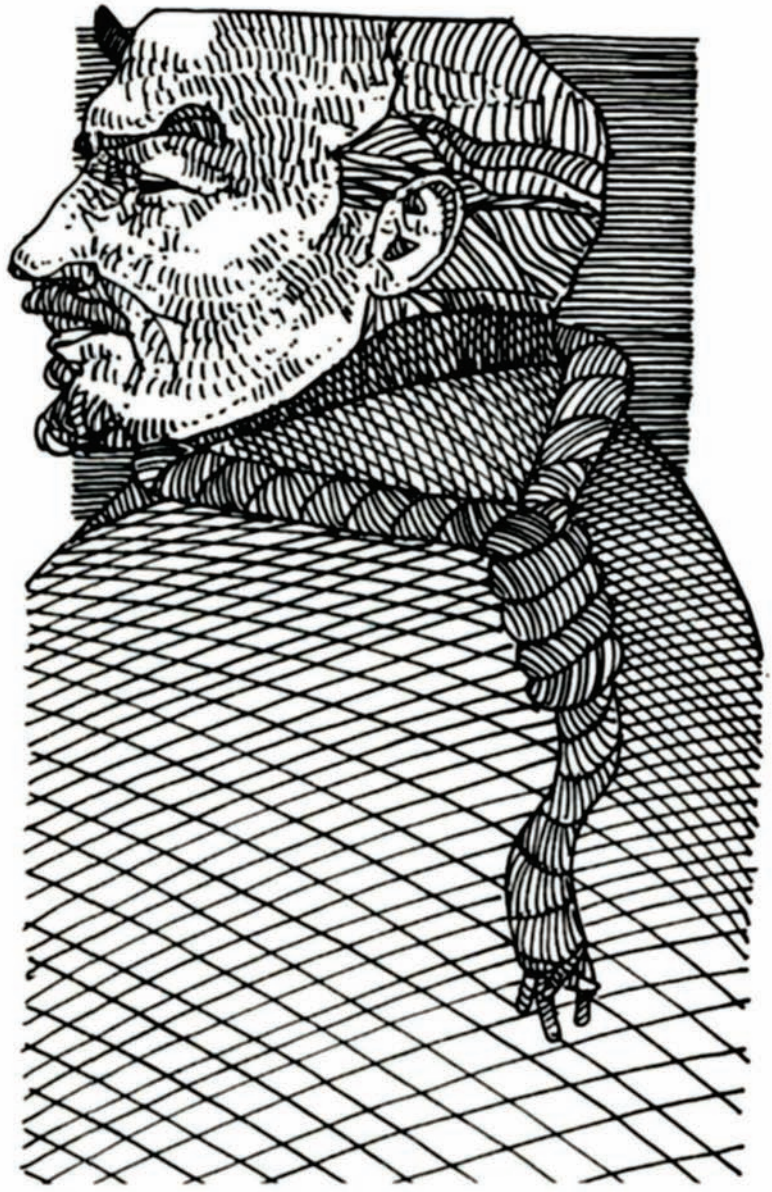
Otro fenómeno que adquirió en el seminario unas dimensiones casi míticas fue la "social-democracia". Ella se asocia en la visión maniquea de nuestra izquierda ortodoxa a traición de los ideales socialistas. El cubano Guadarrama la denominó ingenuamente —a la luz de una coyuntura no precisamente favorable a las tendencias anticapitalistas— "el taller de reparaciones del capitalismo".

Lo curioso era constatar que ninguno de estos militares que intervenían de manera vehemente contra la "social-democracia" podía argumentar sólidamente acerca de las realizaciones y carencias o la trayectoria histórica concreta de la social-democracia en los países europeos o en América Latina.

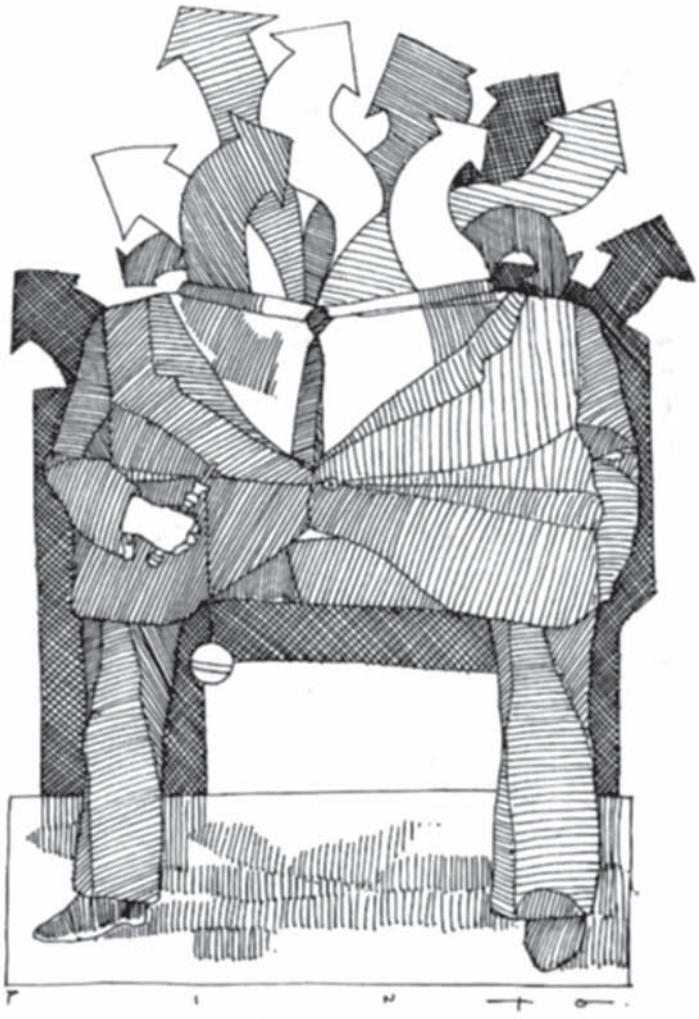
De acuerdo con esa visión, a la AD M-19 se le asoció permanentemente con la "social-democracia", se le desvinculó de "la izquierda" y se le ubicó como un nuevo partido tradicional. No se vio ningún intento de matizar, de rastrear por ejemplo, los posibles efectos de la inclusión del EPL, del PRT o de los Círculos Bernardo Jaramillo en el juego político interno de la Alianza Democrática, o de ver las distintas vertientes coexistentes al interior de la militancia proveniente del M-19.

Los procesos de reinserción a la vida civil del M-19 y del EPL fueron presentados como una entrega incondicional del movimiento armado. No se valoran suficientemente las concesiones del gobierno (económicas, de favorabilidad política, de seguridad), ni lo que va de la *entrega* de armas de fines de los 50 a la *dejación* de armas por el Ejército Popular de Liberación en 1991.

Detrás de estas tomas de posición, se encuentra una defensa acrítica y emotiva de la lucha guerrillera, que prescinde de una valoración de las distintas dimensiones de la crisis de la lucha armada



como opción de transformación de la sociedad. Tal visión no se pregunta por ejemplo, acerca de la contribución de la guerrilla a la militarización de la vida colombiana y a la perpetuación de la lógica de la intolerancia y de la retaliación en nuestra cultura política. Tampoco se cuestiona sobre los efectos de la táctica de la combinación de todas las formas de lucha en la criminalización del movimiento popular y en el estímulo a la guerra sucia contra sindicalistas, maestros y militantes de la izquierda. Parece no interesarle además, la opinión de la población colombiana acerca de la guerrilla, y la crisis de ésta como proyecto ético. Aquí creemos necesario decir que la izquierda no puede seguir asumiendo una política ambigua ante la defensa de los derechos humanos. Esta tiene que



ser integral y universal para merecer el respeto y el respaldo de la sociedad: no se puede defender los derechos humanos de los sindicalistas y de los militantes de izquierda y no defender los de los industriales y los hacendados víctimas del secuestro o del boleteo con el argumento de que estos son "burgueses" o "explotadores".

Concluyendo este punto, diríamos que preocupa mucho este tipo de "toma de posiciones" como recurso de la cultura política de la izquierda radical. Tal proceder no sólo es fuente de enormes equivocaciones —al adoptar posiciones ignorando las situaciones reales de aquellos actores o situaciones ante los cuales se toma una actitud—, sino además, factor de marginalidad que impide su desarrollo como opción política de masas y confina a la izquierda a una situación de ghetto. La acción política termina reducida a la actitud contestataria y las posibilidades de enriquecer la vida política nacional a partir de una sintonía creativa con las opiniones de las gentes se desperdician en aras de la fidelidad a los principios concebidos como absolutos.

4) La subvaloración y el menosprecio de la democracia política

Merece un especial comentario la intervención en la clausura del Seminario, de Héctor Moncayo, de la Revista "Opción", por ser quizá la versión más heterodoxa de esta izquierda radical. En una brillante oratoria con ciertos acentos críticos del dogmatismo izquierdista, hizo inteligentes apuntes y observaciones sobre algunos fenómenos, de cuya interpretación sin embargo intentaré de manera argumentada discrepar.

Criticó Moncayo a aquellos para quienes "el liberalismo y las formas de la democracia representativa eran un ideal trascendental de la humanidad". Comparando el proceso político colombiano con el caso chileno señaló agudamente que "aquí la oferta de la democracia representativa no seduce ni arrastra", y se refirió con cierto menosprecio a la Constituyente y a "la ilusión del nuevo orden constitucional".

La primera afirmación parece no tener en cuenta que una de las premisas para la construcción de un socialismo democrático es la existencia de un estado de derecho, y que la negación de éste por los sistemas políticos autoritarios del "socialismo real" (el cubano incluido), posibilitó durante muchas décadas la proscripción de la oposición, las violaciones a los derechos humanos, la represión de la libre expresión y el funcionamiento parcializado del sistema de justicia. Olvida también que ese estado de derecho y esa democracia representativa son parte de la herencia democrática universal que un proyecto socialista debe necesariamente retomar y enriquecer, con otros niveles cualitativos de democracia política, y con nuevos contenidos en términos de democracia económica y social.

Esta desconsideración hacia los mecanismos formales e institucionales de la democracia política, tan característica de la izquierda ortodoxa colombiana, expresa la debilidad de nuestra cultura democrática y una cierta incapacidad para asimilar las lecciones de los autoritarismos latinoamericanos recientes: la gran mayoría de izquierdistas radicales colombianos parecería necesitar de un golpe de estado y de una consecuente dictadura militar al estilo de las del Cono Sur, para poder entonces valorar el significado de la democracia representativa y del estado de derecho (aún con todas las atrofias de este último en el caso colombiano).

La comparación con Chile entraña sin duda una buena dosis de verdad: es un hecho la gran diferencia entre los dos países en cuanto a la percepción e interiorización por la población de su tradición

civilista, para no hablar de las inocultables ambigüedades de esa tradición civilista en Colombia[4].

La diferencia entre quienes nos consideramos demócratas civilistas y la posición de Moncayo, estaría en que, reconociendo esa debilidad de la sociedad civil colombiana y todas las ambigüedades de nuestra tradición civilista, no nos montamos sobre esa debilidad y sobre la parte autoritaria de nuestra tradición política, para justificar una supuesta vigencia de la lucha armada en 1991 y fustigar —sin proponer ninguna salida realista— la posibilidad de configurar un nuevo orden jurídico acatado por todos y unas nuevas reglas del juego que presidan la convivencia de los colombianos.

Reconocemos que tenemos una sociedad civil débil y desorganizada, de lo cual es responsable en gran medida nuestra tradición de violencia. Pero aceptamos lo anterior con miras a superar tal orden de cosas, con la conciencia de la necesidad de fortalecer el tejido civil de nuestra sociedad y de restarle espacio a cualquier tipo de manejo militarista de nuestras relaciones sociales. Comprendemos además, lo inaplazable que es hoy día la configuración de una nueva cultura jurídica, donde la ley no sea una norma formal instrumentalizada para beneficio personal por todos los actores políticos y sociales, sino la expresión de un acuerdo sincero para la convivencia colectiva, respetado por todos y cuya inobservancia entrañe la sanción social y legal de quien lo infrinja.

Otra idea bastante reiterada en la intervención, fue la crítica a los antiguos intelectuales de izquierda incorporados hoy día al establishment. Habló entonces del "movimiento pendular de las clases medias intelectuales" y fustigó a los antiguos marxista-leninistas que hoy abrazan "el modelo liberal (mal llamado social-demócrata) renegando del socialismo (o de lo que entendían por socialismo)".

La crítica de Moncayo prescinde de una consideración importante: del por qué tantos y además brillantes intelectuales de izquierda han terminado en las filas de los partidos tradicionales. Olvida que muchos de ellos se alejaron de los partidos de izquierda debido al dogmatismo, y a la intolerancia e instrumentalización de que eran objeto por parte de las organizaciones izquierdistas. No tiene en cuenta además, que varios de ellos, talentosos y por ende conscientes de sus posibilidades y aspiraciones legítimas de progreso social y personal, salieron de la izquierda por la imposibilidad de hallar allí un espacio para la individualidad, y porque no tenían precisamente vocación de marginalidad, vocación de parias, que era la alternativa más frecuente para el militante de izquierda de hace algunos años, en parte por el antizquierdismo y el anticomunismo del sistema político, pero en gran medida también por el mismo carácter de ghettos o de capillas que tenían las propuestas partidistas de la izquierda.

5) Dos reivindicaciones importantes de la izquierda radical

Hay dos reivindicaciones importantes desde las vertientes políticas aquí analizadas que se expresaron reiteradamente durante el Seminario. Una primera tiene que ver con la redefinición de las relaciones Fuerzas Armadas-Sociedad y con la necesidad de depuración de las primeras. La Unión Patriótica y el Partido Comunista, víctimas principales de la guerra sucia, han venido esgrimiendo de manera solitaria y casi heroica esta reivindicación, ante el insuficiente compromiso de los partidos tradicionales y de la AD M-19 con una política de fortalecimiento del poder civil, de reformulación democrática de la concepción de la seguridad nacional y de erradicación de los grupos paramilitares y demás agentes de la violencia privada.

El no abordaje de estos problemas por parte de la Asamblea Nacional Constituyente es una de las grandes omisiones en términos de creación de unas nuevas premisas para el entendimiento nacional y para el juego limpio en nuestra vida política.

El heroicismo y la denuncia valiente por el PC y la UP de las vinculaciones de miembros de las Fuerzas Armadas a las violaciones de los derechos humanos, si bien han contribuido a un cierto conocimiento por la opinión de tales hechos, entrañan paralelamente un grave problema: parten de una visión que plantea su relación con las Fuerzas Armadas en términos de confrontación total e irreconciliable, que las concibe de manera caricaturesca como una institución monolítica y títere, manipulada desde el Pentágono[5], y que maneja en su relación con ellas un discurso marcadamente impolítico de condena moral. Tal visión, no tiene en cuenta suficientemente la necesidad de una estrategia *política*, de fortalecimiento institucional, jurídico y político a mediano y largo plazo del poder

4. Sobre esto ver el capítulo 'Ambigüedades de nuestra tradición civilista' en mi ensayo "Cultura Política de las Clases Dirigentes en Colombia: Permanencias y Rupturas", en López de la Roche, Fabio, *Ensayos sobre Cultura Política Colombiana, Controversia*, Nos. 162-163, CINEP, Bogotá, 1990, pp. 184-191.

5. Ver la caricatura de "Calarcá", en el Semanario "Voz", prototípica del antimperialismo dogmático y mecanicista, Edición 1646, *Semana* del 27 de junio al 4 de julio de 1991, Bogotá, p. 5.

civil —a la cual debe integrarse todo un conjunto de sectores civilistas de la sociedad—, y de reducción de la autonomía del poder militar.

Pero quizá lo más grave es que esa visión de condena moral de los militares no deja margen para un desbloqueo de la confrontación y para el encuentro de salidas políticas viables. Por el contrario, refuerza las posiciones radicales y el anticomunismo visceral de algunos sectores de las fuerzas armadas.

Una segunda reivindicación está relacionada con la necesidad de precisar los contenidos económicos y sociales que la democracia requiere en nuestro país. Muchas de las distancias que estas fuerzas políticas adoptan frente a la Alianza Democrática M-19 y ante los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, tienen que ver con el escaso compromiso de la nueva fuerza de centro-izquierda con la democratización económica y con los intereses y expectativas de las mayorías pobres de nuestra población, así como con la precaria figuración en el nuevo texto constitucional de mecanismos claros de redistribución económica y de democratización de la propiedad.

Sin pretender demeritar en lo más mínimo la importancia de la democracia política, del reconocimiento de la pluralidad y de la creación de un clima para la convivencia respetuosa con las minorías étnicas, políticas y religiosas, es un hecho real que los pobres no viven, ni pueden alimentar a sus hijos —en términos materiales— de tolerancia ni de pluralismo. Más aún, la creación de ciudadanos, respetuosos de la legalidad y capaces de asumir esos valores políticos democráticos, está relacionada en buena parte con la posibilidad de ser *ciudadanos sociales*, de acceder a ciertos niveles elementales de bienestar y de seguridad económica y social.

Superados hoy día los esquemas estatalizantes de la economía y de expropiación y de colectivización de los medios de producción, se abre un vasto campo a la imaginación para pensar fórmulas alternativas de democratización económica y social. Esta podría ser una apuesta interesante en un eventual proceso de redefinición de la cultura política de la izquierda radical, que lleve a la sociedad en su conjunto y a los sectores privilegiados en particular, a hacer conciencia de las *dimensiones económicas y sociales de la reconciliación nacional*.

IV. Posibilidades de renovación de la izquierda radical: necesidad de redefiniciones internas

Nos parece que sin una relectura crítica de muchos de los aspectos problemáticos aquí esbozados, será muy difícil la renovación.

Ahora que se insinúa la posibilidad de crear una nueva fuerza política de izquierda a partir de una eventual culminación exitosa de los acuerdos de paz con la Coordinadora Guerrillera "Simón Bolívar", habría que prestarle especial atención a todos estos aspectos que han hecho de la cultura política de la izquierda radical en buena medida una auténtica subcultura, una cultura de ghetto. Hay que superar por ejemplo, una concepción de la política en términos de *amigo - enemigo* ("estás conmigo o estás contra mí"), que permea fuertemente esta cultura política izquierdista. Esta concepción olvida que la política es el arte de integrar, de unir cada vez más personas alrededor de una concepción de la política, y no precisamente el arte de granjearse cada vez más enemigos y de autosegregarse.

Genera molestia, al leer la prensa comunista, la permanente estigmatización de quienes por X o Y razón decidieron abandonar el PC, la UP o el viejo proyecto del EPL e incorporarse a otras opciones ideológicas y partidarias[6]. La posibilidad de un militante de izquierda de vincularse al gobierno, al Partido Liberal o al Conservador, a la AD M-19 o a cualquier otra vertiente política, es una opción legítima y tan respetable como la de ingresar al Partido Comunista o a la UP.

Las posibilidades de crecimiento de un partido como opción política poco ganan de tal actitud maniquea ante las disidencias y de refugio en un purismo ideológico cada vez más anacrónico y marginal.

Otro aspecto que tiene que ser redefinido es la relación con los intelectuales. Sin tolerancia hacia ellos, sin pluralismo y democracia ideológica interna, sin respeto por su individualidad, sin una política capaz de conferirles un lugar importante en la organización y dirección del desarrollo político y cultural de una organización, es difícil que ésta crezca y se fortalezca en su capacidad de interpelar a la sociedad acerca de sus problemas fundamentales.

Hemos venido observando en los últimos tiempos al interior del PC una oleada de deserciones de

6. Ver por ejemplo la referencia de "Voz", en su columna "Cuentas Claras", al "ex-comunista, ex-FARC, ex-EPL, ex-esperanza, Bernardo Gutiérrez", Edición 1643, *Semana* del 6 al 12 de junio de 1991, p. 4. Ver también en "Revolución", Organo Central del Partido Comunista de Colombia Marxista-leninista, (sector de Caraballo, no acogido a los acuerdos de paz — F. L.), la foto de Antonio Navarro y del constituyente por el EPL, Jaime Fajardo, cenando juntos, y el correspondiente pie de foto alusivo a su carácter de "socialdemócratas", No. 397, del 24 de junio al 7 de julio de 1991, p. 3.

los intelectuales, que en lugar de ser enfrentada con condenas morales, podría ser objeto serio de reflexión por parte de la dirigencia y de las bases de dicha organización política.

V. Posibilidades de renovación de la izquierda radical: necesidad de cambio en otros actores de la vida colombiana

Las posibilidades de transformación de la cultura política de la izquierda radical dependen en gran medida de la transformación de la cultura política de otros actores de la vida colombiana.

El desbordamiento permanente y el funcionamiento incontrolado de los militares dentro del sistema político es una de las causas de que este último sea percibido —y no solamente por las fuerzas de izquierda— como un sistema en gran medida ilegítimo.

A los militares, imbuidos de un espíritu de cuerpo muy similar al de los militantes comunistas, encerrados como estos también en su propio ghetto, parece importarles muy poco el problema de su legitimidad a los ojos de la población. Carentes de unos referentes colectivos válidos para ubicar su acción en el marco de unos auténticos propósitos nacionales, retoman en las intervenciones de sus altos mandos por los medios de comunicación, el gastado formalismo discursivo del viejo país jurídico colombiano: "estamos para la defensa de la vida, honra y bienes de los asociados" es su respuesta-frase de cajón, generalmente muy secos y en actitud de molestia ante las preguntas de los periodistas. Mientras tanto, por los mismos medios de comunicación los colombianos observan cómo esos "asociados" (campesinos humildes, basuriegos u opositores políticos de izquierda) mueren todos y cada uno de nuestros días en ciudades y campos del país, en muchos casos por la acción delictiva de miembros subalternos de las fuerzas armadas o de las instituciones de policía.

Estamos urgidos en nuestro país de un acercamiento franco entre el estamento castrense y la sociedad, que permita replantear con claridad la función de las fuerzas armadas en nuestro sistema democrático, avanzar en la configuración de una concepción propia, colombiana, de la seguridad nacional, y en la conformación de unas fuerzas armadas y de policía apreciadas y respetadas por la población, en virtud de su acatamiento real del ordenamiento jurídico democrático, de su capacidad de servicio a la ciudadanía, y de su probidad y profesionalismo.

Se necesita adelantar al mismo tiempo un proceso de educación y en muchos casos de reeducación democrática de ciertos sectores de las fuerzas armadas y sobre todo de los así llamados "organismos de inteligencia". Es paradójico que mientras en el país se produce una apertura democrática, y

sectores políticos provenientes del movimiento armado realizan hoy una sincera autocrítica a su pasado y reconocen haber sido un factor de violencia y agente de violaciones a los derechos humanos[8], desde los organismos de seguridad, militares y de policía no se esté produciendo una adecuación a las nuevas condiciones de la apertura política. Para nadie es un secreto que desde estas instituciones continúan reproduciéndose inercial sino deliberadamente, valoraciones y actitudes excluyentes y macartistas ante el dirigente sindical, el activista político de izquierda o el militante comunista. Con frecuencia en tales visiones se diluyen muy fácilmente las fronteras entre "sindicalistas" e "izquierdista", entre "sindicalista", "izquierdista" y "subversivo", o entre "comunista", "izquierdista" y "desechable".

Necesitamos además, redefiniciones democráticas serias al interior de los partidos tradicionales, los cuales han permitido la coexistencia en su seno de sectores civilistas y democráticos con sectores clientelistas propensos al recurso al asesinato político, al paramilitarismo y a la utilización privada de la fuerza pública.

Los historiadores, preocupados por la absurda repetición de tantos episodios trágicos y graves en la historia reciente del país, no quisiéramos tener que ver más muertos bajando por las aguas del Cauca o del Magdalena, nuevos amnistiados "quebrados", nuevos "boleteos" y "secuestros" justificados por una cada vez más desprestigiada revolución, nuevos "pájaros" o matones oficiales reencauchados en nuevas denominaciones, y el *círculo vicioso de la mala fe* una vez más reeditado en nuestra vida contemporánea.

Hoy día, parecen haber hecho crisis, tanto aquel proyecto revolucionario que lanzaría a la burguesía en calidad de exiliada a la Florida, como aquella otra visión excluyente que le negaba a los guerrilleros o a los militantes izquierdistas un lugar en el seno de la patria, y la posibilidad de aportar a su mejoramiento.

Es por eso que necesitamos ahora mucha más *transparencia* en el juego de todos los actores políticos y sociales. Una transparencia que parta de unos nuevos referentes colectivos, que permitan trascender las visiones mezquinas y particularistas del país, ir extirpando la violencia como compenente real y simbólico de la nacionalidad, y canalizar todas las fuerzas puestas hoy día al servicio de la intolerancia, de la retaliación y de la muerte, en beneficio de la vida, de la paz y de la reconciliación nacional entre los colombianos.

7. Ver mi artículo "El Reencuentro del EPL con la Sociedad", en *Revista Análisis*, No. 5, CINEP, Bogotá, abril de 1991.

AHORA NOS TOCA A NOSOTROS

La Constitución de 1991, una caja de herramientas para construir la nueva democracia en Colombia

CAJA de Herramientas

Viva

1991

"La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento"

Una propuesta de Viva la Ciudadanía:

CONTRA LA POBREZA

"El gobierno nacional pondrá en funcionamiento, por un período de cinco años, un fondo de solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia de la República. Este fondo financiará proyectos de apoyo a los sectores más vulnerables de la población colombiana. El fondo deberá buscar, además, recursos de cooperación nacional e internacional".

LIBERTADES Y PODERES CIUDADANOS EN LA NUEVA CARTA
página 3

SI HAY MAL QUE DURE CIEN AÑOS
página 5

PARTICIPACION: DERECHO AL DERECHO
página 7

Herramientas:
...O COMO JUGAR A LA RAYUELA CONSTITUCIONAL... página 9

COLOMBIA SIN LIMITES
página 13

Construir el nuevo país que queremos todos los colombianos exige algo más que información.

Hacer de la nueva Constitución un pacto de participación, solidaridad y justicia requiere de la creatividad, la reflexión y la acción conjunta de los ciudadanos.

Fortalecer la democracia como una actitud, una cultura y una ética política es un propósito que pasa por la deliberación, la tolerancia y la apertura en las ideas.

La Campaña **Viva la Ciudadanía** edita y distribuye **Caja de Herramientas** para hacer de estas palabras realidades presentes y futuras.

Caja de Herramientas es una forma alternativa de hacer comunicación pedagógica, periodismo y análisis del contexto político nacional.

Recíbala gratuitamente escribiendo o llamando a
Caja de Herramientas
Cra. 28 bis No. 51-74 Santafé de Bogotá
Tels.: 2486653 - 2492930

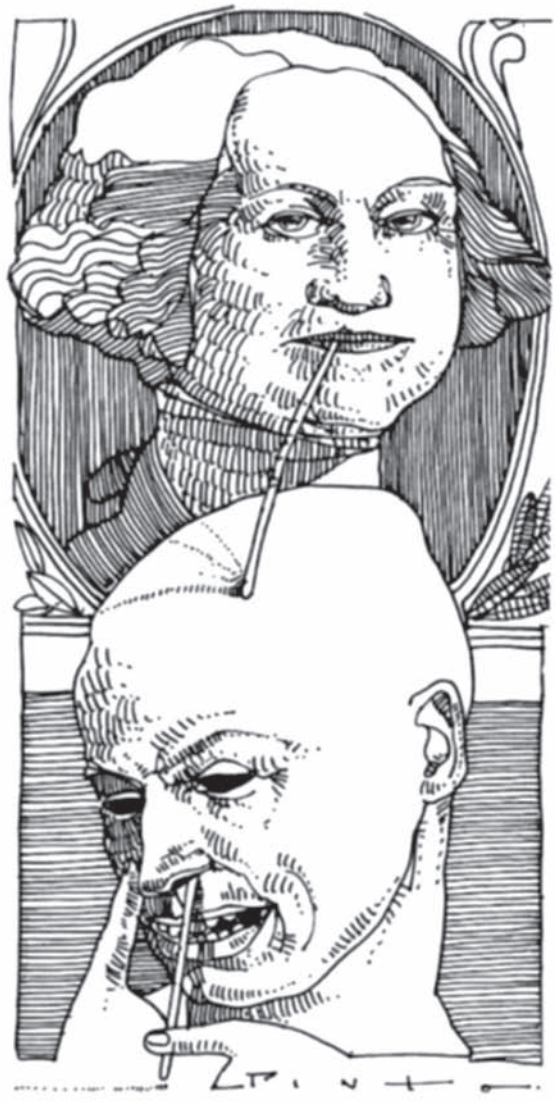
Alvaro Camacho Guizado
Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y de Foro Nacional por Colombia

Cinco tesis sobre narcotráfico y violencia en Colombia

Alvaro Camacho Guizado

I. El "problema" del narcotráfico es producto de la lógica imperial[1]

El nuevo planteamiento internacional acerca de que la raíz del narcotráfico es el consumo por parte de la población de los países capitalistas avanzados es un primer paso en un posible proceso de transformar la mirada tradicional, y de desviar la atención acerca de la "culpabilidad" de Colombia en la situación. Que este punto se haya puesto sobre la mesa de discusión ha sido un éxito parcial del gobierno colombiano, puesto que tiende a convertir así el estigma anterior en un activo a su favor. Aún así, el conjunto de las medidas nacionales, en lo que respecta a política interna y a las relaciones entre Colombia y los demás países involucrados en el asunto, siguen dirigidas a erradicar la producción y exportación. Es decir, de las declaraciones internacionales a los hechos hay una sensible distancia. Sin embargo, no parece tan claro que el problema consista solamente en el "consumo", tal como lo han sostenido algunos gobiernos, conferencias internacionales y parte de la prensa internacional, entre otros. Aparte de minimizar el papel de la banca y los sectores financieros de los países avanzados en el lavado y apropiación de fondos provenientes del negocio[2], este planteamiento ha llevado a encontrar un "culpable" en la población consumidora: bien aquélla que comparte uno o varios rasgos que la hacen aparecer como desviada de los cánones éticos dominantes y por lo mismo portadora de algún estigma social: racial, nacional, ocupacional u otros y que es consumidora de derivados baratos de la cocaína, bien aquélla otra que por su posición social y económica no es estigmatizada pero sí se ampara, para consumir la cocaína más pura en la ideología liberal que impide al Estado regular procesos de la vida privada de los ciudadanos[3]. Esto oscurece y disimula tanto la dificultad de los poderes



1. Ponencia presentada al Seminario Internacional sobre Narcotráfico celebrado en St. Antony's College, Oxford, mayo de 1990. Estas notas recogen algunos textos previos y sólo pretenden sistematizar mis propias ideas, y de allí su forma sintética. Es claro que algunas afirmaciones tienen el carácter de supuestos mientras que otras son simples hipótesis que requerirían mucha más sustentación e intigación empírica.

2. Cfr. Penny Lernoux, *In Banks we Trust*, Garden City, New York: Anchor Press, 1984; Ethan A. Nadelman, "Víctimas involuntarias: consecuencias de las políticas de prohibición de drogas", en *Debate Agrario*, Lima: Cepes, No. 7, págs. 127-164; José Steinsleger, "Los paraísos financieros: el caso de Panamá", en Diego García-Sayán, editor, *Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes*, Lima: Comisión Andina de Juristas, 1989.

3. Randy E. Barnett, "Curing the Drug-Addiction. The Harmful Side Effects of Legal Prohibition", en Ronald Hamowy (editor), *Dealing with Drugs. Consequences of Government Control*, Lexington, Mass.: Lexington Books, 1987.

institucionales de realizar su tarea de integrar plenamente a su población y de garantizar una vida social en la que tal consumo deje de ser necesario como mecanismo de desarrollo de lo lúdico, evasivo, euforizante, estimulante laboral, etc. como los conflictos ideológicos, filosóficos y políticos a que se enfrentan las políticas prohibicionistas de consumos. Es decir, en esas sociedades esta dualidad se traduce en la simultaneidad de la represión, la tolerancia y el estímulo de tales consumos.

Esta incapacidad de controlar los hábitos de uso de drogas de la población consumidora se extiende a las diferentes esferas que constituyen las "microfísicas del poder": no solamente las instituciones políticas, sino las familiares, educacionales, laborales, es decir, aquéllas que controlan la vida cotidiana. Pero también se relaciona con la dimensión de la producción y distribución, tanto de drogas como de algunos de los insumos de origen industrial que entran en el proceso productivo, cuya comercialización también deja enormes márgenes de ganancia. Allí entran en consideración elementos como las pugnas por su manejo entre consorcios financieros legales y organizaciones informales, subterráneas, ilegales (y peor aún, algunas de ellas extranjeras), lo que se traduce en falta de control tributario y fiscal, éxodo de divisas y, muy especialmente, incapacidad de establecer monopolios del gran capital legal en los dos momentos del negocio.

No hay que olvidar que la cocaína es uno de los poquísimos productos cultivados, manufacturados, transportados y, al menos parcialmente, distribuidos por grupos sociales que están fuera del control de la economía institucionalizada de los países desarrollados, y que aunque una parte importante de las ganancias no llegue a los países productores, sus mayores beneficiarios, la banca, los emporios financieros internacionales y las mafias estadounidenses tienen mecanismos de evasión tributaria en todos los países en que operan[4].

Este doble juego de paradojas y tendencias opuestas ilustra la gran confrontación existente entre una lógica económica que exige el dominio sobre una mercancía de consumo y una legalidad y una ética que se erigen como sus obstáculos. En la historia de las prohibiciones (del café, el tabaco, la ginebra y otras variedades de alcohol) se encuentran algunas claves que permiten este tipo de interpretación[5]. Esta historia de las prohibiciones ilustra igualmente la tendencia a buscar los enemigos en el exterior, a partir de la ideología del "enemigo externo", del virus invasor que ataca a un cuerpo sano y que es preciso erradicar.

Pero al mismo tiempo que el gobierno colombiano intenta plantear unos nuevos términos para el examen del problema, en su acción apuntala las definiciones y prescripciones oficiales norteamericanas y acepta desempeñar el papel de peón de brega en la lucha, desarrollando una guerra interna en la que el Estado colombiano es el vicario de la lógica imperial. Este en su retórica ha internacionalizado el problema, pero en su acción ha contribuido a interiorizarlo.

II. El problema del narcotráfico es el problema de la violencia

El narcotráfico lleva implícita la violencia, pero ello no significa que necesariamente ésta sea siempre e inexorablemente utilizada. En Colombia más de una práctica económica ha estado al margen del control estatal, por su ilegalidad o por la imposibilidad de ser controlada, y algunas han tenido la violencia como su correlato, como el contrabando o la producción clandestina de alcohol. De hecho hay una cierta continuidad de actores entre la actividad esmeraldífera, el contrabando de bienes de consumo y el narcotráfico. Pero otras economías "informales" pueden subsistir pacíficamente a pesar de su ilegalidad. La violencia del narcotráfico se activa a partir de tanto de sus continuidades históricas como de las condiciones sociales específicas que asume en Colombia y la manera como se relaciona con el Estado colombiano y con la lógica imperial. Ella se adiciona, superpone e interactúa con las otras violencias que campean en la sociedad colombiana en lo político, lo económico, lo privado y familiar, y en sus múltiples expresiones se manifiesta tanto desde la actividad como contra ella[6]. En otras palabras, esta compleja interacción se traduce en la ambivalencia en las conceptualizaciones y propuestas de solución del problema.

En su despliegue esta violencia se diversifica y asume al menos tres direcciones: 1) hacia su propio interior (intra o inter-mafias); 2) hacia las barreras que se colocan directamente a su desarrollo (funcionarios del Estado o políticos opositores a su existencia); o 3) hacia quienes pretendan modificar el orden social global en el cual se realiza la actividad (como lo han mostrado las acciones contra sectores de la izquierda armada y desarmada y dirigentes populares y sindicales rurales). Esta última se desarrolla también paralelamente con la adquisición de tierras y expansión territorial por algunos narcotraficantes, a partir de masivos desalojos de campesinos y colonos y de los cuerpos armados que supuestamente los protegen.

Pero también en contra de la actividad se desarrollan prácticas violentas: la conversión de algunos narcos en enemigos públicos prioritarios se ha traducido en que se ha tendido a enfrentarlos a partir de la violencia, y

4. Ver Steinsleger, *op. cit.*; Nicolás H. Hardinghaus, "Droga y crecimiento económico; el narcotráfico en las cuentas nacionales", *Nueva Sociedad*, No. 102, julio-agosto 1989; Ronald Hamowy, "Introduction: Illicit Drugs and Government Control", en Hamowy, *op. cit.*

5. Richard Blum *et al.*, *Society and Drugs, Social and Cultural Observations*, San Francisco: The Dorsey Press, 1973; Berthold Laufer, *Introduction of Tobacco into Europe*, Chicago: Field Museum of Natural History, 1924; Egon Corti, *A History of Smoking*, Londres: G.G. Harrap and Co. 1931; Thomas Szasz, "The Morality of Drug Controls", en Hamowy, ed., *op. cit.*

6. Comisión de estudios de la violencia, *Colombia: violencia y democracia*. Bogotá: Universidad Nacional, 1987.

las posibilidades de otras formas de confrontación se ven crecientemente reducidas.

Y simultáneamente en la lucha contra el sicariato que en gran medida se ha nutrido de dineros de narcos, algunos cuerpos armados del Estado recurren a métodos típicos de escuadrones de la muerte, realizando labores de limpieza en las que no todas las víctimas son identificables como sicarios. Paradójicamente, no se observa la misma preocupación y eficiencia en la confrontación con los grupos paramilitares rurales, otra supuesta creación de los capitales mafiosos.

La primera de estas expresiones tiene actores claramente delimitados y controlados por la actividad narcotraficante: se trata de violadores de códigos internos, torcidos, incumplidos, soplones o fracasados en tareas específicas. Es, pues, una violencia relativamente circunscrita, altamente organizada y productora de un sistema de lealtades y justicia que van en contrapelo de todas las conquistas jurídicas civiles y democráticas que en este campo se han logrado. La segunda es lógica e históricamente la respuesta al cierre de espacios políticos, la persecución y la guerra desatada por el Estado. Su peculiaridad consiste en que ha producido magnicidios y mostrado que para algunos narcotraficantes no hay límites de escrúpulos éticos cuando se trata de conservar el negocio y ampliar sus órbitas de acción. Si la primera es una violencia contra la libertad de comercio, ésta es más específicamente contra el monopolio estatal de la legalidad y la justicia, al tiempo con su control por parte de los partidos y figuras tradicionales del poder. La tercera es la forma más primitiva de hacer ganancias económicas y políticas y conservar e incrementar privilegios, e implica una congruencia objetiva con quienes consideran que el comunismo y la subversión son los enemigos principales, pero que por sus circunstancias particulares no están en condiciones de ejercer violencia contra éstos. Bajo el manto de la autodefensa y la lucha contra la guerrilla se cubre una violencia contra la democracia y la

búsqueda de la igualdad y la superación de injusticias sociales.

La situación de hoy en día en Colombia parece indicar que las dos últimas formas de violencia dominan sobre las demás y se relacionan cada día más estrechamente con respuestas de igual o mayor significación. La opinión pública se encuentra sacudida por los constantes magnicidios cometidos contra dirigentes democráticos, representantes del Estado, el establecimiento político e inclusive contra quienes desde su interior luchan por un cambio en la política antidroga, en especial contra el tratado de extradición. El "narcoterrorismo" contra el Estado, sin embargo, no debe hacer oscurecer la tendencia a que la violencia anticomunista y antisubversiva se acelere, se desborde y se independice del narcotráfico, involucre mayor número de personas y se dirija contra la población más desprotegida: el campesinado y algunos de sus representantes, o dirigentes populares urbanos víctimas de las campañas de limpiezas, propiciando así un nuevo enfrentamiento que rememora la década de los cincuenta. Bajo la sombra de la lucha contra la insurgencia armada se oculta el proceso de amedrentamiento y aniquilación de los movimientos populares reivindicativos.

Estas formas de violencia de ninguna manera son por lo tanto exclusivas del narcotráfico: se dan en áreas rurales y ciudades donde éste no parece ser dominante: en ellas se ligan sectores de las Fuerzas Armadas, organizaciones clandestinas urbanas, terratenientes (narcotraficantes o no), grupos campesinos, comerciantes locales, políticos y soldados de fortuna, quienes constituyen la avanzada de la conformación de una "Contra" preventiva, que de continuar en su dinámica actual, y a pesar de posibles diferenciaciones internas, se puede convertir en una versión colombiana de la "Arena" salvadoreña. En algunas de estas organizaciones se gesta la verdadera narcoguerrilla, a diferencia de la inventada por algún embajador norteamericano en Colombia, y el reflujo actual de varias de ellas parecería ser momentáneo, y no se puede excluir de manera alguna su futuro como fuerza aglutinante de diversos sectores políticos y sociales en el país.

Aunque algunos narcotraficantes usan indiscriminadamente el terrorismo, las masacres y el magnicidio, éstos no son su monopolio; en sus expresiones actuales se pueden detectar varias modalidades: una primera la constituyen las acciones contra los oleoductos e instalaciones mineras en las que hay inversión extranjera, y cuya autoría reivindica el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta misma organización comparte con otra, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) la práctica de hacer matanzas colectivas de grupos campesinos supuestamente informantes del Ejército o desleales a las respectivas organizaciones. Hay también bases lógicas y empíricas para pensar que la colocación de carros-bombas en sitios poblados bien puede servir para reducir la potencial neutralidad de amplios sectores de la población que no se han visto involucrados en la contienda entre el Estado, el narcoterrorismo y las fuerzas armadas insurgentes, en cuyo caso se puede pensar que o bien se pretende dificultar aún más cualquier negociación o reducción de la lucha gubernamental contra los carteles, o bien se busca ablandar la posición gubernamental frente a éstos. Pero el magnicidio puede también ser utilizado para liquidar representantes de fuerzas democráticas y progresistas bajo el supuesto de que hoy día cualquier forma de terrorismo es automáticamente adscrita a los capos de la mafia: se pretende así desembarazarse de esas "amenazas" de la izquierda al tiempo que se amedrenta a la población y se propicia un mayor endurecimiento en la acción antisubversiva estatal.

III. La estructura del narcotráfico no es unitaria ni homogénea

A pesar de la magnitud del problema, de lo mucho que se ha escrito sobre él, debemos confesar que hay aún zonas del mismo en las que reina una profunda ignorancia. No conocemos certeramente las verdaderas dimensiones de su economía; sabemos poco sobre sus organizaciones internas, el grado de monopolio sobre el tráfico, sobre sus vinculaciones con otras organizaciones delincuenciales u otras actividades sociales. Aunque hoy día se reconoce la existencia de dos organizaciones paralelas y en permanente confrontación, hay una creciente evidencia, sin embargo, de sustanciales diferencias entre varias organizaciones traficantes, de estructuras internas diferenciadas, de jerarquías que coexisten con independencias, de manejos disímiles de la violencia y las presiones sobre el resto de la sociedad.

Se ha tratado de vincularlo orgánicamente con las fuerzas insurgentes armadas; de responsabilizarlo de acciones subversivas y desestabilizadoras en todos los campos de la vida social. Si bien algunas de estas vinculaciones pueden tener bases lógicas, y hasta empíricas, lo cierto es que no ha sido posible documentar inequívocamente todas ellas, y se ha dado curso a una fantasía que ahonda las dificultades para un examen concienzudo y consecuentemente un enfrentamiento menos errático y torpe que los que se han puesto en práctica. Las descripciones no comprobadas de la naturaleza de las organizaciones han consolidado una imagen de invencibilidad que cierra las puertas a cualquier opción de pacificación. Su ubicación como aliado orgánico de las guerrillas ha tenido como propósito deslegitimar a estas últimas, y como efecto el retardar algunas posibles gestiones de acción política y precipitar una solución de tipo militar. Y esta última a su vez más parece una guerra convencional antiguerrillera que una acción policial contra delincuentes "comunes". En fin, por erráticas e improbadas que sean, las imágenes estimuladas han tenido como resultado una tendencia a pensar que sólo la guerra a muerte está a la orden del día.

Pero de otro lado, el asesinato constante, el terrorismo ubicuo, el "narcofascismo", dan pie no sólo para configurar esas imágenes, sino para hacer hipótesis en torno del modelo de sociedad con que algunos narcos operan, y que de muchas maneras debe reproducir las condiciones internas de sus propias organizaciones: el ánimo de lucro como objetivo principal, el secreto, la arbitrariedad, la falta de escrúpulos, la jerarquía incuestionable, la obediencia ciega, la defensa a ultranza de la propiedad privada, las armas como recurso de razón, ley y libertad. Si este es el tipo de sociedad a que aspiran, y si la legitimidad apuntala esos valores, las opciones para la sociedad colombiana son bastante inciertas.

Los autodenominados extraditables, que parecen constituir solamente un sector minoritario dentro de la diversidad de grupos traficantes, al tiempo con su violencia, han declarado reiteradamente su interés por desmantelar su negocio y vincularse a una vida abierta y "normal"[7]. A pesar

7. Ver Anónimo, *Un narco se confiesa y acusa*, Bogotá: Editorial Colombia Nuestra, 1989; Mario Arango, *Impacto del narcotráfico en Antioquia*, Medellín: Editorial J.M. Arango, 1988, y la entrevista concedida por Gonzalo Rodríguez Gacha a Hernando Corral y que fue abusivamente entregada por un tercero a la revista española *Interviú*. Posteriormente a la muerte de Rodríguez Gacha la entrevista fue parcialmente reproducida por *Semana*.

de lo contradictorio que estas dos tendencias puedan sonar, y de que el momento actual les es completamente adverso, ya el proceso se ha iniciado, sin que se sepa a ciencia cierta si se habla honradamente al ofrecer el abandono del tráfico. La generalización del lavado de capitales, y el que amplios sectores de la población estén involucrados en las dimensiones legales de sus actividades, ha ido produciendo condiciones favorables para que al menos algunos de ellos, especialmente los que aparentemente no recurren a la violencia en forma abierta y desembozada para el logro de sus objetivos, avancen en su proceso de integración social.

Lo anterior, al menos como hipótesis, arroja algunas dudas sobre la naturaleza homogénea y sin fisuras de las organizaciones narcotraficantes. Se puede especular acerca de la naturaleza de sus conflictos internos y de las posibilidades de que ellos emanen de pugnas por el control del negocio, pero también se puede sospechar que tales conflictos estén basados en contradicciones precisamente en torno del proceso de legitimación social. Es posible que algunos la busquen mediante recursos tomados de las prácticas guerrilleras: es decir, un golpe fuerte al enemigo para precipitar negociaciones; y que otros consideren que la mejor manera de mantener un "perfil bajo" para que el tiempo se encargue del proceso. Otros, en fin, pueden acariciar pretensiones de triunfo y consolidación de proyectos sociopolíticos autónomos. Y otros pueden simplemente acumular fortunas suficientes para abandonar la actividad antes de que la suerte les sea adversa. Finalmente los puede haber que consideren la alta rentabilidad por encima de todo y continúen con el negocio, independientemente de cualquier otra consideración.

IV. El narcotráfico tiene un peso específico en el proceso de cambio social

Los capitales del narcotráfico han servido tanto para redistribuir ingresos como para incrementar la concentración del capital. Las inversiones y consumos de los traficantes irrigan dineros en múltiples sectores sociales, y han creado o estimulado muchos oficios a partir de sus demandas y ofertas[8]. Se ha impulsado así, especialmente en algunas ciudades y regiones, una cierta movilidad social que contribuye a que se rompan los moldes tradicionales de la estratificación social, y que despierta resistencias

8. Un amplio *dossier* sobre la economía del narcotráfico se encuentra en *Economía Colombiana*, Nos. 226-227, febrero-marzo de 1990.

por parte de sectores que tradicionalmente han estado a la cabeza del poder y los privilegios sociales. Paralelamente ha interactuado con una nueva cultura urbana que glorifica el despilfarro, los consumos conspicuos, el envilecimiento de formas de relacionarse socialmente, la arrogancia, la ausencia de recato[9]. Constituyen una especie de novedad en la tradicionalmente pacata sociedad colombiana, sólo que el tipo de gestión social que realizan permite pensar en una forma verdaderamente premoderna de insertarse en ella: a través de la capacidad de comprar lealtades por el amedrentamiento o la irresistible oferta económica. Simultáneamente esta irrigación de dineros establece una vinculación objetiva de los beneficiarios con los originadores del gasto legal, pero de origen incierto, independientemente de las valoraciones éticas que al respecto se puedan construir. Este fenómeno acelera una ambigüedad moral generalizada en el país, que mezcla el repudio del narcotráfico con su aceptación, y explica parcialmente la falta de apoyo masivo a la guerra desatada por el gobierno colombiano.

Uno de los efectos más notables de esta ambigüedad es el haber dado oportunidad para que algunas organizaciones e individuos se conviertan en portadores de un código ético radical según el cual cualquier tratamiento del problema del narcotráfico que excluya el combate frontal es inmoral. Estas posturas intransigentes tratan de forzar una solución que significa la guerra abierta contra el narcotráfico, y no deja de haber una paradoja en esto, pues si bien las banderas morales enarboladas tienen como base el combate a la violencia de los narcotraficantes, la propuesta no es menos violenta, lo que configura una situación en la que a la guerra sucia del narcotráfico se le opone una guerra santa de los propietarios de la moral.

Paralelamente, y muy especialmente en las áreas rurales, la actividad económica de los narcotraficantes se ha caracterizado por la inversión agropecuaria que valoriza las propiedades rurales, acelera la circulación monetaria, eleva los niveles de renta y las utilidades del comercio e incrementa los beneficios de los grandes propietarios rurales de las regiones aledañas[10]. Su equipamiento militar y su forma peculiar de conservar el orden local propician mayor protección y seguridad a los propietarios contra las amenazas a la economía terrateniente, a la vez que facilitan y aceleran la expropiación masiva de pequeños propietarios campesinos.

Estos procesos socioeconómicos, anudados con la modernización del país y las diferentes violencias, están estimulando un proceso de fragmentación social en el que paralelamente con los esfuerzos del Estado para incrementar su control sobre la sociedad, se conserva el conjunto de poderes privados que han impedido la monopolización del Estado sobre la fuerza y la justicia. En la organización interna de los aparatos judiciales, parlamentarios, burocráticos, partidistas, de inteligencia y militares, se han consolidado prácticas dirigidas a fortalecer este proceso de quiebra estatal: la ruptura del estado de derecho no proviene solamente de la subversión que lo reta abiertamente. El privilegiar esta última como causal ha conducido a que se dé prioridad a políticas dirigidas a acentuar las dimensiones represivas y autoritarias, en desmedro de las tareas asociadas con la democratización de la vida ciudadana y el fortalecimiento de los derechos humanos y las garantías sociales, políticas éstas que siguen siendo a pesar de todo claves en la retórica gubernamental. De esta manera se impide el proceso de consolidación de una sociedad civil democrática que no tenga que recurrir a la violencia para el planteamiento y solución de conflictos sociales.

En estrecha relación con lo anterior se encuentra hoy una transformación sustancial de la sociedad colombiana, y que se revela en un proceso que aparece acelerado de pugnas entre "instituciones tutelares". Aunque éste se pueda matizar al argüir que la Iglesia y la religión católica, la "fe en la democracia", la "potencia moral" que es Colombia, los partidos políticos tradicionales, han operado como ideologías más especialmente en el plano de lo simbólico-expresivo que en el ético-práctico, lo cierto es que han propiciado divisiones y conflictos sociales basados en la intolerancia, y han sido fundamentalmente un mecanismo de

---

9. Ver Salomón Kalmanovitz, *La encrucijada de la sinrazón y otros ensayos*, Bogotá: Tercer Mundo, 1989. En una encuesta recientemente realizada en el Cidse de la Universidad del Valle, al preguntársele a los entrevistados si creían que el Partido Liberal tiene vínculos con el narcotráfico, el 27% respondió que definitivamente sí, y el 25% dijo que probablemente sí. Respecto del Partido Conservador las respuestas fueron 28% y 24%. Cfr. Fabio Velásquez y María Teresa Muñoz, "Encuesta de opinión ciudadana", Cali: Cidse, 1990.

10. Hernando Gómez Buendía, Libardo Sarmiento Anzola y Carlos Moreno Ospina, "Violencia, narcotráfico y producción agropecuaria en Colombia" (mimeografiado). Este artículo forma parte de la investigación de los mismos autores sobre "Impacto del conflicto armado y del narcotráfico sobre la producción agropecuaria en Colombia 1980-1988", elaborado para la Misión de Estudios del Sector Agropecuario, febrero de 1988.

exclusión de vastos sectores de la población del acceso a recursos del Estado y la democracia, de apropiación privada-colectiva del poder del Estado en su pretensión hegemónica, de división y violencia *inter pares* y de apuntalamiento de poderes regionales y locales a contrapelo de una unificación nacional que se ve estimulada por la expansión del mercado interior y una creciente presión por el desarrollo de la democratización de la sociedad colombiana. El ejemplo más diciente es que el enorme peso específico que tradicionalmente había tenido la Iglesia colombiana en la constitución de un cierto "ethos" nacional se ha ido perdiendo notoriamente[11]; pero paralelamente con el proceso generalizado de secularización y diferenciación valorativa de nuestra sociedad parecería que se ha ido consolidando otra "institución tutelar": el ejercicio de la violencia, que se ha traducido en que se han cambiado las armas del sermón por el sermón de las armas, y el Estado colombiano parece cada día más inclinado a cambiar la tradicional consagración al Sagrado Corazón por algo que se parezca a San Fusil. Sin embargo, a diferencia de la Iglesia contrarreformista, que contaba con la variante hispánica de la religión católica como una ideología general relativamente legitimadora y coherente, las armas no tienen una ideología distinta de quien las empuña, y así establecen quién tiene el derecho al privilegio generalizado. Este no es, sin embargo, un proceso unilinear o siquiera sencillo: la creciente reacción en el país contra la violencia, el lugar central que ocupa el problema de la paz en amplios segmentos de la opinión pública nacional es un testigo de esta pugna. La ética de la democracia y la razón parecen enfrentarse con la creciente ideología legitimadora de la fuerza y la violencia. Sin embargo, en una situación de fragmentación social la lógica de las armas implica la reducción de la civilidad, de los espacios de arbitraje, de diferenciación de órbitas de los conflictos sociales y de posibilidades de confrontación incruenta. De democracia, en pocas palabras.

V. Los amigos, los enemigos y las estrategias no siempre son lo que parecen ser

Apesar de que se ha convertido en una verdad ampliamente aceptada, y de que su discusión puede acarrear las consecuencias del peso de la lógica imperial, de la política del Estado colombiano o de los mismos narcos, y de que ciertamente el momento presente, cuando aún están frescos los más recientes magnicidios, no es el más propicio para tal tipo de ejercicio, vale la pena reflexionar un poco sobre la naturaleza de las luchas en que nos encontramos enfrascados en Colombia en relación con el problema global. Es cierto, desde luego, que en este momento los eventos del terrorismo sacan al primer plano la capacidad criminógena de algunas de las organizaciones narcotraficantes y desnudan su carácter de inescrupulosos y violentos. Es cierto también que sus acciones han concitado un repudio generalizado, en la medida en que en su acción han descartado las consecuencias que en vidas humanas inocentes pueden tener sus acciones.

Todo lo examinado anteriormente lleva a apuntar que el problema central para la sociedad colombiana en este campo no es el narcotráfico en tanto práctica comercial ilegal. El problema principal es la violencia, y no sólo la que éste desata, sino la que se esgrime para su confrontación, que sólo contribuye a profundizar las fracturas del orden social que experimenta la sociedad colombiana. Y también forma parte del problema la consideración central acerca de la necesidad de que se creen las condiciones para que la actividad no sea atractiva. Esto involucra desde la producción campesina hasta la participación de necesitados que por unos pesos se involucran en el transporte o la distribución, y que son, finalmente, quienes ponen los platos rotos.

Pero también es cierto, y esto no se puede olvidar, que en el origen de la actual confrontación se encuentra la lógia imperial, para la cual el verdadero problema no es el narcoterrorismo que se pueda desplegar en Colombia, sino el narcotráfico. De manera que aunque el primero pueda desaparecer o reducirse en virtud de medidas adecuadas por parte del gobierno colombiano, en tanto el segundo subsista las presiones norteamericanas no cesarán, lo que puede traducirse en que se presenten nuevas situaciones de violencia interna en el país. Concretamente, puede pensarse que si el gobierno norteamericano continúa sus presiones una vez que la ola actual de terrorismo y confrontación se haya reducido o desaparecido, otros narcotraficantes que hoy día no ejercen violencia o terrorismo contra el Estado colombiano, pueden recurrir a ellos con alguna facilidad. Y es oportuno pensar que Medellín no es la única ciudad en la que se pueden reclutar sicarios. Es decir, narcotraficantes hoy día relativamente pacíficos pueden optar por las mismas tácticas y estrategias de quienes estimularon la construcción del enemigo interno y lanzaron una lucha que nutrió, y se nutrió, de la multiplicidad de violencias existentes en el país. Esta lucha podría no dejar resquicios abiertos por donde pudiera penetrar una solución menos belicosa y cruenta, basada en las instituciones civiles del Estado y la sociedad colombianos, y que tuviera en cuenta la complejidad de la situación y el negocio, que, vale la pena reiterarlo, involucra a algo más que a unos cuantos capos de mafia.

Es paradójico que una de las guerras de algunos traficantes, la que desarrolla contra la guerrilla, los coloca objetivamente del lado de la razón de Estado. Se genera un juego en que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, a pesar de cada uno de ellos, desde luego. En su combate contra las organizaciones del narcotráfico que organizan escuadrones de la muerte paramilitares, la guerrilla también puede reproducir aquello de las amis-

11. Jorge Hernández, "Cristianismo y democracia en Colombia: la cuestión concordataria", en Nora Segura (Compiladora) *Colombia: democracia y sociedad*, Cali-Bogotá: Cidse-Fescol, 1988.

tades a pesar suyo. De modo que las guerras se multiplican, y con ello la violencia se hace más ubicua.

Pero la descripción de las expresiones de la violencia enunciadas atrás indica igualmente las posibles tareas para el desarrollo de soluciones y paralelamente para la democratización de la sociedad colombiana. En una primera instancia se encuentra la obvia y necesaria contienda que el conjunto de la ciudadanía tendría que desplegar contra la amenaza de barbarie que refleja el terrorismo. El Estado por su parte tendría que ligarse a esta lucha no sólo como mecanismo de protección de la ciudadanía, sino para ensanchar sus esferas de civilidad y desplazar la confrontación puramente militar a un lugar secundario y utilizarla solamente en casos de absoluta necesidad.

No deja de haber dramas en la situación: una lucha contra un enemigo como el narcotráfico debe exigir que las instituciones que la llevan a cabo puedan exhibir una ética y una moral por encima de toda sospecha. El que esto no haya sido cierto, particularmente de los organismos armados y de inteligencia, ha significado que el Estado se encuentra con que en ocasiones se enfrenta consigo mismo, cuando se descubre que algunas de las organizaciones que combate están estimuladas, tuteladas, organizadas y entrenadas por miembros de esos mismos aparatos que las deben destruir. No se sabe bien quién es el enemigo. Y de otro lado, cuandoquiera que se ha intentado un ablandamiento, diferentes fuerzas políticas y sectores de opinión se han cubierto de ceniza y desgarrado sus vestiduras a nombre de una moral de la cual se sienten únicos depositarios.

Y no sólo limpieza y claridad tiene que exhibir el Estado: su autonomía y soberanía pueden ser innegablemente recursos de solución no violenta, como lo demuestra el hecho de que en las ocasiones en que éste ha dado muestras de querer actuar independientemente de las presiones estadinenses, el resultado ha sido una reducción de la violencia que los narcos dirigen contra sus aparatos. Posiblemente por esas presiones internacionales, o porque crece la convicción de que actuar así sería arriar banderas, el Gobierno colombiano no ha accedido a denunciar el tratado de extradición, punto central de las exigencias de los narcos.

Y paralelamente los sectores campesinos aprisionados en las guerras, bien en sus expresiones de movimientos populares, bien en su calidad de simples aspirantes a una mejora de sus condiciones de vida, requeriría desplegar mecanismos de defensa no armada para confrontar la arremetida de que es víctima por parte de la alianza de fuerzas de la extrema derecha. Pero no sólo el campesinado confronta la amenaza: también los movimientos populares, las organizaciones masivas de descontentos que se pretende aniquilar mediante la muerte de dirigentes y participantes a través de las múltiples organizaciones paramilitares: la verdadera narco-guerrilla. En fin, la lucha central es hoy, más que en cualquier otro momento, con la democracia por la democracia.

Finalmente, es un hecho que Colombia no puede, en las circunstancias actuales, enfrentar sola la lucha internacional impuesta por los Estados Unidos. Ni con los viejos aviones y helicópteros enviados, ni con las voces internacionales de aliento se resuelve el problema. Un problema internacional requiere un tratamiento internacional; pero no el de agrupar a varios países bajo la férula imperial para aunar esfuerzos en la dirección impuesta. No es posible reeditar guerras del opio a estas alturas de la historia, ni repetir *caeteris paribus* las vanas pero dolorosas experiencias mexicana, boliviana o peruana. Sólo parecería que queda una alternativa: si el problema es el consumo, pero la acción prioritaria se dirige contra la producción, sería lógico que los países productores se organizaran no sólo para confrontar sus situaciones internas a este respecto, sino para negociar los términos en que se verán involucrados en la solución. Puede sonar cínico y utópico, pero no debería estar muy lejana la hora en que los países suramericanos involucrados en la situación consideraran seriamente la Constitución de una Organización de Países Exportadores de Coca.

Postscriptum[12]

Muchas cosas han ocurrido desde que este texto fue escrito; sin embargo, no creo que invaliden la naturaleza de las tesis aquí expuestas. La entrega de Pablo Escobar y los hermanos Ochoa puede significar una reducción de los riesgos de reactivación del narcoterrorismo, y con ello de una de las formas más graves y dolorosas de violencia en el país. De otro lado, es posible que la violencia propia del ejercicio del comercio ilícito de drogas ilegales se incrementa, ya que la ausencia de los jefes de una de las principales organizaciones puede "desorganizar" el negocio y así alterar el sistema de equilibrios precarios con que funcionaba. Aunque se puede suponer que desde el encierro los grandes capos puedan manejar algunos hilos, la pérdida de control se podría traducir en pugnas y competencias internas que, unidas a una posible desregulación de los aparatos sicariales, exacerbaría una violencia ligada tanto a la búsqueda de hegemonías y dominaciones internas como a la necesidad de recuperar ingresos monetarios.

De cualquier manera, la entrega de Escobar puede significar el principio del fin de la dimensión más "política" del negocio: la confrontación violenta con el Estado que busca reducir su voluntad de lucha contra el tráfico y acallar las gestiones de la justicia para castigarlo. Si esto es así, sin duda se trataría de un triunfo de la nueva política de apaciguamiento de Gaviria sobre la de guerra total de Barco. Sería, aunque frágil y precario, un triunfo del Estado de derecho sobre la fuerza bruta de las armas.

La debilidad de la situación podría venir estimulada por otras fuerzas: en primer lugar, es claro que el narcotráfico no se acabará como resultado de la entrega de Escobar, y las presiones so-

12. Julio de 1991.

bre los narcotraficantes supervivientes, muy especialmente sobre el llamado cartel de Cali, pueden llevarlos a variar sus estrategias actuales de eludir la justicia y a lanzarse a una confrontación "similar" o más intensa que la anterior. Esta posibilidad podría verse estimulada por el hecho de que la reducción de la actividad comercial de Escobar se habría traducido en un incremento de la participación de los caleños en el negocio y de las acumulaciones de capital de los demás traficantes. En este punto se pondría a prueba la bondad de la política de contención y apaciguamiento. En otros términos: se amenazaría la capacidad del gobierno colombiano de manejar jurídicamente el asunto, combinando la rebaja de penas con la lucha policial contra el delito.

Indiscutiblemente la justicia colombiana se ha puesto a prueba, no sólo en sus principios y tradiciones básicas, sino respecto de su eficacia. En efecto, la juridicidad colombiana se ha caracterizado por su apego a tradiciones románico-hispánicas en las que la forma, la solemnidad y la adhesión a principios y aforismos tienen valor indiscutible. Y en este lance, por el contrario, el pragmatismo y la conveniencia para la paz se han impuesto y mostrado su eficacia. Esto no deja de producir una cierta actitud de alivio, contento, resignación, desconfianza y horror en algunas mentes, al mismo tiempo que se hacen esfuerzos para conciliar ese pragmatismo con un cierto sabor amargo a impunidad. No deja de ser problemático que a partir de los decretos de marras Escobar cumpla sólo pocos años de cárcel, mientras que otros delincuentes, por delitos mucho menores, tengan que purgar penas sustancialmente más largas. Y queda pendiente, desde luego, el que las medidas jurídicas sean rigurosamente cumplidas y no se presente otra fuente de impunidad, ya no "jurídica", sino en virtud de la ineficacia o corrupción de los aparatos estatales.

Esto último no parece muy probable, ya que miles de pares de ojos en el mundo están pendientes de lo que pase. Y entre ellos están nada menos que los del presidente Bush y sus colaboradores, quienes han tenido que tragar la amarga píldora de no ver a Escobar recluido por el resto de su vida en una cárcel estadinense. Más de una amenaza han proferido al gobierno colombiano, y han declarado que estarán vigilantes sobre la justicia colombiana. Estas amenazas han coincidido con una enorme alza en la popularidad interna del presidente Gaviria, y por ello, además de que se han herido claramente susceptibilidades, las respuestas de personalidades colombianas han sido francamente desfavorables a Bush. A ello se une el que no parece que haya unanimidad entre los políticos de ese país al respecto, y más de un personaje importante ha manifestado su apoyo a Gaviria y su política. No se sabe qué hará Bush, pero si se considera que en general es un hombre que cumple con sus amenazas, como lo demostró en Panamá y el Golfo Pérsico, no hay muchos motivos de tranquilidad para la opinión pública colombiana.

Paralelamente con lo que pueda pasar en Cali, la entrega de Escobar y los Ochoa abre un nuevo interrogante: ¿cómo será el proceso de reinserción de estos delincuentes a la sociedad una vez hayan cumplido sus penas? Este es sin duda un interrogante importante, puesto que se ha puesto en juego la capacidad de la sociedad y el Estado colombiano de recibir en su seno a sujetos que algunos sectores de la opinión pública mundial considera personificaciones del Anticristo.

Otras consecuencias notables de este evento son, de una parte, el triunfo de la Iglesia Católica, y de otra las perspectivas para otros países latinoamericanos. En efecto, la Iglesia Católica había salido bastante maltrecha en la Constituyente, puesto que había tratado de organizar un plebiscito con diez millones de firmas en apoyo del matrimonio católico y en contra del divorcio, y sólo logró dos millones, que la entidad estatal encargada de los asuntos electorales se negó a contar y certificar. Sus logros fueron magros, y esto había suscitado algunas expresiones públicas de resentimiento por parte de las jerarquías. Ahora, con el éxito del padre García Herreros, parecería que la tradicional importancia de la Iglesia y la religión católica, al menos en el terreno ceremonial, que hubieran reivindicado. Es claro que en este caso operaron tanto el azar (el sacerdote no tenía antecedentes en estos terrenos de las negociaciones) como su indudable carisma como personificación de la caridad. Más de un católico colombiano ha hablado del milagro producido, hay fuertes presiones para que le sea otorgado el premio Nobel de la Paz al sacerdote, y todo esto se ha hecho a pesar de que García Herreros ha mezclado su audacia negociadora con algunos excesos verbales en los que virtualmente ha exonerado a Escobar. Es muy difícil decir si el padre habla en serio cuando se refiere al capo como un hombre bueno (y ésta podría ser su mirada estrictamente sacerdotal), o si por el contrario, intentaba amansarlo para facilitar su entrega. En todo caso, más que de la Iglesia, se trata de un triunfo de una persona: el verdadero ganador ha sido el presidente Gaviria.

Queda por el momento una última pregunta de enorme importancia dado que es perfectamente claro que la entrega de Escobar no representa la finalización del narcotráfico, y que éste está encontrando cada día más dificultades para actuar en el país, es de esperar que se incremente el traslado de centros de acopio y laboratorios a otros países del área. En efecto, ya en Venezuela se movilizan el Estado y la opinión pública frente a hallazgos de corrupción y complicidad de altos funcionarios del gobierno anterior con el tráfico, y voceros de la opinión pública de ese país denuncian el incremento de la actividad. Algo similar sucede en Perú y Bolivia, de modo que el panorama regional tiende a oscurecerse a este respecto. Nadie puede alegrarse, pero sí es posible pensar que este último paso dado por el negocio sirva para estimular una mayor concertación entre los países productores y exportadores y la creación de una estrategia común para enfrentar las presiones estadinenses. Esta es, al fin y al cabo, un ejemplo de las astucias de la dialéctica●

Paolo Flores D'Arcais. Codirector de la revista *Micromega* y comentarista político del diario *La República*.

La democracia tomada en serio

Paolo Flores D'Arcais

Ilustración de Juan Carlos Nichols

El socialismo real, disgregándose definitivamente (así se espera), confiesa y confirma definitivamente la democracia política como cuadro axiológico de la vida pública de nuestra época. Marx es promovido a los anaqueles de los clásicos y despojado de todo privilegio en cuanto a la comprensión del actual estado de cosas (y tanto más en cuanto a la transformación del mismo). El equívoco analítico que ha malentendido la democracia como forma jurídico-política del lucro capitalista, cobertura del derecho al egoísmo, endeudando y esterilizando a la izquierda precisamente desde el punto de vista de la crítica de lo existente, paralizándola en el callejón sin salida de una "superación" que suena a rechazo (y antes bien, a incomprensión), ha sido consignado a los ropavejeros.

"Axiológicamente, la democracia política ya no tiene rivales. Pero su condición no se vuelve con esto más confortable. Más ardua, en todo caso. El este totalitario de la *nomenklatura* deja de constituir una alternativa, y por lo tanto también un término de confrontación. De tal modo, se desvanece como coartada. Ese criterio de juicio consiente en reafirmar, por lo común, la excelencia de la democracia realmente existente, aun cuando en la práctica de los gobiernos maltrata y pisotea principios solemnemente reiterados.

Hoy ya no. La democracia, a partir de ahora sin alternativas, sólo tiene que ver consigo misma. Se ha convertido, con sus valores esculpidos en cada Constitución y bordados en cada estandarte, en término de confrontación, criterio de juicio, banco de ensayo con respecto a sí misma, a la propia existencia cotidiana.

En otros términos. Hoy se vuelve ineludible la pregunta que ya ayer era obligada: ¿hasta qué punto son *democracia* las demo-

*Tomado de la revista **CLAVES**, numero 2, que dirige Fernando Savater. Madrid, mayo de 1990.

cracias realmente existentes?"

Se entiende: para realizarse, el principio democrático debe comprometerse, contaminarse. Soportar, por razones técnicas y funcionales, una metamorfosis. No habrá autogobierno de los ciudadanos, pero la soberanía se ejercerá por delegación y control. La democracia política será comprendida, en la acepción rigurosamente liberal, como sistema garante de procedimientos y derechos.

Y aún más. La metamorfosis del principio democrático, del proyecto de autonomía y autogobierno, adviene en vista de la realización de ese mismo principio, aunque atenuado y aproximado. Sólo así se justifica. Realizar el *ideal* democrático por lo posible, aproximarlo por lo posible. Este es el único realismo admitido.

La pregunta, por lo tanto, es la siguiente: ¿y si la democracia realmente existente, en vez de aproximarse al principio democrático, se estuviera apartando de él en una deriva de modo alguno técnicamente necesaria? ¿Si vencida por el fracaso de su alternativa histórica no estuviese corriendo el riesgo de una derrota por el olvido de sus propias razones de existencia? ¿Si la democracia de procedimiento, formal, en suma, estuviese perdiendo su sustancia justamente en cuanto a la formal y procesal realización del principio: un hombre, un voto? ¿Si estuviese decolorándose, y, silenciosamente, pasando a otro régimen, y de liberal democracia conservara sólo el nombre, y de su carácter formal y de procedimiento sólo la apariencia?

Democracia domesticada

El equívoco conservador es hoy el riesgo que la liberaldemocracia verdaderamente corre. Aunque ya inocuos, cuando sobreviven, los críticos hegeliano-marxistas, con esa fijación de la síntesis que niega y conserva a un tiempo, endilgan a la democracia formal (i. e. jurídica) el prejuicio conservador de que ella sea el régimen conveniente.

Nada más equivocado (y peligroso). La liberaldemocracia es un proyecto *exigente*. No todas las metamorfosis de la democracia son admisibles en el marco de la democracia, aunque el argumento invocado como justificación sea siempre "técnico". Y por otra parte: la democracia política (procesal, jurídica, formal) es bastante más exigente porque es más rica en implicaciones de lo que sospechan los intelectuales conservadores. Hoy, por eso, las verdaderas reservas, de hecho y por principio, en las confrontaciones de la democracia, la nutren aunque no asuma y no tenga firmes todas las vinculaciones posibles de las determinantes que surgen de las reglas procesales razonadas hasta su mismo fondo, pensadas en la coherencia de los presupuestos y de las consecuencias que las hacen efectivamente practicables.

La postura conservadora tiende, en cambio, a confundir cada vez más a menudo la democracia política (procesal, jurídica, formal) con las instituciones y la práctica de las democracias realmente existentes. En esta óptica acaramelada, la brecha entre principios y realidad no es demasiado grande, porque en una dictadura sería mayor aún. Desde esta óptica, que se pretende moderada, aunque de esto sólo tenga un moderadísimo espíritu crítico, todo va bien. Si no marcha, si desde el punto de vista de los derechos y los procedimientos la distancia entre discurso y realidad se torna dramática, todo (o casi) va bien igualmente, puesto que la democracia no es el paraíso.

La retórica conservadora condena inmediatamente al ostracismo cada proyecto de reforma en cuanto utopía. La desviación es denunciada con intransigencia porque indicaría fanatismo por los principios abstractos. Sin embargo, el precio que así se paga es el del nominalismo más caduco. Aquí se satisfece el nombre, aun cuando la cosa (el procedimiento democrático) se vaya degradando en los ritos de un peronismo en versión *soft* u otra demagogia de la "democracia"/espectáculo. Pero si bastara con la palabra, ¿qué más democrático que la RDA?

Una democracia *domesticada* en sus procedimientos, *lobotomizada* en cuanto a los derechos de la ciudadanía, *reprimida*, en suma, puede muy bien mantenerse y reproducirse sin correr riesgo alguno de derrumbe. Sin embargo, ya no es una democracia (sobre todo en la acepción liberal, garantizadora, procesal del término), aunque aún no sea una dictadura o un régimen de *nomenklatura*, y tal vez no esté destinada en absoluto a un futuro de este tipo. La estabilidad, la gobernabilidad, la apariencia de procedimientos, ahora anestesiados y, por lo tanto, no amenazados por ningún derrumbe, producen una ilusión, que los intelectuales conservadores exhiben como prueba de que las realmente existentes son las únicas democracias posibles. Y son, por tanto, democracias

Lex Animaux (Grandville)

Lex Animaux (Grandville)

tout court. Pero podría tratarse de un hada Morgana.

Estos son tiempos de apología de lo existente. Es obvio, entonces, que se acepta la decadencia de la democracia a *flatus vocis,* a veces sin siquiera ser conscientes del carácter reaccionario de esta elección (algunos, especialmente sofisticados, incluso lamentan que la democracia no sea excesiva). Y falta así lo esencial de este momento histórico: el riesgo de que la democracia se pierda al ser *privatizada* por el poder, sustraída a los ciudadanos, verdaderamente vaciada desde el punto de vista de los procedimientos y de los derechos. La privatización del Estado por parte de los aparatos de los partidos y por los políticos profesionales, con el consiguiente eclipse del ciudadano, constituye la ya operante amenaza contra la democracia en occidente. El conflicto se desarrolla hoy entre dos interpretaciones de la democracia política, radicadas ambas en una versión liberal, *procesal,* de la misma. La que canta la apología de lo existente (incluso bajo un ropaje transgresor más o menos lujoso), y descuida con ello el decaimiento progresivo que está destruyendo los procedimientos y derechos de la liberaldemocracia; y aquella que se toma en serio el proyecto liberaldemocrático de aproximar en la realidad el principio del autogobierno. Y mantiene firmemente todas las premisas y consecuencias, todas las implicaciones que ello comporta, aun desde el punto de vista de la política concreta, cotidiana, *sustantiva.*

Les Animaux (Grandville)

Las dos interpretaciones no son completamente equivalentes en cuanto a dignidad. Ambas son legítimas, obviamente, si con eso se quiere reafirmar que en democracia cada punto de vista tiene el derecho de expresarse y busca consensos. Pero de ninguna manera son equivalentes en cuanto a legitimidad democrática, si con ello se intenta subrayar la referencia a una tradición y a un criterio de valor, puesto que una consiente la decadencia de la democracia y la otra se ocupa de una (difícil) inversión de tendencia. No igualmente democráticas, ya que no son coherentes en igual grado con respecto a la democracia, a sus procedimientos, a sus implicaciones.

El punto de vista conservador niega que las concretas elecciones políticass, si son decididas en conformidad con los procedimientos constitucionales, puedan ser juzgadas *más* democráticas o *menos* democráticas. Desde el punto de vista democrático serían equivalentes, precisamente en tanto conformes al procedimiento mismo. Desde el punto de vista de la democracia de procedimientos, los contenidos de la elección política serían *indiferentes.* Una opinión diferente indicaría residuos de marxismo disimulado.

Ilegalidad y consenso

Este punto de vista es insostenible, precisamente a la luz de la democracia entendida como mero conjunto de procedimientos, derechos y garantías formales. Veamos.

No es superfluo recordar, entre tanto, que el principio de mayoría ocupa un *segundo lugar.* El primero lo ocupan todos los dispositivos que garantizan a *cada* ciudadano contra los riesgos de un despotismo de la mayoría. La tutela de las minorías, hasta de aquella minoría extrema pero preciosa por excelencia que es el individuo, el disidente individual, constituye una metarregla peculiar y decisiva del régimen de gobierno liberaldemocrático. Pero las elecciones políticas cotidianas son infinitas, sustantivas, que hacen vano o le restan potencia a este principio o, por el contrario, lo valorizan y lo realizan. Por ello estas políticas, aunque decididas en conformidad con el principio de mayoría y a los demás procedimientos constitucionales, pueden y *deben* ser juzgadas, según sus res-

pectivos valores democráticos (o directamente como agresiones contra la democracia).

Todo privilegio (favorecido o impuesto por la ley ordinaria u otras acordadas) para el creyente que obedece a la santa madre Iglesia, con respecto al ateo que obedece sólo a su propia conciencia, es *vulnus* a la democracia aun cuando miles de sentencias de la Corte Suprema decretasen lo contrario. Las leyes que sustraen al foro ordinario al policía que mata, aunque fueran ratificadas por un referéndum, seguirían siendo lesivas para la democracia formal, que garantiza la igualdad de derechos. En suma: proliferan conformismos en el voto y sofismas en las sentencias que garantizan orden y poder pero ofenden la lógica y la democracia.

Agreguemos esa forma concreta y específicamente contemporánea que puede asumir el despotismo de la mayoría, y qué concretas políticas ordinarias pueden alentarlo o combatirlo (políticas, por lo tanto, respectivamente menos y más democráticas). En una sociedad por acciones, como es notorio se puede ejercer plenamente el equivalente de un "despotismo de la mayoría" cuando la cuota minoritaria que se controla coincide con una situación de acentuada dispersión de la otra parte de la propiedad. Sin embargo, algo análogo sucede cada vez con mayor frecuencia, también en el "mercado" político. Eso dispersa, aísla, vuelve apática la voluntad de los ciudadanos, por lo que se consiente en resignar posiciones, deteriora el principio liberal mismo de la moderna democracia y configura con ello una política escasamente democrática (debido a la *decadencia* de la democracia). Volveremos sobre el tema.

Pero, sobre todo, tienen decisivo relieve con respecto a la democracia entendida como procedimiento todas las políticas (sustantivas) referentes a la cuestión de la legalidad. Que una consulta electoral llevada a cabo en medio de violencia, intimidaciones, manipulaciones, no sea *en cuanto a procedimiento* la misma, aunque los procedimientos formales no sean cambiados en absoluto, parece que fuera de suyo. En este caso los procedimientos son formales en el sentido *aparente*, y no ya porque garanticen jurídicamente la equivalencia (un hombre, un voto). Pero toda política de la legalidad es capaz de hacer oscilar la democracia formal en dirección de la ficción o por el contrario, de radicalizarla como igualdad jurídico-política. En el caso de la legalidad, sobre todo, una práctica de omisión puede constituir para el poder la versión más eficaz con la que ejercitar una política absolutamente nada democrática.

El espacio que una política del poder concede a la ilegalidad es un espacio sustraido a la democracia, aun en el caso de que la política fuese en todos los demás aspectos perfectamente conforme a los *demás* procedimientos. De hecho, la legalidad (junto a la tutela de las minorías) constituye la metanorma arquitrabe de la liberaldemocracia. La mayoría no es negociable, disponible, modificable. Pero las políticas gubernamentales (políticas sustantivas en cuanto a las demás, en este caso) pueden garantizar la legalidad o adormecerla para ventaja de todo arbitrio o potencia de hecho (i. e. ¡pre-potencia!);

Y se califican, con esto, como políticas de sostén de la democracia (formal) o de agresión contra ella.

El espacio concedido a la ilegalidad distorsiona radicalmente el mecanismo de formación del consenso. En democracia, las diversas fuerzas políticas se disputan los consensos avanzando propuestas competitivas (prohibiciones, o casi, de construir a lo largo de una playa; clausura, de los centros históricos al tránsito; punibilidad, o casi, o casi, para el consumo personal de drogas, por ejemplo). Sin embargo, si se establece una ley, su aplicación se vuelve de hecho negociable en las confrontaciones de cada individuo; el grupo en el poder adquiere una ventaja suplementaria, productora de consenso, absolutamente equivalente en cuanto productora de votos a verdaderas manipulaciones electorales. Y la oposición, pidiendo legalidad, sacrifica *a priori* los consensos de cuantos esperan ser favorecidos por el arbitrio. La legalidd es a menudo impopular. Por eso mismo no puede ser objeto de transacciones políticas. Y, además, donde los gobiernos toleran (o alientan) la ilegalidad de los poderes de hecho, toda oposición queda excluida de la vida política. Las oposiciones ya no tienen para proponer ningún objetivo alternativo (distribución más igualitaria de la carga fiscal, gravámenes urbanísticos más difundidos y otras normas más civiles de convivencia) por estar ya realizada *sobre el papel*. Y proponer como objetivo el respeto de cuanto ya está decidido, da lugar al frustrante afán de Sísifo: una recurrencia al infinito (una ley que obligue al respeto de las leyes precedentes, ley a su vez desatendida, que habrá que renovar con una ley que obligue...).

El intelectual conservador recuerda, justamente, que toda la democracia se determina por las reglas de juego. Pero olvida agregar que el juego se lleva a cabo sin trampear y que son políticas ordinarias (sustantivas y no de procedimiento) *gubernamentales* las que decidirán si impiden o consienten las trampas durante la participación en el juego. Estas políticas, por lo tanto, definen una postura de sostén o de aversión a la democracia, y como tales son juzgadas.

Políticas que consienten la violencia, la intimidación, las manipulaciones y todos sus equivalentes funcionales, son políticas antidemocráticas. Y antidemocráticas son, por las mismas razones, las políticas que consienten el equivalente funcional de la compra del voto. Sea cual fuere la mayoría parlamentaria que lo consiente y los otros requisitos de procedimiento que lo legitimen. La corrupción, la amenaza de despido, la tolerancia hacia el abuso y las políticas que no combaten eficazmente (es decir, sistemáticamente) tales acciones, degradan el procedimiento a la ficción y anulan exactamente el principio: un hombre, un voto.

Una política de la ilegalidad, que por lo común se manifiesta por omisión, ciertamente puede conseguir un estado de máxima estabilidad para el sistema, garantizar gobernabilidad y arrebatar consensos (incluso plebiscitarios) respetando todos los procedimientos. Esa política pasa a ser *otra* con respecto a la democracia: amenaza, agresión, negación.

El caso de Italia, donde la mafia, la camorra, la *'ndranghéta* (mafia calabresa) ejercen el dominio sobre regiones enteras del territorio estatal, con la connivencia omisiva o activa de los partidos de gobierno, representa la versión extrema, "pura", del fenómeno. Es de esperar: *toda* política de tolerancia de la ilegalidad (no confundir absolutamente, ya de suyo, con la desobediencia civil y otros fenómenos de protesta política y social, aun cuando comporten violación de las leyes) genera a la larga acostumbramientos, desaliento, resignación. Apatía. La negación práctica de la ciudadanía lleva consigo la inutilización psicológica de la misma. Pero con esto se desvanece el sujeto mismo de la liberaldemocracia, el individuo autónomo.

También el conservador estará probablemente dispuesto a admitir que si las reglas cambian, cambian los jugadores, y con ello cambia el régimen. Pero lo inverso también es válido. Al cambiar los jugadores, ya han sido cambiadas también las reglas, si bien subrepticiamente y aunque aparentemente los procedimientos sigan siendo los mismos. Y hasta que se pruebe lo contrario, la moderna democracia reconoce una sola figura de jugador: el ciudadano. Aquel cada uno que todos nosotros somos (debemos ser, podemos ser).

¿Quién podrá sostener que ese *cada uno* (todos los individuos singularmente tomados) sea aún el protagonista del juego democrático? El trastorno subrepticio de las reglas, que lo consuma ficticiamente manteniendo las apariencias, puede ser incluso más grave para la democracia que una abierta contestación autoritaria (logra, comúnmente, los mismos efectos prácticos). Es más difícil movilizar la energía para restaurar las reglas que ninguna norma o ningún golpe han derogado, pero que políticas concretas de gobierno han burlado. El demócrata deberá luchar no ya por la conquista de un procedimiento (democrático), sino por la *leal* aplicación de normas existentes que el poder ha puesto en desuso. Combates con molinos de viento. Y así sucesivamente. El respeto integral de las reglas del juego (y por lo tanto una política que no brinde espacio a la ilegalidad, a la prepotencia, a la corrupción) constituye sobre todo el fundamento de legitimidad del gobierno democrático. Toda política que consienta trampear, torcer y domesticar estas reglas, en marginar al sujeto para el cual fueron creadas, no es en absoluto indiferente en términos de democracia, aunque sea ciertamente sustantiva y no de procedimiento. Ese respeto es lo que provee o sustrae legitimidad al ordenamiento entero y define, pues, al que la practica como amigo o enemigo de la democracia misma.

Hagamos una primera conclusión. Hay políticas sustantivas concretas que deben hacerse con el carácter formal, de procedimiento, de las democracias, y desde luego con las metanormas que las hacen posibles y practicables. Políticas que provocan desobediencia a la democracia o que la colman. Políticas que desmantelan, o viceversa, refuerzan procedimientos y derechos sin los cuales un ordenamiento no tiene título para definirse como democrático.

Las políticas sustantivas (al menos algunas) tienen un carácter más o menos democrático porque tienen un efecto de *feed back* sobre *los procedimientos* democráticos. De allí proceden políticas promulgadas en con-

La nueva es una democracia representativa. Un hombre, un voto; éste es el abc. Alfabeto más rico y variado, en realidad, de lo que estamos habituados a creer. Un voto libre e igual en condiciones de imparcialidad es una exigente pretensión que las democracias realmente existentes satisfacen cada vez menos y de la que, sobre todo, se ocupan menos cada día. Pero con esto se daña a la democracia misma.

formidad con dichos procedimientos, que terminan por distorsionarlos, o que directamente atacan las condiciones que las hicieron posibles y practicables. Y hay políticas que, pese a ser realizadas con el consenso del cuerpo electoral, amputan ese cuerpo desde el momento que, generando intimidación, apatía, chantaje, excluyen el voto libre.

Pero —esto es el punto crucial— ninguna de estas políticas y de las metamorfosis que inducen en la democracia es técnicamente necesaria para transferir la democracia del cielo de los sublimes principios al prosaico horizonte del siglo. Todo lo contrario. Esas políticas dan lugar a una democracia defraudada, empobrecida y declinante, precisamente en cuanto es democracia formal, regímenes de procedimientos y derechos.

Se tratará por eso de examinar en detalle las asunciones mínimas de valores que caracterizan la moderna democracia, y de confrontarlas con las políticas sustantivas implicadas o en la reafirmación o en la cancelación práctica de los procedimientos y de los derechos que a tales valores corresponden.

Un hombre, un voto: hacia la ficción

La nuestra es una democracia representativa. Un hombre, un voto; éste es el abc. Alfabeto más rico y variado, en realidad, de lo que estamos habituados a creer. Un voto libre e igual en condiciones de imparcialidad es una exigente pretensión que las democracias realmente existentes satisfacen cada vez menos y de la que, sobre todo, se ocupan menos cada día. Pero con esto se daña a la democracia misma.

En primer lugar se imponen dos requisitos: que la competencia electoral sea abierta a todos, sin discriminaciones, y que se desarrolle en una rigurosa igualdad de oportunidades. En cada país hay normas vigentes de leyes y medidas administrativas que traducen la conciencia de lo fundamental de estos requisitos. En Italia las carteleras para fijar las propagandas electorales conceden igual espacio para las diversas listas. En Francia todos los candidatos a la presidencia disponen de igual tiempo televisivo. En los Estados Unidos se computan los votos de miles de personajes menores, al límite del folclor, con la misma seriedad que los de un Kennedy o un Reagan.

Y sin embargo, la competencia abierta a todos se inclina cada vez más hacia la ficción. El acceso a la política se hace día a día más difícil, una especie de permanente reunión a puerta cerrada que indica una condición de creciente impermeabilidad del mundo político. Disminuye el umbral de visibilidad, y con ello la existencia política. La consolidación de las nuevas tecnologías de comunicación ha sido utilizada aquí para agravar el fenómeno más que para combatirlo.

Sólo en circunstancias muy particulares nuevos grupos organizadores logran entrar en escena. Sin embargo, un movimiento difundido y de gran intensidad política y emo-

Lex Animaux (Grandville)

tiva, como el del 68, ha renovado el panorama de los partidos en Francia, Alemania e Italia. Sólo crisis que marcan la época, como la degradación y el desastre ambientales o la migración del Tercer Mundo a las metrópolis europeas, modifican el cuadro de la política organizada. Y no se ha dicho que se trate de novedades estables.

Pero, en lo referente a las posibilidades de acceso, democrática sólo puede ser una política antimonopolista (antioligopolista). Si lo fuera, el principio de representación no estaría anquilosado y desfigurado hasta precipitarse en su contrario: la política termina por ser privada y en el doble sentido: soberana-

mente controlada por los que dominan las redes y las maquinarias del aparato, y definitivamente sustraída a la participación y al control del ciudadano.

Por lo demás, políticas sustantivas que disminuyen el umbral de visibilidad y aumentan con esto las oportunidades de existencia política para ese cada uno que todos nosotros somos (tendremos derecho a ser) son idénticas o convergentes con las políticas capaces de aproximar la igualdad de oportunidades en la competencia electoral.

Competencias bastantes raras, como las que hoy se dan. Análogas a una final olímpica donde quien ya ha ganado antes saliera con una considerable ventaja, y quien participa por primera vez estuviera obligado a correr dentro de un saco. Análogo a un campeonato de fútbol en el que uno de los equipos pudiera tener en el campo quince o veinte jugadores (y tal vez hacerlos jugar incluso con las manos) y el otro sólo cinco o tres (y que tal vez pudieran usar sólo uno de los dos pies). A nadie se le ocurriría considerar estas circunstancias como un modelo de imparcialidad.

Porque la democracia formal no se degrada hasta la ficción, no termina siendo un caparazón vacío, por lo tanto es necesario que políticas sustantivas esterilicen y neutralicen la relevancia política de una desigual distribución de la riqueza. En otros términos: los recursos económicos deben ser constreñidos a la no convertibilidad *en recursos políticos.*

Prosigamos. Democracia formal quiere decir igualdad de derechos políticos. No ya, por lo tanto, igualdad de todos los recursos, pero ciertamente igualdad de los *recursos políticos.* Uno, por excelencia: la posibilidad de comunicar, de ser escuchado. Un ideal para nada irrazonable, un objetivo al que políticas sustantivas adecuadas pueden acercarse de manera casi asintótica.

La libertad económica conduce a grandes disparidades en la distribución de los recursos. Descuidando los límites y las correcciones que puede ser oportuno realizar contra el automatismo del mercado por razones de justicia social (que aquí concierne exclusivamente a las implicaciones políticas de la democracia formal), es evidente que la disparidad de las fortunas, abandonada a sí misma, produce también grandes diferencias, relevantes desde el punto de vista de la democracia política. Filósofos y teóricos de la política, podemos decir que desde siempre, han sospechado la existencia de un conflicto, por lo menos latente, entre democracia y derecho de propiedad (esto es, desigual distribución de la misma). Problema republicano clásico y más actual que nunca.

Porque la democracia formal no se degrada hasta la ficción, no termina siendo un caparazón vacío, por lo tanto es necesario que políticas sustantivas esterilicen y neutralicen la relevancia política de una desigual distribución de la riqueza. En otros términos: los recursos económicos deben ser constreñidos a la *no convertibilidad* en recursos políticos.

Finalidad alcanzable sólo por la financiación pública de la competición política. Más exactamente: por una financiación *exclusivamente* pública. Técnicamente no existe ningún obstáculo para la realización de este objetivo. Sobre todo, las financiaciones subrepticias añadidas serían mucho más dificultosas, ya que los recursos políticos por excelencia (la comunicación, la visibilidad, el ser escuchado) por su misma naturaleza no son ocultables. Se trata sólo de voluntad política. De elegir y realizar políticas sustantivas más o menos (o nada, absolutamente) congruentes con el objetivo, y por ello más o menos (o nada, absolutamente) democráticas.

La financiación pública (*exclusivamente pública*) sería erogada en "especie", en recursos de comunicación: espacios radiotelevisivos y en los periódicos, sobre todo. En *igual* medida para todos los competidores, en la medida y el modo en que lo hagan eficaz, es decir, apasionante para los ciudadanos.

Cuanto más por razones económicas, se consiente la acumulación y la desigualdad de las riquezas y se aleja del ideal roussoniano de un mediocre y difundido bienestar tanto más rigurosamente este poder económico debe ser hecho inconvertible en recurso político.

Entre paréntesis, es dudoso que el régimen democrático pueda soportar desigualdades extremas y, sobre todo, difundidas. Es cierto, más bien, lo contrario. Si aquí descuidamos este aspecto no secundario es sólo porque el texto quiere programáticamente limitarse estrictamente a las implicaciones políticas directas de la democracia como procedimiento.

Iguales derechos políticos, en suma, quiere decir recursos políticos iguales. El resto es humo. Los hábitos consolidados van en dirección opuesta, evidentemente. Por cierto, no por necesidad técnica. Y son, democráticamente hablando, *malos hábitos.* Democracia a medias.

El voto de trueque resta libertad

Lo que viola el principio de igualdad política (o sea, formal) no es sólo el poder económico en tanto convertible, sino también y en

Les Animaux (Grandville)

Democracia formal quiere decir igualdad de derechos políticos. No ya, por lo tanto, igualdad de todos los recursos, pero ciertamente igualdad de los recursos políticos. Uno, por excelencia: la posibilidad de comunicar, de ser escuchado. Un ideal para nada irrazonable, un objeto al que políticas sustantivas adecuadas pueden acercarse de manera casi asintótica.

primer lugar ese super-recurso constituido por la posesión y el ejercicio del poder. Y también aquí, otra vez: son políticas sustantivas las que pueden circunscribir o aumentar tales distorsiones.

El voto de trueque es la forma que asume el uso de tales recursos. Un equívoco desaparece inmediatamente. Condenar el voto de trueque no implica en absoluto renunciar al mercado y al capitalismo. Es un prejuicio nada inocente el que imagina que es necesario, para que el mercado subsista, que todo sea mercancía, que todo sea intercambiado entre propietarios privados. Al contrario. Para que el mercado subsista, es necesario que alguna cosa (muchas "cosas") no sea de ningún modo negociable, adquirible. Las leyes y los jueces, para comenzar. Las instituciones públicas, en suma. *Todas* las instituciones públicas. Sin las cuales, incluso el mercado —el *calcolemus*— desaparece, para ceder el puesto a la potencia desnuda, a la prepotencia. Tanto en la esfera económica como en todas las demás.

Huelga decir que también los intereses económicos definen al ciudadano. También ellos están representados. Pero orientados a la producción de leyes. El voto de trueque es algo radicalmente distinto. Elimina la representación, puesto que hace del voto una mercancía intercambiable por otras mercancías, y las sustrae (si queremos usar esta expresión incongruente) al "mercado político" mismo.

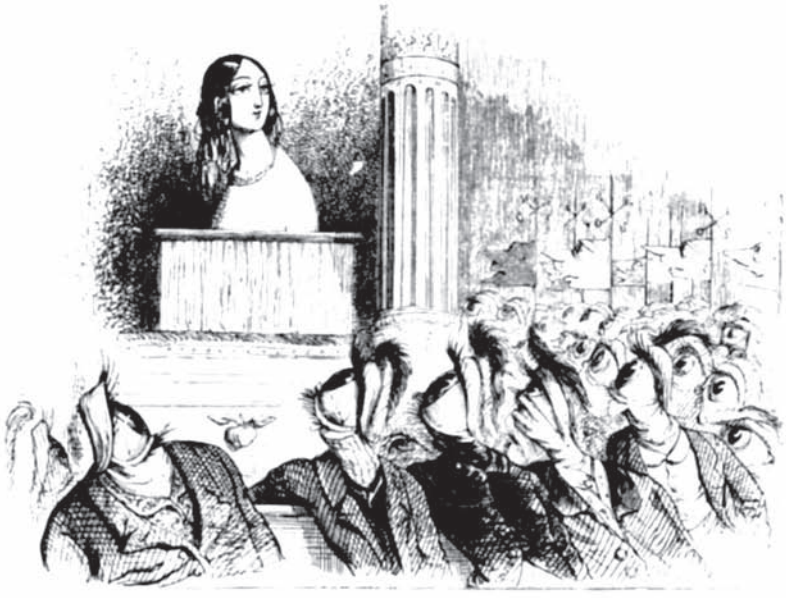
El voto de trueque, el clientelismo, puede ser circunscrito al horizonte de las excepciones o celebrar desmesurados y suntuosos fastos. Esto lo decidirán las políticas concretas de gobierno por medio de las medidas sustantivas que adopten u omitan. También aquí, por esto (y más que nunca, también), es legítimo (obligatorio) juzgar con el criterio de la mayor o menor democraticidad las elecciones políticas de las diversas partes.

En líneas generales, favorece el voto de trueque y el clientelismo toda política que ensancha los márgenes de discrecionalidad del poder y restringe el operante automatismo de la ley. Aun sólo en intención, pesan equívocos que es necesario despejar. La inextricable jungla de reglamentaciones, concesiones administrativas, maquinaciones e improbables controles que caracteriza el régimen de las licencias, constituye el privilegiado terreno de las elecciones para la discrecionalidad del poder, el ideal campo de cultivo para el voto de trueque. La tan invocada, de palabra, "desregulación", insinuada por todas las derechas, puede entonces querer decir reglas ciertas, por lo tanto *más* leyes y libertad de los individuos trabajadores, en el respeto de ellos ante las autoridades administrativas. Se intenta circunscribir el arbi-

trio promoviendo el "gobierno de las leyes" (pocas, claras, eficazmente operativas); la desregulación reinstauraría, paradójicamente, una alta tasa de legalidad, privando de oxígeno al voto de trueque.

Análogamente, con cada relación de negocios que implique poderes públicos y administración pública: concesiones, financiaciones facilitadas, empresas. También las intervenciones extraordinarias (en caso de calamidades naturales) pueden obedecer a la lógica de la ley y de su automatismo o a la ley del clientelismo antidemocrático.

En términos más generales: la forma de ley se confirma como sideralmente más democrática con respecto a la práctica de las leyes,



Lex Animaux (Grandville)

de los abastecimientos *ad hoc*, de las licencias administrativas. Que después un eficiente *welfare* exija el dominio de esta segunda lógica, es una fábula jamás demostrada, aunque recurrente, y nada inocente.

La edificación constituye probablemente el ámbito donde más dramáticamente se evidencia la diferencia entre las dos lógicas, y merece, por lo tanto, una ejemplificación. Un plan regulador puesto a consideración de los ciudadanos junto con la candidatura del alcalde, y no modificable durante la duración del mandato, por ejemplo, no sólo restituiría a cada uno un fragmento de soberanía, sino que sustraería al poder uno de los más perniciosos instrumentos de corrupción (y de degradación ambiental, por añadidura).

Todo recurso escaso en manos de la administración puede convertirse en objeto de un voto de trueque. Por ejemplo: la casa adecuada a los cánones, controlada por entes gubernamentales o paragubernamentales, asignada sin seguir rígidos y vinculantes parámetros objetivos, constituye un privilegio formidable y formidables reservas de consenso. Un plan de desarrollo edilicio, por lo tanto, puede transformar una medida social en un perverso mecanismo de corte peronista, si se transige aunque sea un poco en el tema del gobierno de la ley y del automatismo de las reglas.

Además. También la eficiencia, como la legalidad, no es ya más un valor neutral desde el punto de vista democrático. Una política de ineficacia administrativa (generalmente por omisión) culpa a la democracia formal y procesal porque rebaja al ciudadano al rango de mendicante, constriñéndolo a pedir como favor lo que le pertenece por derecho. Para intercambiarlo por el propio consenso. Pero un derecho negociado deja de ser un derecho. Y un voto de trueque no es, por definición, un voto libre. No es casual, por lo tanto, que todas las zonas degradadas desde el punto de vista de la eficiencia (el sur, las periferias urbanas carentes de servicios) hablen tan ruidosamente el lenguaje democráticamente alterado del voto clientelar. Una política sustantiva es democrática sólo si se ejerce para que sea poco o nada posible el voto de trueque. Porque el voto de trueque hace, sobre todo, cómplices. El ciudadano implicado en una relación de *do ut des* y de corrupción (aunque ínfima y "obligada") pierde progresivamente capacidad de indignación hacia la corrupción (incluso grande) de los hombres en el poder.

Del pluralismo a la partidocracia

Un voto libre implica libertad de organización. Nuestra democracia es democracia a través de los partidos. La primera exigencia, cuando se combate una dictadura, suena exactamente así: libertad para todos los partidos. Pero los partidos pueden ser libres sin ser realmente libres los ciudadanos (de elegir sus propios representantes y de controlarlos). La democracia a través de los partidos es un régimen altamente problemático. El partido político se ha revelado como un instrumento ambivalente.

Nacen como instrumento de participación, de ejercicio efectivo, aunque indirecto y circunscrito, de la soberanía. ¿Pero siguen

siendo así los partidos? *¿Instrumentos* para que ese *cada uno* que todos nosotros somos pueda concretamente *condividir* el poder público? ¿Instrumentos para que el ideal, aunque redimensionado y empobrecido por razones de practicabilidad técnica, sea por fin técnicamente operante?

El partido es hoy una gigantesca y multiforme máquina, un aparato burocrático que crece sobre sí mismo, que tiene creciente necesidad de dinero y que, a través de su propia existencia, desarrolla un interés específico, en principio paralelo a los intereses que el partido debería representar pero rápidamente dominante respecto de los mismos: el de la propia reproducción y expansión.

El partido cesa de ser instrumento, y se convierte en una razón en sí mismo. De ese modo ya no puede representar más específicamente a nada ni a nadie, porque se representa ante todo a sí mismo y a su futuro. No representa ya, en la esfera pública de la política, las realidades privadas de la sociedad civil (intereses, opiniones), sino los intereses privados propios de una nueva clase social.

Una clase social en expansión, y que aprovecha todas las ocasiones para expandirse. También el proceso de democratización viene viciado de finalidades: el multiplicarse de las sedes electorales (del consejo de barrio al de las instituciones escolares) no brinda ocasión para nuevas formas de participación con diversos protagonistas, pero da a los partidos ulteriores puestos sobre los cuales asentar ulteriores burócratas. Lo mismo sucede con la ampliación del sector público o las articulaciones de los servicios del *welfare state.*

No ya representantes de intereses en conflicto, sino portadores en primera persona de un interés propio, para todos el mismo (la prolongación de la propia reproducción), los partidos terminan por parecerse entre sí cada vez más, aunque la competencia por el reparto de la tarta pueda adquirir acentos ponzoñosos. El fenómeno amenaza el corazón de la democracia formal, la posibilidad de elegir entre ofertas políticas efectivamente contrastantes, efectivamente alternativas. Cada vez más a menudo, en cambio, el ciudadano puede desahogarse sólo entre *bonnet blanc* y *blanc bonnet.* Es obvio que el partido de la abstención conquista cada día nuevos partidarios de la resignación.

Quien no vota se abstiene porque considera que votar es inútil, que el voto no influye en nada. Piensa que, *sic stantibus rebus* en los mecanismos político-institucionales, nada puede cambiar. No ya que nada *deba* cambiar. Toda encuesta sobre la abstención señala, más que nada, una resignación que llega al malestar, una frustración cercana a la desesperación (y potencialmente disponible para la aventura: tan destructiva como reaccionaria). La opinión contraria es simple impudicia, aunque esté de moda. El político que la respalda sólo está concediendo la perversidad de arrogantes sofismas (por otra parte, está celebrándose a sí mismo). El periodista o el "docto" que solemnemente dan su anuencia se están dando simplemente el placer de la alabanza servil, el erotismo de los invertebrados (además, está cuidando su carrera).

En suma, la abstención es una manifestación evidente de democracia sustraída.

Hay políticas sustantivas (leyes electorales, normas de incompatibilidad de cargos, limitaciones al número de los mandatos, reglamentaciones de la vida de los partidos) que pueden impedir los fenómenos arriba mencionados. Capaces de invertir lo que, sólo en apariencia, constituye una tendencia "natural", una incontenible deriva. Restituyendo así a los partidos, al menos parcialmente, a la función democrática que las constituciones democráticas les han confiado.

Son políticas, por lo demás, convergentes con las antes mencionadas, susceptibles de limitar distorsiones del principio democrático tales como la desigualdad de oportunidades o el bloqueo de accesos.

La democracia, para no desaparecer, debe garantizar elección efectiva, como hemos visto. Pero elección implica conocimiento, información, circulación adecuada de todo dato importante. La misma complejidad de los problemas es generalmente invocada por cuantos consienten cada deterioro y restricción de los procedimientos democráticos, cada marginación del sujeto-ciudadano en nombre de superiores e irresistibles razones técnicas. Pero los políticos que tienen ese discurso son los primeros en estar privados de las informaciones mencionadas, y se sirven por ello de expertos para traducir técnicamente las respectivas opciones (cada vez más parecidas, ya lo hemos visto). Será, por tanto, buena política *democrática* aquella que consienta un máximo de circulación de los datos técnicos importantes para cada ciudadano, en lugar de cautivantes eslóganes y otras hipocresías.

El partido cesa de ser instrumento, y se convierte en una razón en sí mismo. De ese modo ya no puede representar más específicamente a nada ni a nadie, porque se representa ante todo a sí mismo y a su futuro. No representa ya, en la esfera pública de la política, las realidades privadas de la sociedad civil (intereses, opiniones), sino los intereses privados propios de una nueva clase social.

Les Animaux (Grandville)

¿Es pedir demasiado a los partidos? ¿Es una increíble ingenuidad? Sólo en el caso de quienes se inclinan por la idea de que "demasiado" y demasiado ingenuo es el proyecto democrático mismo.

Por otra parte, la circulación de los conocimientos y de las informaciones es también crucial para el ejercicio de otro derecho democrático irrenunciable: el control sobre los electos.

En ambos casos, primero para elegir y luego para controlar a quienes se ha elegido, la política de la información (y de la instrucción y de la cultura) ocupa una posición estratégica en la base misma de los instrumentos democráticos.

No hay voto libre sin libertad de prensa (y, hoy, de TV). Hace más de un siglo, Jules Michelet recalcaba como obvio que: "La prensa tiene una misión extremadamente útil, extremadamente seria y ardua, la de una continua censura de los actos del poder". La libertad de información, el periodismo crítico, la noticia para el ciudadano (y no la manipulación del ciudadano a través de la noticia, en provecho del poder), constituyen hoy una excepción a la normalidad. También y sobre todo en la tan idealizada televisión norteamericana (donde, ahora, disputan al son de millones de dólares, no ya la inmediatez y precisión de las noticias, sino el encanto que las "periodistas" ofrecen al oyente cómplice).

Más exactamente: no es probable que la democracia formal logre mantener si la gran mayoría de la gente no sigue considerándola deseable. El desafecto de crecientes porciones de población hacia las instituciones (y el momento electoral) no sólo constituye un riesgo para la liberaldemocracia, sino también su actual, aunque parcial, negación.

Inútil subrayar cómo el carácter más o menos libre del periódico, más o menos crítico de la información, dependen en medida decisiva de las políticas concretas operantes en estos sectores. Montanelli puede anotar periódicamente el lugar común según el cual "el periodista con sus atributos" impone el respeto a su propia libertad a cualquier editor o director. En realidad, hay políticas capaces de orientar la selección de los talentos, favoreciendo las carreras de las espinas dorsales elásticas predispuestas a acatar consignas gubernamentales y a las atenciones. Por esto, las políticas *sustantivas* en el campo de la información son decisivas para acercar o alejar los *procedimientos* democráticos de la formación y control de la representación.

El control, en fin, exige taxativamente que la democracia formal sea una democracia *transparente*. Toda forma de *arcana imperii*, de la más clásica (y casi siempre invocada equivocadamente) razón de Estado, a la opacidad cotidiana que la factura burocrática opone a los derechos del ciudadano, pasando por las infinitas impenetrabilidades que entretejen las vicisitudes de "Palacio" y sus relaciones con los potentados de la sociedad civil, constituye un handicap para el ciudadano. Y con ello un handicap para la democracia. La no transparencia, la oscuridad intoxica la democracia, y semejante ponzoña (o su contrario) es evidentemente lo que conlleva la política sustantiva (sobre todo gubernativa).

"Ethos" democrático

En resumen: democracia formal quiere decir voto libre e igual, imparcial distribución de las oportunidades de éxito entre los participantes, acceso a la competición abierto a todos, transparencia de los comportamientos para garantizar el control sobre los elegidos, no homologación entre los partidos en pugna para garantizar la representación.

Pero una competición no es libre si la gran mayoría de los ciudadanos está privada de acceso. No es igual, si recursos extraños a la lógica de la competición entran en juego, sobre todo si son determinantes. Una competición simplemente no es tal si quienes compiten son idénticos. Y sin una información libre y crítica, por fin, la consulta electoral se inclina estructuralmente al plebiscito.

Todo cuanto privatiza la política (y son las políticas concretas, sustantivas, las que favorecen o combaten el fenómeno) inhibe el funcionamiento de la democracia, la deteriora, la cancela progresivamente. Aunque, quizá, haga que el sistema sea funcional. Estable y gobernable. Pero la democracia no es un sistema sin adjetivos. Es, por lo tanto, aquel sistema donde el adjetivo cuenta infinitamente más que el sustantivo. En caso contrario, ya se trata de otra cosa.

La democracia —será bueno no olvidarlo jamás —es un sistema frágil, una excepción de la aventura humana. Occidente, entendido como liberaldemocracia, históricamente constituye un accidente. Un incidente, incluso. Expuesto a todos los riesgos. La democracia es gobierno paradójico y lógicamente inerme, porque para no renunciar a sí mismo debe garantizar espacio a sus enemigos, tolerancia a los enemigos de la tolerancia. Es el régimen *contra natura* por excelencia, porque entra en conflicto con la tendencia a las tranquilizantes certezas de la tradición, de la obediencia, de la pasividad. Es, como sabían perfectamente Hegel y Marx, el régimen más abstracto.

La democracia es infundada e infundable. Es creación gratuita y elección gratuita que ninguna extravagancia neoutilitarista conseguirá demostrar. Por eso es aún más preciosa. El régimen sin fundamentos, la democracia conoce sólo una posible "garantía": un *ethos* democrático extendido, constantemente renovado, arraigado. Sin las virtudes del ciudadano, la actualidad de la democracia es perennemente puesta en peligro.

Está claro: no se puede renunciar democráticamente a la democracia. Sólo en apariencia, regímenes totalitarios han surgido respetando los procedimientos democráticos (el fascismo en Italia y, más aún, el nazismo en Alemania). Los procedimientos constitucionales democráticos siguen siendo tales sólo en tanto no anulan el sujeto de la democracia, ese colectivo "todos" (donde se entiende a cada uno como individuo único e irrepetible) en función del cual la democracia tiene sentido (y para el que ha sido inventada).

Los procedimientos de la mayoría siguen siendo liberaldemocráticos sólo en tanto no lesionan a la minoría.

Lo que significa, sin embargo, que los procedimientos democráticos pueden ser usados (y con estos negados) para el suicidio de las democracias. O para su hibernación. La corrección del procedimiento, en suma, puede ocultar la violación del procedimiento mismo, ya que la democracia formal es precisamente un régimen de garantía para las minorías y fundado sobre la metanorma de la intangibilidad del sujeto "todos".

Es evidente, pues, la dramática fragilidad de la democracia. Y el carácter crucial que asume la difusión y el arraigo (la *hegemonía*) del *ethos* democrático, de la personalidad democrática entre la gente. Ninguna democracia puede esperar perpetuarse si el método democrático no se convierte en una costumbre interiorizada.

Más exactamente: no es probable que la democracia formal logre mantenerse si la gran mayoría de la gente no sigue considerándola deseable. El desafecto de crecientes porciones de población hacia las instituciones (y el momento electoral) no sólo constituye un riesgo para la liberaldemocracia, sino también su actual, aunque parcial, negación.

Ethos democrático equivale a decir individuo moral, cultural, socialmente *autónomo*. Sin esta personalidad democrática la democracia declina. La difusión hegemónica de la personalidad democrática es el único "fundamento" de la democracia, su única posible "garantía".

En tiempos de sociedad de masas, ¿se trata de una utopía, de una ilusión? ¿De una condición inalcanzable? ¿Por qué, mejor, no admitir con lúcido desencanto que la sociedad de masas entra en conflicto espontáneamente, en los aspectos relevantes, con la democracia, y por lo tanto, toda política sustantiva que se quiera democrática tiene el deber

Les Animaux (Grandville)

de actuar con más atención, con más intransigencia, en vista de todo lo que pueda salvaguardar y potenciar al individuo autónomo y al *ethos* democrático contra las tendencias espontáneas a la masificación? Si mayor es el riesgo, el realismo quiere que mayor sea el *cuidado*.

Son enemigos de la democracia, pues, todos los enemigos de la personalidad y del *ethos* democrático, todas las políticas sus-

tantivas que alientan o simplemente no combaten el conformismo, la apatía, el espíritu corporativo y gregario, la política envilecida por el consumo y degradada hasta el nivel de espectáculo. Tales políticas no serán simplemente opinables, *disputables* en el seno de la democracia, pero se calificarán como sostén o como agresión en las confrontaciones de la democracia misma, porque no consolidan o, viceversa, no destruyen el único "fundamento".

Es, entonces, política agresiva contra la democracia toda tolerancia (o peor, incentivación) hacia la *omertā* del poder. El arraigo de la democracia exige estilos de vida conformes, una coherencia existencial con los valores de la Constitución, extendida sobre todo en las altas esferas. Allí, si la democracia se toma en serio, debiera reinar la más despiadada intransigencia en marginar y castigar los menores indicios de ilegalidad y de abuso. Que reine el más cómplice de los laxismos sólo es índice de la degradación de la democracia por obra de los "profesionales" de la cosa pública, de los nuevos patrones de la política.

Las cualidades de la personalidad democrática pueden parecer fugaces, difíciles de definir con precisión, inasibles. Muy asible, en cambio, es todo lo que esta cualidad niega. Veamos.

Conformismo contra democracia

Autonomía quiere decir falta de dependencia de los otros, no ya desde el punto de vista económico (todos dependemos, como dice Adam Smith, del carnicero, del lechero, y de quien nos da trabajo), sino desde el punto de vista de los derechos y de cuanto puede condicionar la elaboración de una libre opinión.

Liberal intransigente, Alexis-Charles-Henry Clérel de Tocqueville temía sobre todo los efectos de la igualdad: la apatía y el conformismo, irreductibles agentes corrosivos de la libertad. Es del todo discutible que sea verdaderamente la igualdad la que difunde esos males; pero es cierto, en cambio, el efecto letal que ellos ejercen sobre la libertad.

El conformismo como atentado a la libertad: no es el íncubo apocalíptico frankfurtense el que habla, sino la sobriedad clásica del liberal, en un momento en que toda política incapaz de combatir el fenómeno, o que tal vez lo incrementa activamente, lo conjura incluso al atentar cotidianamente contra la democracia. Esto, que mengua poder, despolitiza e irresponsabiliza, llevando por consiguiente a la apatía. Frutos envenenados que ponen en riesgo a la democracia liberal. Un militarismo al revés. El ciudadano despotenciado, por otra parte, garantiza la transformación del poder en prepotencia. Pero las reglas electorales que imponen la convergencia al centro y llevan al cabo la mutilación progresiva de toda disensión —*in primis* las presidenciales norteamericanas— sustituyendo por un desenlace de mediación una lógica provechosa de homologación, son también el producto de un conformismo extendido, pero a su vez lo consolidan e institucionalizan. Efecto y causa.

Era la muchedumbre, anónima porque igual (social y económicamente), el fantasma que atormentaba a Tocqueville. Hoy es la uniforme pasividad, el atrofiado silencio ante las exiguas protecciones, el furor ensordecedor de los decibelios, la homologada indiferencia de los ritos de evasión, y todas las políticas favorables a esas derivaciones, a minar la democracia y disminuir sus defensas inmunitarias.

El liberal, de ayer como Tocqueville y de hoy de Bobbio, nos recuerda, con sacrosanta obsesión en estos tiempos de lotofagia, que el titular de la soberanía liberaldemocrática no es un indiferenciado pueblo de vocaciones orgánicas (y plebiscitarias), sino todos los ciudadanos tomados en su singularidad. Por lo tanto, toda política que favorezca o no obstaculice la metamorfosis del *cada uno* (particular e irrepetible) en masa es política extraña a la democracia en su justa acepción formal y de procedimiento.

Lo que significa, hablando francamente, más allá y contra el "realismo" retórico al uso, que la irregimentación corporativa de la sociedad y la política partitocrática, que la respeta, santifica y consolida (pero que quizá la produce), toma el rumbo hacia la colisión con el principio democrático. Los intereses en sentido exacto (corporativos por definición), cuando agotan la identidad del ciudadano, *agotan* también la posibilidad de la ciudadanía.

La anulan. No se da ciudadanía (y por tanto democracia) sin un núcleo irreductible de identidad del cada uno que permanezca estructuralmente desinteresada. Pero hacer contar "intereses" generales (aun entre sus conflictos, es obvio), es decir, *opiniones*, en la

La política-espectáculo vale como evasión de la política y de la democracia. No es motivo de asombro, pues, que quien se evade de la política pretenda ser pagado, canjear su propio voto: el espectáculo mediocre no soporta la confrontación con el auténtico espectáculo de evasión.

Si el procedimiento se degrada en rito, pierde sus connotaciones esenciales, se precipita en la ficción. Pero la política-espectáculo es ya otra cosa y peor que el rito: es ludocircense. La democracia ludopapel es un declarado e insolente enemigo de la democracia.

determinación de la vida pública y en las elecciones que la controlan, antes que los intereses corporativos, es supuestamente posible a la luz de adecuadas políticas sustantivas, ordinarias o institucionales-electorales. Y el fiel de la balanza se inclinará en dirección de la democracia y no hacia su elusión.

El *ethos* democrático, de hecho, se produce y refuerza sólo a través del ejercicio práctico de los derechos democráticos. A través de la participación activa. A través de una activa pasión por la democracia. Toda política que frustre, desincentive o inhiba esta actitud, que diluya y aleje, que demuestre que nada puede cambiar con el voto y el uso de los demás procedimientos constitucionales, es ya política que niega la democracia.

La partitocracia, esto es, el monopolio desplegado por los políticos profesionales sobre toda la esfera pública, es, pues, una infección invasora del ordenamiento democrático. Pero también la política-espectáculo, que acompaña tanto al régimen partitocrático como a la variante "partido débil" de la actual decadencia de la democracia en Occidente, logra sobre el ciudadano y sobre el ordenamiento democrático los mismos efectos lobotomizantes.

Dos espectáculos no constituyen una alternativa. La política no puede ser consumada con las lentejuelas de una bailarina o con la seducción *spot* de un *showman* sin *desgastar* con esto la democracia. No se puede entender el sufragio como índice de agrado, porque lo que es democracia sólo subsiste si la elección es efectiva y efectivo el control, esto es, una participación, aunque mediata, en las decisiones colectivas. La política-espectáculo vale como *evasión* de la política y de la democracia. No es motivo de asombro, pues, que quien se evade de la política pretenda ser pagado, canjear su propio voto: el espectáculo mediocre no soporta la confrontación con el auténtico espectáculo de evasión.

Si el procedimiento se degrada en rito, pierde sus connotaciones esenciales, se precipita en la ficción. Pero la política-espectáculo es ya otra cosa y peor que el rito: es ludocircense. La democracia ludopapel es un declarado e insolente enemigo de la democracia. La degradación de los procedimientos a ritos lúcidos es un regalo ofrecido a quien intenta amenazar la democracia, una devastadora derrota de sus defensas inmunológicas, una traición ya activa.

La igualdad político-jurídica nada tiene en común con la fruición de un espectáculo de evasión. La igualdad democrática es igualdad de individuos autónomos. Cuando vienen juntos, triunfan regímenes de masa, de obediencia, de conformismo, y la democracia palidece. La igualdad del conformismo es expulsada de la democracia por ser igualdad basada en la anulación del individuo como opinión, igualdad en la privación de la ciudadanía.

Les Animaux (Grandville)

La democracia, crítica de lo existente

Concluyamos. La alternativa es alentar o adormecer la virtud de los ciudadanos, combatir o seguir la deriva partitocrática y de la política-espectáculo. Y múltiples actos de política sustantiva influyen en una u otra dirección. Estos, por lo tanto, no pueden ser calificados como indiferentes desde el punto de vista democrático, de la democracia de procedimientos, aun cuando estén de acuerdo con las reglas de reprocedimiento. Exigir políticas que incentiven estas virtudes (y penalizando todas las tendencias a la devirtuación espectacular y corporativa de la política) no es moralismo, sino perspectiva de visión. Realismo.

La tarea que enfrenta el demócrata es siempre la de obrar para dar cumplimiento a

Las políticas que se combaten en el marco de la democracia son, pues, políticas que se oponen entre sí como* más *democráticas o* menos *democráticas, toda vez que convergen los múltiples elementos implicados en el arraigo y en la reproducción de los procedimientos democráticos.

la democracia. Un deber apremiante también y sobre todo en la lúcida conciencia de que la democracia cumple con un ideal, por tanto inalcanzable. Pero ideal en el sentido kantiano. Idea reguladora, no utópica. Inalcanzable pero *aproximable*. Y precisamente porque no es realizable en su totalidad, sino sólo en parte (su acercamiento), este algo se persigue integralmente, obstinadamente, con intransigencia.

Las políticas que se combaten en el marco de la democracia son, pues, políticas que se oponen entre sí como *más* democráticas o *menos* democráticas, toda vez que convergen los múltiples elementos implicados en el arraigo y en la reproducción de los procedimientos democráticos. A los que hemos examinado de manera sumaria y ciertamente incompleta.

En suma, en el marco de la democracia se encuentran, continuamente, políticas de coherencia democrática y políticas de resignación o incentivación del eclipse del ciudadano y de la democracia. Inútil sería fabular que tales políticas son neutrales, indiferentes, equivalentes desde el punto de vista democrático.

Por otra parte, el *descarte* es la categoría más auténtica, la estructura más secreta de la vida histórica de occidente. Y la incesante acción que la política sustantiva democrática debe llevar a cabo para que se cumpla la democracia (i. e. aproximarla, como hemos visto), no comporta de ningún modo el riesgo de la tentación totalitaria de objetivos irreversibles. La aproximación democrática, aun cuando aspirara a ser asintótica en su esfuerzo, nunca ha florecido en la alteridad, y deja por su propia naturaleza espacio a todo esfuerzo (y a toda espontaneidad) de signo opuesto. De adversarios de la democracia o de sus sostenedores bastante poco coherentes siempre habrá abundancia y exceso debido precisamente al carácter no natural de un régimen que está en conflicto con el espíritu gregario, la obediencia, el conformismo y otras tranquilizadoras "pasiones" del alma humana.

Reconocer en los partidarios de determinadas políticas sustantivas adversarios de la democracia, por incoherentes y no ya por savonarolanescamente "tibios", no implica, sin embargo, el otro riesgo totalitario: la tentación de suprimir ese enemigo en nombre de la democracia misma. La divisa de Saint-Just, en suma: ninguna libertad para los enemigos de la libertad. Mucha libertad, en cambio, aun para los enemigos de la libertad. Aquí se enseña a respetar los sucesos de las democracias incoherentes, no ya como concesión al adversario (que seguiría siendo soberana, y por lo tanto revocable, como toda concesión), sino esos vínculos de coherencia con el principio democrático que se quiere afirmar integralmente (aproximar). Si no se actuara así, veríamos menos los títulos para definir esta política más democrática que los que actúan en el sentido del derrocamiento de los procedimientos y del eclipse del ciudadano.

Pero no es posible equivocarse. La victoria de los políticos incoherentes desde el punto de vista democrático (hoy la normalidad) debe por cierto ser aceptada por coherencia democrática, aunque ciertamente no rechazada para afirmación de la democracia o de su práctica.

Inútil añadir que el respeto de las políticas incoherentemente democráticas es algo bien distinto de la legitimización, aunque pasiva, de medidas que hacen imposible, aunque sea heroica, la lucha por la realización lograda (aproximación asintótica) de la democracia. Frente a toda medida tiránica es válido el viejo derecho liberal a la resistencia, a la revuelta, incluso armada. En este caso se está frente a un enemigo al que es necesario suprimir.

Y terminando. Aceptar democráticamente los sucesos de las políticas incoherentemente democráticas no quiere decir resignarse a la deriva que, con costes y modalidades profundamente diversos, pero con unívoca dirección, caracterizan hoy a occidente. La democracia *reseñada*, súcuba y cómplice de lo existente, es una contradicción en sus términos.

El eclipse del ciudadano, la liofilización de la democracia, no es de ningún modo un destino, la fatal e incontrastable pendiente de la época. No se trata por tanto de esperar a un dios para que nos salve.

El arraigo o el derrumbe de la democracia es una de las apuestas cotidianamente puestas en juego en la existencia de la democracia misma. Apuesta singular, bien entendido. Porque en caso de perderla se corre el riesgo de no jugar más (manteniendo la ilusión, tal vez, de que el juego continúa).

Esto es cuanto los gurús apologéticos de la democracia realmente existente no saben, han olvidado o prefieren no saber. Una inquietante, muy dañina ignorancia●

Lotería de Bogotá
Líder en tecnología!
por todo, Lotería de Bogotá,
el billete que más billete da!
LOTERIA DE BOGOTA
$ 150 millones
de Premio Mayor !
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.E.

Francisco C. Weffort.
Profesor de Ciencia Política de la Universidad de São Paulo (USP) y Director del Centro de Estudios de Cultura Contemporánea (CEDEC).

La América Errada

Francisco C. Weffort

*Notas sobre la democracia y la modernidad en América Latina en crisis**

"América es ingobernable".

Simón Bolívar

"De un lado, tuvieron acceso a la vida fuerzas industriales y científicas que ninguna época anterior, en la historia de la humanidad, llegara a sospechar. De otro, estamos delante de síntomas de decadencia que ultrapasan en mucho los horrores de los últimos tiempos del Imperio Romano. En nuestros días, todo parece estar impregnado de su contrario".

Marx

Este fin de siglo registra una de las épocas de mayor crecimiento democrático y también de mayor crisis económica y social, en la historia de los países de América Latina. Elecciones presidenciales recientes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay —he ahí algunos ejemplos de la retomada de la democracia en la región. Es cierto que permanece un horizonte sombrío en América Central, con las agresiones de los "contras" en Nicaragua y la guerra civil en El Salvador que ya completa diez años y que continúa, infelizmente. Pero, en la mayor parte de los países que la componen, América Latina se liga, en la época actual, a un proceso de democratización que ocurre en escala internacional y que incluye partes de Asia, el sur de Europa y la mayoría de los países del campo socialista.

La entrada de América Latina en el circuito internacional de la democratización, en la década de los 80, podría ser tomada como indicio de que estaríamos preparados, en los años 90 que se inician, para atravesar los umbrales de la modernidad.

Una cuestión de sobrevivencia

En el Brasil de fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, se llamaban "ciudades muertas", las ciudades abandonadas por la cultura del café en el valle del río Paraiba, que une los estados de Rio de Janeiro y de Sao Paulo. Eran ciudades que quedaron atrás después que la depredadora e itinerante agricultura del café agotó por completo las tierras de la región y tomó la dirección del oeste. Eran víctimas de la modernidad del siglo XIX, señales de destrucción que la economía agroexportadora dejaba en aquella pequeña parte del mundo. Junto con el café —que, en el Brasil, había quien la llamase "la planta democrática", pues se atribuía al desarrollo de la caficultura la creación de las condiciones para la caída del Imperio y para la implantación de la República— venía el crecimiento urbano. Pero después que el café cambiaba de región, dentro de las ciudades que él había creado y que no conseguían otro estímulo económico, algunas simplemente se estancaban. Después de algún tiempo eran abandonadas y morían.

No debería ser difícil entender por qué los latinoamericanos siempre fueron ambiguos con relación a la modernidad y a la democracia. Conocemos, en estos años 80 recién terminados, países que se estancaron. ¿Se puede admitir la posibilidad de que países mueran? Tal vez se considere un absurdo la simple pregunta. ¿Pero no conocemos casos de civilizaciones enteras que desaparecieron? Las relaciones entre democracia y modernidad nunca fueron bastante claras en la historia de América Latina y se volvieron particularmente confusas en las últimas décadas. Muchos latinoamericanos están temerosos frente al "admirable mundo nuevo" que se anuncia en este fin del siglo. Ellos presienten que es su propia identidad que está en juego. Y de verdad, tal vez sea más que eso.

La modernización acelerada a que asistimos en el mundo de hoy —incluso tanto más acelerada cuanto más modernos los países— ofrece muchas razones para el entusiasmo. Pero los que insisten en decir cómo será de pequeño el mundo después de unificado por el avance de la "revolución tecnológica", tal vez no estén llevando en la debida cuenta que éste es un proceso abierto y que cobra un alto precio a los retardatarios. Con el ritmo que van las cosas, la modernización acelerada (y ese fenómeno va mucho más allá de la "revolución tecnológica") puede tener efectos sorprendentes. Si los latinoamericanos no estuviesen preparados para lo que viene por ahí, podrán ser transformadas en chatarra no solo muchas de sus máquinas e industrias sino también algunas de sus ciudades, posiblemente regiones y hasta países enteros.

Parece claro, por lo menos en ese paso de los años 80 para los 90, que la modernización y la democratización no andan en el mismo compás. Caminamos para la democracia —es eso lo que creemos leer en los hechos políticos de los años 80. Y esperamos que el camino democrático permanezca abierto en los años 90, afirmando uno de los lados de la contemporaneidad de América Latina, o sea, de la capacidad de los latinoamericanos de unirse, de modo afirmativo, a las tendencias políticas predominantes en el mundo moderno. Pero también es verdad que, al mismo tiempo, la modernización se estancó en los planos social y económico. Peor que eso, América Latina se hundió, en los años 80, en una crisis económica y social que afecta, en algunos casos, la propia posibilidad de sobrevivencia de las sociedades nacionales.

Quien mira para el Cono Sur, donde se encuentran algunos de los países más modernos de la región, puede ser tentado a pensar que las relaciones de América Latina con la modernidad, más que difíciles, han sido muy frustrantes. El visible empobrecimiento de Uruguay —el "pequeño país-modelo" en la expresión de Jorge Batle a inicios de este siglo, y que es también, todavía hoy, uno de los pocos países latinoamericanos con una verdadera cultura democrática— puede ser considerado un emblema del complejo proceso que vivimos en los últimos decenios. El presidente Sanguinetti, como los demás gobernantes de transición, termina su período y no se revela capaz de hacer su sucesor. En Argentina, el fracaso del gobierno Alfonsín en sus tentativas por retomar el crecimiento económico deja el país frente al terror de la hiperinflación. Y el prolongado desgaste a que se halla sometida la transición democrática en el Brasil desde 1982, en especial desde 1985, cuando se instaló el gobierno Sarney, causa enorme preocupación entre los que se empeñan en la democracia y el desarrollo del país y de la región.

La verdad es que todos los nuevos gobiernos de América Latina comienzan bajo el

signo de la recesión económica. Y, sobre todo, de un gran desencanto político. En el extremo norte de América Latina, se inauguró, en México, recientemente, el gobierno de Salinas de Gortari, cuyo signo es bastante semejante. Quien mira para el conjunto de América Latina no está autorizado a grandes optimismos. En el Perú, el gobierno de Alan García, que al iniciarse parecía pretender renovar las perspectivas de su país y de América Latina, termina bajo pesado desgaste. La única excepción que permite optimismos, por lo menos en este momento, es Chile, donde, finalmente, termina, con la elección de Patricio Allwyn liderando un frente de dieciséis partidos democráticos, la era autoritaria de Pinochet. En cuanto a los demás, el clima es por lo menos de aprensión. Quien tenga dudas sobre esto haría bien en recordar los trágicos incidentes de Caracas luego después de la inauguración del gobierno social-demócrata de Andrés Pérez.

Existen imágenes recientes demasiado fuertes para ser olvidadas. He ahí cómo el politólogo argentino Guillermo O'Donnell describe un momento de la vida de su país, en el último año del gobierno de Alfonsín: "la crisis, más allá de sus dimensiones económicas, políticas y sociales, afecta el propio Estado en algunos de sus aspectos más constitutivos. Durante varios días Argentina fue un país sin moneda (...). Un Estado sin moneda fue complementado por un Estado sin capacidad de coerción. Para contener los saqueos fueron llamados los policías provinciales. Algunos de sus miembros dieron rienda a sus inclinaciones asesinas, tirando a matar a los saqueadores; otros, no menos miserables que estos, observaron pasivamente a sus vecinos traer comida a casa. Otros habitantes de barrios populares, aterrorizados con la posibilidad —que de hecho ocurrió— de ver sus propias casas saqueadas, se armaron y formaron su propia "policía". Por su parte las Fuerzas Armadas, "hicieron saber que no irían a obedecer las órdenes para intervenir, a menos que el gobierno aceptase determinadas condiciones"[1].

O'Donnell está hablando, en el inicio de junio de 1989, de un proceso de violencia que duró semanas. Pero como él bien lo sabe, podría estar hablando de toda una época histórica. Y no sólo sobre un país sino sobre todo un continente. ¿Estaría la democracia condenada, en América Latina, para nuestra desgracia, a tener como compañera no la modernidad sino la decadencia? Amenazada por la hiperinflación y por la recesión, ¿estaría la democracia condenada a ser aquí no el espacio de las garantías institucionales de la dignidad humana sino el camino del caos?

Los economistas latinoamericanos hablan de la década de los 80 como la "década perdida". Como ya se dijo, esta expresión contiene un tanto de exageración y otro tanto de imprecisión. Pero ninguno duda que los latinoamericanos terminan la década con un pesado sentimiento de pérdida, aunque un sentimiento que no se limita, como veremos, a cuestiones económicas. Los números, en todo caso, son impresionantes. "Al final de 1989" dice el economista Gert Rosenthal, secretario ejecutivo de la CEPAL, "el producto medio por habitante en la región será inferior en casi 10% al de 1980, y equivalente al de 1976"[2]. En la mayor parte de los países se agravan los viejos problemas del subempleo, marginalidad social, desempleo, caída de los salarios, deterioro de la calidad de vida, destrucción del medio ambiente, etc. "Se estima que, muy a *grosso modo*, en 1980 unos 112 millones de latinoamericanos y de caribeños (36% del total) vivían abajo del nivel de la pobreza, esa cifra se elevó a 160 millones en 1985 (38% de la población total)"[3]. El Brasil, con algunos pocos años de relativo crecimiento industrial, sustenta algunas salvedades en un cuadro generalizado de decadencia de América Latina. Pena que el país sea conocido como caso extremo de desigualdad social, incluso desigualdad creciente en el último decenio.

En la región como un todo, los viejos problemas se mezclan como problemas nuevos, algunos de los cuales todavía más graves que los antiguos. Digamos, desde luego, que dentro de los problemas nuevos, el más suave es el de la emigración: ¿estaríamos destinados a cumplir la maldición lanzada por Bolívar en un momento de desespero? "Los que sirvieron a la revolución araron en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar"[4]. El más escandaloso de los nuevos problemas es el del narcotráfico que ataca, sobre todo, países andinos como Colombia, Perú y Bolivia. Pero que no se olvide que en la ruta del tráfico de drogas quedó también involucrado Panamá, por arte del general Noriega, expresidente, exdictador y exagente de la CIA, y que, ahora, responde ante el tribunal americano a

acusaciones que lo califican como un criminal común.

Este cuadro de crisis económica y social contrasta con la democratización de la región. Se añade a la democratización institucional, importante cambio en la cultura política. El pensamiento latinoamericano afirma —en reciente victoria contra el determinismo, de origen económica u otra —la política como campo de libertad. Al contrario de una época en la cual se pensaba —en América Latina como en todo el occidente— que la libertad política vendría como reflejo del desarrollo económico, las luchas de resistencia contra las dictaduras y los recientes esfuerzos de construcción institucional en América Latina mostraron que se puede avanzar hacia la democracia incluso en un período de crisis económica. Dirán los pesimistas reticentes que esa afirmación de la política es, en sí misma, un efecto de la crisis y una señal de su profundidad. ¿No sería propio de las situaciones de caos la ruptura de cualquier determinismo y la creencia de que, en la dilución general del orden, todo es posible? En realidad es más que eso: en muchos países latinoamericanos se registran fuertes tendencias de opinión a concebir la democracia como un valor en sí. Eso quiere decir que, frente a la amenaza de la inviabilidad nacional, muchos latinoamericanos tienden a ver en la democracia no solo un camino para organizar el Estado sino para organizar la propia sociedad[5]. Enfrentando la posibilidad de la desintegración nacional, la fuerza de la democracia, para los países de América Latina, es la fuerza de la esperanza. Es uno de los caminos para que estos países readquieran su sentido de viabilidad.

Es preciso reconocer, en todo caso, que las afirmaciones de la autonomía de la política y de la democracia como valor en sí, por importantes que sean, no son lo suficiente. ¿Sería posible creer que la democracia continúe creciente cuando las economías, aparentemente, se deshacen y las sociedades se desmoronan? ¿Cómo imaginar que una democracia se firme en países que viven una crisis económica y social de tamaña profundidad? Por más auspicioso que sea el progreso de la cultura política democrática, sabemos que la consolidación de la democracia dependerá también de su eficacia para resolver problemas económicos y sociales. Además de eso, quien admite que la consolidación de la democracia está por venir, debe admitir también la fragilidad de las conquistas democráticass hasta aquí realizadas y, por lo tanto, la posibilidad de crisis y, eventualmente, de regresiones. Y, finalmente, quien tiene un mínimo de información sobre la historia de América Latina sabe que aquí la democracia no fue jamás concebida como el único camino para la construcción de las sociedades y de los Estados. Y sabe también que las luchas democráticas de los últimos decenios, por más fundamentales que hayan sido, difícilmente habrán exorcizado todos nuestros viejos demonios autoritarios[6].

Democracia, construcción nacional, integración y modernidad, todo esto tiene que ser visto en conjunto, desde la partida. Si la consolidación de la democracia en América Latina depende de la capacidad de los países latinoamericanos de reconquistar su sentido de viabilidad nacional, este a su vez, depende de su capacidad de retomar el desarrollo económico. Y, para la mayor parte, si no para todos los países latinoamericanos, retomar el desarrollo depende de su integración, en el ámbito regional. Y esta ha de ser una condición para que enfrenten con éxito el gran problema de la definición de un nuevo modelo de inserción en la economía internacional[7]. He ahí los desafíos que se colocan, una vez más, para los latinoamericanos. Juntos, ellos se presentan para América Latina como una cuestión de sobrevivencia. Y la obligan a reconquistar su capacidad de construir una imagen de su propio futuro, a reconquistar su capacidad de formular proyectos. Me gustaría hacer de este ensayo una contribución para este debate.

Pérdida del futuro

Los desafíos que nos sorprenden en América Latina de hoy son, en lo esencial, los mismos que la acompañan desde sus orígenes. Es por eso que ellos colocan en cuestión su identidad (y, por lo tanto, su sentido de sobrevivencia). ¿Pero diríamos por eso, que la crisis que los países latinoamericanos viven hoy es la misma de siempre? ¿Una crisis como tantas otras de países que todavía no completaron su proceso de formación?

En uno de los ensayos recientes más interesantes sobre las raíces de la cultura de América Latina, Richard Morse afirma que, en más de una oportunidad, los intelectuales latinoamericanos creyeron estar delante de una historia marcada por la entropía. Tomemos un ejemplo de lo que él pretende decir:

aunque la ciencia contemporánea diga que "los escritores iberoamericanos del final de la época colonial eran testigos de la progresiva articulación de sus futuras naciones en el sistema económico mundial (...) para ellos era más evidente (...) un proceso de desarticulación: el colapso del ideal ibérico de la "incorporación social" y la dicotomización de la sociedad en "gente de buen sentido" y una plebe cada vez más enfurecida e inasimilable"[8].

Morse hace una indagación histórica sobre nuestro pasado más remoto, sin ninguna preocupación práctica inmediata. Pero los términos en los cuales él coloca la originalidad cultural de "Iberoamérica" me parecen totalmente pertinentes al debate, de carácter mucho más político y práctico, que pretendo desarrollar aquí. El sueño de iberoamérica era la unidad, la incorporación, la integración; la realidad era la división, la exclusión, la marginalidad. "Un continente con una población de 20 millones al final del período colonial —donde cuatro de cinco personas eran esclavos, trabajadores dependientes, agricultores y pastores a nivel de subsistencia u ocupantes de precarias posiciones intersticiales, frecuentemente sin hablar el idioma de los conquistadores— era un escenario propicio para la realización de los grandiosos planes europeos de integración participativa, cualquiera que fuese su origen o época"[9].

En las entrelíneas de su "Espejo de Próspero", evaluación simpática y profunda de la cultura latinoamericana, Morse sugiere que sería propio de los latinoamericanos el sentimiento de alguna gran catástrofe haciéndose anunciar en la vuelta de la próxima esquina. El habla de "dos versiones de la historia occidental", la primera "evolutiva y fáustica", la segunda "más entrópica que evolutiva" ¿Frente a la historia de América Latina, cómo no habrían de espantarse los que, como muchos intelectuales (no sólo de América Latina sino de todo el occidente), aprendimos a ver la historia humana "como un permanente crescendo"?[10]. Su sugerencia parece ser la siguiente: más que un sentimiento de realidad, la visión de la proximidad de la catástrofe sería la expresión de una perplejidad del espíritu que se sorprende en el momento en que la historia, al contrario de "desarrollarse", se "abre" en un aparente vacío que, con todo, anunciaría nuevas posibilidades futuras.

Yo leo en las reflexiones de Morse una llamada de atención sobre las peculiaridades de la historia de América Latina. Y creo que, como tal, ellas deben quedar. ¿No estaremos hoy imitando, sin desearlo y sin saberlo, a los intelectuales de finales del período colonial al ver una abertura para el caso donde deberíamos ver una abertura de posibilidades para un nuevo tipo de relación con la modernidad? Registrada la advertencia, queda sin embargo, la pregunta: ¿si admitimos que la crisis actual recoloca cuestiones que están en el origen de nuestra formación histórica, por qué ella nos parece tan particularmente amenazadora? O sea, reconociendo las peculiaridades de la historia de Iberoamérica, pregunto: ¿cuáles son las peculiaridades de esta crisis, de este momento de la historia?

¿Eso que nos sorprende en la crisis de América Latina de hoy no debería ser tomado apenas como la reafirmación de su condición de origen? El choque entre la civilización y la barbarie, el dilaceramiento entre los integrados y los marginados, el encaje de las formas institucionales europeas contra el plano de fondo de la violencia y el desorden ¿de qué estamos hablando sino de los temas de Domingo Sarmiento (Civilización y Barbarie) y de Euclides da Cunha (Os sertoes) o de Oliveira de Vianna (Populaçoes Meridionais do Brasil), para mencionar apenas algunos clásicos del pensamiento latinoamericano? América Latina no siempre fue eso que Alain Touraine sintetiza en el bello título de su último libro, la *palabra* (de la civilización, de la política, de la integración), y la *sangre* (de la marginalidad, de la violencia, de la exclusión)[11].

Los latinoamericanos siempre ligaron los temas de la integración y de la marginalidad al tema del futuro. Siempre se preocuparon tanto por la marginalización producida por sus sociedades como por la marginalidad de sus propias sociedades frente al mundo moderno. Integrarse al mundo moderno e integrarse a sí mismas como sociedades son desafíos que están en los orígenes de eso que podríamos llamar la condición latinoamericana o, si se quiere, en sentido más amplio, la condición americana. "Hace aproximadamente 130 años", dice el pensador mexicano Leopoldo Zea, "un filósofo de la historia, Hegel, señaló el carácter marginal de los pueblos no-europeos o no-occidentales". "Allí, entre estos pueblos", añade Zea, "estaban ya los nuestros". ¿Si Europa es el centro, qué podrían ser los otros? "para el

filósofo alemán, Europa era la única encarnación del espíritu que hace posible la historia. (...) ¿Y qué era nuestra América? Dentro de esa concepción hegeliana, nuestra América era el futuro, la posibilidad"[12].

Hegel, entonces, nos concedía el futuro. No es poco. Del mismo modo, cuando Sarmiento, en las primeras décadas del siglo XIX, o Euclides da Cunha, en el paso para el siglo XX, o, más recientemente, Oliveira de Vianna, en el Brasil de los años 40, hablaban del "sertao", de la marginalidad, del atraso, era para afirmar sus propias versiones de la civilización, del progreso, de la modernidad. En otras palabras: ellos afirmaban el futuro.

Ahí está, tal vez, la primera gran diferencia entre lo que sabemos de nuestras crisis pasadas y de nuestra crisis actual. Vivimos hoy un bloqueo de perspectivas. Difícil encontrar otra época en que se haya oscurecido con tanta fuerza el sentido del "desarrollo" o, si se quiere, el sentido "fáustico" de nuestra historia. Vivimos hoy un sentimiento de pérdida del futuro. Habrá quien pretenda decir que ese "bloqueo" que, incluso, aparece, inicialmente, en los países más modernos de América Latina (Argentina y Uruguay), nos aproxime, paradójicamente, a la condición moderna. ¿No es eso mismo lo que se habla en los países más modernos del mundo, en los países ricos de Europa Occidental y, más recientemente, en los Estados Unidos? ¿Una especie de "fin de la historia", una noción según la cual "el futuro ya llegó"? La confusión es posible, por eso tratamos de evitarla.

Eso que aparentemente nos aproxima a una cultura de la modernidad (o de la post-modernidad) entra en choque directo con algunas ideas, desde siempre unidas a eso que llamé la "condición americana". No creo en las teorías de la post-modernidad ni para Europa y con más razón para las Américas, sobre todo para América Latina. En todo caso, si Europa está (o estuvo) ligada a la idea de pasado, América, tanto la del norte como la del sur, ésta siempre estuvo, por lo menos ligada a la idea de progreso. El progreso de las luces, evidentemente, que se vincula a la noción de libertad individual y de libertad política. Pero también el progreso de la riqueza contra la miseria. En las dos variantes, la idea de progreso es, al final, tan esencial a la formación de la cultura de la modernidad como la idea de revolución[13]. Al poblamiento de América —sobre todo el del norte pero también el del sur— está asociado el descubrimiento que habría de infundir fuerza a las revoluciones del mundo moderno, de que la miseria no era un hecho natural sino una realidad social, en principio modificable. Por eso, América está unida, a lo largo del tiempo, a las esperanzas de los pobres de Europa[14]. De la importancia de tales imágenes en la historia, hablan los muchos estudios sobre las migraciones, que siempre encontraron puertos de acogida en los países de las dos Américas.

Es evidente que la América Latina de los años 80 no corresponde a tales esperanzas. Parte importante de las poblaciones de México y de América Central gravita en torno de los Estados Unidos. Sólo de El Salvador, con sus pocos más de 5 millones de habitantes, viven en los Estados Unidos cerca de 800.000 personas. Hace algunos años, los brasileros que siempre nos enorgullecemos de ser un país con capacidad de acoger a quien viniese de fuera, nos dimos cuenta, con sorpresa, que también el Brasil se había vuelto un país de emigración.

Los años 60 pueden haber sido, en este sentido, nuestro último período típicamente "americano". Es que si la imagen de América estuvo siempre unida a la idea de progreso, cuando éste falló, la alternativa siempre se llamó revolución. Una revolución no sólo de los de abajo, no solo de los de izquierda, como sería de esperar. Desde la Revolución Americana y desde las preliminares de las luchas de la independencia de América Latina, la palabra revolución siempre fue usada en América, digamos que de un modo heterodoxo, por cualquier segmento político y por cualquier segmento social que se propusiese cambiar, por medio de la violencia, el *statu quo*. Y siempre significó tanto una perspectiva de ruptura del orden institucional como una perspectiva de cambio de la situación económica y social. En estos países "sin pasado", en todo caso de tradiciones muy frágiles, existe, por cierto, una derecha, hasta varias "derechas", algunas incluso muy truculentas. Pero no existen conservadores, por lo menos en el sentido en que estos se forman bajo el impacto de la Revolución Francesa, inspirados en las glorias pasadas de Europa. Aquí, en la mayor parte de los países, y en la mayor parte de las tendencias políticas, el pasado siempre fue más pobre de lo que se imaginaban pudiese ser el futuro. Hasta la derecha más dura siempre imaginó que debería, de algún modo, cambiar la sociedad. Se sabe

que las dictaduras militares recientes, además de reaccionar al crecimiento de las izquierdas, tenían sus proyectos de reorganización del Estado y de la sociedad[15]. Por eso llamaban "revolución" a sus golpes de Estado y a sus regímenes dictatoriales "regímenes revolucionarios" ¿Sería demasiado reconocer en este juego malicioso con las palabras, el homenaje del vicio a la virtud, el homenaje al futuro (y al cambio) por parte de aquellos segmentos socales y políticos que más razones tendrían para temerlo?

En el inicio de los años 60, uno de los principales promotores de la teoría de la marginalidad social, Roger Vekemans, hablaba del crecimiento de los "cinturones de miseria" de las grandes ciudades latinoamericanas a la luz de una metáfora inspirada en las crisis de la antigüedad. En el contexto de un discurso erudito y acorde con un pensamiento marcadamente conservador, él hablaba de la Roma Antigua amenazada por las invasiones de los bárbaros. Lo que él veía en la realidad de América Latina era la miseria de los campos, produciendo la gran masa de los pobres que migraban a las ciudades donde "no era suyo ni el piso que pisaban". Este proceso muy complejo asumió, en aquellos años, significados diversos y metáforas diversas. En la misma época en que Vekemans hablaba de las amenazas de los bárbaros, circulaba por América Latina el librito de Franz Fannon, *Los condenados de la Tierra,* y Regis Debray intentaba interpretar, en su *Revolución en la Revolución*, los rumbos de los movimientos guerrilleros de aquellos momentos, hablando de una "gran marcha", en la cual el campo "proletario", estimulado por los "focos guerrilleros", vendría a cercar la ciudad "burguesa". Eran metáforas diversas y siempre previsiones de catástrofes. Pero que anunciaban grandes cambios revolucionarios. Se hablaba de la muerte de una época pero también de un renacimiento, de un "nuevo comienzo"[16].

Me parecen significativos los términos que utiliza O'Donnell para hablar de la crisis actual: él habla de una "extraña situación pre-revolucionaria sin revolución ni revolucionarios". Es que no se ve, hoy, el desmoronamiento abrupto de un sistema de poder relativamente integrado (quiero decir integrado a pesar de sus contradicciones y hasta por causa de ellas). Ni se ve la situación de confrontación directa entre los de "arriba", que ya no son capaces de dominar, y los de "abajo", que ya no soportan más la dominación, como se describe en las historias de las revoluciones. Lo que vemos se parece más al desmoronamiento de una civilización que al anuncio de una nueva era. Es por eso que de esas imágenes diversas, debe permanecer, me parece, la más antigua, la de Roma amenazada por los bárbaros. Es que, más que las otras, ella evoca el espectáculo de la decadencia de una sociedad, la larga y dolorosa decadencia de una civilización que nos impide discernir las líneas del futuro.

Pero que la comparación no vaya más allá de ese punto. Roma un día unificó un imperio y las grandes ciudades de América Latina jamás conseguirán unificar los países a los cuales sirven como ciudades-capitales. En la época actual, divididas en sí mismas, ya no unifican ni siquiera su entorno.

¿Sociedades en decadencia?

José Medina Echavarría anotó, en libro de 1964, que la crisis de legitimidad, que echaba raíces en la crisis de poder da las viejas oligarquías agrarias de América Latina, podría llegar a una "evaporación completa de las creencias" y una "quiebra moral" de tales proporciones que podrán producir "la anomia generalizada de todo cuerpo social"[17]. Medina era, en sus propias palabras, "un viejo liberal", un español republicano que amargó, durante toda la vida, el exilio que le imponía su condición de opositor de Franco. Pero la idea de una *anomia generalizada* parecía muy semejante al *caos* de que hablaban, en la época, muchos hombres de derecha, para que la advertencia sonase con toda la seriedad que merecía.

Hablamos de la hipótesis y ésta, como el resto de cualquier otra, tal vez no explique todo. Además de eso, equívocos siempre son posibles, en especial con hipótesis tan osada. Equívoco mayor, sin embargo, sería el de despreciarla, pues ella vuelve hoy, en la consideración de sociólogos más jóvenes que hablan, además de una crisis económica, de una crisis de legitimidad, de una crisis de gobernabilidad y, en el límite, de una crisis moral. Lo que dice Sergio Zermeño para México vale para otros países: "la crisis de progreso de los años 80 (¿90?) junto con las acciones neoliberales del gobierno mexicano han provocado una fuerte *desorganización social*", una "dinámica de desorden" en los planos de familia, sindicatos, partidos, asociaciones, Estado, etc.[18] Es eso que se llama

"dinámica de desorden", y que se trata de entender aquí.

Si la derecha de los años 60 hablaba de caos para oponerse a la idea de revolución, la izquierda tal vez no haya sido lo suficientemente atenta para percibir que una situación de "anomia generalizada" es lo contrario de cualquier noción de orden, incluso de aquel orden que las revoluciones presuponen. Al contrario de lo que se piensa, la anomia dificulta los cambios, al revés de tornarlos posibles. Hasta la transformación revolucionaria debe partir del reconocimiento de la realidad de algún orden, tan contradictoria e injusta como pueda parecer. Debe partir, de facto, de un orden dado y del impulso de sus contradicciones. Las revoluciones no parten de una sociedad sin normas, si una tal sociedad fuese posible. Implican rupturas de un orden determinado para construir un nuevo orden.

En este sentido, una situación de anomia generalizada puede ser tan fatal para un gobierno (desde que sea democrático) como para cualquier perspectiva de cambio de la sociedad, sea a través de reformas o de revoluciones. Situaciones de anomia tienen más afinidad con situaciones de degradación de la estructura social, como es el caso típico del *lumpen*, que con cualquier sector o clase social que pueda generar situaciones de protesta y de cambio, como sería el caso de los trabajadores industriales, de los grupos étnicos negativamente discriminados, etc. Situaciones de anomia son siempre desfavorables al crecimiento de la organización, en especial de aquellas organizaciones sin las cuales ningún cambio es posible. Organizaciones sociales presuponen normas sociales; situaciones de anomia, por el contrario, se definen por la ausencia de normas. Por lo tanto no generan organización. Generan, apenas, como decía Medina, "desesperanza y extremismo". Y la experiencia histórica dice que, en política, estos sentimientos terminan casi siempre en desastre, esto es, en violencia y despotismo.

Vale insistir un poco más en la hipótesis, porque, para la reflexión sociológica, la anomia aparecería siempre como una situación límite, una situación extrema, de esas que sólo podrían existir en el reino de la teoría. Yo supongo, sin embargo, que cuando el marxista Antonio Gramsci habló de la Italia del Mezzogiorno como una región de "*decadencia* social", él incluía fenómenos parecidos como los que observamos hoy en ciertas

regiones de América Latina. La Mafia, la Camorra y otras invenciones "meridionales", nacidas de la miseria y de la violencia, ¿no tienen algo de parecido con los "carteles" colombianos de la coca? La diferencia es que la Sicilia y la Calabria, que Gramsci tenía a la vista en sus notas sobre la "Cuestión Meridional", eran apenas pedazos de un Estado nacional que respondía a un dislocamiento de los centros de decisión para el norte, esto es, para la modernidad. Aquello que Gramsci examinaba en el Sur de Italia podría ser tenido como un "modelo reducido" de lo que ocurre hoy, en muchos países de América Latina en escala ampliada.

No se debe, sin embargo, excluir la posibilidad de que algún jefe mafioso italiano haya algún día, afirmado algo parecido a eso que dijo, recientemente, uno de los jefes del narcotráfico colombiano: que estaríamos en el umbral de una "civilización de la cocaína". Es una afirmación siniestra, espantosa. Pero que no llega a ser sorprendente para quien sabe que las rentas provenientes de la cocaína aparecen en segundo lugar en las exportaciones colombianas. Y que la mafia del narcotráfico ya habría, según declaran algunos líderes políticos colombianos, penetrado profundamente en el aparato de Estado, en particular en la policía y en el ejército, con los cuales ha colaborado, a través de organismos paramilitares, en la experiencia común de la represión a los grupos guerrilleros. Y todavía más, que la mafia del narcotráfico colombiano, producto siniestro de regiones atrasadas y decadentes del mundo, creció, como la mafia italiana, en las transacciones con el crimen organizado de las regiones más modernas, en particular de los Estados Unidos.

Hablar de una "civilización de la cocaína" es hablar de lo absurdo pero no de lo imposible. Si las exportaciones de la coca tienen, en Colombia, la importancia que todos admiten, ellas están cerca de las exportaciones del café. Y sabemos que el café (como la caña de azúcar y el ganado) ayudó a construir, en una especial simbiosis con el mundo industrial, pedazos importantes de la civilización latinoamericana. Hoy, partes de Colombia, Bolivia y Perú se unen a pedazos de un mundo moderno en decadencia, que incluye partes de los Estados Unidos y de Europa Occidental, por los lazos del vicio y del crimen. Los periódicos publicaron, en estos días, un comunicado del grupo de "Los Extraditables" en el cual ellos se dirigen al

Estado colombiano para reconocer su derrota en la guera de la cocaína y para pedir paz. Lo que hay de sorprendente en el comunicado no es que se consideren derrotados sino que, considerándose tales, propongan una negociación de paz, hablando con el Estado colombiano en un lenguaje de poder a poder[19]. La propuesta fue rechazada por el Presidente Virgilio Barco Vargas.

El fenómeno de la anomia puede tener un significado terrible. Hablar de una "civilización de la cocaína" es hablar de algo paradójico y siniestro. Es hablar de algo que, a ejemplo de los fascistas cuando daban sus gritos histéricos de "viva la muerte", subvierte tanto la lógica como los valores fundamentales de la humanidad. No se puede vivir la muerte. Del mismo modo, por más libertaria y permisiva que sea nuestra concepción de civilización, ésta no se puede construir sobre una enfermedad. Y la expansión de las rutas de la droga no puede ser entendida sino como señal de una enfermedad de la civilización, señal inequívoca de decadencia, que si no fuera controlada y, si posible, cortada a tiempo, conducirá a la muerte, sin renacimiento posible.

¿Una nueva edad media?

Una crisis social de tales proporciones no tendría cómo dejar de afectar la consistencia del propio pensamiento social. En el plano teórico, la existencia de fenómenos de anomia generalizada es tan sorprendente que puede servir para colocar en cuestión perspectivas consideradas consagradas en las ciencias sociales. Examinando fenómenos semejantes en Europa, Ralf Dahrendorf considera, por ejemplo, que "las luchas de clase tradicionales no representan más la expresión dominante de la sociabilidad insociable del hombre. Por el contrario, lo que encontramos son manifestaciones más individuales y más ocasionales de agresión social; entre ellas las ocurrencias prominentes son las violaciones de la ley y del orden público por individuos, bandos y multitudes"[20]. De mi parte, creo que, por lo menos en América Latina, las luchas de clase "tradicionales" continúan predominando en la raíz de las manifestaciones de eso que Dahrendorf (según Kant) llama de "sociabilidad insociable del hombre". Pero no hay cómo negar que las "violaciones de la ley", en el sentido por él definido, contribuyen, muy fuertemente, a la anomia. Es que, en el límite, tales "violaciones de la ley" se convierten en una fuerte propensión para la violación de las normas sociales.

Consideremos algunos ejemplos. Me parece evidente que la violencia de los "contras" de Nicaragua, buscando desestabilizar el gobierno sandinista y reventar la ya precaria economía del país, debería ser entendida como la violencia "tradicional", esto es, de clase, de los grupos conservadores de América Latina[21]. Pero ¿qué decir de los escuadrones de la muerte" que actúan al mando de la derecha de El Salvador o de las ondas de crímenes que se atribuyen a Sendero Luminoso, en Perú, sino que la violencia política se está confundiendo con el crimen común en una escala hasta ahora desconocida en la historia de América Latina? Además de eso, aunque con frecuencia la explotación de la derecha sobre tales fenómenos va más allá de toda medida, no hay cómo negar el crecimiento de la violencia en las grandes ciudades. Crece la incidencia no sólo del hurto y del robo, sino también del asalto a mano armada y de los crímenes contra la persona, estimulando, por toda parte, la diseminación de los grupos de seguridad, guardias particulares, etc.

En sectores de la sociedad brasilera, se asiste a una "lumpenización" de las conductas que no cubre apenas a la gente pobre, sino segmentos de clase media e incluso de clase alta. El crecimiento del crimen de cuello blanco es evidencia de ello. La ciudad de Rio de Janeiro no es el único ejemplo a presentar sobre el Brasil pero es, tal vez, el caso más notable porque allí son más visibles la decadencia económica de la antigua capital del Imperio (y de la República), la pobreza creciente de las poblaciones de los morros y de los tugurios envolviendo los barrios de clase media, la mezcla de los trabajadores, de la clase media, del "juego do bicho"*, de la prostitución de todos los géneros y estilos, estimulada por el turismo de la ciudad-balneario. Una ilustración interesante de eso puede ser ofrecida por el caso del bandido "meio Quilo", del Morro Doña Marta. Traficante conocido, fue también novio de la hija del vice-gobernador del estado de Rio de Janeiro, la cual, según los periódicos, lo visitaba, con frecuencia, en la prisión. Muerto por la policía, comparecen a su entierro millares de personas, de su morro y de los vecinos, que lo aclaman como héroe[22]. Este drama suburbano es un nítido ejemplo de

cómo la pérdida del sentido de las normas sociales puede asumir un carácter general. Existen muchos otros ejemplos de ese proceso de "lumpenización" que al contrario de limitarse a las clases más pobres, parecería realizar cortes de arriba a abajo en la estructura social.

Estos procesos de decadencia social crean lo que Dahrendorf llama "áreas de exclusión", regiones del comportamiento (e incluso de la geografía) que el Estado no parece capaz de controlar[23]. Como dice Dahrendorf, la prueba final sobre la vigencia de las normas es la sanción que se aplica a los infractores. Y, para muchas normas relevantes, la sanción, en el límite, depende del Estado. Que fenómenos de pérdida de control de Estado (poder central) ocurran en territorios conquistados por la guerrilla en El Salvador, eso significa la creación de un "área de exclusión" que se propone tornarse en un nuevo Estado. Y eso basta para percibirse que no toda "área de exclusión" es indicadora de fenómenos de decadencia social. Pero que tal pérdida de capacidad de control de Estado ocurra en ciertas áreas de Medellín o de Bogotá o en ciertos tugurios de Rio de Janeiro (o en ciertos barrios de New York), tenemos ahí claros ejemplos de decadencia social.

Las "áreas de exclusión" son un fenómeno mucho más general de lo que se piensa. La corrupción administrativa se volvió un fenómeno de masas. Es célebre el ejemplo de México, con la no menos célebre "mordida", la propina sin la cual los papeles oficiales no caminan y los problemas administrativos no se resuelven. Pero no es de modo alguno el único. En algunos países latinoamericanos, no se paga impuesto. En todo caso, en muchos países latinoamericanos, los ricos no pagan impuestos. El Brasil puede ser visto como un caso en que la evasión acabó por tornarse una práctica generalizada: hay quien dice que, en el país, sólo pagan impuestos las viudas, los imbéciles y... los asalariados. Estos, incluso, no pueden dejar de pagar porque son "descontados en la fuente", esto es, cuando reciben su salario.

Es evidente que el fenómeno de las "áreas de exclusión" se repite en lo que muchos vienen llamando de "economía informal" (o "economía subterránea"), y a la cual algunos liberales y neo-conservadores latinoamericanos atribuyen poderosas virtudes. En el restablecimiento del espíritu de iniciativa de los que se colocan (o fueron colocados) al margen de la ley del Estado, estaría el punto de partida para retomar el desarrollo, para la reconquista de un nuevo dinamismo del mercado y, finalmente, para la consolidación de la democracia. El ejemplo más interesante de este tipo de argumento está en el libro del peruano Hernando de Soto, *El Otro Sendero*[24]. No me gustaría que mi argumento pareciera una justificación para el estatismo que De Soto interpreta como "mercantilismo". Pero insisto en que existen claros ejemplos en los cuales el estímulo a la "economía subterránea" es poco más que una cortina ideológica para el ejercicio de prácticas que, además de ilegales, tienden a ser ilegítimas y que se avecinan a situaciones de anomia. En el Brasil, por lo menos, algunos órganos de prensa estimulan tan abiertamente la práctica de evasión que, con el pretexto de hacer la crítica de las leyes tributarias, se avecinan a una actitud claramente criminosa. Hasta existen episodios pintorescos que deben ser recordados: en Sao Paulo, un importante líder empresarial, Mario Amato, actual presidente de la Federación de las Industrias (Fiesp), pregonó de modo tan evidente la "desobediencia civil" que, por ironía, pasó a ser llamado, por la prensa, de "el Bakunin brasilero". En el caso, no era, evidentemente, la desobediencia de los obreros a la ley de huelga sino la de los empresarios a las leyes fiscales. Una vez más vuelve la pregunta: ¿cuál es el límite que diferencia procesos de decadencia social de procesos de cambio social?

Fenómenos de desorganización y de decadencia social no son cosa apenas de países atrasados y permiten interpretaciones diversas. Algunos autores vienen llamando la atención sobre ciertos efectos de la aceleración de la transformación tecnológica que conduciría, también en sociedades muy modernas, a fenómenos muy semejantes a estos que podríamos describir con la noción de una "anomia generalizada". Creo que vale la pena abrir aquí un paréntesis para estas reflexiones. Aunque formadas por un contexto muy diferente al nuestro, ellas parecen conducir a resultados semejantes.

En un ensayo, con el interesante título de "La Nueva Edad Media", Umberto Eco califica el fenómeno, que designa como la "degradación de los grandes sistemas", diciendo que en una gran *Corporation* ya se vive "la descentralización absoluta y la crisis del poder (o de los poderes) central reducido

a una ficción"[25]. Sería típico de la "degradación de los grandes sistemas" un vacío de las funciones del *poder* (o del centro) y una ruptura del consenso social. Es claro que pertenecen a la misma categoría de "gran sistema", con su tendencia de la decadencia, tanto la corporation como el Estado y, con mayor razón, el Imperio [26]. Eco ofrece una visión impresionante de este proceso de decadencia, a través de consideraciones sobre un ensayo de Furio Colombo que coloca la cuestión tecnológica en el meollo de nuestro asunto. "El avance tecnológico creó vacío en las instituciones y abandonó en el centro de la estructura social" y el poder "se organiza abiertamente fuera del área central y media del cuerpo social, rumbo a una zona libre de los deberes y responsabilidades generales, revelando abierta y repentinamente el carácter accesorio de las instituciones"[27]. En un raciocinio tan extremo como sugestivo, Colombo habla de una "vietnamización de los territorios" (mercenarios, policías, internas, etc.) en la sociedad moderna.

En la misma línea, Giuseppe Sacco nos reaproxima de América Latina, al sugerir, para ciertas sociedades modernas, un "cuadro de guerra civil permanente, dominado por un choque de minorías opuestas y sin centro".

En este cuadro, "las ciudades estarán preparadas cada vez más para tornarse aquello que ya podemos encontrar en algunas localidades latinoamericanas habituadas a la guerrilla, donde la fragmentación del cuerpo social es bien simbolizada por el hecho de que el portero del edificio de apartamentos está habitualmente armado de ametralladora. En esas mismas ciudades los edificios públicos de alguna manera parecen fortalezas, como los palacios presidenciales, y son circundados por una especie de represa en tierra que los protege de los ataques de las bazucas"[28].

No sé a qué ciudades latinoamericanas se refiere el texto citado. Pero, con pequeñas diferencias de detalle, no será difícil reconocer, en esta descripción, cualquier gran ciudad latinoamericana. En Sao Paulo, en muchos edificios de apartamentos, el portero no anda armado de ametralladora pero, en general, es acompañado por un guarda particular armado de revólver. Esto se observa también en muchas casas particulares de clase alta. En los llamados "condominios cerrados", que son áreas residenciales de clase media que recientemente se propagan en barrios de la periferia de las grandes ciudades brasileras, los portones son custodiados por grupos de seguridad, formados por hombres armados de revólver y también de escopetas y rifles. Es evidente que por más que crezcan, los "condominios cerrados" no pasan de pequeñas islas de las clases medias en un mar de pobreza y de miseria.

Pérdida de lugar en el mundo

Tanto la hipótesis de la "anomia" como la de la fragmentación social, al estilo de una "nueva Edad Media", cubren aspectos de la realidad latinoamericana. No es necesario señalar que son apenas hipótesis parciales, tímidas aproximaciones a procesos en curso que, en gran medida, escapan a nuestras posibilidades actuales de análisis. En el mismo sentido, valdría juntar aquí otras hipótesis, tal vez un poco más "específicamente latinoamericana".

Yo quiero referirme a este sentimiento de *pérdida de lugar en el mundo* que atraviesa hoy tantos análisis sobre América del Sur, por parte de los economistas y de los estudiosos de las relaciones internacionales. Habiendo dejado de ser, desde los años 30, el complemento de los países "centrales" en un orden económico internacional en el cual cumplía el papel de exportadora de materias primas y de importadora de manufacturas, y habiendo agotado, a la vuelta de los años 60, con mayor o menor éxito según los países, las perspectivas de un "desarrollo hacia dentro", basado en la sustitución de importaciones, América Latina parece no encontrar lugar en el nuevo orden internacional que se desarrolla a partir de los años 70, con base en la aceleración de la "revolución tecnológica". Cuando sabemos de todas las críticas de los latinoamericanos a propósito del lugar dependiente que el mundo siempre les reservó, este sentimiento de "pérdida" de su lugar en el mundo pide alguna explicación.

Desde mediados de los años 70, la circulación de capitales se da, cada vez más, entre los países del hemisferio norte. Más que una coyuntura excepcional, la circulación de capitales restringida a determinada área del mundo sirve para indicar la información de un nuevo mapa de regiones económicas relativamente integradas. El embajador del Brasil en Washington, Marcilio Márquez Moreira, analizó, en estudio reciente, el fenómeno de la formación de bloques: primero, los

Estados Unidos (incluyendo Canadá y tal vez México); segundo, Europa, en proceso de unificación que se concluirá en 1992; tercero, el Japón y "los nuevos países industrializados" del Asia; cuarto, la URSS y los países de Europa Oriental buscando vía *perestroika* y *glasnost* el camino de la democracia y de la modernización[29]. El embajador Rubens Ricupero, jefe de la misión del Brasil en Ginebra ante las Naciones Unidas, indica algunas de las consecuencias de esa reorganización de los mercados (y del poder) en el mundo "... la tentación de fragmentar el sistema en bloques más o menos cerrados hace temer los efectos demoledores que puedan eventualmente tener en 1992 la adopción definitiva del Mercado Común Europeo, así como el Acuerdo de Libre Comercio entre los EUA y Canadá y el plan de extenderlo a México hasta constituir un área comercial de toda la América del Norte, sin mencionar proyectos más incipientes como el de un posible acuerdo de libre comercio entre el Japón y los países neo-industrializados de Asia o incluso un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y Japón". Considerando que Africa y el Caribe están ligados a la CEE, Ricupero concluye que los proyectos de bloques "cubren prácticamente todas las grandes regiones del globo, excepto a América del Sur"[30].

Celso Lafer constata que "la región como un todo, de la década del 50 a la década del 80, perdió posición en el campo económico. La renta media per capita de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela es hoy un tercio o menos inferior a la de Japón y de los países europeos de renta media, mitad de la Europa mediterránea, e inferior a la de los Nics asiáticos y de Turquía"[31]. Todavía, en contraste con los años 50 y 60, se asiste en los años 80, según Lafer, a una pérdida del significado político de América Latina como bloque regional de poder, que se refleja en la crisis de la Organización de los Estados Americanos, que, en la segunda postguerra, tuvo gran importancia en la diplomacia multilateral global. Siguiendo algunos de los análisis de Peter Drucker, Lafer examina estos cambios económicos y políticos en el cuadro de las transformaciones tecnológicas que "vienen desgastando las clásicas ventajas comparativas históricas que dieron, bien o mal, a la región, desde la época de la expansión europea en el siglo XVI, un papel económico en el mundo"[32].

El desarrollo de la tecnología agrícola y la biotecnología "disminuyeron la importancia estratégica de la exportación e importación de productos primarios" permitiendo autosuficiencia alimenticia a un número creciente de países. Las nuevas tecnologías también reducen la importancia de la materia prima en la industria, afectando una región de productores de estaño, petróleo, cobre, bauxita, hierro, etc. Aumenta la reducción de la importancia de la mano de obra como factor de competitividad internacional, a través de la automatización y de la informática. "En síntesis: el cuadro latinoamericano en esta década es realmente un cuadro de crisis de identidad y de estancamiento operacional (...) ocurrió un efectivo deterioro de la posición de los países latinoamericanos en el escenario internacional —un deterioro que afectó la identidad, redujo los márgenes de acción externa y la capacidad interna de la región para modernizarse y desarrollarse"[33].

Es evidente que los proyectos de bloques, con respecto a países de América Latina, son todavía para el futuro. Del mismo modo, lo son las políticas de integración latinoamericana, hasta aquí apenas incipientes o completamente frustradas. En todo caso, no se puede pasar por alto las excepciones. Al sur, está la excepción, brillante aunque muy incipiente, de los protocolos de cooperación comercial entre Brasil y Argentina, probablemente la iniciativa más importante de los gobiernos de Sarney y Alfonsín, buscando la integración económica de los dos países[34]. Por incipientes que sean, los protocolos Brasil-Argentina apuntan caminos, posibilidades que se refuerzan en el proceso de democratización en curso en los dos países y en el conjunto de América Latina. Como fue observado por Rosenthal, la vuelta, en los años 80, a "regímenes más pluralistas y participativos establecía una comunidad de intereses que, ciertamente, facilitaba mucho la comunicación y la confianza mutuas entre los gobiernos participantes en los procesos subregionales de integración". Pero, como bien lo observa el secretario ejecutivo de la CEPAL, la verdad es que la integración, al revés de servir, en los años 80, para atenuar "los efectos recesivos provenientes del sector externo (...) se convierte en una víctima más de la crisis". Como consecuencia de la inestabilidad cambiaria, falta de divisas, reducción del nivel de ingresos, el comercio regional cayó de 15.4% de las exportaciones totales de América Latina, en 1980, para

11.1% en 1985, recuperándose al nivel anterior en los últimos años de la década[35].

Las excepciones que se constatan en el área de las políticas de integración no pueden, por lo menos por el momento, servir para invalidar la constatación general: en un mundo en proceso de reorganización, los países de América Latina no se integran a región ninguna dentro de las existentes. Al norte de la región, la única excepción parece ser la de México. Dice Abraham Lowenthal que la integración silenciosa "de la economía de México con los Estados Unidos avanzó rápidamente, en especial en la frontera, donde las industrias de montaje *Maquila* se expandieron dramáticamente en los últimos años, frecuentemente con inversión japonesa. A pesar de las tensiones de los últimos años, en ninguna época de la historia de México post-revolucionario hubo condiciones estructurales más que ahora para avances significativos en la dirección de la cooperación bilateral con los Estados Unidos"[36]. Los demás países de América Latina, por lo menos hasta aquí, además de no integrarse a otras regiones o bloques, tampoco se integran entre sí formando una región económica con vuelo propio, ni vienen sirviendo como factor de integración de nuevas regiones. En la política de bloques, tal como ésta se desarrolla hoy, ellos apenas *sobran,* como parte de ese Tercer Mundo que es, en todas las clasificaciones, el "resto del mundo", apenas un montón de países atrasados, estancados y marginales a los centros de dinamismo del sistema económico internacional.

Tal vez se encuentre ahí la raíz más fundamental de todos los problemas actuales de América Latina. Los países latinoamericanos se desintegran por dentro y por fuera, tanto en su estructura interna como en sus vínculos con el mundo, En los años 80, estos países, que ya eran pobres, se tornaron *marginales,* esto es, salieron (o están saliendo) de los circuitos económicos principales del mundo moderno. Este dislocamiento, evidentemente, no impidió que los países latinoamericanos se volvieran todavía más pobres. En todo caso, lo cierto es que si la América Latina de los años 80 continúa siendo una región de países periféricos, ya no es más una región de "países en desarrollo", como se decía en los años 60. Es una región de países estancados. Y, como sugiere Ricupero, "a ningún país le estará garantizada la sobrevivencia o la participación si no sabe acompañar los cambios" que ocurren en el escenario económico y político internacional[37].

La América Latina de los años 80 se salva por la democratización. En la economía y, en amplia medida, en la sociedad, todo salió por el revés (o por fuera) de los patrones que la mayoría de los latinoamericanos considerábamos normales. Su vínculo más fuerte con el mundo moderno es la deuda, el más perverso de los vínculos económicos que países atrasados pueden tener con la modernidad. Y como anota Alain Touraine, la deuda externa transformó a América Latina "que era fuertemente importadora de capitales, en región exportadora".

Según datos del Banco Mundial, en Perú, el total de inversiones cayó al 17% al año en 1980-85, llegando a afectar la infraestructura de las actividades económicas del país, en especial en el área de energía. Lo mismo viene ocurriendo en Bolivia y en Argentina, habiendo caído las inversiones, en éste último país, 14% al año desde 1980. En el Brasil de las dos últimas décadas, la cuota de inversión bajó de 25% para 16%, cayendo las inversiones cerca de 5.5% al año; en México cayeron 9% al año y en Chile 13%. Según datos de la CEPAL, comparándose los años de 1980 y de 1987, la diferencia registrada para el PIB per capita es de —14.7 para Argentina, —7.3 para Ecuador, —9.1 para México y de 3.8 para Brasil[38].

La América Latina de los años 80 se salva por la democratización. En la economía y, en amplia medida, en la sociedad, todo salió por el revés (o por fuera) de los patrones que la mayoría de los latinoamericanos considerabamos normales. Su vínculo más fuerte con el mundo moderno es la deuda, el más perverso de los vínculos económicos que países atrasados pueden tener con la modernidad. Y como anota Alain Touraine, la deuda externa transformó a América Latina "que era fuertemente importadora de capitales, en región exportadora"[39]. Gert Rosenthal hace la misma consideración y añade: "... en 1970, 18.8% de la inversión directa que las empresas estadounidenses tenían en el exterior se encontraban en América Latina y en el Caribe; esta proporción había disminuido para 13.2% en 1986. En contrapartida, de los 17 países más endeudados del mundo en desarrollo, 12 se encuentran actualmente en la región". En los años 80, "el deterioro de los términos de cambio y el servicio de la deuda externa, normalmente acompañado por la disminución de entradas líquidas de capital externo, redujeron de manera considerable la disponibilidad de recursos líquidos susceptibles de destinarse a la inversión. Así, el coeficiente de inversión líquido para la región cayó de 22.7% en 1980 al 16.5% en 1988". Este fenómeno, según Rosenthal, tuvo, en la mayoría de los países, repercusiones adversas, entre las cuales la "creciente obsolescencia de la estructura productiva y un alarmante deterioro de la infraestructura física"[40].

El mayor beneficiario de este perverso proceso que ya fue llamado de *"Plan Marshall al revés"* son los Estados Unidos, que han absorbido los ahorros latinoamericanos y de todo el "Tercer Mundo". Países cuyo PIB no crece hace años, viéndose obligados a cortar en la propia carne para "honrar" los intereses de una deuda, cuyo principal ya no tienen cómo pagar. Es cierto que, desde 1989, algunos países, entre los cuales Brasil y Argentina, practican una moratoria no-declarada. Pero eso no parece haber afectado la política económica que, teniendo en cuenta la deuda, da la espalda al mercado interno y redirecciona la economía de estos países hacia la exportación.

Son claros los hechos que denuncian la condición de marginalidad de América Latina en el mundo de hoy, agilizado por la revolución tecnológica y por la aceleración de los procesos de modernización. Pero el sentimiento de "pérdida" de lugar en el mundo que acompaña tales hechos es la mejor indicación de América Latina para la modernidad. Es tiempo de observar, a propósito, que sólo excepcionalmente el nacionalismo asumió, en la historia latinoamericana, un carácter conservador y reaccionario. Aparte de pequeños desvíos de ruta, las críticas latinoamericanas contra el imperialismo raramente se identificaron con un sentido autárquico regresivo. En la mayor parte de los casos, eran inspiradas por alguna concepción de modernización, pretendían que los países latinoamericanos llegasen a ser autónomos para que pudiesen ser dinámicos. Como dice Morse "Iberoamérica siempre fue vista, incluso por sus pensadores clásicos, no como autóctona, sino simplemente como obsoleta"[41]. El atraso siempre fue el gran desafío. Es del mismo Morse esta esclarecedora cita de Mariátegui: "Europa me reveló hasta qué punto yo pertenecía a un mundo primitivo y caótico y, al mismo tiemp me impuso y me aclaró el deber de una tarea americana"[42]. ¿No es verdad que también Haya de la Torre vio en el fenómeno del imperialismo el choque de la modernidad, representada por Europa y por los Estados Unidos, con la Indo-América?

Tomándose el tema por este o por aquel punto de vista, el hecho es que la preocupación con el desarrollo, con el dinamismo de la economía, siempre fue, entre los latinoamericanos, por lo menos tan fuerte como el tema de la Nación, el tema de la autonomía. Y es esto lo que nos permite entender, hoy, en la América Latina estancada y descapitalizada, que todos (o casi todos) los segmentos quieran algún capital extranjero, por lo menos para derramar el crecimiento. La verdad es que para los latinoamericanos, peor que la dependencia es el abandono. Y por abandono se entiende la lamentable condición de "pueblos olvidados" que siempre los horrorizó y hacia la cual, sin embargo, parecen caminar, actualmente.

La democracia del Apartheid

Todo esto sugiere que no sólo vivimos una grande y profunda crisis económica y social sino también una extraordinaria crisis de poder. La impotencia de los gobiernos frente a la deuda puede ser vista como una señal, no la única evidentemente, de la crisis de Estado en que nos encontramos. Si de los años 30 en adelante, el gran empeño histórico de un número expresivo de Estados latinoamericanos fue la industrialización, hoy las obligaciones impuestas por la deuda llevan a muchos países a la desindustrialización. Si desde aquella época, el gran empeño histórico de estos Estados fue la integración social —entre el campo y la ciudad, entre la costa y la "sierra", entre la industria y la agricultura, etc.— hoy se camina en el rumbo de la desintegración. Todo esto quiere decir que si desde los años 30, América Latina caminaba en la dirección de la construcción de un Estado nacional, hoy parece que camina hacia su destrucción.

El "bloqueo" de perspectivas, señales de "anomia generalizada", la fragmentación "medieval", el estancamiento económico, la pérdida de lugar en el mundo —todo eso también puede servir para configurar una situación de regresión. Así haya siempre que reconocer y reafirmar los progresos en la democratización de la cultura política y de la democratización institucional, las estructuras de poder de muchos países de América Latina pueden estar retrocediendo a lo que Robert Dahl, en su clásico *Poliarchy*, llamó un régimen de "oligarquías competitivas". Si pudiéramos considerar esta posibilidad, estaríamos frente a una situación que puede tanto contemplar una organización institucional democrática como una enorme carga de privatismo y de corporativismo, formas de conducta compatibles con la "medievalización" y con la "anomia". El "régimen de oligarquías competitivas", que Dahl identi-

Este crecimiento de la capacidad de participación política y de la capacidad de organización de la sociedad civil significa, como ya fue señalado, un crecimiento de las bases de la democracia en América Latina. Y es por eso mismo, un impulso para la modernización de los países de la región. Pero también significa una intensificación del "corporativismo" por el cual cada pedazo de la sociedad se agarra a sus intereses particulares en detrimento de los intereses de la sociedad en general. En una sociedad en crisis endeudada y estancada, se generalizan conductas al estilo del "sálvese quien pueda" cada vez más violentas y exclusivistas.

fica en los ejemplos de Atenas de la Antigüedad y en el sur de los Estados Unidos (hasta los años 60), combina la participación de algunos y la exclusión de otros: la participación de los aristócratas y la exclusión de los esclavos, la participación de los blancos y la exclusión de los negros, etc. Para los participantes, se reservan los mecanismos de una poliarquía, para los excluidos se reserva un régimen de coerción y de terror[43].

Esta hipótesis tiene puntos de coincidencia con un abordaje reciente de Alain Touraine: "el continente (latinoamericano) es el teatro de un enfrentamiento entre dos regímenes: un primero, aquel que muestra el enorme movimiento de modernización, de integración social y de acceso a la influencia política que trastorna el continente en el siglo XX (...) y crea una política y una cultura de masa. El otro, aquel que corresponde a un continente dependiente, de industrialización limitada y de exclusión en masa y permanente". Así, prosigue el autor, "el futuro de la democracia" (...) depende "de la influencia relativa de cada uno de los aspectos complementarios y opuestos de la situación latinoamericana"[44].

Está claro que "sistemas duales" pueden asumir formas muy diferentes. Africa del sur, por ejemplo, con su régimen de apartheid racial, aparece como un caso extremadamente rígido. En el cuadro de América Latina tendríamos por cierto, que enfrentar la tarea de una tipología que fuese capaz de diferenciar entre situaciones tan diferentes como pueden ser las de países de modernización digamos "más antigua" como las de Argentina, Uruguay y Chile, las de países "recientes" como Brasil y México; y las de países que pasan por situaciones revolucionarias (o pre-revolucionarias) de tipo "tradicional", como Nicaragua y El Salvador, o las de los países andinos como Colombia, Bolivia y Perú o las de conflagrados como Colombia, entre otras tantas situaciones que se podrían discernir en el complejo escenario latinoamericano. Habría muchas diferenciaciones por hacer que justificarían un estudio más amplio sobre América Latina frente a la crisis, pero que escapan a los objetivos más precisos de este ensayo.

Deberíamos, sin embargo, buscar por lo menos señalar aquí qué tanto el actual apartheid latinoamericano se diferencia de los dualismos del pasado. Así América Latina siempre se haya caracterizado por regímenes de exclusión, los viejos regímenes oligárquicos tenían, por lo menos, la pretensión de servir de base a la construcción de Estados nacionales relativamente integrados. Manteníase el "ideal ibérico" de la "incorporación social" que inspiraba un combate, infelizmente más por medios autoritarios que por medios democráticos, en el sentido de la construcción de una economía y de un Estado nacionales, y en la construcción de una sociedad que, de algún modo, integrase los "desheredados de la tierra". En el Brasil de las oligarquías pre-30, donde el estado de São Paulo era la región de la federación que representaba tanto el poder como la modernidad, los oligarcas paulistas inventaron la frase: "São Paulo es la locomotora que arrastra los otros vagones de la federación". Esta imagen de la poderosa oligarquía del café era, con toda su arrogancia, una forma de unir el atraso y la modernidad, atribuyendo a ésta el liderazgo. En los regímenes de apartheid, es precisamente esta pretensión de hegemonía (en el sentido de Gramsci) la que entra en duda.

En el caso de diversos países de América Latina, tal vez se debiese hablar de apartheid social (más que de racial, que también tiende a existir en algunos países) o de un proceso de evolución en tal sentido. La raíz de esto debería ser buscada tanto en la crisis económica como en las políticas con las cuales el Estado viene reaccionando a la crisis. Las respuestas de los gobiernos a la crisis dejan claro que, en estos países, los grupos dominantes modernos parecen incapaces de solidarizar sus intereses particulares con los demás intereses que, en conjunto, forman las naciones a las cuales pertenecen. Parece faltarles una visión general de la nación. Cuando tienen alguna visión de la nación, ésta se limita, en realidad, a una pequeña parte de la nación real. En algunos casos, es la más moderna y la más integrada a los circuitos económicos internacionales, pero en general desligada de los otros "vagones de la federación". Limitan su visión de nación a criterios tan estrictamente definidos por el sistema internacional que, en el límite, su visión de la nación se torna completamente dispensable. Llegando a este límite, los grupos dominantes más modernos ya no se ven como parte de la nación sino como parte del mundo o de un "bloque" internacional. Ejemplo de ello es el capital que se excluye a sí mismo, migrando para el norte, en una dramática descapitalización de los países de la región.

La América Latina errada es la América Latina dividida, compartimentada en Estados nacionales que se vienen mostrando obsoletos en muchos aspectos. Es la América Latina dual y excluyente, marginada con relación a sí misma y con relación al mundo moderno.

¿Hay lugar para alguna esperanza? Yo creo que sí. Yo pienso que aquello que la historia de América Latina tiene de "evolutivo y fáustico" es mucho más fuerte que aquello que ella también tiene de entrópico. Existe una radical diferencia de actitudes frente a la modernidad entre los latinoamericanos y los hombres que se aferran al pasado como a algo sagrado.

Aunque los aspectos relacionados con la exclusión sean los más dramáticos, no se puede dejar de ver el otro lado de la moneda, precisamente el de la democratización. Regímenes "duales" no se sustentan sin una tendencia a la participación. Brasil tal vez pueda ser tenido como un ejemplo, no ciertamente el único, de un extraordinario crecimiento de la capacidad de organización de la sociedad civil y de la capacidad de presión en el rumbo de la participación. Se multiplican, desde mediados de los 60, las asociaciones de trabajadores, rurales y urbanos, las asociaciones de clase media (periodistas, médicos, profesores, etc.), las asociaciones empresariales y patronales, las instituciones culturales, etc. Esta experiencia de crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil es también conocida en países como Chile y México, cuyas políticas de incorporación al sistema económico internacional tal vez hayan caminado todavía más rápido que en el Brasil. En estos países, se asiste, en el fondo de la crisis, a una recomposición de las relaciones sociales. Pero un crecimiento tan notable no puede impedir, en el caso del Brasil, que, finalmente, la economía de consumo se limite a 1/3 de la población[45]. La situación de países como México y Chile no es muy diferente.

Este crecimiento de la capacidad de participación política y de la capacidad de organización de la sociedad civil significa, como ya fue señalado, un crecimiento de las bases de la democracia en América Latina. Y es por eso mismo, un impulso para la modernización de los países de la región. Pero también significa una intensificación del "corporativismo" por el cual cada pedazo de la sociedad se agarra a sus intereses particulares en detrimento de los intereses de la sociedad en general. En una sociedad en crisis, endeudada y estancada, se generalizan conductas al estilo del "sálvese quien pueda", cada vez más violentas y exclusivistas. La capacidad que un grupo social cualquiera demuestra para organizarse y para participar coincide con su capacidad para defender sus intereses. Y, en muchos casos, esto es directamente una cuestión de sobrevivencia.

El desarrollo de la democracia depende, en gran medida, de cómo vengan a combinarse estas tendencias contradictorias de crecimiento de las bases de la democracia política y de crecimiento del corporativismo social. Si es cierto que la capacidad de organización y de participación de cada grupo es una medida de su capacidad de sobrevivir en la sociedad, se puede entender que no habría de ser muy diferente para esta sociedad nacional en el sistema internacional del que hace parte. En una economía internacional en reorganización y en las circunstancias creadas por la crisis, tendrán un chance más de sobrevivir los países que fueran capaces de organizarse y de participar. Este chance tal vez venga a ser el chance de la democracia.

Democracia, desarrollo e integración

De la época actual se puede decir algo semejante a lo que Norbert Wiener dice de la máquina (y del universo). "Estamos inmersos en una vida en que el mundo, como un todo, obedece a la segunda ley de la termodinámica: la confusión aumenta y el orden disminuye". Suponiendo que así sea, la pregunta es: ¿qué hacer? En su cibernética, extraño término que también ya fue usado para "gobierno" y para "ciencia política", Wiener dice que "merced a su capacidad de tomar decisiones (la máquina), puede producir, de vuelta, una zona de organización en un mundo cuya tendencia general es deteriorarse"[46]. Transferido para la sociedad, este raciocinio conduce a lo siguiente: el caos se combate tomando decisiones, creando organizaciones, creando instituciones. Combatir la anomia es crear un nuevo orden legítimo, un nuevo consenso, crear nuevas normas y aplicarlas.

Así como revivimos en el pasado reciente, en varios de los países de América Latina, que hicieron la lucha de resistencia contra los regímenes autoritarios, los orígenes de la democracia en general, estamos hoy, en la lucha contra una crisis que nos lleva hasta el límite del caos y de la anomia, reviviendo los orígenes de la sociedad en general. Yo prefiero creer que estamos en una nueva etapa del desarrollo del Estado nacional, tan importante como habrá sido la del siglo de la Independencia, la cual dio a nuestros Estados su primera configuración. Pero si estamos en una nueva etapa de un proceso, digamos, "evolutivo", esta etapa no se presenta como tal, sino como el caos que denuncia el fin de un Estado históricamente fracasado. Y frente a este caos, el investigador se siente como los primeros estudiosos del Estado moderno, recomendando los principios de aquello que vendría a ser la política moder-

na para que los hombres pudiesen superar la inseguridad propia del "estado de naturaleza". Del mismo modo, podríamos decir (sería este ciertamente el punto de vista de Marx) que la crisis actual de América Latina tiene que ser entendida como una etapa de un proceso de desarrollo de la sociedad capitalista en esta parte del mundo. Punto de vista probablemente correcto que, sin embargo, no elimina el hecho de que, en muchos de nuestros países, la crisis es tan profunda que colocó en cuestión la existencia de las sociedades, por lo menos en cuanto sociedades nacionales. No por azar la construcción de la democracia política, esto es, del complejo de instituciones a través de las cuales se puede llegar a decisiones legítimas, válidas para toda una comunidad, es vista por muchos latinoamericanos como un camino no sólo para la reconstrucción del Estado sino también para la reconstrucción de las sociedades nacionales. O, conforme el caso, para la construcción de nuevas sociedades nacionales.

En esta perspectiva, las relaciones entre democracia y modernidad, o si se quiere, entre la consolidación de la democracia y la integración de América Latina en el mundo moderno, asumen un carácter decisivo. Innecesario decir que las diferentes acepciones del concepto de integración no luchan, necesariamente, unas con otras. Por el contrario, pueden reforzarse recíprocamente, la *integración social,* esto es, la superación de la división entre "integrados" y "excluidos"; la *integración regional* (o subregional) buscando superar obsoletas divisiones entre Estados nacionales, creando condiciones para una cooperación económica de escala más amplia, entre los países latinoamericanos; y, finalmente, la *integración internacional,* de América Latina a las corrientes dinámicas del mundo moderno.

Más importante es señalar que, así como la modernidad no está asegurada para ninguno de nuestros países, la democracia no es, evidentemente, la única posibilidad de esta época de crisis en nuestra historia. Así como el estancamiento económico empuja muchas partes de América Latina hacia la desagregación y hacia la decadencia, existen también posibilidades de regresión al autoritarismo y también posibilidades que, si no son de regresión, son de una cosa todavía peor que todo lo que ya vimos hasta ahora. Pero igual que se tenga que reconocer como una ingenuidad creer que la democracia esté segura por cualquier ley ineludible de la historia y, además de eso, que se reconozca que puedan existir otros caminos para recolocar a América Latina en el camino del desarrollo económico, no creo que se pueda negar que la democracia es el único camino que puede llevar a los países latinoamericanos a la modernidad.

Estamos hoy, en la lucha contra una crisis que nos lleva hasta el límite del caos y de la anomia, reviviendo los orígenes de la sociedad en general. Yo prefiero creer que estamos en una nueva etapa del desarrollo del Estado nacional, tan importante como habrá sido la del siglo de la Independencia, la cual dio a nuestros Estados su primera configuración. Pero si estamos en una nueva etapa de un proceso, digamos, "evolutivo", esta etapa no se presenta como tal, sino como el caos que denuncia el fin de un Estado históricamente fracasado.

Todo esto puede parecer, y efectivamente es, muy general. Pero creo que es preciso comenzar por ahí la discusión sobre las relaciones entre democracia y modernidad en el cuadro de crisis en que nos encontramos. La América Latina errada es la América Latina dividida, compartimentada en Estados nacionales que se vienen mostrando obsoletos en muchos aspectos. Es la América Latina dual y excluyente, marginada con relación a sí misma y con relación al mundo moderno.

¿Hay lugar para alguna esperanza? Yo creo que sí. Yo pienso que aquello que la historia de América Latina tiene de "evolutivo y fáustico" es mucho más fuerte que aquello que ella también tiene de entrópico. Existe una radical diferencia de actitudes frente a la modernidad entre los latinoamericanos y los hombres que se aferran al pasado como a algo sagrado. En este sentido, yo me acuerdo de una página ejemplar de Giusepe Tomsi di Lampedusa, en *Il Gattopardo.* Conversando con un funcionario del Norte, el piemontés Aimone Chevalley di Monterzuolo, que le hablaba de la necesidad de modernizar a Sicilia, el viejo príncipe Fabrizio Salina, representante de las tradiciones del sur, le dice que Sicilia ya había sido invadida varias veces a lo largo de dos mil años y que ninguno consiguió cambiarla. ¿Y sabe por qué? —pregunta el príncipe. El mismo responde: es porque los sicilianos no quieren mejorar. "Los sicilianos no desearán nunca mejorar por la simple razón de que creen que son perfectos. Su vanidad es más fuerte que su miseria. Cualquier intromisión, si es de extranjeros por su origen, si es de sicilianos por independencia de espíritu, trastorna su delirio de perfección alcanzada, se arriesga a perturbarles la complacida espera de la nada. Atropellados por una docena de pueblos diferentes, ellos creen tener un pasado imperial que les da derecho a suntuosos funerales. ¿Juzga realmente, Chevalley, que es el primero en querer canalizar Sicilia en el flujo de la historia universal?".

Yo creo que, felizmente, no existen muchos latinoamericanos con la convicción

que el príncipe Fabrizio atribuye a sus coterráneos. La mayoría de los latinoamericanos quiere hacer parte de una civilización democrática y moderna. Por esto, creo, no les duele saber que, de algún modo, América Latina está "errada". Es que ellos saben que ella debe cambiar ●

---

* Este ensayo es una versión modificada y ampliada, de la contribución del autor al libro colectivo en homenaje a los 25 años del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)/1990.

Los conocedores del ensayismo político brasilero reconocerán la inspiración del título de este trabajo en Martins de Almeida, *Brasil Errado: Ensaico Político sobre os erros do Brasil como País.* Rio de Janeiro, Schmdit Editores, 1932.

1. O'Donnell, Guillermo, "Argentina, de novo", in *Novos Estudos*, No. 24, São Paulo, julho de 1989.

2. Rosenthal, Gert, "El desarrollo de América Latina y el Caribe en los años ochenta y sus perspectivas". *Revista de la Cepal,* No. 39, Santiago, diciembre de 1989.

3. Rosenthal, op. cit.

4. Las referencias a Bolívar son tomadas de Moacir Werneck de Castro, *O Libertador - A Vida de Simón Bolívar,* Rio de Janeiro, Editora Rocco, 1988, p. 213.

5. A propósito, una buena parte de los países latinoamericanos ya fue considerada, hace más tiempo, en el rol de los "países inviables". La expresión de evidente sentido polémico, es de Hélio Jaguaribe, Desenvolvimento e Desenvolvimento Político, que la retoma en un ensayo reciente. Jaguaribe clasifica los países latinoamericanos, en cuanto a la viabilidad en tres categorías: "los dotados de relativa viabilidad individual —en este caso encontramos apenas a México, Argentina y Brasil; los dotados de viabilidad colectiva —grupo andino, Paraguay y Uruguay; y los de baja o casi nula viabilidad— América Central, Caribe y Cuba". Jaguaribe, Hélio, *A América Latina no Sistema Internacional*, in colectivo A Crise da Ordem Mundial, organizado por Henrique Rattner, São Paulo, Editora Símbolo, 1978, p. 99.

6. Este ensayo ya estaba listo cuando leí As Américas em 1989: Um Consenso para a Acão, Informe del Diálogo Interamericano (Inter-American Dialogue), publicado por Aspen Institute, 1989, donde se hace una advertencia muy definida: "La crisis económica de la década de los 80 podrá desencadenar una crisis política en la década de los 90. La adversidad económica ya está corroyendo las bases de gobiernos democráticos en diversos países. Las instituciones públicas se encuentran desacreditadas y debilitadas. (...) En cada país, la esperanza infundida por nuevos líderes se transtornó en frustración a medida que la austeridad se convirtió en un hecho permanente". Cf. p. 1.

7. Existen en este sentido algunas manifestaciones de intención, incluso algunas iniciativas concretas, de los gobiernos de Alfonsín y de Sarney, que deberán ser retomadas más adelante, en este ensayo.

8. Morse, Richard m., O espelho de Próspero, São Paulo, Companhia das Letras, 1988, p. 77.

9. Morse, op. cit. p. 76.

10. Morse, op. cit. p. 26 y 28.

11. Touraine, Alain, *Palavra e Sangue,* São Paulo, Trajetória Cultural, 1989.

12. Zea, Leopoldo, *América Latina y el Mundo,* Buenos Aires, EUDEBA, 1965, p. 75.

13. Arendt, Hannah, *Da Revolução,* Sao Pãulo, Atica, 1988, pp. 53 y siguientes.

14. Sobre las imágenes europeas, Buarque de Holanda, Sergio, Visão do Paraíso, São Paulo, Nacional, 1969.

15. Garreton, Manuel Antonio, The Political evolution of the Chilean military regime and problems in the transition to democracy, capítulo de Transitions, ya citado.

16. Hay algo de esta esperanza en el libro de Hernando De Soto, *Economía Subterránea - Uma Análise da Realidades Peruana,* Globo, Rio de Janeiro, 1987, cuando habla del papel renovador de las masas de migrantes en Lima.

17. José Medina Echavarría, *Consideraciones Sociológicas sobre el Desarrollo Económico de América Latina,* Editora Soflar/Hachette, 1964.

18. Zermeño, Sergio, "México: o Retorno de Líder - Crise, Neoliberalismo e Desordem", Revista *Lua Nova,* No. 18, agosto, 1989, CEDEC, Sao Paulo. "La hipótesis general aquí enunciada también puede ser leída en la evolución conceptual de las ciencias sociales en América Latina, digamos, durante los últimos veinte años: del desarrollo mundial imperialista occidentalizado el mundo a la sociología del pesimismo y de la decadencia, del estancamiento y de la exclusión crecientes, de la persona humana derrotada, situación que en América Latina es, hoy, tan elegantemente denotada con el concepto de postmodernidad". Zermeño, op. cit. p. 170.

19. He aquí algunos trechos del documento: "1- Tomamos conocimiento de la invitación patriótica contenida en el documento firmado por Monseñor Mario Revollo Bravo, en la muy ilustre compañía de los expresidentes Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay y Misael Pastrana y el presidente de la Unión Patriótica, Diego Montaña Cuéllar. 2- Para responder a tan elevados propósitos reiteramos nuestra conocida voluntad de paz (...). 3- Compartimos plenamente el criterio expreso por ellos sobre la sobrevivencia del Estado y del gobierno elegidos democráticamente, frente a organizaciones y personas que,

como es nuestro caso, vivimos al margen de la ley (...). 5- (...) aceptamos el triunfo del Estado (...) Depondremos las armas, los explosivos (...) en el momento en que nos den garantías constitucionales y legales (...). Cf. transcripción del periódico *O Estado* de S. Paulo, 18 - 1- 1990.

20. Dahrendorf, Rafl, *A Lei e a Ordem*, Instituto Tancredo Neves - Fundacão Friedrich Naumann, São Paulo, 1987.

21. Un estimativo de los efectos de la guerra en América Central, por parte del Inter-American Dialogue: "Casi 200 mil personas fueron asesinadas en los conflictos internos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua; más de 2 millones fueron desalojados de sus casas. La mayor parte de la infraestructura física de la región está en ruinas o fue dilapidada. Huracanes, estiajes y terremotos causaron terribles pérdidas, pero la peor destrucción fue provocada por la guerra". *As Américas em 1989*, p. 19.

• Especies de juego de chance (Nota del traductor).

22. Un análisis del caso puede ser encontrado en Muylaert, Eduardo, "Reflexoes sobre a Batalha do Morro Dona Marta", OAB - *Revista da Ordem dos Advogados do Brasil*, São Paulo, 1988, Nos. 43-48.

23. Dahrendorf, p. 39.

24. De Soto, Hernando, *Economía Subterránea*, op. cit.

25. Eco, Umberto, *Viagem na Irrealidade Cotidiana*, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 3a. ed., 1983, p. 81.

26. Uno de los inspiradores de estas reflexiones, en Italia, es Roberto Vacca, autor de un curioso libro, publicado por primera vez en 1971, llamado *Il Medioevo Prossimo Venturo* (*La Degradazione dei Grandi Sistemi*), Mondadori Editore, 1987, 3a. ed. "Una de mis tesis es que la proliferación de los grandes sistemas hasta alcanzar dimensiones críticas, inestables y antieconómicas será seguida de una degradación tan rápida como la expansión precedente y acompañada de eventos catastróficos. Consecuentemente, serán dos las características principales que deberán ser reconocidas como síntomas de la llegada del inicio de la próxima Edad Media: el primero será una brusca disminución de la población (...), el segundo será el despedazamiento de los grandes sistemas y su transformación en un gran número de pequeños subsistemas independientes y autárquicos". Op. cit. pp. 19-20.

27. Eco, pág. 82.

28. Eco, pág. 85.

29. Marcilio Márquez Moreira, "O Brasil no contexto internacional do fim do século XX", *Lua Nova*, CEDEC, No. 18, agosto de 1989.

30. "O Brasil e o Futuro do Comércio Internacional", capítulo del libro colectivo *Nova Era da Economía Mundial*, organizado por Norman Gall y Werner Loewenberg, São Paulo, Pioneira, 1989, p. 94.

31. Lafer, Celso, "Dilemas da América Latina num mundo em transformação", *Lua Nova*, CEDEC, No. 18, agosto de 1989, p. 34.

32. Lafer, Celso, op. cit.

33. Lafer, op. cit.

34. Para una descripción de las políticas de integración, ver Ricardo Seitenfus, "A Cooperação Argentino-Brasileira: Significado e Perspectivas", Revista *Lua Nova*, No. 18, agosto de 1989. Para un balance específico de la política de integración Brasil-Argentina ver, además de Seitenfus, Daniel Chudnovsky y Fernando Porta, "En torno a la integración económica argentino-brasileña", *Revista de la CEPAL*, Santiago de Chile, diciembre de 1989, No. 39.

35. Rosenthal, op. cit.

36. Lowental, Abraham, "Os Estados Unidos e a América Latina: Além da Era Reagan", Revista **Lua Nova**, agosto de 1989, CEDEC, No. 18. Van en el mismo sentido las observaciones de Peter Drucker, para quien la "integración (México-Estados Unidos) ya es en gran parte un hecho consumado. Las industrias más eficientes de México y las que pagan los mejores salarios —las fábricas a lo largo de la frontera americana, y algunas otras en el interior pertenecientes a gigantes americanos como la Ford y la IBM— producen principalmente (o enteramente) para el mercado americano". Drucker, Peter, As Novas Realidades, São Paulo, Pioneira, p. 33.

37. Ricupero, op. cit. p. 107.

38. Gall, Norman, **Nova Era da Economia Mundial**, in Gall e Loewenberg, op. cit., pp. 10 y siguientes.

38. Alain Touraine, Palvra e Sangue, p. 457.

39. Ver Rosenthal, op. cit. Un análisis semejante se encuentra en As Américas em 1989: "La expansión económica latinoamericana en las décadas de 60 y 70 fue alimentada por un flujo continuo de capital extranjero. Durante la década de los 80, este flujo se invirtió dramáticamente. Entre 1972 y 1981, América Latina obtuvo una media de cerca de US$ 10 billones a más por año en nuevos empréstitos de lo que pagó en intereses y de principal. En los últimos años, los pagos de la deuda de la región excedieron nuevos empréstitos cercanos a los US$ 25 billones anuales. Esta diferencia de US$ 35 billones anuales, el equivalente a casi US$ 200 billones para una economía del tamaño de la de los Estados Unidos, constituye una intolerable e insostenible drenaje de los recursos". Cf. p. 3.

40. Morse, op. cit., p. 127.

41. Morse, op. cit., p. 105.

42. Dahl, Robert, Poliarchy, Participación and Oposition, New Haven, Yale University Press, 1971, pp. 3 y siguientes.

43. Touraine, p. 512.

44. Ver, de Hélio Jaguaribe e outros, Brasil, 2000, Río de Janeiro, **Paz e Terra**, 3a. ed., 1986.

45. Wiener, Norbert, Sociedade e Cibernética, Río de Janeiro, **Cultrix**, 1985, p. 39.

Este libro recoge el estudio más completo que se haya hecho hasta el momento sobre la evolución de las relaciones de Colombia con el sistema financiero internacional, en el contexto de las diferentes etapas por las que éste ha atravesado desde comienzos de la década del setenta.

Colombia y la Crisis de la Deuda

Luis Jorge Garay Salamanca

$ 9.500

676 Paginas

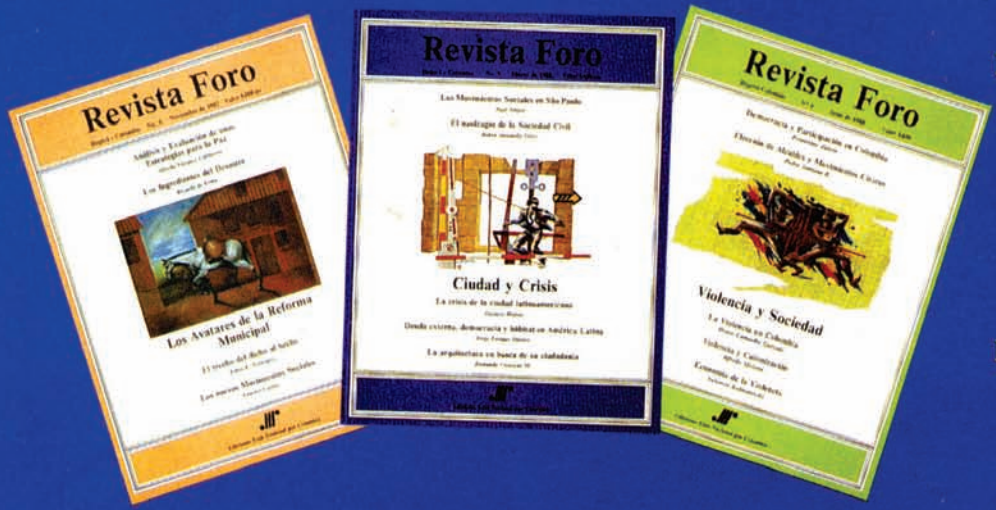
cinep

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia

DISTRIBUCION Y VENTAS CINEP
Carrera 5ª Nº 33A-08. Teléfono: 2858977
ECOE
Calle 24 Nº 13-15. Piso 3º Teléfono: 2431654
Bogotá, Colombia.

Revista Foro

CAMPAÑA ESPECIAL DE SUSCRIPCION



PLAN OFERTA DE SUSCRIPCION

Valor normal	1 año	$4.800
Valor **"Oferta"**	1 año	$4.000
Valor normal	2 años	$9.600
Valor **"Oferta"**	2 años	$8.500

PLAN OFERTA DE SUSCRIPCION

(Del número 4 al 14)

Valor normal	1 año	$12.000
Valor **"Oferta"**	1 año	$ 7.000

PAQUETE ESPECIAL

COLECCION + SUSCRIPCION

Valor 1 año	$10.500
Valor 2 años	$13.500

GP. PUBLICISTAS

EDICIONES FORO NACIONAL POR COLOMBIA
Carrera 3A No. 26-52 Tel.s.: 2840582 - 2433464
Bogotá, Colombia